

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN**

Trabajo de tesis:

**PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y TRANSFORMACIONES SUBJETIVAS EN
CAJAMARCA TOLIMA, EPICENTRO DE LUCHA ANTIEXTRACTIVA
EN COLOMBIA**

Autor:


GERMAN HISLEN GIRALDO CASTAÑO

Director:

Alfonso Torres Carrillo

Énfasis: Educación Cultura y Desarrollo

Agosto de 2018

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Realidad al servicio</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN – RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 2 de 36	

1. Información General	
Tipo de documento	Tesis de grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	Prácticas educativas y transformaciones subjetivas en Cajamarca Tolima, epicentro de lucha anti extractiva en Colombia
Autor(es)	Giraldo Castaño, Germán Hislen
Director	Torres Carrillo, Alfonso
Publicación	Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2018. 213 p.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional – Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.
Palabras Claves	EXTRACTIVISMO; ACCIÓN COLECTIVA; SUBJETIVIDAD; PROCESOS ORGANIZATIVOS; PROCESOS EDUCATIVOS; PRÁCTICAS EDUCATIVAS; COMUNIDAD.

2. Descripción
<p>Los colombianos escucharon hablar por primera vez de la mina de oro La Colosa ubicada en Cajamarca Tolima a finales del año 2007. Año en que un boom económico resonaba desde México hasta la Patagonia en Argentina, debido a la extracción y exportación de bienes primarios como: hidrocarburos (gas y petróleo), metales minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc), productos agropecuarios (maíz, soja, trigo) y biocombustibles. Actividades primario extractivas con escaso valor agregado que han sido concesionadas por los gobiernos de la región de las últimas tres décadas a grandes corporaciones internacionales (Svampa & Viale, 2014).</p> <p>Para el cumplimiento de esta lógica de acumulación capitalista, los países de la región, comenzaron</p>

a tramitar reformas legislativas con el fin de adecuar las políticas y leyes ambientales nacionales a las nuevas condiciones del extractivismo minero (Svampa & Antonelli, 2009). En Colombia esta política se materializó en el Código de Minas aprobado mediante la ley 685 del 2001. Norma en la que se estipulaba el procedimiento para conceder expeditas licencias y excepciones de impuestos a las compañías mineras y en la que se consideraba la explotación de los recursos naturales del subsuelo como base fundamental para el fortalecimiento económico del país.

Los afectados con la implementación de estas leyes en América Latina han sido los sectores populares. Gracias al conocimiento de las comunidades, adquirido en conversatorios y talleres con expertos sobre los impactos ambientales y sociales catastróficos para los territorios, y la vocación económica de los mismos; el uso indiscriminado del agua; los efectos a la biodiversidad, la salud humana, y el uso de cianuro y mercurio para la explotación aurífera, surgieron expresiones de descontento como: mítines, marchas, plantones, protestas, movilizaciones y demás acciones colectivas, de las que participaron campesinos, indígenas, estudiantes y demás sectores sociales que protestaban por las privatizaciones, la desigualdad social, y los problemas ambientales derivados de la actividad minera (Svampa & Antonelli; 2009; Giarracca & Tuebal, 2013, Navarro, 2015).

En Colombia, el anuncio del presidente Álvaro Uribe Vélez, sobre el descubrimiento del yacimiento realizado por la empresa surafricana Anglo Gold Ashanti (AGA), considerado como el tercero en importancia en Suramérica, tras el de Yanacocha en el Perú y Escondida en Chile¹, resultó ser una buena noticia para los mineros. Pero de preocupación profunda para los habitantes de Ibagué (su capital departamental), Espinal, Coello, Rovira, San Luís, Flandes y la misma Cajamarca, poblaciones donde vive cerca del 70 por ciento de los habitantes del departamento, por las afectaciones que podrían llegar a sufrir la Reserva Forestal Central (creada mediante la ley 2 de 1959), las fuentes hídricas que allí se originan, y el uso del suelo destinado a la agricultura y la ganadería.

La alarma entre los campesinos, amas de casa, comerciantes y demás vecinos de Cajamarca, impulsó a algunos de ellos a consultar y generar discusiones relacionadas con los efectos que ocasionarían en el territorio la exploración y explotación minera. Proceso al que se sumaron también estudiantes y profesores de la Universidad del Tolima (UT).

El propósito de esta alianza era buscar financiación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para traer expertos nacionales e internacionales a que realizaran conversatorios a la población sobre: la cantidad de agua requerida para explotar la mina, el impacto sobre la economía agrícola local y el ambiente, el grado de contaminación al que se verían sometidas las fuentes hídricas, etc. Lo prioritario para integrantes de organizaciones sociales como Ecotierra y docentes de la UT, era aprender de las experiencias de otros territorios del continente americano donde se habían implantado proyectos de extracción aurífera a cielo abierto, como el que se pretendía

¹ “Presentan a la mina de oro la Colosa como dinamizadora de la economía”. En: *El Espectador*, agosto 29 del 2009.

instalar en Cajamarca. Informarse para informar a las comunidades y empoderarse académica y técnicamente sobre los impactos ambientales y sociales catastróficos que ocasionaría la explotación de la mina La Colosa².

En efecto, con la intención de nutrir el debate, Pax Christi Internacional patrocinó el viaje de cinco líderes tolimenses, entre los que había tres profesores de la UT, a que aprendieran de primera mano la experiencia vivida por la comunidad de Yanacocha en Perú. Lugar en el que desde el año 1992, la multinacional Newmont Mining, realizaba trabajos de explotación. Allí pudieron comprobar que el pueblo peruano donde operaba la mina seguía “sumido en el atraso y su condición era similar a la de antes que empezara la explotación”³, motivo por el cual regresaron convencidos que no querían para el territorio tolimense un absurdo ambiental similar.

Con el fin de impedir el inicio de la fase de explotación del proyecto megaminero, comenzaron a emerger desde el año 2008 procesos organizativos multisectoriales como Conciencia Campesina, Unión Campesina, entre otros. Estos primeros nucleamientos colectivos, sumados a los ya existentes, como la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaima (Apacra), y el Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), integraron entre el año 2010 y 2011, los primeros Comités Ambientales(CA) en el municipio de Cajamarca y la capital departamental Ibagué.

Durante los dos años siguientes se conformaron agrupamientos similares en 18 municipios más donde también se realizan actividades mineras, los cuales conformaron la Red de Comités Ambientales del Tolima (RCAT). Organización que se configuró con el fin de apoyar la lucha de resistencia de los nucleamientos colectivos que operan contra el proyecto de La Colosa en el territorio de Cajamarca y de evidenciar a nivel departamental los efectos ambientales del proyecto extractivo.

Las acciones colectivas de rechazo al emprendimiento minero que realizan estas organizaciones como: movilizaciones (como la Marcha Carnaval en Defensa de la Vida y el Territorio, la cual se celebra en los primeros días de junio de cada año en la ciudad de Ibagué), plantones, o bloqueo de vías, han servido para que las comunidades interioricen valores como la solidaridad, el compañerismo, la camaradería y la fraternidad.

Estos aprendizajes adquiridos de manera informal han servido para que integrantes de estos mismos procesos organizativos, acompañados siempre por estudiantes y docentes de la UT, realicen prácticas educativas formales como: campañas de sensibilización por medio de volantes que se distribuyen puerta a puerta en plazas de mercado, medios de transporte, o ciclo rutas. Efectúen conversatorios y talleres con expertos sobre la importancia de los páramos en los que nacen las cuencas hidrográficas que surten de agua los acueductos comunitarios de las fincas que componen cada vereda. Programen caminatas ecológicas y limpieza de caminos. Impulsen

². “Cajamarca, por siempre despensa Agrícola”. En: *Actualidad Tolimense*, marzo de 2018.

³. Revista Ambiental Catorce 6. 14 °C la temperatura promedio del planeta. Febrero - marzo del 2010. No 16.

consultas populares contra la actividad minera y planifiquen diplomados semestrales sobre gestión ambiental tanto en la ciudad de Ibagué como el municipio de Cajamarca.

Estas acciones educativas, (como se demostrará en la investigación) derivaron en una toma de conciencia por parte de los integrantes y simpatizantes de los procesos organizativos acerca de los efectos inmediatos y de largo alcance, emanados de las prácticas depredatorias del proyecto aurífero.

Comprensión que medió en la configuración de nuevos saberes relacionados con las prácticas extractivas y los efectos sociales, culturales y ambientales que estos ocasionan en los lugares donde se instalan. Aprendizajes que mediaron en la reorientación de prácticas relacionadas con la actividad agrícola, el uso y cuidado del agua, las cuencas hidrográficas, la fauna y flora local. Así como en la reafirmación de la identidad y sentido de pertenencia con el lugar; y la recuperación de la memoria como elemento estratégico para el impulso de procesos de resistencia a fin de evitar una tragedia ambiental en el territorio.

Estas prácticas educativas que afectan la dimensión subjetiva de las comunidades no han sido exploradas aún por las ciencias sociales. En este sentido, la investigación está dirigida a entender si tales acciones han servido para prefigurar la existencia de una sociedad donde se respete el derecho a la autodeterminación de las comunidades locales, se evite el despojo de tierras y la depredación de bosques, biodiversidad, saberes tradicionales y otros bienes comunes.

Como afirma Torres (2007), estas acciones que contienen características constitutivas de nuevos sujetos sociales, son a su vez procesos de subjetivación individual y colectivo que articulan lo educativo con experiencias asociativas, lo que se traduce en la generación a nivel individual de formas distintas de ver, de hacer, y de relacionarse.

En este orden de ideas el resultado de la investigación que acá se presenta estuvo orientado por la siguiente pregunta problémica: ¿Cómo han contribuido las prácticas educativas que se desarrollan en torno a las acciones colectivas y qué influencia han tenido en las transformaciones subjetivas de los que han participado de ellas en la población de Cajamarca Tolima?

3. Fuentes

1. Testimonios orales

Báez, Héctor Elías. (2016, diciembre). Integrante de la Organización Conciencia Campesina. Cajamarca.

Castro, Olga Cecilia. (2018, enero). Representante legal de la Organización Social

Cooperativa del Cañón de Anaime. Anaime. Cruz, Albeiro. (2106, diciembre). Integrante de Unión Campesina. Cajamarca.

Espitia, Diego. (2016, diciembre). Integrante de la Cooperativa de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime. Cajamarca.

Fandiño, Gustavo. (2018, enero). Integrante de Asprosan Semillas Andinas de Colombia. Anaime. Anaime.

Gámez, Carlos. (2016, diciembre). Integrante de Unión Campesina. Cajamarca.

Garay, Luis Jorge. (2017, marzo). Académico e investigador colombiano. Cajamarca.

García, Renzo. (2016, diciembre). Integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué. Ibagué.

Hernández, Osman. (2016, diciembre). Integrante de Conciencia Campesina. Cajamarca.

Jiménez, José. (2016, diciembre). Estudiante de ciencia política de la U.T. miembro de Red Nacional de Jóvenes en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida y del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué.

Mejía, Robinson. (2016, octubre). Integrante del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca). Cajamarca.

Méndez, Camila. (2017, octubre). Integrante del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca). Bogotá.

Mojica, Marlene. (2016, diciembre). Integrante de la Organización Unión Campesina. Cajamarca.

Muñoz Álvarez, Nelly Herlinda. (2016, diciembre). Campesina independiente. Cajamarca.

Olivera, Élver Ariel. (2017, octubre). Integrante de Asocuenca Chorros Blancos. Bogotá.

Ospina, Érica Alejandra. (2016, diciembre). Integrante del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca). Ibagué.

Ospina, Jonathan. (2016, diciembre). Integrante del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca). Cajamarca.

Padilla, Camilo. (2017, marzo). Concejal del Municipio de Cajamarca y miembro del Comité Ambiental de Cajamarca y Anaime. Cajamarca

Parra, Juan Carlos (2016). Integrante de la fundación Amaca.

Patiño, Gustavo. (2016, diciembre). Integrante del Comité Ambiental de Cajamarca y Anaime. Cajamarca.

Perdomo, Olga Lucía. (2016, octubre). Integrante de la Organización Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra). Cajamarca.

Pulido, Alejo. (2016, diciembre). Investigador Independiente. Ibagué.

Riaño, Cesar Augusto. (2016, octubre). Integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué.

Robledo, Jorge Enrique. (2017, junio). Senador del República por el Polo Democrático Alternativo. Ibagué.

Rodríguez, José Domingo. (2016, diciembre). Integrante de la Organización Asocuencia Chorros Blancos. Cajamarca.

Rodríguez, Leonardo. (2017, diciembre). Integrante de la Organización Conciencia Campesina. Cajamarca.

Rodríguez, María Ascensión. (2016, diciembre). Integrante de la Organización Unión Campesina.

Rojas, Ángela. (2016, diciembre). Integrante de la Red Tejiendo Páramos. Cajamarca.

Rojas, Jefferson. (2016, diciembre). Integrante del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca). Cajamarca.

Rojas, Yolanda. (2016, diciembre). Integrante de Integrante de la Organización Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra). Cajamarca.

Tocora, Jaime. (2016, octubre). Integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué. Ibagué.

Torres, Jimy Fernando. (2016, diciembre). Integrante de la Organización Conciencia Campesina. Cajamarca.

Vargas, Julio Roberto. (2016, diciembre). Integrante de la Organización Unión Campesina.

Vera, Mario. (2016, diciembre). Profesor de la Universidad del Tolima y miembro del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué. Ibagué.

Viñas, Julián. (2016, diciembre). Integrante del Comité Ambiental de Piedras Tolima. Ibagué.

Vivas Zamora, Nodier. (2018, enero). Biólogo profesional y habitante del municipio de Anaime. Cajamarca.

2. Libros, tesis de grado, revistas especializadas y artículos de prensa

- Acosta, A.; García, A., M., & otros (2014). *Territorios en disputa*. Bajo tierra ediciones y JRA. México.
- Adel M., C. (2003). *Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias*. Convocatoria a Becas. Clacso.
- Aguilera M. A.; González T. M. I. & Torres C. A. (2015). *Reinventando la comunidad política: formación de subjetividades, sentidos de comunidad y alternativas políticas en procesos organizativos locales*. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- Algranati, C. (2012). “La ofensiva extractivista en América Latina. Crisis global y alternativas”. En: *Revista Herramienta* No 50.
- Alimonda, H. (2008). “Introducción”: *Gestión ambiental y conflicto social en América Latina*. Clacso. Primera edición. Buenos Aires.
- Alimonda, H. (Compilador). (2002). *Ecología política. Naturaleza, sociedad y utopía*. Clacso, Asdi. Buenos Aires.
- Alimonda, H. (Coordinador) (2011). *La naturaleza colonizada. Ecología Política y minería en América Latina*. Ediciones Ciccus, Clacso. Buenos Aires.
- Almendras, A & Anaya A., J. S. (2012). “Otra roca sobre los rieles: indígenas caminando la resistencia”. En: Toro P., C; Fierro M., J.; Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Alonso, M. C. & Job, S. F. (2012). “Derecho a la expropiación: reconfiguración y adaptación del derecho a favor de la minería transnacional”. En: *Explotación minera y resistencia en Catamarca, Córdoba y La Rioja*. Editorial El Colectivo. Buenos Aires.
- Alvarado M., G. (2008). “Políticas neoliberales en el manejo de los recursos naturales en Perú: el caso del conflicto agrominero de Tambogrande”. En: *Gestión ambiental y conflicto social en América Latina*. Clacso. Primera edición. Buenos Aires.
- Alvarado, S. V. (2014). “Ampliación de los procesos de comprensión de subjetividades políticas de niños, niñas y jóvenes en Colombia desde una perspectiva alternativa del desarrollo humano: tránsitos y aprendizajes”. En: Alvarado, S. V. & Ospina, H. F. (2014). *Socialización política y configuración de subjetividades. Construcción de social de niños, niñas y jóvenes como sujetos políticos*. Siglo del Hombre Editores y Universidad de Manizales.
- Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del*

nacionalismo. Fondo de Cultura Económica. México.

Antonelli, M. A. (2009) “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la minería responsable y desarrollo sustentable”. En: Svampa, Maristella, y Mirta A. Antonelli (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos. Buenos Aires.

Arana, M. (2011). “Minería y territorio en el Perú: conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización”. En: Alimonda, H (Coordinador) (2011). *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*. Ediciones Ciccus, Clacso. Buenos Aires.

Archila N., M. (2003). *Idas y venidas vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia (1958-1990)*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Arellano, J. (2012). “Perú: el conflicto entre la comunidad de Espinar y la minera Xstrata Tintaya”. En: <http://es.globalvoicesonline.org/2012/05/29/peru-el-conflicto-entre-la-comunidad-de-espinar-y-la-minera-xstrata-tintaya>.

Arendt, H. (2005). *Comprensión política: El pensar y las reflexiones morales*. Universidad Nacional de Colombia. Serie: Señal que cabalgamos No 52 Año 4.

Arnal, J.; Del Rincón, D.; Latorre, A. (1994). *Investigación educativa, fundamentos y metodología*. Editorial Labor S. A. Barcelona.

Avalle, G; Gallo, E & Graglia (2012). “Tensión y tentación. Progreso y desarrollo de las luchas contra la minería en Córdoba, La Rioja y Catamarca”. En: Ciuffolini, M. A. (Compiladora) (2012). *Explotación minera y resistencia en Catamarca, Córdoba y La Rioja*. Editorial El Colectivo. Buenos Aires.

Banco Mundial (1997). *Estrategia Minera para América Latina y El Caribe*. División de Industria y Minería Departamento de Industria y Energía. Washington, D. C.

Barragán G., D. F. (2015). “El profesor y el saber práctico”. En: *Revista Educación y Cultura* No 112.

Barragán, C., D. & Torres C., A. (2017). *La sistematización como investigación interpretativa crítica*. Editorial El Búho. Bogotá.

Barragán, D.; Mendoza, N. & Torres, A. (2006). “Aquí todo es educativo. Saberes Pedagógicos y prácticas formativas en organizaciones populares”. En: *Folios* No 23. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.

Bauman, Z., (2016). *La Globalización. Consecuencias humanas*. Fondo de Cultura

Económica. México.

- Bebbington, A. (2007). (Editor). *Minería. Movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales*. Instituto de Estudios Peruanos. Lima.
- Bebbington, Anthony & Bebbington Denise Humphreys (2009). Actores y ambientalismos: conflictos socio-ambientales en Perú. *Revista de ciencias sociales* No 35. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Quito.
- Bengoá, J. (1988). “La educación para los movimientos sociales”. En: *Proposiciones*. Vol. 15. Ediciones Sur. Santiago.
<http://www.sitiosur.cl/publicacionescatalogodetalle.php?PID=2981>.
- Bengoá, J. (2006). “Movimientos sociales, identidades y acumulación de capital simbólico en América Latina”. Ponencia al Seminario Territorios Rurales en Movimiento a realizarse el 24, 25 y 26 de abril de 2006 en la ciudad de Santiago de Chile. En: www.fidamerica.org/admin/docdescargas/centrodoc/centrodoc_335.pdf.
- Bernal A. L. (2007) “La conquista española en el Tolima” e “Historia verdadera de los Pijaos” En: *Manual de historia del Tolima*. Tomo I. Pijao Editores. Ibagué.
- Borón, A. (2005). “Imperialismo, movimiento social y ciencia crítica latinoamericana”. En: *Revista Herramienta* No 27.
- Bottaro. L. & Sola A. M. (2012). “Conflictividad socioambiental en América Latina. El escenario postcrisis de 2001 en Argentina”. En: *Política y Cultura, primavera* 2012. No 37.
- Braudel. F. (1997). *La dinámica del capitalismo*. Fondo de Cultura Económica. Primera edición. Bogotá.
- Bucio F., C. (2015). “Territorialidad y subjetivación política: herramientas para el análisis de los conflictos socioambientales por el extractivismo”. En: *Espacialidades: Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura*. Vol. 4 No 1.
- Buitrago, E. A. (2014). “Una historia y una vida alrededor del oro: territorialidad y minería en el municipio de Vetás, Santander, Colombia”. En: Ulloa Astrid; Góbel, Bárbara (2014) (Editoras) *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Caldart, R. S. (2000). *Pedagogia do Movimento Sem Terra*, Vozes, Petrópolis.
- Caldart, R. S. (2000a). “MST 16 años. Lecciones de pedagogía”. En: <http://filo.uba.ar/contenidos/carreras/educa/catedras/educacion1/sitio/sitio/mst1.htm>.
- Calderón, J. & López C., D. (S/f). “Orlando Fals Borda y la Investigación Acción

- Participativa: Aportes en el proceso de formación para la transformación”. En: *Primer encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América*. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Buenos Aires.
- Candón M, J. (2011). *Internet en movimiento: Nuevos movimientos sociales y nuevos métodos en la sociedad de la información*. Memoria para optar el grado de doctor. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.
- Castoriadis, C (2013). *La institución imaginaria de la sociedad*. Fabula TusQuets Editores. Buenos Aires.
- Ciuffolini, M. A. (Compiladora) (2012). “Contra la dominación colonial: resistencia e imaginación social versus depredación y despojo”. En: *Explotación minera y resistencia en Catamarca, Córdoba y La Rioja*. Editorial El Colectivo. Buenos Aires.
- Cohen A., D. (2015). *Jóvenes a cielo abierto: Construcción de identidades juveniles a diez años del proceso No a la mina en la ciudad de Esquel*. Malisia Editorial. La Plata Argentina.
- Colombia Solidarity, London Mining Network, Redher, The green centre. (2013). *La Colosa Una muerte anunciada informe alternativo acerca del proyecto de Minería de Oro de anglo Gold Ashanti en Cajamarca, Tolima, Colombia*. Sello Editorial Universidad del Tolima. Ibagué.
- Conciencia Campesina (2014). *Cajamarca un territorio para el buen vivir*. Inédito.
- Corredor G. D. C. (2014). *Estrategias de control ciudadano: una aproximación a la intervención megaminera en Cajamarca Tolima (2007-2103)*. Tesis de grado para obtener el título de politóloga. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá.
- Cosajuca (2013). *Violaciones de derechos humanos. Caso colectivo socio - Ambiental COSAJUCA*. En: https://issuu.com/lainconquistable/docs/informe_cosajuca_ddhh. Fecha de acceso, junio 17 de 2017.
- Cuervo S., Y. (2012). “Una aproximación a la megaminería en Colombia” *Revista Theomai* Número 25.
- De Sousa S., B. (2012). *De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad*. Segunda edición. Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes. Bogotá.
- De Sousa S., B. (2014). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Ediciones Trilce. Santiago de Chile.
- Delgado R., G. C. (2008). “El carácter geoeconómico y geopolítico de la biodiversidad. El

- caso de América Latina”. En: *Gestión ambiental y conflicto social en América Latina*. Clacso. Primera edición. Buenos Aires.
- Delgado R., G. C. (2010). (Coordinador). *Ecología política de la minería en América Latina: aspectos socioeconómicos legales y ambientales de la megaminería*. Universidad Autónoma de México. México.
- Departamento Nacional de Estadística (DANE) (2015). “El cultivo de la arracacha (*Arracacia xanthorrhiza* Bancroft), hortaliza de grandes bondades nutricionales y de alta potencialidad agroindustrial”. Boletín mensual. Insumos y factores asociados a la producción agropecuaria No 39.
- Dimitriu, A. & Galafassi, G. (2004). “Capitalismo neoliberal y naturaleza: movilización social contra la devastación minera en la Patagonia andina”. *Revista Herramienta* No 26.
- Dimitriu, A., & Galafassi, G. (2009). “El plan “B” de los capitales mineros”. En: *Revista Herramienta* No 36.
- Domínguez, D. (2008). “La trashumancia de los campesinos Kollas: ¿Hacia un modelo de desarrollo sustentable?”. En: *Gestión ambiental y conflicto social en América Latina*. Primera edición. Clacso. Buenos Aires.
- Dussán C, M. A. (2016). “Ponencia: Capitalismo Verde, Modelo Extractivista Minero Energético y nuevo modelo soberano autónomo”. Inédito.
- Echeverría, B. (2010). “Crisis civilizatoria”. En: *Crisis financiera o crisis civilizatoria*. Broedirlijk Denle, Entre pueblos, Agencia catalana de Cooperación al desenvolupament. Quito.
- Escobar, A.; Álvarez, S., E & Dagnino E. (Ed.) (2001). *Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Taurus Icanh. Bogotá.
- Espacio, C. M. (2012b). “Megaminería a cielo abierto y resistencias: racionalidad económica y racionalidad ambiental”. En: *Revista Ecuador Debate* No 79.
- Espacio, C., M. (2012a). “Reflexiones en torno a la lucha socioambiental en Argentina”. En: *Revista herramienta* No 50.
- Eyerman, R. & Jamison, A. (1991). *Personal Politics. The Roots of Women’s Liberation in the Civil Rights Movement and the New Left New York*. Vintage.
- Falero, A. (2011). “Pensando América Latina desde sus luchas recientes. Aperturas, frenos e interrogantes”. En: Acosta, Y.; Falero, A.; Rodríguez, A.; Sans, I., & Sarachu, G. (Coordinadores). *Pensamiento crítico y sujetos colectivos en América Latina*:

perspectivas interdisciplinarias. Editorial Trilce, Núcleo “Pensamiento crítico en América Latina y sujetos colectivos”, Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la Republica. Montevideo.

Fals B., O. (1985). *Conocimiento y poder popular*. Siglo XXI. Bogotá.

Fernández, A. M. & Colaboradores (2011) *Política y subjetividad. Asambleas Barriales y fábricas recuperadas*. Editorial Biblos. Buenos Aires.

Fierro M., J. (2013). “Los cuestionamientos a la apuesta minera en Colombia: entre la preocupación y la acción ética”. En: *Aquelarre. Revista del Centro Cultural Universitario*. Universidad del Tolima. Volumen 12 No 24.

Flórez F., M. (2012). “En defensa del páramo de Santurbán. Cronología de una lucha que apenas comienza”. En: Toro P., C; Fierro M., J.; Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.

Flórez, R. C. (2010). “Educación popular ambiental”. En: *Trayectorias* Vol.12, Núm. 30.

Fundación para la Defensa de la Madre Tierra & Cosajuca (2016). *La Despensa Guía Metodológica para Realizar Consultas Populares en Colombia*. Colors editores.

Funtowicz, S. O. & Ravetz, J. R. (2000). *La ciencia posnormal. Ciencia con la gente*. Icaria Antrazyt. Barcelona.

Gadamer, H. G. (1960). *Wharheit y und methoe*, Tübingen, Mohr.

Gadotti, M. (2002). *Pedagogía de la tierra*. Siglo veintiuno editores. México.

Galafassi, G. (2009). “La predación de la naturaleza y el territorio como acumulación”: En: *Revista Herramienta* NO 42.

Galafassi, G. (2014). (Compilador). *Apuntes de acumulación. Estado, procesos socio-históricos de (re)producción y conflictividad social*. Thoami Libros y extramuros ediciones. Buenos Aires.

Garay, L. G. (2013) (Director). *Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista* (Tomo 1). Contraloría General de la República. Bogotá.

Garay, L. G. (2014). (Director). *Minería en Colombia: Control público, minería y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y postconflicto* (Tomo 4). Contraloría General de la República. Bogotá.

Garay, L. J. (2013) (Director). *Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos* (Tomo 2). Contraloría General de la República. Bogotá.

- Garay, L. J. (2014) (Director) *Minería en Colombia: Daños ecológicos y socioeconómicos y consideraciones sobre el modelo minero alternativo* (Tomo 3). Contraloría General del República. Bogotá.
- García P, R. A. (2012). “La Colosa, proyecto de minería a cielo abierto de lixiviación con cianuro en el centro de Colombia. Una lectura alternativa desde el movimiento social y ambiental”. En: Toro Pérez, Catalina; Fierro Morales, Julio; Coronado Delgado, Sergio; Roa Avendaño, Tatiana (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Garzón, T. (2008). *Pórfido aurífero Colosa*. In: XIII Congreso Latinoamericano de Geología, 29 septiembre - 3 octubre. Lima.
- Giarracca, N & Hadad, G. (2009). “Disputas manifiestas y latentes en La Rioja minera. Política de vida y agua en el centro de la escena”. En: Svampa, M. & Antonelli, M. (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos Sociedad. Buenos Aires.
- Giarracca, N., & Teubal, M. (Coordinadores) (2013). *Actividades extractivas en expansión ¿Reprimarización de la economía argentina?* Editorial Antropofagia. Buenos Aires.
- Gilly, A., & Roux, R. “Capitales, Tecnologías y mundos de la vida. El despojo de los cuatro elementos”. En: *Revista Herramienta* No 40.
- Giménez, G. (2005). “Territorio e identidad. Breve introducción a la geografía cultural”. En: *Trayectorias*. Vol. VII. No 17.
- Gluz, N. B. (2013). *Las luchas populares por el derecho a la educación: experiencias educativas de movimientos sociales*. Clacso. Buenos Aires.
- Gluz, N. B. (2013a). *Educación y emancipación: alternativas escolares en movimientos sociales (2006-2010)*. Tesis para el grado de doctora. Inédito.
- Göbel, B. & Ulloa, A. (editoras) (2014). *El extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Ibero-Amerikanisches Institut y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Göbel, B., & Ulloa A. (Editoras). (2014). *Extractivismo minero en América Latina*. Universidad Nacional de Colombia, Ibero-Amerikanisches Institut. Bogotá.
- Gohm, M. da G. (2008). “Abordagens teóricas no estudo dos movimentos sociais na América Latina”. En: *Caderno CRH* v. 21 No 54. Septiembre – Diciembre. Salvador.
- Gomes da C, N., & Pinassi, M. O (2012). “La minería y la lógica de producción destructiva en la Amazonía brasileña”. En: *Revista Herramienta* No 51
- González J., J. M. (2007). “Poblamiento minero y técnicas en el cañón del río Cauca: 1538-

- 1627". En: *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, No 34. Bogotá.
- González P., C. Orsini Y., Indermühle, S. (2011). *Megaminería y reasentamientos forzados*. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz. Bogotá.
- González P., L., Duarte C., N., González P., C., Orsini, Y., & Indermuhle, S. (2011). *Megaminería y reasentamientos forzados*. Indepaz, Colección Punto Encuentro. Bogotá.
- González P., L.; Duarte C. N.; González P., C.; Orsini, Y.; Indermühle, S. (2010). *Megaminería y reasentamientos forzados*. Indepaz. Bogotá.
- González T., M. I.; Aguilera M., A. & Torres C., A. (2014) "Investigar subjetividades y formación de sujetos en con organizaciones y movimientos sociales". En: Piedrahita E., C.; Díaz G., Á. & Vommaro, P. (2014). *Acercamientos metodológicos a la subjetividad política: debates latinoamericanos*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Clacso. Bogotá.
- Grundy, S. (1994). *Teoría y praxis del currículo*. Editorial Morata. Madrid.
- Grupo de Investigación Geoambiental Terrae (2016). *Análisis desde la perspectiva de amenazas socioambientales de una mina de oro a cielo abierto: caso de estudio La Colosa, Cajamarca (Tolima)*. En: <http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2016/AportesAcademicos2016/Informe%20Amenazas%20Colosa%20final.pdf>.
- Gudynas, E. (2009). "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo suramericano actual". En: Schuldt, Jürgen, et. al. *Extractivismo, política y sociedad*. Centro Andino de Acción Popular y Centro Latinoamericano de Ecología Social. Quito Ecuador.
- Gutiérrez D., J. A. (2013). "La sombra de La Colosa sobre Cajamarca, Tolima: Megaminería, el nuevo delirio del Dorado". En: <https://anarkismo.net/article/25101>. Fecha de acceso, junio 19 de 2017.
- Harvey, D. (2003). *El nuevo imperialismo*. Ediciones Akal. Madrid.
- Hernández B., J. M. (2017). "Yo estuve en la consulta popular contra la minería". En: *El Espectador*, diciembre 30.
- Hernández, J.; Job, S. F. & Pares F. (2012) "La insurrección de los saberes. Conocimiento científico y saberes populares en la disputa por la vida". En: Ciuffolini M. A. (Compiladora) (2012). *Por el oro y el moro. Explotación minera y resistencias en Catamarca, Córdoba y La Rioja*. Editorial El Colectivo. Buenos Aires.
- Hidalgo, F. F. (2004). "Los movimientos indígenas y la lucha por la hegemonía". En: *Revista*

Herramienta No 25.

- Ibáñez, J. (1997). *El regreso del sujeto*. Madrid. Siglo XXI.
- Indermüchel, S. (2011). “Transnacionales mineras en Colombia”. En: González P., L.; Duarte C., N.; Jiménez, C. & Novoa, E. (2014). *Producción social del espacio. El capital y las luchas sociales en la disputa territorial*. Ediciones desde abajo. Bogotá.
- Kairuz H, F. (2009). “Audiencia pública en Cajamarca. ¿Para qué? En: <http://co2ecofisiologia.blogspot.com.co/2009/02/audiencia-publica-en-cajamarca-para-que.html>.
- Klandermans, B. (1988). “The Formation and Mobilization of Consensus”. En: Klandermans B., Kriesi H. y Tarrow S. *International Social Movements Research. Supplement to Research in Social Movements, Conflicts and Change. Vol.1*. Greenwich.
- Leff, E. (1986). “Notas para un análisis sociológico de los movimientos ambientalista”. En: *Política ambiental y desarrollo. Un debate para América Latina*. Fescol, Instituto Nacional de Recursos naturales Renovables y del Ambiente. Bogotá.
- Leff, E. (1986). *Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable*. Siglo XXI editores. México.
- Leff, E. (2004). *Racionalidad ambiental: La reapropiación social de la naturaleza*. Siglo XX editores. México.
- Linsalata, L. & Navarro, M. L. (2014). “Crisis y reproducción social. Claves para entender lo común. Entrevista a Silvia Federici”. *Observatorio Social de América Latina* No 35. Clacso.
- López, E. & Vértiz, F. (2012). “Capital transnacional y proyectos nacionales de desarrollo en América Latina. Las nuevas lógicas del extractivismo desarrollista”. En: *Revista Herramienta* No 50.
- Lora C, J. (2006). “Estrategias de poder en una trama colonial”. En: *Revista Herramienta* No 32.
- MacAdam, D.; McCarthy J.; & Mayer Z. (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Editorial Istmo S. A. Madrid.
- Machado A, H. (2009). “Minería transnacional, conflicto socioterritorial y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de minera Alumbrera”. En: Svampa M. & Antonelli M. (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos Sociedad. Buenos Aires.

- Machado A. H. (2015). "Territorios y cuerpos en disputa: extractivismo y ecología de las emociones". En: *Biodiversidad, Sustento y Culturas* No 86.
- Machado A., H. (2012) "Los dolores de nuestra América la condición neocolonial. Extractivismo y biopolítica de la expropiación". En: *Nostramo Revista Crítica Latinoamericana* No 5.
- Machado, H.; Svampa, M.; Viale, E; Giraud, M.; Wagner L.; Antonelli M.; Giarracca N.; Teubal M.; Rodríguez P., J., Y Aranda D. (2012). *15 mitos y realidades de la minería transnacional: guía para desmontar el imaginario prominero*. Primera edición. Abya Yala y Universidad Politécnica Salesiana. Quito.
- Malerba, J. (2014). *Diferentes formas de dizer Nao. Experiências internacionais de resistência, restrição e proibição ao extrativismo mineral*. Fase Rio de Janeiro.
- Marín, M. C. (2009). "El "no a la mina" como acontecimiento: otro mundo posible". En: Svampa, M. & Antonelli M. (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos Sociedad. Buenos Aires.
- Márquez, F. & Salcedo, C. (2012). "Defensa del territorio y resistencia afrocolombiana en norte del Cauca". En: Toro P., C; Fierro M., J.; Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Martínez A., J. (2009). *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valores*. Tercera edición. Icaria Editorial S.A. Bays, Barcelona.
- Martínez A., J. (2012). "El ecologismo popular de los pobres, veinte años después: India, México y Perú". En: *Nostramo: Revista Crítica Latinoamericana* No 5.
- Mateus T. J. (2017). "Así nació uno de los grupos de resistencia a la minería en Cajamarca". En: *El Tiempo*. Marzo 28.
- Mayntz, R. (1967). *Sociología de la organización*. Madrid: Alianza Editorial.
- Mejía, M. R (1996). *Educación popular y movimientos sociales*. Bogotá. CINEP.
- Mejía, M. R. (2013). "La educación popular: una construcción colectiva desde el sur y desde abajo". En: <http://rednelhuila.files.wordpress.com/2013/12/educacion3b3n-popular-penencia-marco-rac3bal-mejc3ada.pdf>.
- Melucci, A. (2010). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. El Colegio de México. México.
- Méndez P., O. L. (2013). "La Colosa: entre los flujos del gran capital y la tradición del suelo fértil". En: Delgado R., G. C.(2013) *Ecología Política del extractivismo en América*

Latina: casos de resistencia y Justicia socioambiental. Clacso, Buenos Aires.

Merlinsky, G. (2013). *Política, derechos y justicia ambiental: el conflicto del río Riachuelo.* Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

Michi, N. (2010). *Movimientos campesinos y educación. Estudio sobre el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero MOCASE-EV.* Editorial El Colectivo. Buenos Aires.

Ministerio del Medio Ambiente & Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (2002). *Reportaje al Sistema Nacional Ambiental –SINA- Las voces del SINA.* Bogotá.

Molano B. A. (2013). “Por la vida”. En: *El Espectador*, junio 15. Bogotá.

Molano C., M. (2015). “Gramáticas de la práctica pedagógica”. En: *Revista Educación y cultura* No 112.

Morán, R. “En la Colosa hay un conflicto potencial”. En: *Revista Catorce 6.* Abril-mayo.

Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) (S/f). *Resistencia Civil Pacífica: el poder de los ciudadanos 10.* En: <http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/psicologia-y-tecnicas-de-control-social/activismo-social/200-resistencia-civil-pacifica-el-poder-activo-de-los-ciudadanos/file>.

Navarro, M. L & Pineda, C. E. (2011) “Luchas socioambientales en México. Luchas anticapitalistas en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales”. En: www.espora.org. Fecha de acceso, diciembre 29 de 2015.

Navarro, M. L. & Pineda, C. A. (2000). “Luchas socioambientales en México: Construcción de subjetividades y lenguajes de valoración anticapitalista”. En: *Revista Herramienta* No 12.

Navarro, M. L. (2012) “La memoria como impulso a la resistencia y prefiguración en las luchas socioambientales”. En: *Tramas* No 38, Universidad Autónoma de México. México.

Navarro, M. L. (2012). “Las luchas indígenas y campesinas contra el despojo capitalista en México: subjetividades políticas en la defensa y gestión de los bienes comunes naturales”. En: *Boletín Onteaiken* No 15.

Navarro, M. L. (2013). “Subjetividades políticas contra el despojo capitalista de bienes naturales en México”. En: *Acta Sociológica* No 62.

Navarro, M. L. (2015). “Luchas socioambientales y neoextractivismo”. En: https://www.youtube.com/results?search_query=luchas+socioambientales. Fecha de

acceso, noviembre de 2016.

Navarro, M. L. (2015). *Luchas por lo común. Antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes naturales en México*. BUAP, Instituto de Ciencias Humanas Alfonso Vélez Pliego, Ediciones Bajo Tierra, Jóvenes en Resistencia Alternativa. México.

Navarro, M. L. y Hernández L, O., J. (2010). “Antagonismo social de las luchas de las luchas socioambientales en México: cuerpo, emociones y subjetividades como terreno de lucha contra la afectación”. En: *Revista Latinoamericana de Estudios Sobre el Cuerpo, Emociones y Sociedad* No 4.

Negri, A. (2003). *Job: la fuerza del esclavo*. Paidós. Buenos Aires.

Negro, M. (2002). “Mineros de Rio Turbio. Una experiencia de lucha y control obrero”. En: *Revista Herramienta* no 21.

Nieto L., J. R. (2008). *Resistencia. Capturas y fugas del poder*. Ediciones desde abajo. Bogotá.

Onofrio, S. & Zangaro, M. B. (2012). “Movimientos asamblearios y empresas mineras: La lucha entorno a la megaminería. Entrevista a Sergio Onofrio”. En: *Revista Herramienta* No 50.

Ortega R. E. (1949). *Los inconquistables. La guerra de los Pijaos 1602-1603*. Volumen 20. Archivo Nacional de Colombia.

Pabón G. G. (2015). “Aproximación al concepto territorios ancestrales”. En: <https://www.proclamadelcauca.com/2015/03/aproximacion-al-concepto-territorios-ancestrales.html>. Fecha de acceso, mayo 8 del 2017.

Pabón, P. M. (2009). “Acción educativa del movimiento ambiental en la Universidad Pública del centro - accidente colombiano”. En: *Rhec. Vol. 12. No 12*, pp. 175-203. http://editorial.udenar.edu.co/revistas/rudecolombia/files/r12_175.pdfhttp://editorial.udenar.edu.co/revistas/rudecolombia/files/r12_175.pdf.

Padilla O, C. (2012). “Minería conflictos sociales en América Latina”. En: Toro P., C., Fierro M., J., Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, territorio y conflicto en Colombia*. Censat Agua Viva, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá.

Padilla O, C. (2010). “Expansión minera, políticas de Estado y respuestas comunitarias en América Latina”. En: *Revista Semillas* No 42-43. <http://semillas.org.co/es/revista/expansi>. Fecha de acceso, julio 9 del 2017.

Padilla, C. (2010^a). Minería: ¿Desarrollo o amenaza para las comunidades en América Latina?

En: *Deslinde, mayo-junio*.

- Patiño, A. (1991). *Ecología y compromiso social. Itinerario de una lucha*. Fondo Editorial Cerec. Bogotá.
- Pax, C. (2015). “Comunidades en resistencia no violenta”. En: *Comunidades en Resistencia no Violenta. Ante conflictos generados por proyectos extractivos: sistematización de experiencias en Colombia, Guatemala y Perú*. Pax Christi Internacional. Bruselas. Bélgica.
- Pax, C. (2016). *Democracia vale más que el oro. El proyecto minero La Colosa y el derecho ciudadano a la participación*. Países bajos.
- Pérez H., O. I. (2017). “El sector extractivo en Colombia: Importancia macroeconómica y transformaciones recientes”. En: Valencia, L. & Riaño, A. *La minería en el postconflicto: Un asunto de quilates*. Ediciones B. Bogotá.
- Periódico El Tiempo, diciembre 21 de 2007. “Hallan en Cajamarca (Tolima) reserva de oro que estaría entre las más grande mundo”. <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3871744>
- Periódico El Nuevo Día, mayo 8 de 2017. “Agro en Cajamarca puede generar hasta 10 mil empleos: ambientalistas”. <http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/316914-agro-en-cajamarca-puede-generar-hasta-10-mil-empleos-ambientalistas>.
- Periódico El Tiempo, abril 22 de 2010. “Nació la Conciencia Campesina/opinión”. En: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7648510>. Fecha de acceso, junio 11 de 2017.
- Piedrahita E, C. L. (2015). *Subjetividades políticas y pensamiento de la diferencia*. Doctorado en Estudios Sociales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Clacso. Bogotá.
- Pineda R., C. E. (2010). “Pensar la emancipación: democracia directa, economías locales, autorregulación social y gestión colectiva de los bienes comunes”. En: www.espora.org. Fecha de acceso, diciembre 29 de 2015.
- Pineda R., C. E. (2012). “indios y campesinos: alternativas anticapitalistas en la defensa de la madre tierra”. En: *Nostramo Revista Crítica Latinoamericana* No 5.
- Pinilla, A. (2013). *Memorias de la acción colectiva del magisterio en Colombia*. Tesis de grado Doctorado Interinstitucional de Educación. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- Ponce, A. (2013). *¿Cuál locomotora? El desalentador panorama de la minería en Colombia*. Ediciones Penguin Rondón, Debate. Bogotá.

- Popueau, F. (2007). *Dominación y movilizaciones. Estudios sociológicos sobre el capital militante y el capital escolar*. Ferreira Editor. Córdoba.
- Porto G., C. W. (2009). *Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina. Geografías de los movimientos sociales en América Latina*. Ediciones Instituto Venezolano de Ciencia y Tecnología. Venezuela.
- Prada A. R. (2005). “Bolivia. Los movimientos moleculares de la multitud”. En: *Revista Herramienta* No 30
- Prada A., R. A. (2012). “La lucha por la defensa del páramo de Santurbán”. En: Toro P., C; Fierro M., J.; Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Pulido, A. (2015). *Los territorios frente a la minería: debates y alternativas alrededor de la problemática minera en Colombia*. Corporación para la Educación y la Investigación Popular Instituto Nacional Sindical CINDINS. Bogotá.
- Quintana C, M. N. (2016) *Organización de los movimientos sociales frente a la minería a gran escala en Colombia. El caso de la Red de Comités Ambientales del Tolima*. Tesis de grado para obtener el título de Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social. Colegio de la frontera Norte. Ciudad Juárez. Chihuahua. México.
- Quiroga, C. (2014) “Hacia un territorio minero campesino: propuestas territoriales desde el movimiento socioterritorial en el nordeste de Antioquia, Colombia”. En: Ulloa A.; Góbel, B. (Editoras) (2014) *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Ramírez G., M. (2012). “Territorialidad y conflicto en un contexto minero: el caso del municipio de Marmato, Caldas”. En: *Ánfora* 19 (33) 89. Universidad Autónoma de Manizales.
- Ramírez, P. (2013). *Acción colectiva estudiantil y construcción de subjetividad en el contexto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Tesis doctoral)*. DIE, Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá
- Retamozo, M. (2009). “Orden social, subjetividad y acción colectiva. Notas para el estudio de los movimientos sociales”. En: *Athenea Digital*, No 16, 2009. Universidad Autónoma de Barcelona. España.
- Reyes, J. E. (2015). “Cátedra ambiental Gonzalo Palomino”. En: *El Nuevo Día*, abril 20.
- Riaño, A. (2017). “Institucionalidad, política y normatividad del sector: los detonantes del conflicto”. En: Valencia, L & Riaño, A. (2017). *La minería en el postconflicto. Un asunto*

de quilates. Grupo Zeta. Bogotá.

Rigal, L. (2008). “Educación, democracia y ciudadanía en la postmodernidad latinoamericana: a propósito del surgimiento de nuevos actores sociales”. En: *Revista de la Asociación de Sociología de la Educación*, vol. 1. No 3.

Roa A., T. (2012). “Palabras para narrar la resistencia. Las luchas por el agua y el territorio”. En: Toro P., C; Fierro M., J.; Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.

Roa A., T. (2014). “Época de resistencia al extractivismo”. En: Roa A., T. & Vargas N., L., M. (2014). *Extractivismo, conflictos resistencias*. Censat Agua viva, Escuela de la sustentabilidad y Broederlijk Denle.

Roa A., T. (2015) “Reflexiones sobre el proceso de fortalecimiento de capacidades para la transformación de conflictos mineros, desde la perspectiva de la no violencia”. En: *Comunidades en resistencia no violenta. Ante conflictos generados por proyectos extractivos. Sistematización de experiencias en Colombia, Guatemala y Perú*. Pax Chisti Internacional. Bruselas Bélgica.

Rodríguez G., G.; Gil F., J.; García J., E. (1996). *Metodología de la investigación científica*. Ediciones Aljibe. Granada España

Rodríguez, C.; Tunorosa, M. del P.; Ramírez, L. M.; Rojas L. M.; Quiñonez, A., Vecino, J. M. (2010). “Conflicto Minero: La Colosa – Cajamarca”. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Maestría en Estudios Ambiental.

Rodríguez, M; Arensberg, W; R. & Roig, J. (2005). “Informe de la mesa de evaluación independiente de la mesa de diálogo y consenso Cao Cajamarca”. En: <http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/cajamarca.pdf>. Fecha de acceso, mayo 16 de 2017.

Rojas, Y. (2014). “Construyendo autonomía con los acueductos comunitarios”. En: *La Incontestable*. No 12. Cajamarca.

Sánchez G., D. P. (2014). “El conflicto por la producción del territorio en el caso del proyecto minero La Colosa, Tolima, Colombia”. En: Ulloa, A. & Göbel B. (Editoras) (2014) *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Sánchez G., D. P. (2013). *Minería, territorio y territorialidad. El caso del hallazgo aurífero La Colosa en el municipio de Cajamarca (Tolima-Colombia) 2000-2013*. Tesis de grado de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título de Magister en

Geografía. Departamento de Geografía Universidad Nacional de Colombia.

- Sánchez J., F. (2017). “Narrativas de resistencia contra la minería a gran escala”. En: <http://censat.org/es/noticias/narrativas-de-resistencia-contra-la-mineria-a-gran-escala>. Fecha de acceso, junio 28 de 2017.
- Sánchez, V. (2017). “Consulta popular: nueva arma de lucha”. En: <https://elcronista.co/opinion/consulta-popular-nueva-arma-de-lucha>. Fecha de acceso, agosto 13 de 2017.
- Sandoval, M. S. (2012). “La resistencia minera en el Páramo El Almorzadero”. En: Toro P., C; Fierro M., J.; Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Sassen, S. (2007). *Una sociología de la globalización*: Katz. Buenos Aires.
- Sauvé, L. (2003) “Perspectivas curriculares para la formación de formadores en educación ambiental”. En: *Memoria Primer Foro sobre la Incorporación de la Perspectiva Ambiental en la formación Técnica Empresarial*. Universidad Autónoma de San Luís Potosí. México.
- Sauvé, L. (2006). “La educación ambiental y la globalización: desafíos curriculares y pedagógicos”. En: *Revista Iberoamericana de Educación* No 41. Organización de Estados Iberoamericanos.
- Scott, J. (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia*. Discursos ocultos. Ediciones Era. México.
- Semper, F (2006). “Los derechos indígenas de Colombia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. En: *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*. <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R21731.pdf>.
- Seoane, J.; Emilio T. & Algranati, C. (2013). *Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos de los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de nuestra América*. Ediciones Herramienta, Editorial El Colectivo, GEAL. Buenos Aires.
- Silva N., S. (2016). “El oro, la nueva amenaza de la palma de cera”. En: *El Espectador*, mayo 8. Bogotá.
- Silva N., S. (2016a). “La consulta popular que podría frenar el proyecto minero La Colosa”. En: *El Espectador*, agosto 30. Bogotá.
- Smelser, N. (1989). *Teoría del comportamiento colectivo*. Fondo de Cultura Económico. México.

- Stein, J. S., & Stein H., B. (1997). *La herencia colonial de América Latina*. Siglo veintiuno. México.
- Suárez M., A. (2013). *La minería colonial del siglo XXI*. No todo lo que brilla es oro. Ediciones Aurora. Bogotá.
- Svampa, M. & Antonelli, M. A. (2009). “Hacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto”. En: Svampa, M. & Antonelli, M. A. (editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos. Buenos Aires.
- Svampa, M. & Sola A., M. (2010). “Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: los marcos de discusión en la Argentina”. En: *La Hora Nacional*. Junio 1.
- Svampa, M. (2012). “Hacia una gramática de las luchas en América Latina: dimensiones de la acción y giro eco- territorial”. En: *Nostramo Revista Crítica Latinoamericana* No 5.
- Svampa, M. y Viale, E. (2014). *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Primera edición. Katz, Fundación Rosa Luxemburgo. Buenos Aires.
- Svampa, M.; Bottaro, L. & Sola A., M. (2009). “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto, modelo de desarrollo, territorio y discurso dominante”. En: Svampa, M. & Antonelli, M. (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos Sociedad. Buenos Aires.
- Svampa, M; Bottaro, L. y Sola A, M. (2009). “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto, modelo de desarrollo, territorio y discurso dominante”. En: Svampa, M. & Antonelli, M. (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos Sociedad. Buenos Aires.
- Svampa, M; Sola A., M.; Bottaro, L. (2009). “Los movimientos contra la minería metalífera a cielo abierto: escenarios y conflictos. Entre el “efecto Esquel” y el “efecto La Alumbarrera”. En: Svampa, M. & Antonelli, M. (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos Sociedad. Buenos Aires.
- Tabra, M. (2011). “Minería y territorio en el Perú: casos, temas y propuestas”. En: Alimonda, H. (Coordinador) (2011) *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*. Ediciones Ciccus, Clacso. Buenos Aires.
- Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza Editorial. Madrid.
- Thompson, E. P. (1979). *Tradición, revuelta y consciencia de clase: Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*. Editorial Crítica. Barcelona.

- Thompson, E. P. (1981). *Miseria de la teoría*. Editorial Crítica. Barcelona.
- Tischler, S. & Navarro, M. L. (2012). “Memoria y antagonismo en las luchas socioambientales en México”. En: *Nostramo Revista Crítica Latinoamericana* No 5.
- Tobasura A., I. (2006). *Ambientalismos y ambientalistas. El ambientalismo criollo a finales del siglo XX*. Universidad de Caldas.
- Toledo, V. M. (1996) “Latinoamérica: crisis de civilización y ecología política”. En: <http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/ToledoCrisisEcologiaPolitica.htm>. Fecha de acceso, diciembre 29 de 2015.
- Toledo, V. M. “Latinoamérica: crisis de civilización y ecología política”. En: <http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/ToledoCrisisEcologiaPolitica.htm>. Fecha de acceso, diciembre 29 de 2015.
- Tonnies, F. (1979). *Comunidad y asociación*. Madrid. Editorial Península.
- Toro P, C; Fierro M, J; Coronado D, S; Roa A, T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Torres C., A. (2004). “La vida cotidiana de las organizaciones populares como espacio de formativo”. En: *Revista Pedagogía y Saberes* No 20. Universidad Pedagógica Nacional.
- Torres C., A. (2004). “Por una investigación desde el margen”. En: *La práctica investigativa en ciencias sociales*. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- Torres C., A. (2006). “Subjetividad y sujeto: perspectivas para abordar lo social y lo educativo”. En: *Revista Colombiana de Educación*, N° 50, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional.
- Torres C., A. (2007). *Identidad y política de la acción colectiva. Organizaciones populares y luchas urbanas en Bogotá 1980-2000*, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional.
- Torres C., A. (2009). “Acción colectiva y subjetividad. Un balance desde los estudios sociales”. En: *Folios* Segunda época No 30.
- Torres C., A. (2013). *La educación popular: Trayectoria y actualidad*. Editorial el Búho. Bogotá.
- Torres C., A. (2014). “Transformaciones históricas de la educación popular”. En: *América Latina en movimiento* No 499. *Educación popular, vigencia y desafíos*. Octubre de 2014. Quito Ecuador. <http://alainet.org/publica/499.phtml>.
- Torres C., A. (2014b). *Hacer historia desde abajo y desde el sur*. Ediciones desde abajo y

Planeta Paz. Bogotá. Bogotá.

- Torres C., A. (Inédito). “Formación de subjetividades, sentidos de comunidad y alternativas políticas en procesos organizativos locales”
- Torres C., A. (Inédito). “Lo pedagógico en experiencias educativas de movimientos sociales latinoamericanos”
- Torres C., A. (S/f). “Las lógicas de la acción colectiva. Aportes para ampliar la comprensión de los movimientos sociales”. En: [http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/180/Seminario Investigacion y Movimientos Sociales/Ponencias centrales/Ponencia Alfonso Torres](http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/180/Seminario_Investigacion_y_Movimientos_Sociales/Ponencias_centrales/Ponencia_Alfonso_Torres.pdf). pdf.
- Torres C., A. (2014^a). “Producción de conocimiento desde la investigación crítica”. En: *Revista Nómadas*. No 40, abril del 2014. Universidad Central. Bogotá.
- Torres, C. A. (2010). “Educación popular y producción de conocimiento”. En: *La Piragua: Revista Latinoamericana de educación y política*. No 32. Panamá.
- Torres, C. A. (2011). *La educación popular: trayectoria y actualidad*. Editorial el Búho. Bogotá.
- Torres, C. A. (2017). “Prácticas educativas en movimientos sociales de América Latina”. *Revista Folios*. Universidad Pedagógica Nacional Bogotá.
- Torres C., A. (2013). *El retorno a la comunidad. Problemas, debates y desafíos de vivir juntos*. Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE) Editorial El Búho LTDA. Bogotá.
- Touraine, A. (1987). *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*. Prealc, Santiago de Chile.
- Touraine, A. (1992). *Beyond social movements? Theory, Culture and Society*. Vol. 9, núm. 1. Pág. 125-145.
- Touraine, A. (1999). *¿Cómo salir del liberalismo?* Editorial Paidós. México
- Touraine, A. (2005). *Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy*. Editorial Paidós. España.
- Touraine, A. (2006). “Los movimientos sociales”. En: *Revista Colombiana de Sociología*, No 27.
- Triana A., A. (1992). *La Colonización Española en el Tolima. Siglo XVI y XVIII*. Funcol Cuadernos del Jaguar. Bogotá.

- Ulloa, A. (2004). *La construcción del nativo ecológico. Complejidades, paradojas y dilemas de la relación entre los movimientos indígenas y el ambientalismo en Colombia*. Instituto Colombiano de Antropología (ICANH), Colciencias. Bogotá.
- Ulloa, A. (2014). “Geopolíticas del desarrollo y la confrontación extractivista minera: elementos para el análisis en territorios indígenas en América Latina”. En: Ulloa, Astrid y Göbel, Bárbara (Editoras). *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Universidad Nacional de Colombia.
- Ulloa, A., & Coronado, S. (editores) (2016). *Extractivismos y conflicto en Colombia: retos para la paz territorial*. Cordaid, Cinep, Programa por la paz y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Urrea, D. & Rodríguez M. (2014). “Gran minería y conflicto. Una perspectiva socioambiental del modelo de desarrollo en Colombia”. En: Roa A., T & Vargas N. L., M. (2014). *Extractivismo, conflictos resistencias*. Censat Agua viva, Escuela de la sustentabilidad y Broederlijk Denle. Bogotá.
- Valencia, L. & Riaño, A. (Compiladores) (2017). *La minería en el postconflicto. Un asunto de quilates* (2017). Ediciones B Colombia S. A. Bogotá.
- Vega C., R. (2009). “Crisis civilizatoria”. En: *Revista Herramienta* No 42.
- Vega, C., R. (2006). “El imperialismo ecológico. El interminable saqueo de la naturaleza y de los parias del mundo”. En: *Revista Herramienta* No 31.
- Villalba C., X. (2017). “Cajamarca en medio de la ‘burbuja’ de los megaproyectos”. En: <http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/348180-cajamarca-en-medio-de-la-burbuja-de-los-megaproyectos?quicksite=3=1>. Fecha de acceso, julio 2 de 2017.
- Walsh, E. J. (1982) “Resource Mobilization and Citizen Protest in Communities Around Three Mile Island”. En: *Social Problems*, 26.
- Walter, M. (2008). “Nuevos conflictos ambientales en Argentina. El caso Esquel (2002-2003)”. En: *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*. Vol. 8. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/engov/20130828052512/rev8_02.pdf.
- Wahren, J. (2012). “Movimientos sociales, y territorios en disputa. Experiencias de trabajo y autonomía de la Unión de trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, Salta”. En: *Trabajo y sociedad: indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades fragmentadas*. No 19. Santiago del Estero. Argentina.
- Williams, R. (2001). *Cultura y sociedad 1750 – 1950*. De Coleridge a Orwel. Ediciones Nueva visión. Buenos Aires.

Zapata, G. (2007). “La subjetividad hermenéutica”. En: *Revista de Ciencias humanas*. UPT No 37.

Zemelman, H. (1997). (Coordinador). Sujeto y subjetividad en la construcción metodológica”. En: *Subjetividad: Umbrales del pensamiento social*. Anthropos. Barcelona.

Zibechi, R. (2007). *Autonomía y emancipaciones. América Latina en movimiento*. Universidad Mayor de San Marcos Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Programa Democracia y Transformación Global. Lima Perú.

Zibechi, R. (2015). *Descolonizar: el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias*. Ediciones desde abajo. Bogotá.

Zibechi, R. (2017). *Movimientos sociales en América Latina. El “mundo otro” en movimiento*. Planeta Paz y Ediciones desde abajo. Bogotá.

4. Contenidos

La investigación realizada se presenta a lo largo de siete capítulos. El primero titulado Referentes Teóricos, Conceptuales y Metodológicos contiene un balance bibliográfico relacionado con el carácter educativo de los movimientos sociales, los estudios sobre los conflictos y luchas ambientales en América Latina, los referentes teóricos para el desarrollo de la investigación y la metodología empleada para la implementación de la misma.

El segundo capítulo denominado El Proyecto Minero de La Colosa, empieza haciendo una descripción de las características principales de la explotación minera a cielo abierto, continúa con una exposición sobre las especificidades de la mina La Colosa y los efectos ambientales que ocasionará la explotación de la misma en el territorio.

El capítulo tres, Procesos Organizativos Anti mineros de Cajamarca, presenta el contexto en que estos surgen, la articulación que han establecido entre ellos y los principios que orientan su actuación.

El cuarto capítulo, Procesos de Sensibilización y Movilización en torno al proyecto minero del mismo lugar, explica las acciones que realizan los integrantes de los nucleamientos colectivos con el fin de concienciar a los pobladores de Ibagué y demás municipalidades del resto del departamento sobre los destrozos que acarreará la explotación de la mina La Colosa, así como las características y enseñanzas que han derivado los lugareños de la llamada Marcha Carnaval por el Agua, la Vida y el Territorio que se realiza cada año en la ciudad de Ibagué.

El quinto capítulo, Prácticas Educativas Antimineras de las Organizaciones Sociales que operan en el lugar, describe las actividades educativas informales y formales, y hace un análisis de las

dimensiones pedagógicas y políticas de las mismas.

El sexto capítulo, Transformaciones Subjetivas de los Integrantes de los Procesos Organizativos, explica la formación de subjetividades políticas que se han configurado en el lugar por la defensa del territorio, la movilización de consenso en contra del proyecto extractivo, y la formación de subjetividades cognitivas, prácticas e identitarias.

El capítulo siete, Cohesión y Sentido de las Acciones Colectivas, analiza los vínculos que han establecido las organizaciones sociales antimineras con la población de Cajamarca, la articulación con otras organizaciones y movimientos sociales del país donde también se realizan emprendimientos mineros, y la gestión que realizan sus integrantes a fin de obtener los recursos para financiar las acciones colectivas que programan.

Finalmente se exponen las conclusiones donde se hace un balance de la investigación de la labor que hacen las organizaciones sociales antimineras que operan en el territorio de Cajamarca y el significado de su lucha para defender el agua, la biodiversidad y la vida del lugar.

5. Metodología

El estudio se inscribe en el enfoque denominado “sistematización de experiencias como investigación interpretativa y crítica”. Perspectiva definida como una modalidad que busca reflexionar “sobre las prácticas sociales y educativas transformadoras y alternativas en diferentes ámbitos y escenarios de acción colectiva e institucional” (Barragán & Torres, 2017: 7; Torres, 2010).

Los rasgos que posibilitaron dicha sistematización se explican a continuación:

A partir de los ejes temáticos que orientaron la indagación, se estructuraron preguntas relacionadas con: la emergencia en el territorio cajamarcuno de procesos organizativos y acciones colectivas como producto de la instalación del proyecto minero; las prácticas educativas que estos emprendimientos colectivos realizan con el fin de defender el territorio, el agua, la biodiversidad y la vida; así como el surgimiento de nuevas subjetividades (aprendizajes, prácticas e identidades) en sus integrantes(ver matriz analítica capítulo No 1).

Para la reconstrucción narrativa de las experiencias de los colectivos sociales, la trayectoria de sus integrantes, los procesos de movilización y concientización a la población, y que configuran las prácticas educativas informales y formales, así como las transformaciones que estas generan en sus miembros y la misma comunidad, se acudió a la realización de entrevistas estructuradas y a profundidad. Los testimonios e historias de vida, aportados por estudiantes, campesinos, amas casa, comerciantes, etc., permitió reconstruir la dinámica de la resistencia, y las huellas que ésta ha dejado en cada uno de ellos.

El resultado de esta reconstrucción narrativa se complementó con información obtenida en tesis de grado, revistas, e informaciones de prensa, etc. También se acudió a la información suministrada por académicos expertos, asistencia a encuentros de colectivos sociales ambientales, letras de canciones, poemas y materiales audiovisuales. Esto permitió entender que todos los espacios, sujetos y acciones de las personas son educativos, y que del campesino más humilde, también se aprende.

Para el análisis e interpretación de la información se procedió a identificar aspectos relevantes de la misma como: patrones y conexiones recurrentes, lo cual permitió identificar categorías centrales relacionadas con los aspectos educativos de las acciones colectivas que realizan los movimientos sociales, las transformaciones subjetivas, así como los aportes sustantivos de los testimonios y que se correlacionan con los conceptos y teorías que se usaron como herramientas de análisis en el ejercicio investigativo.

La reconstrucción de la práctica social o educativa de las organizaciones sociales antiextractivas que operan en el lugar escogido para adelantar el estudio, permitió construir una lectura comprensiva de las acciones colectivas que estas realizan, y erigir una noción interpretativa de los mismos. Nominación que se designa en esta investigación como: Repertorios de Acción y Prácticas educativas (RAPE), y que alude a los conocimientos, destrezas, formas de lucha y resistencia que han heredado y aprendido los integrantes de las colectividades sociales que operan en el lugar. Prácticas y acciones colectivas que tienen como propósito principal, formar sujetos que defiendan el territorio en el que se ha instalado el emprendimiento minero, por constituir un Horizonte Territorial de Vida (HTV).

En suma, la sistematización de esta experiencia de lucha, permitió recuperar parte de la historia colectiva reciente de los últimos años de la localidad de Cajamarca Tolima. Redención de la que hacen parte además, la indagación de los conocimientos y sentidos derivados de las acciones de resistencia de hecho y de derecho, emprendidas por campesinos, estudiantes, amas de casa, comerciantes, etc., en procura de defender una vida digna y formas de trabajo relacionadas con las labores agrícolas y pecuarias que se desarrollan en el lugar.

Situación que se enmarca en el surgimiento desde finales de la década de los noventa y primera década del siglo XXI, de nuevos movimientos populares en América Latina. Emergencia que ha permitido reactivar unos elementos comunes relacionados con la Educación Popular (EP), como: la formación de educadores populares y promotores sociales imbuidos de un enfoque, unas estrategias y una actitud investigativa; a fin de determinar las causas de las discordias entre comunidades locales y grandes empresas, caracterizar el modelo económico y el orden social vigente, la proyección de las comunidades como sujetos históricos, y su conversión en protagonistas anónimos de transformaciones sociales; la intencionalidad política emancipadora de sus luchas, así como la influencia de la educación, las metodologías dialógicas y participativas como estrategias para materializar mejores horizontes de vida en ámbitos locales (Torres, 2010).

La sistematización de experiencias se relaciona también con enfoques metodológicos como la

Investigación Acción Participativa (IAP), que se agregan como procedimientos investigativos y que se resumen a continuación: A. La investigación colectiva, definida como la utilización de preguntas, respuestas en reuniones, asambleas, cabildos, comités, giras de observación, etc., como fuente de conocimientos objetivos de los hechos. B. La recuperación de la memoria histórica, para lo cual se acude a la tradición oral; archivos familiares; relatos; narraciones populares; a fin de reactivar la memoria colectiva, corregir y complementar o aclarar relatos académicos concebidos con intereses ajenos a las clases populares, o buscar detalles inéditos de importancia para la historia regional y local. C. Valoración del empleo y la cultura popular, usando como elementos de análisis: la música, el deporte, las creencias, los mitos, los cuentos y otros aspectos atinentes al sentimiento, la imaginación, etc., y que se reintegran al pueblo como procedimientos investigativos y de movilización. D. La producción y difusión del nuevo conocimiento comunicados a las bases letradas afín de contribuir a la solución de problemas y el compromiso con el grupo (Fals, 1985).

6. Conclusiones

La exploración y explotación de bienes naturales con destino al mercado internacional, impulsado por los países latinoamericanos durante las últimas décadas, ha ocasionado destrozos a las fuentes hídricas, la biodiversidad, y el medio ambiente de los territorios en los que se han instalado. Estas consecuencias han posicionado el tema del extractivismo entre los más destacados de los estudios latinoamericanos.

En la medida en que fueron aumentando las tensiones sociales entre compañías mineras y el Estado, por un lado, y las comunidades por el otro, los episodios generados por el conflicto comenzaron a ser analizados desde perspectivas como: crisis civilizatoria, acumulación por desposesión, el ecologismo o ambientalismo popular, conflictos socioambientales, movimientos de reapropiación o resistencia y luchas por lo común, giro ecoterritorial, y posturas institucionalistas. Descritas todas en el primer capítulo del trabajo e identificadas en el proceso de investigación

Desde la perspectiva de las prácticas educativas que se realizan en torno a las acciones colectivas, mediante el ejercicio investigativo se identificaron enfoques analíticos que califican los aspectos educativos de los movimientos sociales como: Ambientes de fraternidad comunitario; dominios desde los que se vivencian principios de democracia fundamental no eurocéntrica; espacios en los que se incentivan procesos de igualdad; acciones sociopolíticas construidas por los actores sociales que participan en ellos; ámbitos que incentivan la conciencia, las intencionalidades políticas, los valores y las visiones de futuro; o realizaciones a través de las cuales se incentiva la comprensión de procesos identitarios y culturales.

La revisión bibliográfica permitió identificar únicamente cuatro estudios que identificaban

vínculos entre: la acción colectiva, procesos educativos relacionados con el surgimiento de cualidades subjetivas, como la configuración de conocimientos alternativos que trascienden el ámbito individual, y que permiten establecer vínculos de identidad, pertenencia, así como el desarrollo de una capacidad movilizadora (Torres, 2009; Svampa, 2012; Gluz, 2013; Navarro, 2015).

Torres (2009) define lo educativo de los procesos organizativos a partir de la configuración de creencias, decisiones, construcción de identidades, solidaridades y sentidos de pertenencia comunes. Valores que tienen incidencia cultural y política, en el conjunto social, y contribuyen a modificar actitudes, representaciones y hábitos sociales. Svampa (2012), enmarca los movimientos sociales que luchan contra proyectos extractivos, en lo que denomina “giro ecoterritorial”, caracterizados por definir lenguajes comunes, marcos comunitarios de acción, justicia ambiental, defensa de la naturaleza, el buen vivir, la soberanía, los derechos humanos, y la democratización de decisiones. En sentido similar se refiere Navarro (2015), quien alude a la estructuración de lazos comunitarios, mecanismos democráticos como asambleas, consultas populares, recursos de amparo, peticiones legislativas y acciones directas con el fin de defender los territorios de los efectos de los emprendimientos mineros. Por su parte Gluz (2013) hace referencia a que las acciones colectivas que programan los colectivos sociales se constituyen en una nueva forma de hacer política lo cual genera recursos cognitivos, relacionales e identidades en las comunidades.

A partir de la sistematización de las experiencias educativas de las organizaciones sociales que se oponen a la instalación del proyecto extractivo de la mina La Colosa en Cajamarca Tolima, y teniendo en cuenta las preguntas que orientaron la investigación, podemos plantear las siguientes conclusiones.

Con la llegada del proyecto minero liderado por la AGA, los habitantes de Cajamarca Tolima, comenzaron a constituir nucleamientos colectivos con el fin de defender el territorio y el futuro de las próximas generaciones. La iniciativa organizativa estaba impulsada en el conocimiento por parte de sus integrantes, del impacto que la actividad extractiva generaría en las cuencas hidrográficas, las condiciones de salubridad de las poblaciones afectadas, y el impacto negativo en las labores agrícolas, que allí se desarrollan.

Acorde con esto, la investigación se propuso reconstruir el proceso histórico de las organizaciones sociales y las acciones colectivas que éstas programaban con el objeto de defender el territorio, el agua, la biodiversidad y la vida del lugar. Identificar las prácticas educativas informales (no planeadas) y formales (planeadas) que han sido formativas para los habitantes del lugar; las transformaciones subjetivas de los que han participado en las acciones colectivas; y cómo estas han influido en el grado de cohesión comunitario. Categorías estas que hacen parte del modelo analítico que se propuso para adelantar la indagación.

La investigación pudo evidenciar que los enfoques interpretativos de las acciones colectivas que se

realizan contra los proyectos extractivos son las siguientes: De acuerdo al orden expositivo, la *Comunidad Conocible* acude a la socialización del contexto económico y político en que ocurren las prácticas extractivas. El *Giro Ecoterritorial* privilegia el análisis de los marcos comunes de acción en defensa de los territorios afectados por el extractivismo. La *Ambientación de las luchas* explica cómo los movimientos opositores a esta práctica se hacen ambientalistas. La *Comunidad Imaginada* se usa para examinar los factores de identidad de los sectores sociales que participan en los conflictos mineros. El *Círculo Hermenéutico* se inclina por entender cómo es que los sectores sociales afectados procesan la comprensión y el conocimiento de esta práctica económica. Por último, la *Fusión de Horizontes* se enfoca a explicar el acuerdo entre el investigador y los sectores sociales con el fin comprender un horizonte de entendimiento y el mundo vital.

Todos estos enfoques están asociados a la promoción de grandes propósitos y horizontes de futuro de los movimientos sociales (Torres, 2017). En este trabajo se consideró que ninguno de los que se han explicado tiene en cuenta en el análisis la perdurabilidad de las prácticas educativas. Los aprendizajes derivados de este ejercicio se denominan en esta investigación como *Repertorios de Acción y Prácticas Educativas* (RAPE) de orden popular. Enfoque teórico que alude a un conjunto de conocimientos, destrezas, medios culturales y formas de lucha que heredan, aprenden, aprehenden o inventan organizaciones indígenas, afros, ecologistas, defensores de derechos humanos, etc., que han emergido en el escenario colombiano y latinoamericano, que no se someten a formas de subordinación económica, política, social y cultural. Razones de lucha que se fortalecen con la implementación de prácticas educativas.

En este mismo sentido se tuvo en cuenta también que los conflictos generados por los proyectos extractivos pueden analizarse desde la perspectiva teórica que en esta investigación se denomina *Horizontes Territoriales de Vida* (HTV) Enfoque que alude a la variedad de acciones colectivas y prácticas educativas que realizan las organizaciones sociales con la intención de defender los territorios donde se instalan los proyectos extractivos y formar sujetos que se conviertan en promotores de cambio. Propósitos para los que se impulsan procesos formativos de los integrantes de las organizaciones y las comunidades a fin de fortalecer la realización de operaciones de resistencia que eviten: la contaminación de las fuentes de agua, la seguridad alimentaria, los afectos a la biodiversidad, factores de los que depende la vida y la existencia de generaciones futuras.

Desde esta misma perspectiva, en esta investigación se evidenció que los procesos organizativos que surgieron en el territorio tolimense de Cajamarca e Ibagué para hacerle oposición al proyecto minero a gran escala de La Colosa, estuvieron inspirados en métodos de resistencia similares surgidos en el año 2001 y 2002 en Tambogrande (Perú) y Esquel (Argentina), así como en el departamento colombiano de Santander. Territorio en el que la multinacional canadiense Eco Oro Minerals (antes GreyStar) pretendía iniciar actividades mineras en el páramo de Santurbán, del que se surte de agua el área metropolitana de Bucaramanga y otros lugares del oriente colombiano.

Se encontró también que los sujetos que integran estos procesos organizativos, se inclinan por la

educación de la comunidad como la mejor estrategia para fortalecer la resistencia contra la minería. Con este objetivo, han realizado campañas en: parques, ciclovías, plazas de mercado, barrios populares, colegios, universidades, etc., a fin de explicar por qué es inconveniente efectuar actividades mineras a gran escala y a cielo abierto en un territorio con vocación agrícola como Cajamarca, denominado como Despensa Agrícola de Colombia.

Con este mismo propósito, estos procesos organizativos han efectuado acciones colectivas de hecho y derecho, principalmente la Marcha Carnaval por el Agua, la Vida y el Territorio. La actividad, en la confluyen la alegría, el arte y la defensa de la vida, en contraposición a la cultura de la muerte, la exclusión y el saqueo de los bienes comunes, efectuado por compañías multinacionales, se realiza cada año a principios del mes de junio en la ciudad de Ibagué. Esto ha permitido articular y cohesionar a las comunidades afectadas por la exploración y explotación aurífera.

De las acciones colectivas realizadas por las organizaciones sociales que integran la Red de Comités Ambientales del Tolima (RCAT), articuladas todas alrededor de propósitos ambientales del ámbito local pero principalmente en rechazo del emprendimiento minero de La Colosa en Cajamarca Tolima, se han derivado a su vez prácticas educativas que han devenido en enseñanzas y aprendizajes individuales y colectivos que han contribuido a fortalecer y mantener en el tiempo la resistencia de los procesos organizativos.

En este sentido, la investigación permitió reconocer las prácticas educativas informales (o no planeadas), y formales (o planeadas) de las organizaciones populares que han surgido en el territorio tolimese de Cajamarca. Ejercicio que ha sido promovido igualmente con el propósito de explicar a los habitantes los efectos sociales y ambientales que acarreará la explotación minera en el patrimonio ecológico y cultural del territorio, la incompatibilidad de la explotación aurífera con la agricultura, y el peligro que ocasionará a las fuentes de agua y la economía local.

La investigación también evidenció que las prácticas educativas y formativas, han incidido a su vez en la aparición de subjetividades políticas, en torno a las cuales los integrantes de los procesos organizativos han hecho posible la apropiación del pasado, resignificar el territorio y visualizar en la agricultura la única posibilidad de futuro.

Esta experiencia formativa, ha sido implementada con orientaciones y criterios metodológicos participativos como: la horizontalidad del conocimiento, el diálogo experiencial y de saberes. Gracias a esta estrategia se ha generado en los habitantes del territorio, un conjunto de transformaciones cognitivas, valorativas, actitudinales y prácticas, que han aportado los referentes desde los cuales sus integrantes y simpatizantes han reconfigurado Saberes, prácticas e identidades.

Estas prácticas han tenido a su vez incidencia en transformaciones subjetivas relacionadas con innovaciones que se sustentan en el desarrollo de la capacidad de sentir con otros, implicarse, reconocer la deferencia y la pluralidad, es decir la alteridad, entendida como la capacidad de

apertura al otro, a la comprensión de sus sentidos. Conversiones para las que se requiere la formación de la otredad, lo que involucra a su vez capacidad para asimilar conocimientos, prácticas e identidades nuevas (Fernández, 2011), y que ha intervenido a su vez en la cohesión y sentido de las acciones colectivas.

Acciones colectivas que han contribuido a la creación de vínculos entre grupos sociales y localidades diferentes, en los que también proyecta la realización de consultas populares contra emprendimientos mineros que se pretenden instalar en sus territorios (Valencia & Riaño, 2017). El factor que ha contribuido a la creación de estos nexos ha sido la circulación de documentos impresos, audiovisuales, charlas, conferencias etc., y que tienen como propósito informar sobre los efectos de la actividad minera en las fuentes hídricas, la biodiversidad y la vida de las regiones. Información que se complementa con la implementación coordinada de acciones colectivas y de prácticas educativas de orden informal y formal que median en la configuración a su vez de subjetividades políticas y transformaciones cognitivas, prácticas e identitarias, tal como lo hemos evidenciado a lo largo de esta investigación.

Las evidencias de la investigación no han estado exentas de las dificultades que intervienen en la creación de conocimiento, la mediación que establecen el sujeto y el objeto, o la zona de la realidad social que se explora. Desde el punto de vista personal, y pese a las orientaciones del tutor, los apuros han sido múltiples: poder ensamblar un proyecto con objetivos claros y precisos, que orienten la indagación; hallar los elementos teóricos adecuados para hacer el análisis de los datos; aunado a la falta de tiempo para emprender la compilación de la información e iniciar la escritura del informe final, se constituyeron en los principales dificultades. Desde la perspectiva del objeto de estudio, los aprietos estuvieron en la búsqueda de contactos adecuados para obtener la información; ganarse la confianza de la comunidad, y hacer que los campesinos, simpatizantes, y los mismos integrantes de los procesos organizativos, escribieran las respuestas a las preguntas formuladas en las encuestas estructuradas. Excusa que se superó acudiendo a entrevistas o charlas informales, orientadas siempre por las preguntas de investigación y realizadas en plazas de mercado, cafeterías, casas de familia, y las mismas movilizaciones que realizan los nucleamientos colectivos.

Con el fin de seguir investigando en el tema del extractivismo, y a fin de realizar análisis comparativos, prospectivamente podrían sugerirse búsquedas relacionadas con acciones colectivas, prácticas educativas, o transformaciones subjetivas derivadas de impactos ambientales ocasionados por esta misma actividad en territorios como: Santander (donde se proyecta expandir la actividad extractiva de oro en el páramo de Santurban); Marmato (Caldas), Pijao y Salento (Quindío), Cumaral (Meta), Sanmartín (Cesar), y cuarenta municipios más, donde se han expandido e instalado proyectos megamineros. Sitios donde al igual que en Cajamarca o Ibagué en el Tolima, han surgido procesos organizativos, del que se han generado a su vez, instituciones comunitarias con capacidad para configurar procedimientos, normas sociales, criterios de reconocimiento, afiliación, y prácticas de democracia local, emanadas del conflicto.

Discordias entre comunidades locales y grandes empresas del que indudablemente han surgido intencionalidades políticas emancipadoras, frente al modelo económico y el orden social vigente; y que ha proyectado a las comunidades como sujetos históricos, convirtiéndolos en protagonistas anónimos de transformaciones sociales; convencidos de la idea en que solo mediante la educación, mediada por metodologías dialógicas y participativas pueden materializarse mejores horizontes de vida para las colectividades.

Investigaciones que requieren por parte del investigador: realizar lecturas de contexto, conocer las demandas de las comunidades, sus horizontes de vida, los anclajes territoriales de lucha, la participación de las mujeres en los movimientos sociales antiextractivos, el impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en las comunidades, etc. Aspectos primordiales para explicar los logros, aprendizajes y alcances actuales de la educación popular, a fin de corregir, complementar, aclarar o confrontar relatos académicos concebidos con intereses ajenos a las comunidades, que defienden y proyectan la actividad megaminera como símbolo de bienestar, progreso y desarrollo.

Elaborado por:	Giraldo Castaño, Germán Hislen
Revisado por:	Torres Carrillo, Alfonso

Fecha de elaboración del Resumen:	27	08	2018
------------------------------------------	----	----	------

PRÁCTICAS EDUCATIVAS Y TRANSFORMACIONES SUBJETIVAS EN CAJAMARCA TOLIMA, EPICENTRO DE LUCHA ANTIEXTRACTIVA EN COLOMBIA

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	37
AGRADECIMIENTOS.....	40
INTRODUCCIÓN	41
CAPITULO 1. ESTADO DEL ARTE Y REFERENTES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS	47
1.1 Estudios sobre educación en movimientos sociales	47
1.2 Conflictos, movimientos y luchas socioambientales.....	52
1.3 Referentes teóricos	58
1.4 Modelo analítico para la interpretación y análisis de los datos.....	69
1.5 Metodología: Tipo de abordaje investigativo.	71
1.6 Matriz Analítica	73
CAPÍTULO 2. EL PROYECTO MINERO DE LA COLOSA EN CAJAMARCA TOLIMA	76
2.1 Aspectos generales.....	76
2.2 La Mina La Colosa.....	78
2.3 Efectos ambientales	82
CAPÍTULO 3. PROCESOS ORGANIZATIVOS ANTIMINEROS DE CAJAMARCA TOLIMA.....	85
3.1 Contexto en que surgen las organizaciones sociales	85
3.2 Origen de las organizaciones sociales antimineras de Cajamarca	91
3.3 Articulación de las organizaciones sociales antimineras de Cajamarca Tolima.....	100
3.4 Principios de las organizaciones antimineras del Tolima.....	104
CAPÍTULO 4. PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN EN TORNADO AL EMPRENDIMIENTO MINERO DE LA COLOSA EN CAJAMARCA TOLIMA	109
4.1 Sensibilización	110
4.2 La Marcha Carnaval como movilización emblemática de la lucha antiminera	115
CAPÍTULO 5. PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS ORGANIZACIONES ANTIMINERAS DE CAJAMARCA TOLIMA.....	130
5.1 Prácticas educativas informales	132
5.2 Prácticas educativas formales.....	141

5.3 Aprendizajes que han interiorizado las comunidades	158
5.3.1 Aprendizajes en el plano cognitivo	158
5.3.2 Aprendizajes en el plano de los valores	161
5.3.3 Aprendizajes relacionados con la redefinición de los referentes identitarios y las visiones de futuro.....	162
5.4 Dimensiones pedagógicas y políticas de las prácticas educativas	164
5.4.1 La dimensión popular de la educación.....	164
5.4.2 Perspectivas epistemológicas para la comprensión del problema minero	166
5.4.3 Los Repertorios de Acción y Prácticas Educativas (RAPE) y los Horizontes Territoriales de Vida (HTV).....	169
5.4.4 Aspectos metodológicos y contenidos de las prácticas educativas	170
CAPÍTULO 6. TRANSFORMACIONES SUBJETIVAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES ANTIMINERAS DE CAJAMARCA TOLIMA	174
6.1 La formación de subjetividades políticas y la defensa del territorio	175
6.2 La movilización del consenso en torno al proyecto extractivo	179
6.3 Transformaciones subjetivas cognitivas.....	185
6.4 Transformaciones prácticas	191
6.5 Transformaciones identitarias	197
CAPÍTULO 7. COHESION Y SENTIDO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS.....	202
7.1 Las organizaciones sociales antimineras y los vínculos con la población de Cajamarca	203
7.2 Articulación con otras organizaciones y movimientos.....	209
7.3 La obtención de recursos para el sostenimiento de la lucha.....	214
CONCLUSIONES	217
BIBLIOGRAFÍA.....	223

TABLA DE GRÁFICOS

1 Mapa 2. 1 Ubicación geográfica del municipio de Cajamarca Tolima	79
2 Mapa 2.2 Cinturón de oro en Colombia	81
3 Cuadro 3.1 Beneficios de la agricultura y la minería	104
4 Fotografía 4.1. Cartel Segunda Marcha Carnaval	116
5 Fotografía 4.2. Cartel tercera Marcha Carnaval	117
6 Fotografía 4.3: Cartel sexta Marcha Carnaval.....	118

7	Fotografía 4.4: Cartel Séptima Marcha Carnaval	119
8	Fotografía 4.5: Cartel Octava Marcha Carnaval.....	119
9	Fotografía 4.6: Cartel Novena Marcha Carnaval	121
10	Fotografía 4.7. Participantes en la VII Marcha Carnaval	122
11	Fotografía 5.1 Participantes vereda Chorros Blancos en la Marcha Carnaval	137
12	Fotografía 5.2. Diploma en Análisis territorial, conflictos ambientales y movimientos sociales	147
13	Fotografía 5.3. Graduados Diplomado en Análisis territorial, conflictos ambientales y movimientos sociales.....	148
14	Fotografía 5.4. Portadas Revistas locales	151
15	Fotografía 5.5. Resultados consulta popular	153
16	Fotografía 6.1. Afiche fases explotación minera.....	190

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación es el resultado de cinco años de consultas periódicas en bibliotecas de Bogotá e Ibagué, y del trabajo de campo realizado en la población de Cajamarca Tolima.

Sin la oportuna asesoría del profesor Alfonso Torres Carrillo, quien ejerció como tutor, más las sugerencias de quienes sirvieron como jurados: Ricardo Delgado, Maria Cristina Martinez y Juan Wahren, los resultados y aportes a la comprensión de las luchas y prácticas educativas que ejecutan los integrantes de los procesos organizativos, que se oponen a la explotación minera en este territorio tolimese no hubieran sido los esperados.

Reconocimiento especial lo tienen también, los habitantes de la población escogida para adelantar el estudio: Renzo García, Jimy Fernando Torres, Robinson Mejía, y demás integrantes de los procesos organizativos, que le hacen frente al fenómeno extractivista, y que amenaza con consumir su territorio, fuentes de agua, biodiversidad y riqueza. Sin el registro de los testimonios, impregnados de experiencias, enseñanzas y valores no hubiera podido cumplir tampoco, los objetivos que nos propusimos en el desarrollo de la investigación.

Agradecimiento que extiendo igualmente a los funcionarios del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, y profesores de la facultad de Ciencias Sociales de tan prestigioso centro académico argentino. Todos resultaron ser como un faro de luz en la obscuridad.

A nivel personal, estoy inmensamente agradecido con Ana Maria Dueñas Romero, quien me mostró el sendero académico por el que debía enfocar mis inquietudes y pesquisas académicas; quien me impulsaba y levantaba el ánimo cuando pensaba desfallecer, ante las dificultades que hallaba, debidas a la carga de trabajo, y angustias que me agobiaban día a día. Ella fue mi tutora sustituta.

A sí mismo a los integrantes de mi familia, a quienes hurté parte del tiempo que debía compartir con ellos. De igual forma a la Secretaria de Educación del Distrito Especial de Bogotá, quien financió parte de los estudios doctorales, y a la Universidad Pedagógica Nacional, entidad que me descontó durante ocho semestres consecutivos el 50 por ciento de lo que debía pagar como matrícula, por ser docentes de cátedra de la Institución.

De cada una de estas personas, y de las publicaciones de los autores, y quienes aportaron sus testimonios orales he hurtado parte de su tiempo y saber. Sin la mente, las manos y las imponderables ayudas de todos estos amigos, la causa de este trabajo hubiese resultado perdida.

INTRODUCCIÓN

Los colombianos escucharon hablar por primera vez de la mina de oro La Colosa ubicada en Cajamarca Tolima a finales del año 2007. Año en que un boom económico resonaba desde México hasta la Patagonia en Argentina, debido a la extracción y exportación de bienes primarios como: hidrocarburos (gas y petróleo), metales minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc), productos agropecuarios (maíz, soja, trigo) y biocombustibles. Actividades primario extractivas con escaso valor agregado que han sido concesionadas por los gobiernos de la región de las últimas tres décadas a grandes corporaciones internacionales (Svampa & Viale, 2014).

Para el cumplimiento de esta lógica de acumulación capitalista, los países de la región, comenzaron a tramitar reformas legislativas con el fin de adecuar las políticas y leyes ambientales nacionales a las nuevas condiciones del extractivismo minero (Svampa & Antonelli, 2009). En Colombia esta política se materializó en el Código de Minas aprobado mediante la ley 685 del 2001. Norma en la que se estipulaba el procedimiento para conceder expeditas licencias y excepciones de impuestos a las compañías mineras y en la que se consideraba la explotación de los recursos naturales del subsuelo como base fundamental para el fortalecimiento económico del país.

Los afectados con la implementación de estas leyes en América Latina han sido los sectores populares. Gracias al conocimiento de las comunidades, adquirido en conversatorios y talleres con expertos sobre los impactos ambientales y sociales catastróficos para los territorios, y la vocación económica de los mismos; el uso indiscriminado del agua; los efectos a la biodiversidad, la salud humana, y el uso de cianuro y mercurio para la explotación aurífera, surgieron expresiones de descontento como: mítines, marchas, plantones, protestas, movilizaciones y demás acciones colectivas, de las que participaron campesinos, indígenas, estudiantes y demás sectores sociales que protestaban por las privatizaciones, la desigualdad social, y los problemas ambientales derivados de la actividad minera (Svampa & Antonelli; 2009; Giarracca & Tuebal, 2013, Navarro, 2015).

En Colombia, el anuncio del presidente Álvaro Uribe Vélez, sobre el descubrimiento del yacimiento realizado por la empresa surafricana Anglo Gold Ashanti (AGA), considerado como el tercero en importancia en Suramérica, tras el de Yanacocha en el Perú y Escondida en Chile⁴, resultó ser una buena noticia para los mineros. Pero de preocupación profunda para los habitantes de Ibagué (su capital departamental), Espinal, Coello, Rovira, San Luís, Flandes y la misma Cajamarca, poblaciones donde vive cerca del 70 por ciento de los habitantes del departamento, por las afectaciones que podrían llegar a sufrir la Reserva

⁴. “Presentan a la mina de oro la Colosa como dinamizadora de la economía”. En: *El Espectador*, agosto 29 del 2009.

Forestal Central (creada mediante la ley 2 de 1959), las fuentes hídricas que allí se originan, y el uso del suelo destinado a la agricultura y la ganadería.

La alarma entre los campesinos, amas de casa, comerciantes y demás vecinos de Cajamarca, impulsó a algunos de ellos a consultar y generar discusiones relacionadas con los efectos que ocasionarían en el territorio la exploración y explotación minera. Proceso al que se sumaron también estudiantes y profesores de la Universidad del Tolima (UT).

El propósito de esta alianza era buscar financiación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para traer expertos nacionales e internacionales a que realizaran conversatorios a la población sobre: la cantidad de agua requerida para explotar la mina, el impacto sobre la economía agrícola local y el ambiente, el grado de contaminación al que se verían sometidas las fuentes hídricas, etc. Lo prioritario para integrantes de organizaciones sociales como Ecotierra y docentes de la UT, era aprender de las experiencias de otros territorios del continente americano donde se habían implantado proyectos de extracción aurífera a cielo abierto, como el que se pretendía instalar en Cajamarca. Informarse para informar a las comunidades y empoderarse académica y técnicamente sobre los impactos ambientales y sociales catastróficos que ocasionaría la explotación de la mina La Colosa⁵.

En efecto, con la intención de nutrir el debate, Pax Christi Internacional patrocinó el viaje de cinco líderes tolimenses, entre los que había tres profesores de la UT, a que aprendieran de primera mano la experiencia vivida por la comunidad de Yanacocha en Perú. Lugar en el que desde el año 1992, la multinacional Newmont Mining, realizaba trabajos de explotación. Allí pudieron comprobar que el pueblo peruano donde operaba la mina seguía “sumido en el atraso y su condición era similar a la de antes que empezara la explotación”⁶, motivo por el cual regresaron convencidos que no querían para el territorio tolimense un absurdo ambiental similar.

Con el fin de impedir el inicio de la fase de explotación del proyecto megaminero, comenzaron a emerger desde el año 2008 procesos organizativos multisectoriales como Conciencia Campesina, Unión Campesina, entre otros. Estos primeros nucleamientos colectivos, sumados a los ya existentes, como la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra), y el Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), integraron entre el año 2010 y 2011, los primeros Comités Ambientales(CA) en el municipio de Cajamarca y la capital departamental Ibagué.

Durante los dos años siguientes se conformaron agrupamientos similares en 18 municipios más donde también se realizan actividades mineras, los cuales conformaron la Red de Comités Ambientales del Tolima (RCAT). Organización que se configuró con el fin de apoyar la lucha de resistencia de los nucleamientos colectivos que operan contra el

⁵. “Cajamarca, por siempre despensa Agrícola”. En: *Actualidad Tolimense*, marzo de 2018.

⁶. Revista Ambiental Catorce 6. 14 °C la temperatura promedio del planeta. Febrero - marzo del 2010. No 16.

proyecto de La Colosa en el territorio de Cajamarca y de evidenciar a nivel departamental los efectos ambientales del proyecto extractivo.

Las acciones colectivas de rechazo al emprendimiento minero que realizan estas organizaciones como: movilizaciones (como la Marcha Carnaval en Defensa de la Vida y el Territorio, la cual se celebra en los primeros días de junio de cada año en la ciudad de Ibagué), plantones, o bloqueo de vías, han servido para que las comunidades interioricen valores como la solidaridad, el compañerismo, la camaradería y la fraternidad.

Estos aprendizajes adquiridos de manera informal han servido para que integrantes de estos mismos procesos organizativos, acompañados siempre por estudiantes y docentes de la UT, realicen prácticas educativas formales como: campañas de sensibilización por medio de volantes que se distribuyen puerta a puerta en plazas de mercado, medios de transporte, o ciclo rutas. Efectúen conversatorios y talleres con expertos sobre la importancia de los páramos en los que nacen las cuencas hidrográficas que surten de agua los acueductos comunitarios de las fincas que componen cada vereda. Programen caminatas ecológicas y limpieza de caminos. Impulsen consultas populares contra la actividad minera y planifiquen diplomados semestrales sobre gestión ambiental tanto en la ciudad de Ibagué como el municipio de Cajamarca.

Estas acciones educativas, (como se demostrará en la investigación) derivaron en una toma de conciencia por parte de los integrantes y simpatizantes de los procesos organizativos acerca de los efectos inmediatos y de largo alcance, emanados de las prácticas depredatorias del proyecto aurífero.

Comprensión que medió en la configuración de nuevos saberes relacionados con las prácticas extractivas y los efectos sociales, culturales y ambientales que estos ocasionan en los lugares donde se instalan. Aprendizajes que mediaron en la reorientación de prácticas relacionadas con la actividad agrícola, el uso y cuidado del agua, las cuencas hidrográficas, la fauna y flora local. Así como en la reafirmación de la identidad y sentido de pertenencia con el lugar; y la recuperación de la memoria como elemento estratégico para el impulso de procesos de resistencia a fin de evitar una tragedia ambiental en el territorio.

Estas prácticas educativas que afectan la dimensión subjetiva de las comunidades no han sido exploradas aún por las ciencias sociales. En este sentido, la investigación está dirigida a entender si tales acciones han servido para prefigurar la existencia de una sociedad donde se respete el derecho a la autodeterminación de las comunidades locales, se evite el despojo de tierras y la depredación de bosques, biodiversidad, saberes tradicionales y otros bienes comunes.

Como afirma Torres (2007), estas acciones que contienen características constitutivas de nuevos sujetos sociales, son a su vez procesos de subjetivación individual y colectivo que

articulan lo educativo con experiencias asociativas, lo que se traduce en la generación a nivel individual de formas distintas de ver, de hacer, y de relacionarse.

En este orden de ideas el resultado de la investigación que acá se presenta estuvo orientado por la siguiente pregunta problémica: ¿Cómo han contribuido las prácticas educativas que se desarrollan en torno a las acciones colectivas y qué influencia han tenido en las transformaciones subjetivas de los que han participado de ellas en la población de Cajamarca Tolima?

Las preguntas específicas fueron las siguientes:

¿Cómo ha sido el proceso histórico de las organizaciones sociales y las acciones colectivas en el municipio de Cajamarca Tolima? ¿Por qué y cómo emergen los procesos de movilización que se han dado en torno a este emprendimiento minero? ¿Qué prácticas educativas informales han sido formativas para los habitantes de estos lugares? ¿Qué prácticas educativas intencionales o formales han generado las organizaciones? ¿De qué manera las prácticas educativas informales y formales de la acción colectiva han contribuido a forjar transformaciones subjetivas de los partícipes de ellas? ¿De qué forma han contribuido las acciones educativas en la transformación de la subjetividad a afianzar la cohesión y el sentido de las acciones colectivas?

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos específicos que orientaron la investigación fueron los siguientes:

1. Reconstruir el proceso histórico de las organizaciones sociales y las acciones colectivas en el municipio de Cajamarca Tolima.
2. Caracterizar los procesos de movilización que se han dado en torno al emprendimiento mineros de La mina La Colosa en Cajamarca Tolima.
3. Identificar las prácticas educativas informales que han sido formativas para los habitantes de estos lugares.
4. Identificar las prácticas educativas formales que han generado las organizaciones sociales.
5. Comprender cómo han contribuido las prácticas educativas a generar transformaciones subjetivas en los partícipes en las acciones colectivas.
6. Explicar cómo las transformaciones subjetivas han contribuido a afianzar la cohesión y el sentido de las acciones colectivas.

Para su desarrollo, se realizó una revisión bibliográfica relacionada con el extractivismo minero en Colombia e Iberoamérica y la correlación que establecen los distintos autores

consultados con los aspectos educativos de las acciones colectivas y las transformaciones subjetivas que estas generan en los que participan de ellas.

Esta información fue complementada con la realización de entrevistas a profundidad a miembros de las organizaciones sociales que operan en el sitio escogidos para adelantar la investigación. Dicha indagación estuvo orientada a compilar información relacionada con el origen de los nucleamientos colectivos, los significados que le atribuyen a las acciones colectivas como generadoras de aprendizajes, des aprendizajes, re aprendizajes, conocimientos, identidades, formas de vivir, de relacionarse y de afectarse, distintas a las habituales, y si estas acciones han producido transformaciones subjetivas.

A la información obtenida de esta forma se le sumó la realización de entrevistas semiestructuradas. Para su realización se efectuaron preguntas problematizadoras a integrantes de los procesos organizativos formuladas de manera escrita. Esto se hizo con el fin de obtener información relacionada con el establecimiento de relaciones recíprocas e interdependientes de tres categorías: acción colectiva, prácticas educativas y transformaciones subjetividades, o aspectos motivacionales que se derivan de la pertenencia a los procesos organizativos.

El resultado de la investigación se organizó en siete capítulos de la siguiente manera: el primero titulado Referentes Teóricos, Conceptuales y Metodológicos contiene un balance bibliográfico relacionado con el carácter educativo de los movimientos sociales, los estudios sobre los conflictos y luchas ambientales en América Latina, los referentes teóricos para el desarrollo de la investigación y la metodología empleada para la implementación de la misma.

El segundo capítulo denominado El Proyecto Minero de La Colosa, empieza haciendo una descripción de las características principales de la explotación minera a cielo abierto, continúa con una exposición sobre las especificidades de la mina La Colosa y los efectos ambientales que ocasionará la explotación de la misma en el territorio.

El capítulo tres, Procesos Organizativos Anti mineros de Cajamarca, presenta el contexto en que estos surgen, la articulación que han establecido entre ellos y los principios que orientan su actuación.

El cuarto capítulo, Procesos de Sensibilización y Movilización en torno al proyecto minero del mismo lugar, explica las acciones que realizan los integrantes de los nucleamientos colectivos con el fin de concienciar a los pobladores de Ibagué y demás municipalidades del resto del departamento sobre los destrozos que acarreará la explotación de la mina La Colosa, así como las características y enseñanzas que han derivado los lugareños de la llamada Marcha Carnaval por el Agua, la Vida y el Territorio que se realiza cada año en la ciudad de Ibagué.

El quinto capítulo, Prácticas Educativas Antimineras de las Organizaciones Sociales que operan en el lugar, describe las actividades educativas informales y formales, y hace un análisis de las dimensiones pedagógicas y políticas de las mismas.

El sexto capítulo, Transformaciones Subjetivas de los Integrantes de los Procesos Organizativos, explica la formación de subjetividades políticas que se han configurado en el lugar por la defensa del territorio, la movilización de consenso en contra del proyecto extractivo, y la formación de subjetividades cognitivas, prácticas e identitarias.

El capítulo siete, Cohesión y Sentido de las Acciones Colectivas, analiza los vínculos que han establecido las organizaciones sociales antimineras con la población de Cajamarca, la articulación con otras organizaciones y movimientos sociales del país donde también se realizan emprendimientos mineros, y la gestión que realizan sus integrantes a fin de obtener los recursos para financiar las acciones colectivas que programan.

Finalmente se exponen las conclusiones donde se hace un balance de la investigación de la labor que hacen las organizaciones sociales antimineras que operan en el territorio de Cajamarca y el significado de su lucha para defender el agua, la biodiversidad y la vida del lugar.

CAPITULO 1. ESTADO DEL ARTE Y REFERENTES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS

Como se explica en la introducción, las prácticas educativas que se desarrollan en torno a las acciones colectivas y la influencia que estas tienen en las transformaciones subjetivas de los integrantes de los procesos organizativos que se han configurado en Cajamarca Tolima contra el proyecto extractivo de La Colosa, liderado por la AGA, es el objetivo central de esta investigación. Aspectos que expliquen qué acciones son las que ponen en marcha las comunidades para defender el agua, la biodiversidad y el territorio y por qué se constituyen en escenarios de aprendizaje, intercambio de saberes, y transformaciones subjetivas.

En razón de ello y con el fin de analizar la pertinencia de la propuesta investigativa, a continuación, se presenta el balance bibliográfico relacionado con los estudios sobre el carácter educativo de los movimientos sociales; los distintos enfoques teóricos que se han empleado para analizar los conflictos y luchas socioambientales que han generado los emprendimientos mineros en América Latina; y el recorrido metodológico seguido para el desarrollo de la investigación. Acopio de estudios que dan cuenta del estado actual de los estudios sobre el tema analizado, así como de las formas de resistencia y acción colectiva que usan las comunidades para evitar el destrozo que ocasiona en los territorios las practicas mineras a gran escala y a cielo abierto.

1.1 Estudios sobre educación en movimientos sociales

El balance bibliográfico de esta propuesta investigativa se centró en dos campos de interés. El análisis de los estudios sobre los aspectos educativos de los movimientos sociales, y de los conflicto, movimientos y luchas socioambientales en Colombia y América Latina. A Continuación, se presenta lo encontrado en cada uno de estos aspectos.

Según Caldart (2000), considerar un movimiento social como sujeto educativo supone desbordar el rol tradicional de la escuela y el docente como encargados de la educación. Reflexión que lleva a entender que todos los espacios y acciones de las personas, como de los procesos organizativos son educativos; fin que garantiza la reproducción de sus objetivos de lucha, de los que se derivan principios, valores y vivencias que se cultivan en cada acción, de los que emerge la construcción de una identidad colectiva, y que constituye un aspecto básico de cualquier proceso educativo. En este sentido y debido a que la educación que ofrece el Estado a los niños no corresponde a las expectativas de los campesinos sin tierra del Brasil, Caldart (2000a), explica por qué los movimientos sociales se deben constituir en sujetos educativos.

La niñez y la juventud de los asentamientos ya viven o hasta nacen como herederos de las conquistas de dignidad. Pero no conseguirán mantener y reproducir estas conquistas, y tampoco honrarán el nombre propio Sin Tierra, si no heredan la identidad colectiva construida en el proceso de lucha: los

valores y principios de los luchadores del pueblo. Solo que valores y principios no se heredan sin el cultivo consciente, sin la intencionalidad pedagógica de quien los produce o de quien los escoge heredar (Caldart, 2000a: 1).

Por su parte, Zibechi, destaca el ambiente de fraternidad comunitario; la producción como aspecto central de la transformación de nuestro mundo; las formas de vida que emergen de estas prácticas cotidianas, y la autoeducación de sus miembros como criterios que hacen a los movimientos sociales sujetos educativo. Para este autor, las formas de vida cotidiana en los movimientos sociales, deberían estar impregnadas por valores y actitudes que permitan que las personas que los integran lleguen a ser sujetos creativos, para lo cual se debe

convertir cada espacio, cada instancia, cada acción, en experiencias y espacios pedagógicos, de crecimiento y aprendizaje colectivo. Convertir al movimiento en sujeto pedagógico implica poner en un lugar destacado la reflexión y la evaluación permanentes de todo lo que está sucediendo, abrirse como espacios de autorreflexión y, por lo tanto, darse tiempos “interiores” que naturalmente no coincide con los tiempos de los partidos y el Estado (Zibechi, 2007: 34).

José Bengoa (1988), analiza la educación para los movimientos sociales, desde los fundamentos de la educación popular. Desde el punto de vista de lo que denomina democracia fundamental, ésta educación debe servir para incentivar procesos de igualdad de oportunidades y distribución equitativa del ingreso. Desde la democracia sustantiva, los procesos de aprendizaje que se dan al interior de los movimientos sociales constituyen un reforzamiento de la sociedad civil, que contribuye a profundizar la libertad de los ciudadanos frente al Estado, constitución y reafirmación de diferencias culturales al interior de una sociedad, construcción de demandas, intereses, opiniones, programas, planteamientos y su expresión en acciones, movilizaciones y negociaciones con el resto de la sociedad civil y el Estado. Los movimientos sociales han sido siempre los grandes sistemas de aprendizaje y educación de las personas, sin lo cual no habría posibilidad de renovación de los líderes sociales (Bengoa, 2006).

En una perspectiva similar podemos ubicar a la brasilera Ghom (2008), para la cual, los movimientos sociales son definidos por las acciones sociopolíticas construidas por actores sociales colectivos pertenecientes a diferentes capas sociales, articuladas a escenarios de coyuntura socioeconómica y política de un país, creando a su vez un campo político y de fuerza social en la sociedad civil. Estos se estructuran a partir de situaciones de conflicto, litigios y disputas vivenciadas por el grupo en la sociedad, a través de las cuales se generan procesos sociopolíticos y culturales de carácter educativo; esto debido a que crean una identidad colectiva para el movimiento, a partir de intereses comunes compartidos.

Las coincidencias de sus miembros son fusionadas por principios de solidaridad, valores culturales y políticos compartidos por el grupo en espacios colectivos no institucionalizados. Los movimientos generan además una serie de innovaciones en las

esferas públicas y privada; “participan directa e indirectamente en la lucha política de un país, y contribuyen al desarrollo y transformación de la sociedad civil con agendas de actuación construidas alrededor de demandas socioeconómicas y político centrales que abarcan las problemáticas conflictivas donde actúan” (Pp. 439- 455).

Al igual que Bengoa (1988), Falero (2011), considera que recapacitar en los movimientos sociales en América Latina significa pensar el concepto desde la democracia en un sentido no eurocéntrico, radical y amplio, en el que la participación del tejido social, adquiere su rol clave. Significa pensar diferentes planos donde se expresa la tensión entre dinámicas de acumulación e interés colectivo, procesos de lucha que son en sí mismos procesos educativos.

En este mismo sentido, Rigal (2008) establece que en la práctica educativa de los movimientos sociales se deben distinguir dimensiones como una conciencia adquirida, resultado de acciones colectivas emprendidas por los movimientos sociales para el logro de sus propósitos; una cultura política, resultado de experiencias del pasado en contra de la represión y negación de derechos, lo cual favorece la lectura del presente; por último, una voluntad de reapropiación de espacios. Estos tres factores constituyen un aprendizaje que contribuye al desarrollo de conciencia de ciudadanía en el sentido del uso de la cosa pública.

Se destacan también los aportes de Mejía (1996 y 2013), según el cual, el carácter educativo de los movimientos sociales se debe a que gracias a los procesos formativos que vivencian los actores al interior de las organizaciones se pueden unificar objetivos de lucha e intenciones de transformar la sociedad.

De utilidad similar es el trabajo de Barragán, Mendoza & Torres (2006), en el que se explica que lo educativo de las organizaciones se asocia a las intencionalidades políticas, valores y visiones de futuro, factores que les permite a estas, formar sujetos que contribuyan a movilizar apuestas políticas para transformar la sociedad. Torres (2009) siguiendo a Melucci (2010), concluye que lo educativo de los movimientos sociales está referido a que estos se configuran como sistemas debido a que garantizan cierta unidad, y continuidad en el tiempo, y son acción, debido a que tienen como objetivos creencias y decisiones que construyen identidades, solidaridades y sentidos de pertenencia comunes. Ello ha permitido que tengan incidencia cultural y política, e incorporación de valores sobre el conjunto social, modificando actitudes, representaciones y hábitos sociales.

El mismo Torres en el escrito inédito, titulado: *lo pedagógico en experiencias educativas de movimientos sociales latinoamericanos*⁷, concluye que estas prácticas se ubican intencionalmente en los bordes del sistema educativo; propugnan por el ejercicio de la

⁷ Este trabajo está dirigido a analizar de las prácticas educativas generadas en la Universidad Intercultural Amawtay Wasi de Ecuador (CONAIE); los Bachilleres Populares en Argentina; la Universidad Intercultural Indígena del Cauca (UAIIN), y la Escuela Nacional de Formación (ENFOC) en el Brasil).

autonomía; están fundamentadas en el propósito de cuestionar el papel reproductor del orden imperante; cuestionan los valores y conocimientos hegemónicos; forman sujetos con vocación de transformación social y cultural; y asumen formas de organización y de gestión educativa, radicalmente diferentes a las predominantes.

Para Retamozo (2009), analizar la relación entre acción colectiva e intersubjetividad, abordaje realizable a través de la comprensión de los aspectos identitarios, culturales, las demandas y la construcción de antagonismos; factores que articulan los aspectos educativos de los movimientos sociales; requiere de la intervención interdisciplinar o de un diálogo de los diversos enfoques que se han utilizado para estudiar la movilización social y el comportamiento colectivo. “No se trata de sumar enfoques y categorías, sino de reconstruir perspectivas pertinentes de acuerdo al problema de investigación” (p. 116).

Esto con el fin de incorporar al análisis de los movimientos sociales: los procesos de conformación de los sujetos sociales, relacionados con aspectos estructurales y estructurantes, ahondar en la distinción analítica entre subjetividades, sujetos, movimientos, actores, y organizaciones, e incrementar así la capacidad comprensiva de los fenómenos histórico-políticos, así como realizar una revisión conceptual de categorías como voluntad colectiva, deseo, demanda y orden social.

En relación también con lo educativos de los movimientos sociales, Gluz (2013) explica que la participación de los individuos en una acción colectiva depende de la integración de estos a la construcción de una identidad, la cual se encuentra determinada por el grado de exposición de estos a unos recursos cognitivos y relacionales que permiten analizar y juzgar una situación determinada.

En esta misma perspectiva analítica, la concepción de los escenarios cotidianos de lucha y organización como propiamente educativos, son analizados por Poupeau (2007) desde el concepto de capital militante, el cual alude a la asimilación por parte de los individuos que hacen parte de un movimiento social, de técnicas, modos de actuación y saberes que permiten hablar en público, diseñar panfletos, recurrir a la legislación, etc. Habilidades que incentivan la participación en una acción colectiva y se constituyen en aprendizajes que se adquieren en el propio ejercicio militante, y crean alternativas formativas racionales que permiten fortalecer la subjetividad política.

Para Gluz (2013), el capital militante, es un “saber hacer” específico que sirve para ser instrumentado en la arena política, y expresa la aparición de una nueva forma de militancia política, dependiente del lazo que se tenga con el territorio y la autonomía, distinta a formas tradicionales de legitimidad y transmisión de saberes ligadas con los sindicatos o partidos políticos. Expresa también la capacidad que adquieren sectores desposeídos y marginados para defender un compromiso, orientarse y acceder al mundo político. Esto debido a que: “las condiciones objetivas generan condiciones para, pero no explican las dimensiones

subjetivas de la acción social que son centrales y se construyen en el proceso histórico de lucha por nuevas conquistas o de resistencia al retroceso de las adquiridas” (p.28).

Por su parte, Melucci (2010) considera que hay dos polos inseparables de la acción colectiva, denominados latencia y visibilidad, referido a temas que subyacen y hacen visibles las movilizaciones de organizaciones sociales. Según este autor, las acciones colectivas producen efectos mensurables en tres sectores, que deben ser incorporados al análisis desde la perspectiva educativa tales como: A. La modernización y el cambio institucional, mediante reformas políticas, redefinición de culturas y prácticas organizativas que impulsan. B. Selección de nuevas élites en agrupaciones políticas principalmente de izquierda C. Innovaciones culturales relacionadas con cambios de comportamiento y relaciones sociales en la vida cotidiana y el mercado, transformaciones en el lenguaje, las relaciones sexuales y efectivas, así como en los hábitos alimentarios y la vestimenta.

Estas experiencias educativas de los movimientos sociales han sido desarrolladas por el Movimiento Sin Tierra (MST) en Brasil, y por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los cuales se han inspirado en los principios de la educación popular con el fin de brindar una educación integral que propenda por “la descolonización del saber, ocupar el latifundio del conocimiento como condición para la emancipación no solo cultural sino para construir otros modos de conocimiento que disputen con el modelo productivo capitalista” (Gluz, 2013: 42), y que forme sujetos capaces de transformar la realidad que los oprime, articule la escuela, con la comunidad, el aprendizaje, lo manual y lo intelectual, así como el fomento de la solidaridad, el compañerismo, el trabajo colectivo, la solidaridad.

Los estudios sobre lo educativo de las acciones colectivas y los movimientos sociales han sido realizadas desde perspectivas distintas: como Ambientes de fraternidad comunitario; ámbitos desde los que se vivencian principios de democracia fundamental no eurocéntrica, espacios en los que se incentivan procesos de igualdad; acciones sociopolíticas construidas por los actores sociales que participan en ellos; ámbitos que incentivan la conciencia, las intencionalidades políticas, los valores y las visiones de futuro; o realizaciones a través de las cuales se incentiva la comprensión de procesos identitarios y culturales.

En suma, esta gama de trabajos relacionados con las concepciones, contenidos y prácticas educativas al interior de los movimientos sociales y su contribución a la gestación de nuevos saberes o aprendizajes no se ha visto reflejada en investigaciones que estudien el carácter educativo de los movimientos opositores al extractivismo minero; y que incorporen al análisis: la forma cómo los miembros de estas colectividades transforman subjetividades, imaginarios, simbolismos e identidades.

Estudios que expliquen cómo estos movimientos se constituyen en campos de autoafirmación mediante los cuales las comunidades locales han comenzado a imaginar un presente y un futuro diferente. Pueden ser catalogados como procesos de prefiguración o de transformaciones subjetivas, así como nuevos escenarios educativos, a través de los cuales

se erige el antagonismo contra el Estado y el capital, responsables de la violencia, la desposesión y la crisis ambiental que afecta a América Latina, de los que no se han ocupado los estudios sobre los movimientos que le hacen oposición al extractivismo.

Las experiencias organizativas que se analizan en esta investigación, están enfocadas al análisis de estas acciones colectivas. Las formas de protesta realizadas permanentemente durante la última década, organizadas y dirigidas por Comités de Defensa del agua, el territorio y los bienes comunes en el departamento del Tolima, y que se han expandido al ámbito municipal, regional, en contra de la política extractiva del Gobierno Nacional, el cual ha negado la posibilidad para que las comunidades que habitan estos espacios puedan opinar y decidir sobre estas pretensiones.

1.2 Conflictos, movimientos y luchas socioambientales

Los que se han acercado al estudio de los movimientos sociales en América Latina coinciden en afirmar que el tema de la democracia, la constitución de nuevas identidades, sujetos políticos y el fortalecimiento de la sociedad civil, se han convertido en la prioridad y eje articular de las investigaciones (Adel, 2003; Archila, 2003). Una de las problemáticas que más ha inspirado a expertos de las ciencias sociales durante los últimos años es adelantar indagaciones sobre la emergencia de conflictos ambientales y la crisis ecológica originada en la utilización y explotación indiscriminada de bienes esenciales como el agua o los bosques, así como los efectos depredadores y contaminantes de desechos generados por la economía extractiva y la minería a cielo abierto.

Desde la perspectiva socioeconómica y ambiental hay una gran cantidad de estudios generales en Colombia (Ulloa, 2004, Ulloa & Göbel, 2014; Tobasura 2006; Toro et. al., 2012; Ponce, 2012; Suárez (2013; Garay, 2012), así como investigaciones elaboradas desde la perspectiva local (Ramírez, 2012; Cuervo, 2012; Sandoval, 2012, Flórez, 2012; Sánchez, 2012). Son trabajos que analizan elementos políticos, legales, simbólicos conceptuales, identitarios, sociales territoriales y económicos del sector extractivo. En ellos se ponen de relieve las tensiones y fricciones que se generan por el territorio, el reconocimiento, la participación, los costos y los riesgos para la salud y el medio ambiente tanto actuales como futuros que genera la explotación minera.

Esta redefinición del uso y apropiación de territorios para el acceso a estos recursos, llevó a la emergencia de movimientos sociales, los cuales tuvieron que levantarse contra los desplazamientos y las nuevas formas de recolonización. Su surgimiento en Latinoamérica “solo se hace comprensible en el marco del desarrollo de un modelo capitalista extractivo que resitúa a nuestros países en un nuevo modo de “periferia” (Gluz, 2013: 34).

Esta situación que afecta a comunidades indígenas y campesinas de extensas regiones del territorio latinoamericano, es leída por algunos como síntoma de una profunda crisis civilizatoria y sin precedentes, generada por la transformación y reconfiguración sufrida por

el capitalismo neoliberal durante los últimos cuarenta años (Toledo, s/f; Vega, 2009 y Echeverría, 2010).

Una de las formas de acercamiento a la comprensión de estas luchas es la concepción de estos movimientos sociales como resultado de la acumulación por desposesión, o continuidad de rasgos de la geografía histórica del capitalismo como “la mercantilización y privatización de la tierra y expulsión por fuerza de poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derechos de propiedad (comunal, colectiva y estatal, etc.) en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del acceso a bienes comunales; la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de bienes incluidos los recursos naturales”(Harvey, 2003:116).

La lógica que guía el modelo de la megaminería a cielo abierto y que obedece a una forma de racionalidad económica que busca aumentar constantemente la ganancia, considera las condiciones ecológicas como una externalidad, y no se responsabiliza por el daño ocasionado a la actividad productiva; ve los bienes comunes como recursos naturales susceptibles de ser valorizados económicamente, de los que se pretende extraer ganancias lo más rápidamente posible, para lo cual cuenta con el aval del Estado, leyes a favor y aparatos represivos del estado, todo lo cual garantiza el cómodo desenvolvimiento productivo.

Consecuencia de estos proyectos ejecutados por grandes multinacionales en el contexto del capitalismo neoliberal es la generación de movilizaciones y protestas de nuevos actores colectivos como indígenas y campesinos, adelantadas en el escenario social y político latinoamericano, así como la aparición de una vasta bibliografía que enfoca sus análisis desde la perspectiva analítica de la acumulación por desposesión (Navarro, 2011, 2015; Dimitriu y Galafassi, 2004; Galafassi, 2009, 2014; Borón, 2005; Vega, 2006; Lora, 2006; Algranati 2012).

Son trabajos que consideran que la dimensión central que atraviesa a los movimientos que se han erigido contra la minería a cielo abierto es la multiescalaridad (Sassen, 2007) del conflicto, el cual tiene lugar en el marco de un entramado complejo en el cual se encuentran involucrados actores sociales, económicos y políticos del orden local, regional, estatal y global.

En la dinámica multiescalar, “lo global” y “lo local” se presenta como un proceso en el que se cristalizan, por un lado, alianzas entre empresas transnacionales y Estados, que promueven un determinado modelo de desarrollo y, por otro lado, resistencias de las comunidades locales que no comparten tal modelo ni los estilos de vida que éste impone (Svampa, Bottaro y Sola, 2009)

Desde la misma perspectiva analítica de la acumulación por desposesión, el Estado, juega un papel interventor distinto al que le correspondía durante la vigencia del modelo de estado benefactor. Este tipo de intervención denominado por De Sousa Santos (2007) como Estado metaregulador, consiste en la emergencia de formas de gobierno indirectos en el que el Estado es el responsable de crear espacios para la legitimidad de las operaciones mineras. Otorgándole a las multinacionales el control sobre los recursos vitales esenciales para las personas, sin estar sometidos al ningún tipo de responsabilidad ante la sociedad y sin importarles si estos recursos son el agua, la energía, las semillas, la seguridad o la salud.

La expansión de la minería a América Latina se ha hecho con la idea de que existen territorios vacíos o socialmente vaciables, con el fin de poner bajo control de las grandes empresas una porción de bienes naturales presentes en ellos (Svampa, Bottaro y Sola, 2009), bajo el supuesto que estos son aislados, empobrecidos, caracterizados por una escasa densidad poblacional y por ende carentes de artefactos sociales y económicos valiosos para el capital; esta visión aparece asociada al carácter de los territorios en los cuales tiende a implantarse megaproyectos de explotación de oro a cielo abierto.

En consecuencia, las transformaciones operadas en la dimensión espacial y el ordenamiento social latinoamericanos, así como la redefinición del orden político territorial también ha sido tema de reflexión y análisis por expertos de las ciencias sociales en países como Argentina, Perú, México, Ecuador, Brasil, entre otros, donde opera esta actividad extractiva (Jiménez & Novoa, 2014; Machado, 2009 y 2012; Svampa, 2012; Tischler & Navarro, 2012; Pineda, 2012; Arana, 2011; Tabra, 2011; Svampa, Bottaro & Sola, 2009; Sánchez, 2010; Acosta et. al., 2014). Son investigaciones que discurren sus análisis desde una perspectiva histórica, sociológica y económica y consideran que el orden espacial en un momento histórico determinado, expresa la correlación de fuerzas presentes en la sociedad y se construye tanto desde la práctica de dominación, como de la resistencia.

Desde la perspectiva de los efectos que la minería a cielo abierto genera en el territorio, también se han realizado investigaciones para los territorios de Marmato en Caldas y La Colosa en el Tolima (Ramírez, 2012; Guerrero, 2012; Méndez, 2013; Sánchez, 2013, Garay, 2013).

Según esta visión, el territorio es comprendido como un recurso económico generador de riqueza, en el que habitan campesinos e indígenas salvajes, incapaces de impulsar una sostenibilidad económica y ambiental del mismo; debido a lo cual se generan planes y maniobras destinadas a ganar consenso, legalizar formas de enriquecerse, lograr obediencia de sectores populares, la complicidad de las clases dirigentes, así como publicitar sus objetivos como si fueran idénticos a los de la sociedad y desacreditar o asesinar a los opositores (Dimitriu & Galafassi, 2007; Gilly & Roux, 2009).

En consecuencia, las comunidades campesinas e indígenas, para las cuales el territorio es un espacio donde se adquiere materialidad, identidad cultural e histórica, factores

determinantes del proyecto de vida, son desplazadas, sus riquezas minimizadas, arrasados y aniquilados sus territorios con el fin de ser incorporados y esculpidos bajo la óptica de la racionalidad económica hegemónica.

Los efectos ambientales de estas prácticas como el despojo de tierras, aguas, bosques, biodiversidad, saberes tradicionales y otras formas depredadoras generadas por el extractivismo en general, así como la conformación de acciones colectivas y movimientos de resistencia en los países latinoamericanos donde se practica la actividad minera, también han sido analizados por expertos desde la perspectiva del ecologismo o ambientalismo popular, ambientalismo pobre, o justicia ambiental.

Según Martínez (2004 y 2012), representante principal de esta tendencia investigativa el ecologismo o ambientalismo popular se define como una práctica de lucha de sectores populares, tanto urbanos y rurales que resguardan los recursos naturales de la explotación y mercantilización indiscriminada, valoran la biodiversidad y propugnan por un uso razonable de los flujos de energía y bienes que provee la naturaleza.

Otros trabajos investigativos realizados en América Latina desde esta perspectiva (Negro, 2002; Hidalgo, 2003; Prada, 2005; Onofrio & Zangaro 2012; Espacio, Chico Méndez, 2012^a y 2012^b; Malerba, 2014; Svampa & Sola, 2010; Marín, 2009, Navarro & Pineda, 2011, Navarro, 2015), se han interesado por estudiar la forma como se estructuran lazos comunitarios y organizaciones sociales de carácter local que ponen en marcha mecanismos de democracia directa como asambleas, consultas populares, recursos de amparo, peticiones legislativas así como acciones directas como bloqueos de vías con el objeto de defender sus territorios de los efectos del extractivismo.

En Colombia, los estudios relacionados con las zonas de exploración y explotación minera a cielo abierto que se han realizado desde esta perspectiva analítica es también amplio (Sabogal, 2013; Martínez, 2009 Sandoval, 2012; Salcedo & Francia, 2012; Anaya & Almendras, 2012; García, 2012; Flórez, 2012; Prada, 2012, Garay, 2013).

Otro acercamiento a la comprensión de las acciones colectivas que se oponen a la actividad minera a cielo abierto en Colombia y América Latina, es el que designa estas luchas como conflictos socioambientales. Al igual que la perspectiva analítica anterior, estas disputas emanan de la ruptura: ambiente, sociedad y cultura (Navarro & Pineda, 2011). Tienen como propósito combatir la mercantilización y desposesión por parte de la clase dirigente y las grandes corporaciones mineras, de bienes comunes básicos para la reproducción de la vida: ya sea la tierra, el agua, los servicios, el trabajo o cualquier forma de ingreso (Linsalata & Navarro, 2014; Navarro, 2015).

Son conflictos concebidos también como parte de un movimiento global de ecologismo popular o de justicia ambiental, surgido de conflictos sociales derivados de la implementación del modelo extractivo en América Latina; fenómeno que causa efectos en

el medio ambiente como los nombrados anteriormente (Martínez, 2009 y 2012). Son movimientos de subsistencia que se conforman con el objetivo de defender los bienes comunes expropiados por compañías multinacionales con la anuencia de los distintos gobiernos nacionales (Gilly & Roux, 2009; Navarro & Pineda, 2011; Navarro, 2015).

Son trabajos que establecen una relación entre naturaleza, sociedad y cultura y que surgen generalmente como un esfuerzo en el que grupos comunitarios integrados por campesinos, indígenas y otros sectores sociales afectados por la expropiación de los bienes comunes (Negro, 2002; Prada, 2005; Gomes & Pinassi, 2012; Onofrio & Zangaro, 2012). Colectivos que se conforman como “espacios de deliberación, de pensamiento colectivo, de circulación de información y toma de decisiones...para construir acuerdos, soluciones y decisiones que ayuden a involucrar a todos los afectados” (Navarro & Pineda, 2011: 11). Agrupaciones que funcionan de manera horizontal, a través de dispositivos de democracia directa como asambleas, juntas locales y talleres (Svampa & Sola, 2010 Svampa, Bottaro & Sola, 2009; Marín, 2009).

Estas acciones colectivas permeadas por una racionalidad productiva no mercantilizada de la naturaleza, tienen como propósito defender los sentidos existenciales de las comunidades, sus procesos productivos y estilos de vida (Leff, 1986 y 2004). Prácticas en las que “la propia gente que lucha va adquiriendo aprendizajes de lo técnico, que pueden argumentar y demostrar frente a los expertos de los Estados y empresas. Son estrategias autodidactas aprendidas en la lucha, nuevos saberes que podríamos llamar contra hegemónicos que tienen que ver con el autoaprendizaje y las luchas”⁸.

Debido a lo anterior es que para la mexicana Navarro⁹, los conflictos socioambientales “son luchas en las que el “no a la mina” se vuelve un eje articulador que llega a cohesionar a la gente más allá de sus diferencias políticas, religiosas y personales y en las que los involucrados en ellas se dicen unos a otros: “si no damos esta batalla juntos entonces nos va a ir muy mal. Hay que estar juntos para que a todos nos vaya bien”. Este mismo punto de vista es explicado por el argentino Marín (2009) de la siguiente forma:

El “no a la mina” se constituye en consigna de lucha colectiva de fuerte carácter migratorio, expresivo e inclusivo, pero es también la construcción de una identidad subjetiva e intersubjetiva (“son sujetos diciendo no”) y de una formación discursiva que interpela al dispositivo hegemónico y la implementación de este modelo extractivo-exportador en esta disputa por el desarrollo...A la consigna de “no a la mina”, le sigue la denuncia “contra el saqueo y la contaminación” (p.185).

⁸. Navarro, Mina Lorena Navarro. “Luchas socioambientales y neoextractivismo”. En: https://www.youtube.com/results?search_query=luchas+socioambientales. Fecha de acceso, diciembre 30 de 2015

⁹. *Ibíd.*

Para Svampa & Viale (2014), estas luchas socioambientales han dado lugar a lo que denominan giro ecoterritorial de las luchas el cual definen como un lenguaje común o marcos comunitarios de acción relacionados con la defensa de los territorios y los bienes comunes, la justicia ambiental, los derechos de la naturaleza, el buen vivir, la soberanía, los derechos humanos, la democratización de las decisiones, y el “derecho de los pueblos a decir “No” frente a proyectos que afectan fuertemente las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y comprometen el porvenir de las futuras generaciones”(p. 35). Estos elementos de articulación de las luchas, que involucra principalmente a comunidades indígenas, campesinas y sectores urbanos lo denomina por Leff (1996) “ambientalización de las luchas”, lo que ha dado lugar al surgimiento de un pensamiento ambiental en América Latina.

Una tendencia menos crítica del extractivismo y que podemos denominar de institucionalista, o incluso celebratoria del aprovechamiento de las “ventajas comparativas” y que forman parte del debate político académico acerca de esta problemática en América Latina está representada por Anthony Bebbington (2009). Según este autor, las luchas contra el extractivismo desarrolladas en el Perú durante las últimas décadas las han realizado ambientalistas que clasifica en categorías como: conservacionistas, nacionalistas populistas, defensa de las formas de vida o ambientalismo popular, justicia ambiental y ecologismo profundo. Las tres primeras categorías buscan resarcimientos económicos de las compañías multinacionales por los efectos negativos que causan. Las dos últimas rechazan salidas negociadas al conflicto por la vía de la compensación. Estos factores de conflicto deben servir a los gobernantes para incentivar o imaginar nuevas institucionalidades o la utilización del mismo para promover debates que ayuden a definir una sociedad más democrática.

En resumen, la revisión bibliográfica sobre el extractivismo en América Latina se agrupa en tendencias analíticas como: crisis civilizatoria, acumulación por desposesión, el ecologismo o ambientalismo popular, conflictos socioambientales, movimientos de reapropiación o resistencia y luchas por lo común, giro ecoterritorial, y posturas institucionalistas. Enfoques que se han usado para la realización de investigaciones que permitan entender los efectos socioeconómicos que ha producido la implementación en los países latinoamericanos del modelo extractivistas en general.

Lo educativo en estas investigaciones es tratado de manera implícita y marginal. No se han realizado aún estudios que expliquen por qué las acciones que ponen en marcha las comunidades afectadas para defender el agua, la biodiversidad y el ambiente de los territorios mineros, se constituyen en escenarios de aprendizaje, intercambio de saberes y transformaciones subjetivas. Factores de los que depende la posibilidad de cuestionar y detener las políticas gubernamentales que implementan el modelo extractivo.

La revisión bibliográfica permitió identificar únicamente cuatro estudios que establecen vínculos entre: la acción colectiva, procesos educativos relacionados con el surgimiento de

cualidades subjetivas, como la configuración de conocimientos alternativos que trascienden el ámbito individual, y que permiten establecer vínculos de identidad, pertenencia, así como el desarrollo de una capacidad movilizadora (Torres, 2009; Svampa, 2012; Gluz, 2013; Navarro, 2015).

Para Torres (2009) lo educativo de los procesos organizativos se configura en creencias y decisiones que construyen identidades, solidaridades y sentidos de pertenencia comunes. Valores que tienen incidencia cultural y política, en el conjunto social, y contribuyen a modificar actitudes, representaciones y hábitos sociales. Para Svampa (2012), los movimientos sociales que luchan contra proyectos extractivos, se enmarcan en lo que denomina “giro ecoterritorial” y se caracterizan por definir lenguajes comunes, marcos comunitarios de acción, justicia ambiental, defensa de la naturaleza, el buen vivir, la soberanía, los derechos humanos, y la democratización de decisiones. En sentido similar se refiere Navarro (2015), quien alude a la estructuración de lazos comunitarios, mecanismos democráticos como: asambleas, consultas populares, recursos de amparo, peticiones legislativas y acciones directas con el fin de defender los territorios de los efectos de los emprendimientos mineros. Por su parte, Gluz (2013) argumenta que las acciones colectivas que programan los colectivos sociales se constituyen en una nueva forma de hacer política, lo cual genera recursos cognitivos, relacionales e identitarios en las comunidades.

En suma, los procesos organizativos en los que las comunidades comienzan a rechazar la usurpación de los bienes comunes, así como a valorar, imaginar y decidir, sobre la forma como desean vivir su presente y su futuro, permanece como un campo inexplorado por la investigación social. Se consideran como educativos debido a que habilitan nuevos sentidos, a través de los cuales se despliegan dimensiones utópicas, y nuevos valores para enfrentar la vida. Componentes que operan a su vez como dispositivos que permiten transformaciones subjetivas de orden individual y colectivo.

Indagaciones de este carácter contribuyen a comprender si las prácticas educativas que se desarrollan en torno a las acciones colectivas y que realizan las organizaciones sociales que operan en el territorio escogido para adelantar la investigación propuesta se generan transformaciones subjetivas. Estos aspectos novedosos, aún no explorados son los que se incorporarán en esta investigación.

1.3 Referentes teóricos

Dado que el propósito central del que se ocupa esta investigación es el análisis de las prácticas educativas que se desarrollan en torno a las acciones colectivas en el emprendimiento minero La Colosa en Cajamarca Tolima y la influencia que estas tienen en las transformaciones subjetivas, en esta parte se hará una exposición de lo que se entiende por acción colectiva, procesos organizativos, transformaciones subjetivas, procesos educativos y prácticas educativas.

Acción colectiva

Esta es definida como una gestión colectiva organizada por un actor social que lucha “contra un adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta” (Touraine, 2006: 256). Según él, un movimiento social, es una forma de acción colectiva orientada a la implementación de valores culturales centrales contra los intereses e influencias de un enemigo definido en términos de relaciones de poder. Se podría decir que un movimiento social es una combinación de acciones colectivas de carácter participativo en las que se dan procesos culturales y educativos (Touraine, 1992).

Melucci, quien critica el carácter historicista de este enfoque, define la acción colectiva como un conjunto de individuos que se unen para actuar unitariamente por alguna razón o persiguiendo un fin. Considera que estas inducen la modernización y los cambios institucionales, los cuales son suscitados por reformas políticas, redefiniciones culturales y prácticas organizativas; generan sucesos éliticos, gracias a la emergencia de nuevos aprendizajes, modelos de comportamiento y relaciones sociales en la vida cotidiana; y modifican el funcionamiento del orden social mediante cambios en el lenguaje, los hábitos sexuales, las relaciones efectivas, los hábitos alimenticios y la vestimenta (Melucci, 2010).

Explica también que los movimientos sociales son también un tipo de acción colectiva que abarca dimensiones como: la solidaridad o la capacidad de los actores de reconocerse a sí mismos y ser reconocidos como miembros de un sistema de relaciones sociales; surgen de un conflicto o situación en la cual dos adversarios se encuentran en oposición sobre un objeto común disputado por ambos que los convierte en adversarios; y se derivan de una “ruptura límites de compatibilidad de un sistema al que los actores involucrados se refieren” (Melucci, 2010:46).

En perspectiva similar, Torres considera que los movimientos sociales son una acción colectiva

más o menos permanente orientada a enfrentar opresiones, desigualdades, exclusiones, protagonizadas por sectores amplios de población, quienes a través de la organización y movilización en torno a demandas y sus luchas, van elaborando un sistema de creencias y una identidad colectiva, a la vez que van generando propuestas y proyectos que modifican estructuras del sistema social (Torres, 2007:68)

Este tipo acción colectiva se distingue de los tumultos, asonadas, marchas y otras formas de protesta y descontento social contra la dominación o la exclusión, debido a que estas últimas no buscan transgredir los límites del sistema ni alcanzan a tener la fuerza o la magnitud para lograrlo. Para Torres, todo movimiento social es una acción colectiva, pero no toda acción colectiva se constituye en movimiento social. “Solo cuando las acciones colectivas tratan de transformar las relaciones de dominación social ejercida sobre los principales recursos sociales producción, conocimiento, reglas éticas, cabe la expresión movimiento social” (Torres, 2007: 69).

Siguiendo a Melucci (2010), la presente investigación se asume la categoría de acción colectiva como una Construcción Social Organizada (CSO) denominación en la que se incluyen todas aquellas iniciativas asociativas permanentes originadas en los territorios en torno a los emprendimientos mineros. Indagación que permitió saber si las acciones colectivas que se han emprendido en estos territorios, han logrado o no generar alianzas y articulaciones de los sujetos sociales. Asimismo, si los sectores sociales interesados en la ejecución de este tipo de iniciativas extractivas han logrado dividir los tejidos sociales comunitarios.

Acción colectiva y subjetividad

Retomado lo anterior, se considera que Melucci (2010) y Torres (2009) coinciden en señalar que el sistema de creencias y la identidad colectiva en torno a un problema constituyen categorías analítico interpretativas claves para leer, comprender los diferentes comportamientos colectivos, mediar en la relación entre condiciones estructurantes y acción colectiva, así como un aporte significativo para el análisis de las transformaciones subjetivas.

Las creencias, unidas a objetivos, decisiones e intercambios “todos ellos operando en un campo sistémico”, permite definir a los movimientos sociales como “sistemas de acción”, que conectan orientaciones, propósitos y comportamientos plurales. Lo que implica “dejar de tratarlos como un fenómeno empírico y objetivo”, y descubrir en el análisis de las acciones colectivas aspectos de orden subjetivo como: creencias, valores, visiones de futuro, decisiones, negociaciones e intercambios que influyen en el establecimiento de una identidad colectiva; así como la incidencia que tienen las orientaciones de los individuos y grupos para su ocurrencia (Melucci, 2010).

Los procesos organizativos y educativos en los que las comunidades comienzan a rechazar la usurpación de los bienes comunes, así como a valorar, imaginar y decidir, sobre la forma como desean vivir su presente y su futuro permanece como un campo inexplorado por la investigación social. Se consideran como educativos debido a que habilitan nuevos sentidos, a través de los cuales se despliegan dimensiones utópicas, nuevos valores para enfrentar la vida y operan como dispositivos que permiten transformaciones subjetivas individual y colectivas.

En las transformaciones subjetivas se involucran aspectos relacionados con la influencia de lo individual en lo colectivo y viceversa:

la subjetividad social no sólo se ha dado en función de la clase social, pues en diversas épocas y especialmente la actual... se han conformado actores sociales en torno a otras dimensiones constitutivas de la identidad, como lo territorial, lo étnico, lo genérico o las prácticas culturales. Así mismo, los procesos de reconocimiento y representación no se dan sólo por medio de la conciencia y la

razón, sino a través de las más diversas mediaciones y expresiones culturales simbólicas, no discursivas, como los imaginarios colectivos, las representaciones sociales, las creencias y los mitos (Torres, 2006: 98).

Estas definiciones analíticas tendientes a comprender la acción colectiva y la relación de esta con aspectos de orden subjetivo fueron incorporadas también por MacAdam, McCarthy &

Zald (1999). Según ellos, el análisis debe enfocarse a entender las condiciones que hacen posible transformar el descontento en movilización, así como a “comprender los factores y procesos que configuran un movimiento dado, saber cómo surge y cómo evoluciona” (p. 29). Para esto sugieren el estudio del entramado de tres factores que inciden en su surgimiento: 1. La “estructura de oportunidades políticas” o la importancia que reviste el sistema político a la hora de hablar de acciones colectivas; 2. Las formas de organización formales e informales a disposición de los contestatarios, lo cual tiene que ver entre otras cosas con: los patrones históricos de movilización, la relación existente entre forma organizativa y tipo de movimiento y la fuerza que pueden estos ejercer en las estructuras estatales y la cultura organizativa de un país, y 3. Los procesos enmarcadores, referidos a los sentimientos e ideas que emergen en integrantes de colectivos sociales respecto a situaciones de agravio, la organización de acciones colectivas, así como la contribución de las mismas a solucionar las causas que han originado las ofensas o los prejuicios. En otras palabras, la categoría de procesos enmarcadores describe “los esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva” (p. 27). Y aunque ello no garantiza necesariamente la cristalización de una organización formal, de ella se extrae la fuerza como motor de cambio social.

Dicho de otra forma: para comprender la acción colectiva es primordial entender los sentimientos, agravios, emociones, ideas, valores, significados compartidos o conceptos que los sujetos construyen a fin de interpretar, definir y valorar críticamente la realidad, y la creencia en que mediante ella se puede contribuir a su solución.

Estos aspectos sociales relacionados con proceso de transformación de subjetividades comenzaron a ser incorporados como objeto de estudio por parte de científicos sociales a partir de la década de los ochenta. La nueva perspectiva de análisis tuvo en cuenta que no necesariamente estos movimientos estaban relacionados con cálculos racionales ni con formas de organización y movilización estricta y estratégicamente pensadas. Obedecían más bien a vehementes despliegues pasionales, anhelos, utopías y otras dimensiones subjetivas de individuos (Torres, 2009; Pinilla, 2013) que buscaban a través de la realización de acciones colectivas el reconocimiento como nuevos actores sociales; esto debido a que instituciones como los partidos políticos tradicionales, la iglesia y las mismas instancias gubernamentales habían dejado de representar los intereses de los sectores

populares, cuestión que los motivaba a crear sus propias organizaciones con el ánimo de alcanzar el reconocimiento social de valores y aspectos culturales propios de cada grupo.

Desde este punto de vista, se advierte que el pensamiento y la acción desplegada por los movimientos ambientalistas que operan en las regiones mineras constituyen una forma de recomposición del mundo, frente al poder que las compañías mineras ejercen sobre la naturaleza y “en relación con el medio ambiente natural y cultural amenazado y explotado por las intervenciones tecnológicas y económicas de la sociedad subida al carro de la modernización económica” (Touraine, 1999: 74).

Producto de la reclamación al derecho de los individuos a vivir conforme a sus deseos y a sus necesidades y a su cultura, se originaron en América Latina movimientos que se oponen a la exploración y explotación minera. Parafraseando a Touraine (1999: 72) se puede decir que estos “han renunciado a las políticas de ruptura y se basan en la afirmación de alguna identidad cultural, adoptando al mismo tiempo líneas políticas activamente democráticas”.

A esta tendencia analítica para el estudio de los movimientos sociales latinoamericanos, exhibida por Touraine, se ha aunado la construcción de identidades colectivas cuyo exponente principal es Alberto Melucci (2010), la cual se explica como una definición de carácter interactivo, compartida y producida por varios individuos los cuales comulgan con las orientaciones para la acción y el ámbito de oportunidades y restricciones en el que tiene lugar la acción. El carácter interactivo alude al proceso mediante el cual se negocia y construyen subjetividades y relaciones que une a los individuos que integran el movimiento social.

El proceso de construcción, adaptación y mantenimiento de la identidad colectiva refleja aspectos como: la complejidad interna del actor y la pluralidad de orientaciones que lo caracterizan; las relaciones del actor con el ambiente; proporciona la base para la definición de expectativas y para el cálculo de los costos de acción; ocurre como un proceso continuo para que la acción sea posible; y puede cristalizarse en formas organizacionales, sistema de reglas y relaciones de liderazgo (Melucci, 2010). Como proceso, las dimensiones que enlaza y entreteje la identidad colectiva son:

1. La formulación de las estructuras cognitivas relativas a los fines, medios y ámbito de la acción; 2. Activación de las relaciones entre los actores, quienes interactúan, se comunican, negocian y adaptan decisiones, y 3. Realización de inversiones emocionales que permite a los individuos reconocerse (Melucci, 2010: 66).

Congruente con lo anterior, y relacionado con el carácter educativo de las acciones colectivas y la transformación de subjetividades, Melucci (2010) sugiere que es a través de estas que los sujetos adquieren recursos cognitivos y emocionales que les permite tomar conciencia de sí y definir su identidad; factores de los que depende: la intensidad y calidad

de la participación de los sujetos en las acciones colectivas; el inicio y duración de su compromiso con ellas; y la integración a la estructura social. Para Melucci (2010),

los militantes y activistas de los movimientos sociales son siempre reclutados entre los que están altamente integrados en la estructura social, juegan un papel central en las redes a las que pertenecen y tienen a su disposición recursos cognitivos y relaciones sustanciales (p.67).

En concordancia con lo explicado, la investigación estuvo dirigida a comprender si las prácticas educativas informales y formales desarrolladas en el emprendimiento minero La Colosa en Cajamarca Tolima, han contribuido a que los partícipes en las acciones colectivas, incorporen: nuevos sentimientos, conocimientos, identidades, formas de vivir, de relacionarse y de afectarse, distintas a las tradicionales. Prácticas que se relacionan en la investigación como transformaciones subjetivas.

Procesos organizativos

El análisis de las prácticas educativas de las acciones colectivas y las transformaciones subjetivas, muestra la ausencia de investigaciones que examinen la forma como éstas se han estructurado en el contexto colombiano durante la última década. Procesos de los que hay una pluralidad de experiencias de orden regional como es el caso del emprendimiento minero que se adelanta en Cajamarca Tolima, debido a la existencia en este lugar de la mina La Colosa y que se encuentran aún por documentar, reconstruir y analizar. En este lugar se han dado procesos organizativos populares que muestran la riqueza de las dinámicas particulares tanto internas como externas de acuerdo con el contexto en que se desarrollan y la organización que se construya (Sánchez, 2013, 2014).

El concepto de organización abordado desde las ciencias sociales, es definido de varias maneras:

en primer lugar, las organizaciones son formaciones sociales, de totalidades articuladas con un círculo precisable de miembros y una interna diferenciación de funciones. En segundo lugar, tienen de común el estar orientadas de una manera consciente hacia fines y objetivos específicos. Y en tercer lugar, tienen de común el estar configuradas racionalmente, al menos en su intención, con vistas al cumplimiento de estos fines u objetivos (Mayntz, 1967: 56).

Por su parte Torres (2009: 70), define las organizaciones como “espacios de institucionalización de formas de solidaridad social presentes en la cotidianidad popular; son nudos del tejido local popular desde las cuales los pobladores se conforman como actores con capacidad de ser reconocidos por otros actores”. Estas se caracterizan por: su permanencia en el tiempo, grado de estructuración interna, establecimiento de propósitos a mediano y largo plazo, una lectura sistemática de las necesidades y unos objetivos comunes y las disposiciones de unos recursos y unas estrategias para alcanzarlos. Gracias a ellas se

enriquece el tejido social, se amplía la lectura que la gente hace de sus problemas y de las posibilidades de solución.

Los procesos organizativos hacen referencia a un conjunto de iniciativas de relacionamiento asociación y acción colectiva, emprendidas por diversos sectores y grupos de población, de forma coyuntural o permanente, para la defensa y garantía de vida en dignidad a nivel regional o municipal. Dicho de otra forma: las organizaciones son construcciones atravesadas y portadoras de valores, significaciones, pautas de relación y propósitos (Torres, 2007), perspectiva analítica en la que es preciso el reconocimiento de prácticas educativas y configuración de subjetivas.

Los factores que influyen para que esto se logre, tiene que ver con la articulación de objetivos entre los miembros que hacen parte de las organizaciones y los responsables de impulsar la participación en los procesos organizativos. Asunto en el que la comunidad afectada por una situación particular tiene el fuerte compromiso de participar y organizar acciones colectivas y movimientos a fin de luchar por sus derechos. Las instituciones por su parte, tienen la responsabilidad de atender y generar iniciativa que brinden soluciones oportunas y viables a la población.

El análisis acerca de la dinámica constitutiva de las organizaciones y las acciones colectivas en las que estas son protagonistas es una actividad investigativa de orden complejo. Para Torres (2007, 2009)) su comprensión implica construir un modelo analítico que: considere los factores estructurales y el proceso constituyente; explicar las tensiones y problemas que las originan; los actores que las conforman y se forman en ellas; los repertorios de movilización y organización y las incidencias sociales y políticas; las motivaciones y sentidos que las orientan; las experiencias compartidas y el sentido común que generan; las ideas y valores que asumen y los imaginarios culturales que las nutren.

Para la comprensión de las acciones colectivas el mismo Torres (2009) sugiere involucrar en el análisis el conjunto de instancias y procesos socioculturales que median entre las condiciones estructurales y la acción organizada como: la vida cotidiana de los sujetos; la red de relaciones de sociabilidad a nivel local, las tradiciones asociativas de los pobladores; el tipo de relaciones sociales, así como la cultura política previa y emergente entre los pobladores.

Por último, para abordar el análisis de las organizaciones y su relación con la subjetividad, Torres (2009) sugiere explicar: los factores estructurales que determinan las condiciones de emergencia; el territorio como espacio en el que se forma el tejido social y las identidades vecinales; la vida cotidiana en la que se aprecian y asumen los conflictos sociales y se llevan a cabo experiencias, tácticas y estrategias para afrontarlos; las dinámicas asociativas a través de las cuales se construyen nuevas relaciones, valores y orientaciones; la movilización colectiva y los repertorios de protesta; y por último, la incidencia en la vida social y cultural a nivel individual y colectivo.

En suma, esta categoría analítica fue útil en la investigación para explicar aspectos relacionados con los procesos organizativos que se han adelantado en el emprendimiento minero de la Colosa como: las tensiones y problemas que los originaron, la tradición organizativa de los pobladores de estas regiones, los objetivos que persiguen y la articulación de los mismos, las relaciones de sociabilidad, formas de solidaridad y acciones colectivas que han emprendido, su permanencia en el tiempo, así como los las acciones educativos informales y formales que les ha permitido lograr sus objetivos y transformar subjetividades.

Subjetividad

Las acciones colectivas desarrollan en los participantes: prácticas de trabajo, conocimientos, identidades, formas de vivir, de relacionarse y de afectarse, muy distintas a las habituales, acciones que producen transformaciones subjetivas que alteran lo instituido. Experiencias que no afecta a todos por igual y que han contribuido a romper las naturalizaciones de las lógicas capitalistas, y a derrumbar formas de dominio (Fernández, 2006). La subjetividad es definida por De Sousa (2014) como

espacio de las diferencias individuales, de autonomía y la libertad, que se levantan contra formas opresivas que van más allá de la producción y tocan lo personal, lo social y lo cultural esto debido a que el sujeto tiene capacidad de respuesta a las condiciones estructurales que lo surcan, no se trata de un sujeto completamente subsumido y sujetado a las condiciones objetivas de su realidad y su tiempo, sino de un sujeto capaz de emancipación

Las cualidades anteriores son definidas por Zemelman (1997) como **subjetividad instituyente**, la cual alude a un proceso de resistencia que se expresa en la construcción de alternativas al orden impuesto, en la creación de otras relaciones sociales y de nuevos modos de realidad, tanto personal, social y cultural. Por el contrario, la **subjetividad instituida** alude a las maneras como se legitima y mantiene el poder hegemónico. La primera, cumple una **función cognitiva**, es decir, que posibilita la reconstrucción de realidades posibles; tiene una **función práctica** debido a que los sujetos orientan, elaboran y dan sentido a sus experiencias y acciones. Una tercera dimensión está relacionada con una **función identitaria**, la cual aporta los materiales a través de los cuales, los individuos y las colectividades definen su identidad personal y sus sentidos de pertenencia social.

Por su parte, Torres (2007), considera que la subjetividad se relaciona con procesos culturales y sociales, los cuales influyen en la construcción de sentidos de pertenencia, que se determinan por: normas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo de manera, consciente, inconsciente, física, intelectual, afectiva o eróticamente, aspectos desde los cuales los individuos le dan sentido a la vida. Desde el punto de vista social, la subjetividad estructura acciones, discursos y experiencias. A través de ellas las comunidades comprenden sus necesidades, reorientan sus demandas y derechos, incorporan

soluciones posibles a sus problemas, transforman sus imaginarios, fortalece su sentido de pertenencia social, y organizativo. Factores que lleva a los movimientos sociales a asumir “que la realización de su utopía pasa por procesos más lentos y menos espectaculares de transformación de esquemas interpretativos y de valores, de la generación y gestión de proyectos y la ampliación de espacios de participación” (p. 179).

Los cambios cognitivos a los que alude Torres lleva a los participantes de un movimiento social a adquirir nueva información, conocer mejor la situación de su ámbito local y regional, los procesos históricos, el funcionamiento de la política, sus derechos, así como a recrear su campo de acción a través de la lectura, la lectoescritura o el teatro. Competencias que contribuyen a la comprensión de desastres generados por la acción del hombre y a hallar en la misma acción humana un reservorio de conocimiento razón y esperanza (Navarro & Hernández, 2010).

Estas funciones de la subjetividad, fue útil en la investigación para comprender si los procesos organizativos opositores a la comercialización y el despojo de bienes como el agua o los bosques por parte de compañías multinacionales que operan en el emprendimiento minero de La Colosa, han logrado materializar un saber derivado de las acciones de resistencia; los sentidos y fines que tienen sus prácticas y acciones educativas; así como el grado de involucramiento e identidad de los miembros de las organizaciones con las acciones colectivas que han realizado

Procesos educativos y transformaciones subjetivas

La subjetividad es entendida como un proceso dinámico que articula diversos códigos o elementos de tipo cognitivo, emotivo, ético, estético y producción de sentido (Retamozo, 2009), por medio de los cuales, sectores sociales e individuos que los conforman, elaboran explicaciones de realidades particulares. Ello comprende un conjunto de imaginarios, representaciones, valores, creencias y formas de concebir el mundo de manera consciente o inconsciente, útiles para los sujetos ya que les permite elaborar explicaciones de sus experiencias de vida (Torres, 2009).

Es a través de las funciones que cumple la subjetividad, que las organizaciones sociales se constituyen en escenarios educativos que contribuyen al fortalecimiento o emergencia de identidades sociales y dinamizadores de la movilización social. Ello no se logra sin un grado de estructuración interna; elaboración de una lectura de una realidad específica; asociar experiencias; estructurar prácticas comunitarias como modos de hacer, vivir y reproducir la vida tales como la reciprocidad en una pluralidad de sujetos; el establecimiento de vínculos de identidad, integral, material y espiritual como una forma de asumir la horizontalidad en una comunidad y la sujeción de unas metas y forma de lograrlas.

Estos factores que determinan la subjetividad están en constante reestructuración o transformación. Especialmente cuando se enfrenta a situaciones de ruptura de los patrones de vida cotidiana provenientes de experiencias sociales o acontecimientos naturales catastróficos como desapariciones o asesinatos, factores que pueden darle comienzo a movimientos defensores de derechos humanos (Retamozo, 2009).

Para Zibechi, estas modificaciones de las subjetividades son debidas a procesos de interacción internas y externas y resultan fundamentales en los momentos críticos de represión y de crisis divisionistas ya que permiten “identificar quiénes somos, qué no queremos ser y con quienes podemos y deseamos hacer” (2014: 181).

Estas represiones que generan desencanto, aislamiento e impotencia y que obliga a los miembros de los movimientos sociales a trabajar en peores condiciones, contribuyen asimismo a la estructuración de la subjetividad: “Todos los grandes sujetos colectivos se forman a partir del dolor” (Negri, 2003:161, citado por Zibechi (2015:181).

La subjetividad como elemento educativo de las acciones colectivas estructura destrezas, conocimientos y valores que los individuos incorporan en la vida cotidiana; esto incide en la cultura política sobre el conjunto social, logrando impregnar la conciencia y la cultura de sectores poblacionales los cuales transforman actitudes, representaciones y hábitos sociales (Torres, 2009).

Las implementaciones de estos postulados educativos de la subjetividad en las acciones colectivas están determinadas entre otras cosas: por el fracaso de los gobiernos latinoamericanos en la implementación de políticas que eviten los efectos destructivos en los ecosistemas causados por la exploración y explotación minera. Situación que ha impulsado a las comunidades locales a organizarse en torno a la defensa de sus territorios, bienes comunes la calidad de vida y lo que esto significa para la degradación del potencial ambiental. Conciencia ambiental que emerge para señalar el problema de la “supervivencia frente a la opulencia, del límite frente a la abundancia” (Leff, 1986:121).

Pero no todos los sectores sociales comulgan con estos propósitos. Pequeños y medianos propietarios de tierra en los territorios donde se adelantan actividades de exploración y explotación minera buscan beneficiarse económicamente vendiendo los predios por un valor 10 y 20 mayor al que tenía antes del arribo de la multinacional (Sánchez, 2013); mecanismo mediante el cual las corporaciones incrementan su poder sobre el territorio, y convierten al labriego en defensor incondicional de la compañía minera.

Estas acciones colectivas de las organizaciones sociales son consecuencia del incumplimiento de promesas de: integración social, empleo y ascenso social a través de las cuales las corporaciones buscan obtener la aprobación social de los emprendimientos mineros. Actividades como: organización de carnavales, marchas, bloqueo de vías, festivales de música, danza y teatro, así como la publicación de revistas y periódicos que

contengan información alternativa, se constituyen en prácticas educativas que transforman subjetividades. Acciones que se constituyen en “ceremonias predeterminadas que sirven para aglutinar a los participantes y actualizar su pertenencia al movimiento y a la amplia tradición de protestas y luchas sociales” (Torres, 2009: 62).

En conclusión, esta categoría analítica permitió explicar, si el inicio de los emprendimientos mineros contribuyó a forjar rupturas con patrones de vida relacionados con actividades agrícolas y pecuarias propios de la vida campesina. También si las prácticas educativas generadas con la mediación de los procesos organizativos, contribuyeron a forjar acciones colectivas y transformaciones subjetivas en los habitantes de la zona escogida para adelantar la propuesta educativa.

Prácticas educativas

La educación no es una función desempeñada exclusivamente por la escuela o el colegio. También tienen competencias y efectos educativos otras instituciones, organismos y acciones colectivas a través de los cuales se dan procesos de enseñanza aprendizaje. El eje y fuente de toda acción educativa debe tener como objetivo la formación integral del ser humano, el cual nace inacabado y se humaniza en sociedad. Más allá de la transmisión de contenidos o la formulación de objetivos observables, las prácticas educativas deben ocuparse del tipo de hombre a formar, el modelo de sociedad a buscar, los valores a practicar, la forma de obrar frente a los otros, así como las virtudes a ejercitar para vivir en sociedad¹⁰.

Las prácticas educativas hacen referencia al saber práctico (Phrónesis), entendido este como el saber actuar o el arte de vivir. Los temas concernientes a ellas están relacionados con acciones éticas y morales que determinan la actuación concreta de los individuos. Dicho de otra forma: es actuar de manera decisiva conforme a aquello que se ha establecido como bueno frente a una necesidad concreta; integrar la teoría y la práctica sin darle preminencia a la una sobre la otra “al punto que lo universal de la teoría solo es posible en el caso particular, no como aplicación o confirmación de esta, sino como la posibilidad de reconfigurarla con ocasión de una situación controvertida” (Barragán, 2015).

El saber práctico o praxis debe orientarse al cambio social y la emancipación política. Ello involucra la transformación de la conciencia y los modos de ser y estar en el mundo. Para lo cual se requiere: la acción reflexionada intersubjetiva puesta al servicio de la transformación de las relaciones de dependencia ideológicamente fijadas y de las formas de estar en el mundo.

La práctica emplea el medio de reflexión crítico para profundizar en las tradiciones con el fin de descubrir cuáles están verdaderamente al servicio de la

¹⁰. “La práctica educativa y pedagógica como horizonte de sentido”. En: Revista Educación y Cultura No 112. Diciembre de 2015.

causa de la autonomía y de la responsabilidad y cuáles presentan la condición de la existencia de forma imaginaria (Grundy, 1994: 255)

El análisis de las prácticas educativas (informales y formales) surgidas en torno a las acciones colectivas del emprendimiento mineros a estudiar permitió: A. Reflexionar sobre los sentidos de las experiencias educativas con el fin de develar la dimensión ética, moral y política de la acción práctica de los actores sociales; B. El compromiso político o la búsqueda de transformaciones sociales en relación con ciertos ideales de ser humano, cultura y sociedad; C. Los espacios de aplicabilidad donde se ejercitan las acciones prácticas, D. Las reflexiones que se hacen de ellas antes y después de la acción; E. Los cuestionamientos y las propuestas tendientes a reconfigurar dichas prácticas.

1.4 Modelo analítico para la interpretación y análisis de los datos

El análisis y la interpretación de los datos de información sobre las prácticas educativas de las acciones colectivas y la configuración de subjetividades en los procesos organizativos anti mineros de Cajamarca se fundamentó en un dialogo reflexivo y crítico entre: las categorías y subcategorías escogidas como referentes teóricos, las preguntas y los objetivos que orientaron la investigación.

De las acciones colectivas desplegadas en este territorio se analizó lo siguiente: 1. El proceso histórico de las organizaciones y la emergencia de acciones colectivas contra los emprendimientos mineros. 2. Las movilizaciones que se han dado en torno a estos. 3. Las prácticas educativas informales y formales que han sido formativas para los habitantes del lugar o que han generado las organizaciones. 5. Las transformaciones subjetivas que han forjado dichas prácticas educativas 6. Las gradaciones de involucramiento de los miembros de las organizaciones en las acciones colectivas que estas han realizado.

Este modelo analítico nos permitió demostrar la hipótesis que, de los procesos organizativos y las acciones colectivas contra los emprendimientos mineros, se han derivado prácticas educativas que buscan defender bienes comunes como el agua, los bosques y la biodiversidad en general. Lo que a su vez ha configurado transformaciones subjetivas y la emergencia de nuevos conocimientos, prácticas, vínculos e identidades, creencias, valores, lenguajes y formas de aprehender el mundo en los habitantes de estos ámbitos locales.

Modelo Analítico



El diseño metodológico de la investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo e interpretativo crítico. Este se define como una práctica colectiva de producción de conocimientos, articulada a procesos organizativos protagonizados por actores marginados (Indígenas, mujeres, campesinos, negros y jóvenes) que buscan fortalecer la capacidad de resistencia y generación de alternativas al capitalismo, a partir de la producción de nuevas subjetividades y transformación de realidades y sujetos desde una perspectiva crítica y emancipadora (Torres, 2014^a). Es un tipo de investigación social y educativa o de borde. Ello obedece a que pretende un conocimiento alternativo del mundo globalizado, más comprensivo del que emerge del eurocentrismo, el etnocentrismo o el estado centrista y que “desborda los límites de la ciencia social instituida”.

El análisis de estas prácticas sociales emergentes ha permitido a través de investigaciones no disciplinares y la utilización de una pluralidad de herramientas teóricas y metodológicas, rescatar el lugar del sujeto y la subjetividad en la investigación social. Un objeto de estudio invisibilizado y minimizado por la objetividad y la neutralidad de la ciencia, según lo explica Torres (2006) siguiendo a Ibáñez (1997). Planteamientos que fueron tenidos en cuenta para construir un derrotero metodológico, y realizar un acercamiento empírico al problema de investigación.

Un punto de partida de orden metodológico sugerido por Torres (2004: 67) para orientar la investigación fue que esta estuviera dirigida a la “comprensión, construcción o transformación de ámbitos y prácticas sociales específicas” relacionadas con la “educación social, la comunicación alternativa, las políticas culturales o las organizaciones populares”, con el fin de saber si estas habían generado lecturas diferentes de lo social. Para tal fin propone entre otras cosas: incorporar al análisis: las prácticas sociales emergentes, la

educación comunitaria, la comunicación social alternativa, las estrategias culturales de resistencia de los sectores populares y las transformaciones subjetivas que estos factores generan.

Atendiendo a los objetivos de la presente investigación explicados en la introducción, en los referentes metodológicos se tuvo en cuenta que las transformaciones subjetividades dependen de las interacciones sociales, la configuración de experiencias y las circunstancias sociales en las cuales los individuos desarrollan su acción presente y futura. Esta perspectiva metodológica fue útil para estudiar: el proceso histórico de las organizaciones sociales; las acciones colectivas que realizan; caracterizar los procesos de movilización; analizar las prácticas educativas informales y formales que han sido formativas para los habitantes, y cómo estas han contribuido a forjar transformaciones subjetivas; por último, analizar las gradaciones de involucramiento de los miembros de las organizaciones en las acciones colectivas que estas han realizado.

Para el análisis de las transformaciones subjetivas, se tuvo en cuenta las funciones que ésta cumple, según lo propuesto por Zemelman (1997) y que se ha explicado antes. Esto con el fin de entender si los procesos organizativos opuestos a la comercialización y el despojo de bienes como el agua o los bosques por parte de la AGA, han logrado materializar un saber derivado de las acciones de resistencia; los sentidos y fines que tienen sus prácticas y acciones educativas; así como el grado de involucramiento e identidad de los miembros de las organizaciones con las acciones colectivas que han realizado.

1.5 Metodología: Tipo de abordaje investigativo.

Este estudio se inscribe en el enfoque denominado “sistematización de experiencias como investigación interpretativa y crítica”. Perspectiva definida como una modalidad que busca reflexionar “sobre las prácticas sociales y educativas transformadoras y alternativas en diferentes ámbitos y escenarios de acción colectiva e institucional” (Barragán & Torres, 2017: 7; Torres, 2010).

Los rasgos que posibilitaron dicha sistematización se explican a continuación:

A partir de los ejes temáticos que orientaron la indagación, se estructuraron preguntas relacionadas con: la emergencia en el territorio cajamarcuno de procesos organizativos y acciones colectivas como producto de la instalación del proyecto minero; las prácticas educativas que estos emprendimientos colectivos realizan con el fin de defender el territorio, el agua, la biodiversidad y la vida; así como el surgimiento de nuevas subjetividades (aprendizajes, prácticas e identidades) en sus integrantes (ver matriz analítica al final de este capítulo).

Para la reconstrucción narrativa de las experiencias de los colectivos sociales, la trayectoria de sus integrantes, los procesos de movilización y concientización a la población, y que configuran las prácticas educativas informales y formales, así como las transformaciones

que estas generan en sus miembros y la misma comunidad, se acudió a la realización de entrevistas estructuradas y a profundidad. Los testimonios e historias de vida, aportados por estudiantes, campesinos, amas de casa, comerciantes, etc., permitió reconstruir la dinámica de la resistencia, y las huellas que ésta ha dejado en cada uno de ellos.

El resultado de esta reconstrucción narrativa se complementó con información obtenida en tesis de grado, revistas, e informaciones de prensa, etc. También se acudió a la información suministrada por académicos expertos, asistencia a encuentros de colectivos sociales ambientales, letras de canciones, poemas y materiales audiovisuales. Esto permitió entender que todos los espacios, sujetos y acciones de las personas son educativos, y que del campesino más humilde, también se aprende.

Para el análisis e interpretación de la información se procedió a identificar aspectos relevantes de la misma como: patrones y conexiones recurrentes, lo cual permitió identificar categorías centrales relacionadas con los aspectos educativos de las acciones colectivas que realizan los movimientos sociales, las transformaciones subjetivas, así como los aportes sustantivos de los testimonios y que se correlacionan con los conceptos y teorías que se usaron como herramientas de análisis en el ejercicio investigativo.

La reconstrucción de la práctica social o educativa de las organizaciones sociales antiextractivas que operan en el lugar escogido para adelantar el estudio, permitió construir una lectura comprensiva de las acciones colectivas que estas realizan, y erigir una noción interpretativa de los mismos. Nominación que se designa en esta investigación como: Repertorios de Acción y Prácticas educativas (RAPE), y que alude a los conocimientos, destrezas, formas de lucha y resistencia que han heredado y aprendido los integrantes de las colectividades sociales que operan en el lugar. Prácticas y acciones colectivas que tienen como propósito principal, formar sujetos que defiendan el territorio en el que se ha instalado el emprendimiento minero, por constituir un Horizonte Territorial de Vida (HTV).

En suma, la sistematización de esta experiencia de lucha, permitió recuperar parte de la historia colectiva reciente de los últimos años de la localidad de Cajamarca Tolima. Redención de la que hacen parte además, la indagación de los conocimientos y sentidos derivados de las acciones de resistencia de hecho y de derecho, emprendidas por campesinos, estudiantes, amas de casa, comerciantes, etc., en procura de defender una vida digna y formas de trabajo relacionadas con las labores agrícolas y pecuarias que se desarrollan en el lugar.

Situación que se enmarca en el surgimiento desde finales de la década de los noventa y primera década del siglo XXI, de nuevos movimientos populares en América Latina. Emergencia que ha permitido reactivar unos elementos comunes relacionados con la Educación Popular (EP), como: la formación de educadores populares y promotores sociales imbuidos de un enfoque, unas estrategias y una actitud investigativa; a fin de

determinar las causas de las discordias entre comunidades locales y grandes empresas, caracterizar el modelo económico y el orden social vigente, la proyección de las comunidades como sujetos históricos, y su conversión en protagonistas anónimos de transformaciones sociales; la intencionalidad política emancipadora de sus luchas, así como la influencia de la educación, las metodologías dialógicas y participativas como estrategias para materializar mejores horizontes de vida en ámbitos locales (Torres, 2010).

La sistematización de experiencias se relaciona también con enfoques metodológicos como la Investigación Acción Participativa (IAP), que se agregan como procedimientos investigativos y que se resumen a continuación: A. La investigación colectiva, definida como la utilización de preguntas, respuestas en reuniones, asambleas, cabildos, comités, giras de observación, etc., como fuente de conocimientos objetivos de los hechos. B. La recuperación de la memoria histórica, para lo cual se acude a la tradición oral; archivos familiares; relatos; narraciones populares; a fin de reactivar la memoria colectiva, corregir y complementar o aclarar relatos académicos concebidos con intereses ajenos a las clases populares, o buscar detalles inéditos de importancia para la historia regional y local. C. Valoración del empleo y la cultura popular, usando como elementos de análisis: la música, el deporte, las creencias, los mitos, los cuentos y otros aspectos atinentes al sentimiento, la imaginación, etc., y que se reintegran al pueblo como procedimientos investigativos y de movilización. D. La producción y difusión del nuevo conocimiento comunicados a las bases letradas a fin de contribuir a la solución de problemas y el compromiso con el grupo (Fals, 1985).

1.6 Matriz Analítica

Para el desarrollo del modelo analítico explicado en el apartado anterior se planteó un esquema de relaciones recíprocas e interdependientes de tres categorías: acción colectiva, prácticas educativas y subjetividades, o aspectos motivacionales que se derivan de los procesos organizativos. Para cada una de ellas se formularon preguntas problematizadoras con sus correspondientes descriptores, lo cual se explica a continuación.

Formas de organización y movilización

Ctg	Preguntas problematizadoras	Descriptores	Ctg
ACCION COLECTIVA ANTIMINERA	1. ¿Cómo ha sido el proceso histórico de las organizaciones sociales y las acciones colectivas en los municipios de Cajamarca Tolima?	Estudiar el proceso histórico de las organizaciones sociales y las acciones colectivas en los municipios de Cajamarca Tolima.	SUBJETIVIDADES
	¿Por qué y cómo emergen los procesos de movilización que se han dado en torno a este emprendimiento minero?	Caracterizar los procesos de movilización que se han dado en torno a los emprendimientos mineros.	
	¿Cuál es la procedencia de los recursos?	Financiación	
	¿Cada cuánto se movilizan?	Periodicidad de las acciones	

		colectivas.	
	¿Qué acciones colectivas realizan las organizaciones?	Repertorios de acción colectiva.	
	¿Cómo proyectan sus acciones públicas?	Maneras de comunicar, explicar y persuadir al público sobre la importancia de sus manifestaciones públicas.	
	¿Qué normatividad, derechos y deberes tienen sus miembros?	Normas, derechos y deberes de los miembros.	
	¿En qué contexto devienen protagonistas?	Demandas, exigencias y situaciones que afecta a las comunidades.	
	¿Cómo participan los miembros de las organizaciones?	Participación en instancias públicas y privadas.	

Ctg	Preguntas problematizadoras	Descriptor	Ctg
ACCION COLECTIVA ANTIMIENRA ANTIMINERA	¿Cuáles sentidos tienen las prácticas educativas de los procesos organizativos?	Develar la dimensión ética, moral y política de las prácticas educativas.	SUBJETIVIDADES
	¿Qué prácticas educativas informales han sido formativas para los habitantes de estos lugares?	Identificar las prácticas educativas informales que han sido formativas para los habitantes de estos lugares.	
	¿Qué prácticas educativas formales han generado las organizaciones?	. Identificar las prácticas educativas formales que han generado las organizaciones sociales.	
	¿De qué manera las prácticas educativas informales y formales de la acción colectiva han contribuido a forjar transformaciones subjetividades?	. Explicar la manera como las prácticas educativas ha contribuido a forjar transformaciones subjetivas.	

Marcos interpretativos y motivacionales

Ctg	Preguntas problematizadoras	Descriptor	Ctg
ACCION COLECTIVA ANTIMIENRA ANTIMINERA	¿Qué conceptos y significados inspiran y legitiman las acciones que realizan?	Significados que construyen los pobladores locales a partir de sus experiencias de participación en acciones colectivas.	SUBJETIVIDADES
	¿Qué ideas, valores y sentimientos justifican la acción colectiva de los pobladores locales?	Aspectos de orden cognitivo, valorativo, afectivo, procedimental y las posibilidades de cambio que se derivan de ellos.	
	¿Qué justifica políticamente sus acciones?	Argumentos políticos que explican la acción colectiva de los pobladores locales.	
	¿Qué principios comparten los	Ideologías y principios que	

miembros de las organizaciones?	justifican la participación y la necesidad de mantener unido a los miembros del colectivo.
¿Qué referentes de identidad permiten reconocer y diferenciar los procesos organizativos?	Hechos que evidencian necesidades, carencias, generadas por violaciones de sus derechos sociales y ambientales.
¿Ante cuáles problemáticas o injusticias protestan las organizaciones locales?	Protestas ante privatización de los bienes comunes, y acciones que afectan la calidad de vida de las habitantes locales.
¿Qué define el curso y los resultados de la acción colectiva?	Factores que permiten la fijación de metas y cursos de la acción colectiva.
¿Qué experiencias significativas han compartido las organizaciones que se oponen a la minería?	Acciones colectivas que han compartido y valorado los integrantes de las organizaciones.
¿Por qué los integrantes de las organizaciones siguen participando en ellas?	Razones y motivos que justifican la participación en las organizaciones.
¿Cuál es la percepción del cambio en la vida de los que han participado en la organización?	Cambios a nivel personal y colectivo como resultado de la participación en la organización.
¿Qué intenciones y proyectos motivan a la organización?	Principios, acuerdos y acciones que dinamizan la organización
¿Qué concepción del ejercicio de la política, tienen los miembros de las organizaciones?	Opinión y alcances de la acción política.

Estas matrices analíticas han sido modificadas del trabajo realizado por Ramírez, P (2013)¹¹.

En suma, la clasificación de la bibliografía consultada relacionada con los aspectos educativos de los movimientos sociales, y la dirigida al análisis de los conflictos, movimientos y luchas socioambientales en América Latina, junto a las herramientas teóricas usadas para el desarrollo de la misma, permitió analizar y sintetizar la información compilada en periódicos regionales y nacionales, entrevistas estructuradas y semiestructuradas realizadas a integrantes de los procesos organizativos. Resultado de este ejercicio son los capítulos que se presentan a continuación.

¹¹. Ramírez, P. (2013). Acción colectiva estudiantil y construcción de subjetividad en el contexto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (*Tesis doctoral.*) Universidad Distrital. Bogotá, Colombia

CAPÍTULO 2. EL PROYECTO MINERO DE LA COLOSA EN CAJAMARCA TOLIMA

2.1 Aspectos generales

El extractivismo en América Latina como problema de orden estructural, se originó con la conquista de españoles, portugueses, franceses, holandeses e ingleses (Stein, et. al., 1997). Históricamente esta actividad económica ha mediado en la incorporación de los países de la región al mercado mundial, el desarrollo del capitalismo y la determinación de periodos de bonanza, recesión y depresión económica.

En la actualidad, este patrón de acumulación ha convertido a las naciones latinoamericanas en exportadores a gran escala de bienes como: hidrocarburos (gas y petróleo); metales minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc); productos agropecuarios (maíz, soja, trigo) y biocombustibles. Actividades primario extractivas con escaso valor agregado que han sido concesionadas por los gobiernos de la región de las últimas tres décadas a grandes corporaciones internacionales (Svampa & Viale, 2014).

El extractivismo se define como un patrón de acumulación basado en la explotación exagerada y abusiva de recursos naturales no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes consideradas improductivos. Aprovechamiento que excede lo necesario y recomendable y abarca actividades como: la minería a cielo abierto¹², la explotación de hidrocarburos a través de la fracturación hidráulica o fracking, la expansión de la frontera forestal, energética y pesquera, la producción de biocombustibles como etanol y biodiesel. Así como la construcción de obras de infraestructura como carreteras, puertos, hidroeléctricas, con el objetivo de facilitar la extracción y exportación de dichos productos hacía el mercado internacional (Svampa & Viale, 2014; Giarracca & Tuebal, 2013).

La ejecución de estos proyectos extractivos por parte de grandes grupos empresariales requiere entre otras cosas, del control territorial y el acaparamiento de tierras mediante procedimientos que atentan y quebrantan los derechos fundamentales de las comunidades, como el desplazamiento de los pobladores, el deterioro ambiental de los lugares donde

¹². El sistema de explotación minera cielo abierto consiste en lo siguiente: “en la actualidad, los metales, cada vez más escasos, se encuentran en estado de diseminación y solo pueden ser extraídos a través de nuevas tecnologías, luego de producir grandes voladuras de montañas por dinamitación, a partir de la utilización de sustancias químicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, entre otros) para disolver (lixiviar) los metales del mineral que los contiene. En suma, lo particular de este tipo de minería (a cielo abierto), diferente de la tradicional, es que implica niveles aún mayores de afectación del medio ambiente, generando cuantiosos pasivos ambientales, al tiempo que requiere tanto un uso desmesurado de recursos – entre ellos el agua y la energía, imprescindibles para sus operaciones- como la intervención de manera violenta en la geografía de los territorios para la explotación” (Svampa & Antonelli, 2009: 16).

laboran, la extinción de la biodiversidad, y la apropiación de recursos locales como bosques y aguas, vitales para la preservación de la vida de las comunidades (González et. al., 2011; Gómel et. al., 2014).

Estos procedimientos ejecutados por grupos empresariales de carácter nacional e multinacional, causan fracturas en los espacios de vida de las comunidades y en la forma como habitan, viven e interactúan con el territorio (Ulloa & Coronado, 2016), ocurren en contextos atravesados por desigualdades sociales, económicas y culturales. Efectos que las colectividades procuran contrarrestar con la realización de acciones colectivas de carácter participativo y la conformación de movimientos sociales en los que se dan procesos culturales y educativos contra el interés y la influencia en las áreas donde se instalan los emprendimientos extractivos.

Estos procesos organizativos que generan las comunidades locales contra el oponente por la dirección colectiva del presente histórico, y con capacidad de producir “orientaciones socioculturales que les permitan lograr el control social de los recursos centrales de un tipo de sociedad determinada” (Touraine, 1987:43), hacen referencia a un conjunto de iniciativas de relacionamiento, asociación y acción colectiva, emprendidas por diversos sectores y grupos de población, de forma coyuntural o permanente, para la defensa y garantía de una vida en dignidad a nivel regional o municipal (Torres, 2007).

Dicho de otra forma, de estos procesos organizativos locales, por la defensa del agua, la biodiversidad, la vida y el ambiente de los territorios, mediante los que los pobladores comienzan a rechazar la usurpación de los bienes comunes, así como a valorar, imaginar y decidir, sobre la forma como desean vivir su presente y su futuro, se generan, valores, significaciones, pautas de relación y propósitos en los que es preciso el reconocimiento de prácticas educativas y configuración de subjetivas..

Estas acciones colectivas en derecho como: cartas, consultas populares, tutelas, etc. o de hecho como: marchas, bloqueo de vías, mítines, huelgas de hambre, o toma de entidades públicas que realizan las comunidades, se consideran como educativas debido a que son generadoras de nuevos conocimientos, habilidades, creencias, hábitos y nuevos sentidos a través de los cuales se despliegan dimensiones utópicas, y nuevos valores para enfrentar la vida. Componentes que operan a su vez como dispositivos que permiten transformaciones subjetivas de orden individual y colectivo (Torres, 2009).

El presente capítulo tiene como propósito explicar en qué consiste el emprendimiento minero a cielo abierto que se pretende implementar en Cajamarca Tolima. Intención con la que arribó a la población en el año 1999, la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA) de origen sudafricano cuya sede principal está en Johannesburgo. Resultado de esto, se han originado tanto en el lugar mencionado como en la capital departamental Ibagué, procesos

organizativos integrados por campesinos, estudiantes, comerciantes, amas de casa, y otros sectores sociales, los cuales han realizado acciones colectiva, algunas de carácter sistémico, otras de carácter espontáneo con el propósito de defender el territorio, el agua, la biodiversidad y la vida, ante el factible inicio de la fase de explotación aurífera, programada desde el año 2019 en adelante.

2.2 La Mina La Colosa.

La mina La Colosa está situada en el Departamento del Tolima, jurisdicción del Municipio de Cajamarca¹³, comarca emplaza sobre la Cordillera Central de los Andes colombianos, a 35 km de la ciudad de Ibagué. Entre los complejos de páramos del Parque Natural de los Nevados en la parte norte y Anaime, Chili, Yerbabuena y Barragán en el sur. Ecosistema en los que se ubican también territorios de la jurisdicción de Ibagué y Rovira en el departamento del Tolima y Pijao y Génova en el Quindío.

El relieve de la región está conformado por pisos térmicos medio, frío y páramo, del que nacen los ríos Anaime, Bermellón, Capital, Toche, y su cuenca mayor el Coello, del que se surten de agua municipios como la misma población de Cajamarca, Ibagué, Espinal, Coello, Rovira, San Luis y Flandes, lugares donde se asienta el 70 por ciento de habitantes del departamento.

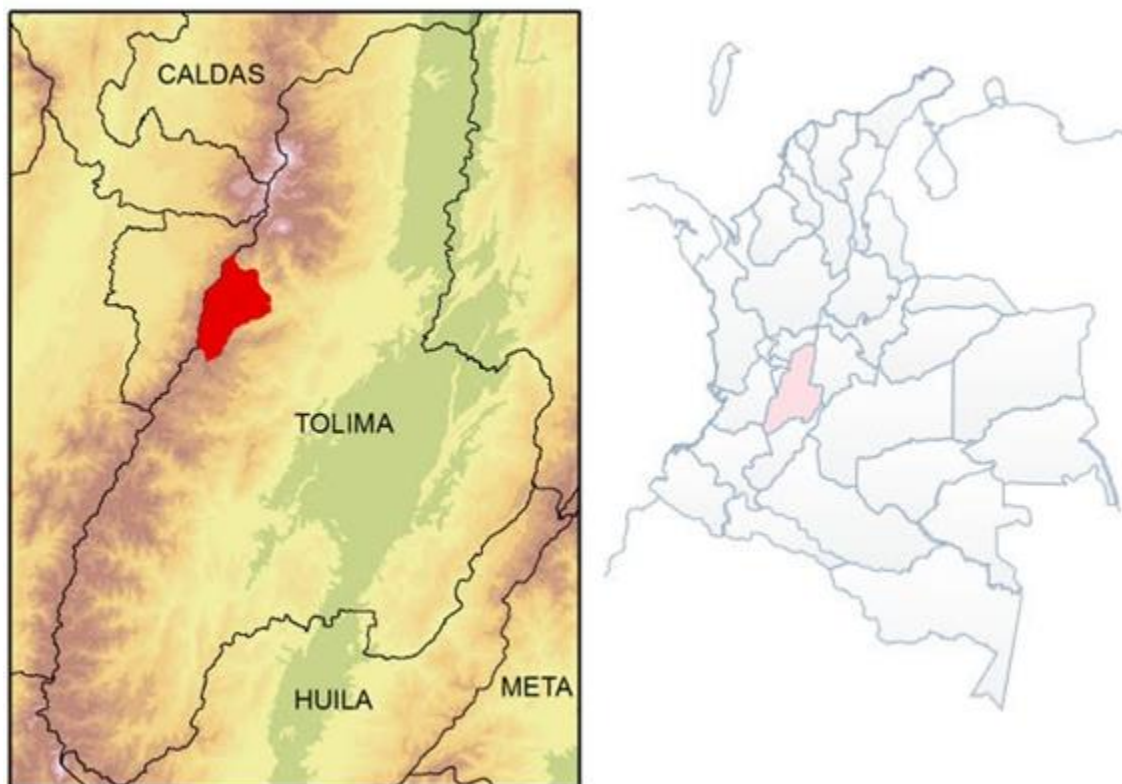
El arribo de AGA a Colombia, beneficiaria de la exploración sucedió en el año 1999 con el nombre de Sociedad Quedada, la cual comenzó a operar secretamente hasta el año 2003 cuando fue constituida legalmente. Según David Hall y Cris Líder, directores de exploración de AGA suramericana y de Perú, Ecuador y Colombia respectivamente, las primeras exploraciones a lo largo del arroyo La Colosa (nombre alusivo a un riachuelo del mismo nombre, localizado en las veredas La Luisa y La Paloma entre el casco urbano de Cajamarca y el alto de Alto de la Línea) fueron realizadas a mediados del año 2000, año en el que con más de 500 geólogos extendieron las mismas a todo el país (Pax, 2016).

La verdadera identidad de AGA se conoció solo hasta finales del 2007(Colombia Solidar Compagina, 2013) cuando el expresidente Álvaro Uribe hizo público el hallazgo del yacimiento La Colosa. Un año antes de dicho anuncio, la empresa extranjera había

¹³. “En 1550, sobre territorios actuales de Cajamarca, se fundó la localidad inicial de Ibagué, la que debió ser trasladada al poco tiempo; en 1867, también dentro de estos territorios se creó la población de Anaime, que llegó a ser municipio en 1908, categoría que perdió entre 1911 y 1914; entre tanto, el 27 de marzo de 1913, monseñor Ismael Perdomo Borrero, realizó la fundación del pueblo, al que sus habitantes llamaron San Miguel de Perdomo. El 8 de abril de 1916, el pueblo fue elevado a la categoría de municipio, con Anaime como corregimiento primero, y posteriormente como inspección de Policía. En 1932, su nombre fue cambiado por el de Quesada y unos años después, por el de Cajamarca en 1938” (El Espectador, Presidencia de la República y Ministerio de Educación Nacional. Así es Colombia. Los municipios, 1995).

comenzado a comprar fincas en la zona y a contratar más de 350 trabajadores a los que les pagaban jornales diarios de 30 a 60 mil pesos (El Tiempo, diciembre 21 de 2007).

1 Mapa 2. 1 Ubicación geográfica del municipio de Cajamarca Tolima



Tomado de: http://www.anarkismo.net/attachments/mar2013/la_colosa_cajamarca_tolima

Hacia finales del año 2015 y de acuerdo a la información presentada por el Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca) a la Comisión Quinta del Congreso de la República, la totalidad de predios localizados en las cuencas de las quebradas La Colosa y La Arenosa (salvo el denominado La Plancha) habían sido adquiridos por AGA (Grupo de Investigación Geo ambiental Terree, 2016).

En el año 2006, de las 2114 concesiones hechas por el Ministerio de Minas y Energía en 21 departamentos del país a la sociedad Kedah da, 143 habían sido otorgadas en el Tolima. En el año 2011, había solicitado 1340 más. En el año 2014, en sólo el municipio de Cajamarca AGA contaba con 21 títulos mineros correspondientes a 30.440 hectáreas, equivalentes al 68, 75 por ciento del área local (Sánchez, 2014). Dos años después, de las 51.528 hectáreas que componen la municipalidad, 44.276, correspondientes al 86 por ciento de la misma, pertenecían a la empresa multinacional (Pax, 2016; García, 2012).

A nivel nacional, cerca de 9000 títulos correspondientes al 4 por ciento del territorio nacional otorgados hasta el año 2011 por parte del Servicio Geológico Colombiano (Ingeominas) a compañías mineras habían sido adjudicados en zonas protegidas como páramos, Parques Naturales y Zonas de Reserva Forestal. Esta situación es la que más controversia genera en la localidad de Cajamarca debido a que la exploración minera por parte de AGA se desarrolla en la Zona de Reserva Forestal Central, de la cual hace parte el 79,31 por ciento del municipio. La figura de protección para el área comprendida como Reserva fue creada mediante la Ley 2 de 1959, a través de la cual se la asignaron “fines de desarrollo de la economía forestal, protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre”. Y para el pleno cumplimiento de este propósito, la ley 685 del año 2001 excluyó la realización de actividades mineras en la zona mencionada (Sánchez, 2014).

Según el Observatorio de Conflictos mineros en América Latina (OCMAL), el propósito de AGA es expandir la actividad de exploración minera a cielo abierto de La Colosa en Cajamarca, a un cinturón geográfico denominado Anaime –Tocha o Colosa Regional, del que hacen parte municipios como: Anzoátegui, Santa Isabel, El Líbano, Chaparral, Ibagué, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira en el departamento del Tolima, (Pax, 2016), y que incluye localidades de los departamentos de Risaralda como Quinchía; Pijao y Salento en el Quindío; Ríosucio, Supía y Marmato en el oriente de Caldas; Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Andrés y Jardín en el sur de Antioquia.

Todo este territorio que se extiende al menos 300 ms desde la población de Cajamarca en el departamento del Tolima hasta el sur de Antioquia, entre las cordilleras central y occidental en su flanco oriental, hace parte de una zona geológica de orden aurífera denominada “Cinturón de Oro Colombiano”, en el que los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos dieron carta blanca a compañías como Anglo Gold Ashanti, Batero Gold y Gran Colombia Gold para que realizaran actividades de exploración minera (<http://www.conflictosmineros.net/contenidos/10-colombia/15008-el-atractivo-del-inturon-de-oro-del-cauca-medio>).

2 Mapa 2.2 Cinturón de oro en Colombia



Mucha preocupación es lo que sienten los habitantes y dirigentes del Suroeste antioqueño con los proyectos mineros que se vienen desarrollando en esta subregión antioqueña.

Periódico EL Mundo 29 de Febrero de 2012

La superficie señalada en el mapa anterior, conocida como Colosa Regional incluye territorios de los departamentos de Caldas, Risaralda, norte del departamento del Tolima, Quindío y sur de Antioquia y configura a su vez lo que se conoce como región cafetera. Área que fue incorporada a la economía nacional en el contexto de la colonización antioqueña, y a la que se desplazaron desde principios del siglo XIX cientos de familias desde la vieja Antioquia en búsqueda de tierras para cultivar café, la explotación de los depósitos de oro de veta y aluvial que aún quedaban en el lugar, o la extracción de artefactos del mismo metal de las tumbas indígenas, a través de la técnica de la g.uaquería.

Según lo explica Alejo Pulido, “lo que hace la AGA es seguir los viejos asentamientos de oro en la región cafetera. Los grandes yacimientos desaparecieron, quedaron los pequeños. La minería a cielo abierto es como la tecnología de raspar la olla, de quitarle la pega a la olla del arroz. El arroz ya se lo llevaron, lo que pasa es que para quitar la pega se generan

unos impactos grandísimos” (Entrevista, diciembre de 2016), principalmente en las fuentes de agua, uno de los elementos más importantes en la explotación del oro.

Consecución del líquido que para la región donde se proyecta expandir la Colosa Regional representa un “un problema por su exceso más que por su escasez” (González, 2007: 14), debido a las constantes lluvias que tienen lugar en la zona, la existencia de todos los pisos térmicos, desde el cálido, el frío y de nieves perpetuas como el Parque de los Nevados, el Nevado del Huila, la Sierra Nevada del Cocuy, etc. Ecosistemas que se constituyen en fuentes de agua del que se surten los principales centros urbanos de la región, y se benefician las industrias del café, el arroz, las frutas, la ganadería y demás actividades agropecuarias que se desarrollan en la zona.

Con el propósito de iniciar la fase de explotación aurífera en la zona se han otorgado títulos mineros tal como se ha explicado antes. Asimismo ha comenzado la instalación de obras de infraestructura como la construcción de hidroeléctricas¹⁴ y carreteras con el fin de facilitar la explotación y exportación de mineral. Esto ha traído como resultado, la emergencia de procesos organizativos locales que han apelado a la realización de acciones colectivas con el propósito de evitar la exploración y explotación a cielo abierto, por el riesgo que representa para el territorio, la biodiversidad, el agua y la vida. Asunto que para Renzo García, integrante del Comité Ambiental del Tolima es “imposible para estos proyectos mineros de oro diseminado de lixiviación con cianuro que extraen en promedio un gramo de oro por tonelada de roca y requieren inmensas cantidades de agua –entre 450 y 1060 litros de agua para extraer un gramo de oro” (El Espectador, octubre 21 de 2016). Mediante este sistema es que la AGA pretende extraer 33 millones de onzas de oro en un lapso de 30 años (Pax, 2016; Colombia Solidar Compagina, 2013; Grupo de Investigación Geo ambiental Terree, 2016).

2.3 Efectos ambientales

Los riesgos que representa el emprendimiento minero La Colosa para el territorio, la biodiversidad, el agua y la vida de los habitantes de la región, se explican por lo siguiente:

¹⁴. Según Miller A Dussán Calderón “En la actualidad se impulsan 150 grandes represas y existen un poco más de 30 solicitudes de licencias ambientales en el ANLA para proyectos hidroeléctricos en todo el país... Los proyectos contemplan desde grandes centrales hidroeléctricas como las de Ituango, Hidrosogamoso y El Quimbo (140 megavatios de energía serán para La Colosa), hasta pequeñas centrales, como las 8 proyectadas para el Sumapaz y las 14 solicitudes de licenciamiento para el Huila. Además, se expidió el decreto de Energías renovables con el propósito de incorporarlas al Sistema Interconectado Nacional”. Foros Regionales “Análisis de Contexto Regional: Situación actual, oportunidades y desafíos para el sector Minero Energético. Noviembre y diciembre de 2016”. “Ponencia: Capitalismo Verde, Modelo Extractivista Minero Energético y Nuevo Modelo soberano y autónomo”. Cumbre Minero Energética. Ibagué 28 diciembre de 2016.

para la extracción de 0,86 gramos de oro (con variaciones entre 0,6 y 1,4 gramos) se requiere remover cuatro toneladas de roca. De igual forma se realizará un foso o hueco de 650 metros de profundidad, equivalente a la altura de un edificio de 220 pisos, el que liberará sulfuros como la pirita o arsenopirita, nocivos para las fuentes de agua (Garzón, 2008, citado por Grupo de Investigación Geo ambiental Terree, 2016).

Para la operación se requiere talar el bosque, remover los horizontes fundamentales del suelo mediante explosiones a tajos o canteras a cielo abierto con el fin de fracturar la roca. Una vez esta es pulverizada se transporta a sitios planos, donde es apilada y regada de manera constante con grandes cantidades de agua con cianuro. La solución o mezcla de estas sustancias es colectada en pozos y luego le es agregado polvo de zinc o carbón activado a fin de obtener el oro (Gómel & Ulloa, 2014; García, 2012).

Para este proceso químico por lixiviación¹⁵ se calcula que AGA deba utilizar 4 millones de kilos de cianuro cada año el cual extenderá sus efectos contaminantes por más de cien años, y de 9 millones de metros cúbicos de agua por año o 1000 litros por tonelada de roca procesada. Uso desproporcionado por el que no deberá pagar ningún costo, mientras que una familia de estrato 3 debía pagar hacia el año 2012, 37.000 pesos en promedio aproximadamente, por 18 metros cúbicos de consumo (García 2012). Sin haber empezado la etapa de explotación, el análisis de vertimientos domésticos realizados por expertos de universidades de Caldas, Quindío y Nacional a las aguas de las quebradas La Colosa y La Arenosa, detectaron la presencia de coliformes fecales, que alcanzaron la cifra de 6.900 microorganismos por cada 100 ml de agua, así como de elementos químicos como arsénico y bario, atribuidos a la realización de actividades de perforación (Grupo de Investigación Geoambiental Terrae, 2016).

A esto se suma que el emprendimiento minero se establecerá en una zona ambiental protegida lo cual pondrá en riesgo el nacimiento de 161 nacimientos de agua, lo que a su vez afectará los acueductos de Cajamarca, Coello, Espinal, e Ibagué. Del mismo modo se perjudicará el Distrito de riego Uso-Coello situado al Occidente del río Magdalena, entre las localidades de Flandes, Espinal, Chicoral y Guamo el cual tiene una extensión de 63.200 hectáreas, y un área dotada con infraestructura que comprende 388 kms de canales y sistemas de drenaje que irrigan una extensión de 25.600 hectáreas, dedicadas al cultivo de arroz, algodón, sorgo, maíz, maní, tabaco, frutas, plantas ornamentales y cría de peces, para la dieta de los colombianos y de las que se benefician 2400 familias de la región(<http://www.usocoello.com/portafolio/historia.php>). Concomitante con lo anterior,

¹⁵. La lixiviación es “un proceso en el cual se extrae uno o varios solutos de un sólido, mediante la utilización de un disolvente líquido. Ambas fases entran en contacto íntimo y el soluto o los solutos pueden difundirse desde el sólido a la fase líquida, lo que produce una separación de los componentes originales del sólido”. Concepto extraído de <http://www.lixivacion.com/pagina/lixivacion-definicion>. Fecha de acceso. Abril 30 de 2017.

esta zona agroindustrial del valle del río Magdalena en el Tolima y la misma población de Cajamarca, despensas de alimentos para el país tendrán que cambiar su vocación agrícola y desplazarse de la región.

Sintetizando se puede decir que la reacción de las comunidades que componen el área proyectada para desarrollar el emprendimiento aurífero de La Colosa se explica por una titulación minera que realiza el Gobierno Central de manera inconsulta con las comunidades, afectando intereses locales como el agua, la biodiversidad, la vocación agropecuaria y los patrones de comportamiento de los que habitan este territorio. Así lo explica Jimmy Fernando Torres, líder ambiental de la población de Cajamarca (Entrevista, diciembre de 2106).

Acá hay dos cosas, una verdad la tiene el Estado y la multinacional que quiere implementar un proyecto minero disque para el desarrollo del país. La otra verdad es la de las comunidades que rechazan el extractivismo porque no son consultadas o porque no las tienen en cuenta y que protestan por las consecuencias que el proyecto genera a las futuras generaciones. Esta es una pelea con dos verdades distintas. Una de la empresa privada y el Estado que quiere hacer un hueco en una montaña donde hay muchas cosas en juego, o las comunidades que se oponen por las futuras generaciones. Es una pelea del dinero contra la conciencia.

Efectivamente, el desconocimiento de la participación activa y eficaz de las comunidades en el proceso de titulación minera por parte del Ejecutivo Central, el impacto que esta actividad genera en las cuencas hidrográficas y en las condiciones de salubridad de las poblaciones afectadas como en el desarrollo económico social y cultural de la zona, ha generado procesos organizativos que tienen como propósito defender la riqueza ecológica y cultural del ámbito local, tema que se explicará en el próximo apartado.

CAPÍTULO 3. PROCESOS ORGANIZATIVOS ANTIMINEROS DE CAJAMARCA TOLIMA

Uno de los propósitos de esta investigación es analizar el surgimiento de las organizaciones sociales anti mineras en el municipio de Cajamarca Tolima. Territorio en el que, en el año 2007, el Ejecutivo Central hizo oficial el hallazgo por parte de la Anglo Gold Ashanti (AGA) de la mina de oro La Colosa. Multinacional que había arribado a esta municipalidad en el año 1999 con el nombre de la empresa filial Sociedad Kedahada S.A., con la intención de realizar actividades de exploración y explotación minera.

Se tendrá en cuenta que los procesos organizativos hacen referencia a un conjunto de iniciativas de relacionamiento, asociación y acción colectiva, emprendidas por diversos sectores y grupos poblacionales de forma coyuntural o permanente (Torres, 2007), en los que “se llevan a cabo procesos conscientes de educación para las personas que se acercan a ella. Se trata de espacios de formación en que intencionalmente se realizan acciones para que los sujetos aprendan saberes para desenvolverse y entender el mundo de la vida” (Aguilera, González & Torres, 2015:131).

Acorde con esto en el escrito se explica el contexto en que surgen y se consolidan las organizaciones sociales que operan en la zona donde se proyecta desarrollar el emprendimiento minero. Consecutivamente analiza los propósitos que estos procesos organizativos persiguen y la articulación que establecen entre ellas. Por último, se exponen los principios y orientaciones que identifica a las organizaciones que se oponen a la ejecución de la fase de explotación aurífera a gran escala a cielo abierto en el área municipal.

3.1 Contexto en que surgen las organizaciones sociales

La desregulación y liberalización económica, corolario de la reorganización capitalista de los años 80 del siglo anterior reprimarizó la economía de las naciones latinoamericanas. El resultado de esta decisión fue el arribo de compañías transnacionales que comenzaron a disputarles a las comunidades indígenas y campesinas el acceso a sus territorios, las fuentes hídricas, bosques y demás bienes comunes. Para la apropiación de la naturaleza por parte de estas compañías foráneas extractivistas¹⁶, organismos como el Fondo Monetario

¹⁶. El extractivismo es definido como un “patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales –en gran medida no renovables- y en la expansión de las fronteras hacia territorios considerados como improductivos”, lo cual comprenden actividades de megaminería a cielo abierto, explotación de hidrocarburos, “expansión de la frontera forestal, energética y pesquera, así como la de agro negocios”, y

Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) entre otros, promovieron una serie de modificaciones en la legislación minera de nuestros países desde inicios de los años 90. Uno de los objetivos de las nuevas normas era otorgarles a estas empresas la explotación de los principales yacimientos auríferos de la región (Delgado, 2008; Svampa & Antonelli, 2009; Svampa, Bottaro & Sola, 2009).

El pionero en el acomodamiento de las políticas y leyes nacionales a las exigencias del mercado internacional, fue Chile (Banco Mundial, 1997)¹⁷. En Colombia, el desmantelamiento de la capacidad reguladora del Estado se materializó en la promulgación de la Ley 99 de 1993, mediante la cual se creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se adoptó el desarrollo sostenible¹⁸ como modelo que conduciría al país por el crecimiento económico, la mejor calidad de vida, sin agotar los recursos naturales renovables y el medio ambiente. Con el propósito de generar las condiciones para atraer la inversión privada y extranjera en el sector minero formal de gran escala, se aprobó mediante la Ley 685 del año 2001, el Nuevo Código de Minas (Ministerio del Medio Ambiente & Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2002; Riaño, 2017).

Estas nuevas leyes redimensionaron u otorgaron un valor diferente a la naturaleza como fuente de vida. En consecuencia, comenzaron a surgir colectividades sociales que se oponían al emplazamiento de emprendimientos de megaminería a gran escala a cielo abierto en sus territorios.

El eje central del conflicto que suscita ese tipo de proyectos procede de la toma de conciencia de los pobladores acerca de los efectos nefastos que esta actividad ocasiona en la biodiversidad y la vida de los lugareños de los territorios donde estos se instalan. Mientras las administraciones locales, apoyadas por los gobiernos centrales defienden este tipo de minería como factor de desarrollo, entre otros supuestos beneficios como: la generación de empleo, la compatibilidad de la minería con la agricultura y la ganadería en el mismo territorio, los lugareños se informan acerca de los efectos depredadores y

construcción de obras de infraestructura como modernas carreteras, hidroeléctricas, entre otras (Svampa & Viale, 2014).

¹⁷. Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) se aprobó la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y el Código de Minería No 18.097 de 1981. Mediante ella se autorizó la concesión de la explotación minera a compañías extranjeras. Este tipo de concesión era denominado como Concesión Plena, “ya que una vez concesionadas las pertenencias mineras del Estado, este no tenía posibilidad de recuperarlas salvo que indemnizara a la concesionaria por los gastos de inversión, pagando al contado el valor de todo el mineral contenido en el yacimiento hasta su total extinción” (Padilla, 2012).

¹⁸. El desarrollo sostenible es denominado también el “evangelio de la ecoeficiencia”. Es una tendencia ambiental preocupada por “el manejo sustentable o “uso prudente” de los recursos naturales y por el control de la contaminación no sólo en contextos industriales sino en la agricultura, la pesca y la silvicultura, descansando en la creencia de que las nuevas tecnologías y la “internacionalización de las externalidades” son instrumentos decisivos de la modernización ecológica” (Martínez, 2009: 31).

contaminantes que estos emprendimientos mineros producen en la naturaleza y las formas diversas de vida construidas en los territorios a lo largo de los años (Machado, et. al., 2012).

El primer componente de discusión que ha originado levantamientos sociales de protesta en Colombia es el agua: bien común que utilizan las empresas mineras para los procesos de lixiviación, y vital para la actividad agropecuaria que desarrollan las colectividades. Las consignas más usuales de las acciones colectivas que realizan las comunidades en protesta por los emprendimientos mineros como: marchas, plantones, bloqueos, huelgas de hambre, asambleas barriales, manifestaciones masivas e impulso a consultas populares son: *“Agua si oro no”*. *“El agua vale más que el oro”*. *“Queremos agua, queremos maíz, multinacionales fuera del país”*.

Consignas que les ha permitido a los habitantes de los territorios amenazados por los emprendimientos mineros, generar una acción y una identidad colectiva, dar formas a sus reclamos y ampliar el margen de comprensión de lo que está pasando en otras latitudes donde se adelantan emprendimientos similares (Giarracca & Hadad, 2009).

El significado de estas expresiones evidencia una realidad palpable: el agua es un bien común, esencial para mantener la vida de la población y su uso en las actividades agropecuarias es incompatible con la minería. No así el oro. Un mineral que genera poca rentabilidad y la forma en que se extrae de la naturaleza no garantiza el bienestar de la población¹⁹.

Muestra de ello es Cajamarca. Sitio denominado como “la reserva agrícola de Colombia” por ser un productor potencial de arracacha, frijol y gran variedad de frutas y verduras de clima frío y templado. Allí la AGA utilizaba hasta abril del año 2017, en actividades de exploración minera cerca de 400 cargos. Por su parte el sector agrícola ocupaba entre 8 mil y 10 mil empleos, dependiendo de la temporada de cosecha o siembra.

En este sentido, Jorge Enrique Cardoso director de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) expresaba que: “la estabilidad de una cuenca hidrográfica que soporta más de 600 mil habitantes, es más importante que 400 empleos” muchos de ellos de carácter ficticio (El Nuevo Día, mayo 8 de 2017). Cardoso hacía referencia a los ríos: Anaime, Bermellón, Capotal, Toche, y su cuenca mayor el Coello. Fuentes hídricas que nacen en Cajamarca y que surten de agua a municipios como: Ibagué, Espinal, Coello,

¹⁹. Pese a que entre los años 2000 y 2015, el sector minero en Colombia, aportó en promedio el 6,87 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, durante el mismo periodo solo contribuyó con el 1,08 por ciento de la ocupación total. Por su parte, la agricultura y la industria manufacturera aportaron, el 15,94 por ciento y 11,83 por ciento de la ocupación respectivamente (Pérez, 2017).

Rovira, San Luis y Flandes. Lugares donde se asienta el 70 por ciento de habitantes del departamento.

Otro elemento de discusión es el territorio. Mientras que para las empresas mineras el interés está relacionado con la centralidad que estos cobran como proveedores de agua, tierras y el lugar donde se emplazará la infraestructura necesaria para la explotación del mineral aurífero, para las comunidades representa: el sitio donde se unen el pasado y el futuro, se realiza la historia familiar y se orientan prácticas sociales que garantizan y sostienen las formas de vida.

Valoración del territorio ligada a afectos ancestrales derivados de herencia familiar. También sitio de destino, a los que muchos lugareños han arribado en búsqueda mejores condiciones de vida que ya no hallan en las grandes ciudades del país. (Sola & Bottaro, 2012). Lugares hoy amenazados por los proyectos extractivos Así lo explicaba Jimy Torres líder integrante de la organización Conciencia Campesina aludiendo al regreso a Cajamarca el mismo año de oficialización de la llegada de AGA al municipio en el año 2007.

En esa época me vine de Bogotá donde tenía una distribuidora de dulces, me hicieron el paseo millonario y casi me matan. Me vine porque fue grave, y quise buscar un mejor bienestar. Por ello me dediqué a la finca, luego me inscribí en la Universidad del Tolima (UT) a estudiar tecnología forestal a distancia. Comencé a darme la pelea por el tema minero porque había 14 personas que trabajaban con AGA, 4 que no se pronunciaban ni a favor ni en contra y 2 que éramos contradictores. Se fue dando el trabajo con las comunidades, soy campesino, trabajo la tierra, y en esos quehaceres se fue mezclando el tema de la universidad y el trabajo del campo. Con el acompañamiento del profesor Renzo Alexander García de la UT, nace también Conciencia Campesina, quien me acompañó a hacer una minga comunitaria y una carretera en la vereda El Águila (Entrevista a Jimy Torres, Cajamarca, diciembre de 2016).

A estas concepciones del territorio convergen también ideas propias de las comunidades indígenas quienes se piensan parte de la tierra o Pachamama. Configuración subjetiva que sustenta la propiedad colectiva de la misma, que los habilita para entender que ésta no se vende ni se alquila, por constituir el sustento económico, social y cultural (Giarriacca & Hadad, 2009). Consideración de la que se derivan factores de identidad, autonomía, y derechos ambientales y económicos, relacionados con el goce de un ambiente sano, protegidos por el Estado y la legislación colombiana (Semper, 2006). Por estas razones las actividades minero extractivas que se desarrollan en sus territorios indígenas constituye uno de los factores de afectación y amenaza para los ecosistemas estratégicos en que habitan (Pabón, 2015).

Percepción del territorio como lugar ancestral y heredado en que convergen también ideas de las comunidades campesinas en las que se desarrollan actividades extractivas. “Si protegemos la tierra, el territorio donde estamos viviendo, estamos defendiendo la Pachamama, y lo que ella nos proporciona: el agua, el alimento, por lo cual debemos rendirle tributo y respeto, tal como dicen los indígenas”, afirmaba un campesino de Cajamarca (Entrevista a Gustavo Pulido, diciembre de 2016). Por su parte, Carlos Gámez (Entrevista, diciembre de 2016) fundador de la organización Unión Campesina argumentaba: “Cuando uno va a cavar o tumbar una montaña, me hago daño yo mismo y se lo hago a los demás: a los animales, la naturaleza, la que nos dio la vida. Hay que aprender a respetar eso”.

En suma, desde el punto de vista económico y ecológico, los emprendimientos mineros desatan conflictos debido a la expropiación y degradación territorial, base material de la vida de las poblaciones locales. Revelación que se manifiesta también como producto de las afectaciones que la apropiación desigual de los bienes naturales tiene sobre la salud de la población y el acceso y disposición de los mismos como medios de vida. En su dimensión cultural, estas luchas reflejan representaciones antagónicas del mundo y visiones contrapuestas sobre la naturaleza. Desde la perspectiva política, “los conflictos mineros expresan disputas en torno a la capacidad de decidir sobre los territorios en cuanto espacios de vida en común: se trata de un antagonismo respecto de quiénes y cómo definen la regulación social válida para habitar/producir en el territorio” (Machado, 2015: 19).

Resultado de esta contradicción entre las comunidades, los gobiernos y las empresas en torno a los emprendimientos mineros, han surgido en América Latina conflictos ambientales²⁰, denominados por Svampa & Viale (2014) como giro ecoterritorial. Luchas que hacen uso de un lenguaje común o marcos comunitarios de acción relacionados con la defensa de los territorios y los bienes comunes, la justicia ambiental, los derechos de la naturaleza, el buen vivir, la soberanía y los derechos humanos. Choques que reclaman la democratización de las decisiones y el “derecho de los pueblos a decir “No” frente a proyectos que afectan fuertemente las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y comprometen el porvenir de las futuras generaciones” (Sola & Bottaro, 2012: 35).

Luchas ambientales en las que el “no a la mina” se vuelve un eje articulador que llega a cohesionar a la gente más allá de sus diferencias políticas, religiosas y personales y en las que los involucrados en ellas se dicen unos a otros: “si no damos esta batalla juntos

²⁰. Los conflictos ambientales son un tipo de conflicto social de carácter procesual, en el cual se generan alianzas y adhesiones a valores que ocasionan disputas en torno del control de bienes y recursos acerca de la contaminación o más generalmente, “sobre el poder de generar o imponer ciertas definiciones de la realidad. Además, en tanto oportunidades de organización e interacción social, los cuales pueden conformarse en espacios de aprendizaje social donde se formulan y reformulan las identidades colectivas” (Walter, 2008: 16).

entonces nos va a ir muy mal. Hay que estar juntos para que a todos nos vaya bien” (Navarro, 2015). No a la mina que

se constituye en consigna de lucha colectiva de fuerte carácter migratorio, expresivo e inclusivo, pero es también la construcción de una identidad subjetiva e intersubjetiva (“son sujetos diciendo no”) y de una formación discursiva que interpela al dispositivo hegemónico y la implementación de este modelo extractivo-exportador en esta disputa por el desarrollo...A la consigna de “No a la mina”, le sigue la denuncia “contra el saqueo y la contaminación” (Marín, 2009: 185).

Estos elementos de articulación de los conflictos que involucra principalmente a comunidades indígenas, campesinas, estudiantes, amas de casa y otros sectores afectados por actividades mineras, impulsaron la conformación de organizaciones sociales y asambleas populares de resistencia²¹ en América Latina desde la década de los noventa y principios del siglo XXI²².

²¹. La resistencia es definida como “formas públicas, más o menos organizadas, de manifestarse para dar a conocer (y sentir) a la opinión pública y a las autoridades el peso de una posición y, al mismo tiempo, presionar a dichas autoridades o, en algún caso, obstaculizar directamente con la presencia física de nuestros cuerpos, la realización de algún acto autoritario. Estas manifestaciones no se ciñen a los canales institucionalizados marcados por la ley, aunque no necesariamente están en contra de ellos” (Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) S/f: 12).

²². Los conflictos ambientales más representativos en América Latina sucedieron en Tambogrande (Perú) y Esquel (Argentina), a comienzos del siglo presente. Sitios donde las multinacionales canadienses: Manhattan Minerals y Meridian Gold (MG) respectivamente, proyectaban la realización de actividades de exploración y explotación minera a gran escala a cielo abierto. En ambos lugares se realizaron consultas populares, con el fin de consultarle a la población si estaban o no de acuerdo con dichos emprendimientos en el territorio. A la realizada en Tambogrande el 2 de junio del año 2002 y a la que acudieron el 74, 14 de los electores registrados en el censo electoral, el 93, 95 de los votos totales lo hicieron por el No. En la efectuada en Esquel el 23 de marzo del año 2003, el 81 por ciento de los votos lo hicieron también por el No.

La organización que contribuyó a apuntalar un movimiento local de resistencia en Esquel fue la conformación de la Asambleas de Vecinos Autoconvocados (AVA). Proceso organizativo que devino en el mismo año 2003 en el surgimiento de la Red de Comunidades Afectadas por la Minería (Red CAMA). Tres años más tarde surgiría en la misma nación argentina la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) con fin de articular los procesos de resistencias de provincias como Chubet, Río Negro, La Rioja, Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba y San Luís, entre otras, surgidos en los años siguientes.

Las acciones colectivas que realizaban estas organizaciones eran comúnmente, bloqueos o cortes de ruta y caminos, marchas, y presentación de peticiones tales como recursos de amparos, denuncias, y demás acciones legales. El propósito que estas acciones perseguían era derogar y anular leyes nacionales de minería y del código minero, así como lograr la aprobación de normas que prohibieran la minería a cielo abierto realizada con sustancias tóxicas.

Estas acciones colectivas eran acompañadas de actividades educativas como: charlas en las escuelas, proyección de videos en plazas públicas, difusión en medios de comunicación local, marchas y caravanas. El propósito era informar y generar conciencia en la comunidad sobre el impacto económico y el patrimonio

3.2 Origen de las organizaciones sociales antimineras de Cajamarca

Los aprendizajes generados por la Asamblea de Autoconvocados (AVA) en Esquel, emanados a su vez de sucesos afines acaecidos en las regiones peruanas de Cajamarca (Allí operaba la mina Yanacocha) y Tambogrande durante la primera década del siglo XXI, actuaron como faro en la comunidad de Cajamarca Tolima. Comarca que desde estos mismos años se sumó a la emergencia de procesos organizativos de resistencia, suscitados por la puesta en marcha del proyecto de explotación aurífera de la mina La Colosa en su territorio²³.

El hallazgo había sido realizado por la AGA. Empresa multinacional sudafricana, que se constituyó legalmente en el año 2003 y que comenzó a operar secretamente en el lugar desde el año 1999 con el nombre de Sociedad Kedhada S.A. Según David Hall y Cris Lodder, directores de exploración de AGA suramericana y de Perú, Ecuador y Colombia respectivamente, las exploraciones en el lugar se comenzaron a realizar desde este último año a lo largo del arroyo La Colosa, localizado en las veredas La Luisa y La Paloma entre el casco urbano de Cajamarca y el Alto de la Línea (Pax, 2016).

La emergencia e irrupción de procesos organizativos fundamentados en el activismo ambiental lo iniciaron personas de la ciudad de Ibagué y la misma Cajamarca, principalmente integrantes de la organización **Emprendedores por la Ecología y la Tierra (Ecotierra)**. Estructura social constituida antes del anuncio del Ejecutivo Central. Sus integrantes, liderados por Evelio Campos empezaron a informarse acerca de AGA, multinacional encargada de adelantar el emprendimiento. Indagaciones basadas en las experiencias de explotación minera en países latinoamericanos, Asia, África y lugares de Colombia como Chocó, Boyacá, el sur de Bolívar y el norte antioqueño, los condujeron a alertar a la comunidad a través de foros, charlas, documentales, talleres, etc., sobre los impactos negativos que tendría el proyecto para las fuentes hídricas, la biodiversidad y la agricultura de la región (Quintana, 2016).

Otra de las organizaciones formadas antes del arribo de AGA es **El Colectivo Socio – ambiental de Cajamarca (Cosajuca)**. Surge en abril del año 2007 como una iniciativa juvenil de Colegiales y universitarios, quienes decidieron juntarse para exigir de las

ecológico y ambiental de los territorios que generaban estos emprendimientos mineros (Alvarado, 2008; Walter, 2008; Marín, 2009; Svampa, Sola & Bottaro, 2009; Sola & Bottaro, 2012; Cohen, 2015).

²³. El hallazgo de la mina de oro La Colosa en Cajamarca Tolima fue oficializado al país por el Gobierno Central en el mes de diciembre del año 2007. Se calculaba entonces que el yacimiento contenía aproximadamente 12,3 millones de onzas de oro. Considerado como uno de los más grandes del mundo (El Tiempo, diciembre 21 de 2007).

autoridades locales y regionales, la conformación de un espacio público donde pudieran reunirse para proyectar sueños, esperanzas, y discutir cómo contribuir en la construcción de un mundo diferente para los jóvenes de la localidad. Ante la certeza que iban a ser los jóvenes quienes a futuro soportarían sus efectos, deciden convertir el tema minero en parte de su agenda y orientar el accionar de la organización a defender el territorio, la madre tierra y la vida digna²⁴.

Las Acciones colectivas de las que se derivaban procesos educativos, incluía proyección de videos, realización de talleres, juntas comunales, mingas comunitarias, cabildos abiertos y repartición de volantes en los que informaban a los asistentes el resultado de sus indagaciones. Según expresa un miembro de esta organización:

de todas estas acciones los campesinos aprenden que son cajamarquinos y nosotros enseñamos no solo conocimientos sino a compartir. Asimismo, que las personas se cansan de escuchar y quieren que los líderes vayan y vivan con los campesinos para tener más confianza y contacto (Entrevista a Robinson Mejía Alonso, octubre de 2016).

Las pesquisas de los miembros de estas dos organizaciones los llevó a deducir que ésta actividad produce inicialmente un boom económico transitorio que deja impactos ambientales, sociales y económicos adversos, además de presentar una pérdida de soberanía sobre el territorio. En este sentido, Evelio Campos, coordinador general de la organización Ecotierra, aseguró en el año 2010, que después de tres años de un riguroso seguimiento a las consecuencias que generaría el emprendimiento minero en La Colosa en Cajamarca, no había encontrado un solo emprendimiento minero en Latinoamérica y en el mundo compatible con las actividades agrícolas y pecuarias que desarrollan las comunidades, o que haya sido beneficioso para las personas que viven alrededor del él. Según el mismo Campos, todo proyecto megaminero es “indudablemente enriquecedor para la compañía minera, para los funcionarios públicos y para quienes entregan las licencias, pero no para sus pobladores”²⁵. A las aseveraciones del líder social respondió el gerente de la compañía minera Rafael Herz, argumentando que la minería y agro si eran compatibles debido a que la tecnología usada durante las fase de exploración y explotación reducían al mínimo los impactos al medio ambiente. También que cuando un proyecto minero llegaba a una zona

²⁴. Cosajuca (2013). “Violaciones de derechos humanos. Caso colectivo socio - Ambiental COSAJUCA”. En: https://issuu.com/lainconquistable/docs/informe_cosajuca_ddhh. Fecha de acceso, junio 17 de 2017.

²⁵. “La Colosa se convierte en símbolo de resistencia” En: <https://www.traslacoladelarata.com/2012/02/21/la-colosa-se-convierte-en-simbolo-de-resistencia/>. Fecha de acceso, junio 17 de 2017.

de extrema pobreza, las comunidades sentían que no tenían nada que perder, y que por el contrario, podían sacar provecho de ello²⁶.

El inicio del proceso de resistencia al emprendimiento minero a gran escala en Cajamarca estuvo marcado igualmente por el surgimiento de la organización **Conciencia Campesina** a comienzos del año 2009. Estructura social que tuvo su origen en la advertencia que le hicieron a la comunidad del corregimiento de Anaime: Jimmy Fernando Torres y Wilson Báez, campesinos de la vereda El Águila, acerca de la suplantación de las obligaciones del Estado que realizan en los territorios mineros las compañías multinacionales. Los dos lugareños se habían opuesto en el año 2008 al ofrecimiento de AGA de pintar la escuela de la zona, procediendo a devolver el material a la compañía. El argumento de los labriegos era que la labor del mantenimiento de las instituciones escolares, el arreglo de las vías terciarias, la reforestación, etc., debía ejecutarse con dineros del presupuesto municipal y no con el de empresas que sustituyen el Estado.

Nos tocó pintar la escuela entre los dos y echarnos la comunidad encima. Al principio la gente nos trataba de locos e ignorantes y nos decía ‘no, ¿Cómo no van a recibir eso? Entonces, cuando comenzamos a hablar con la gente, a decirles que eso no era bueno, no estábamos constituidos todavía, de hecho, no le teníamos nombre a la organización. A pintar esa escuela nos ayudaron personas del extranjero. Resulta que reunimos entre quince personas de la comunidad como 600 mil pesos para comprar la pintura. Yo me vine al pueblo a conseguir materiales, y me encontré con Renzo García de la Universidad del Tolima y una delegación internacional aquí en Cajamarca, a quienes les conté la experiencia. Esa delegación se llamaba Colombia Solidarity Campaign, los que hicieron la investigación de La Colosa. Nos llevamos a todos los extranjeros a tomar fotos, a hacer videos y terminamos pintado la escuela como 80 personas en un trabajo muy sincronizado. Eso

²⁶. “Proyecto minero La Colosa, a audiencia pública”. En: <http://www.ideaspaz.org/tools/download/46810>. Fecha de acceso, junio 11 del 2017. En el marco de la celebración de una audiencia pública realizada en febrero del año 2008 en la población de Cajamarca, el senador Jorge Enrique Robledo denunció que la AGA había violado las leyes colombianas debido a la realización de actividades de exploración en 6,3 hectáreas que hacían parte del área de la Reserva Forestal Central sin haber solicitado la licencia de sustracción respectiva, excediendo los límites de las 515, 75 hectáreas que había solicitado explorar inicialmente. A esta área pretendían sumar 22 mil hectáreas más en 2015. Para ello pidieron licencia o autorización (no aprobada aún) al Ministerio del Medio Ambiente y a la Agencia de Licencias Ambientales (ANLA). Espacio que cubre territorios correspondientes al cañón de los ríos Anaime y Combeima, los páramos de Chili y Barragán, y jurisdicciones de los municipios de Salento y Pijao en el departamento del Quindío (Entrevista a Jimmy Fernando Torres, diciembre de 2016).

hizo que se despertara un sentimiento de pertenencia por la comunidad (Entrevista a Jimmy Fernando Torres, diciembre de 2016).

La acción influyó en la emergencia de un sentimiento de identidad y pertenencia con el territorio local. Según Jimmy Fernando Torres (Entrevista, diciembre de 2016), “esa misma tarde nació la idea de crear una organización. Comenzamos a mirar que los campesinos tenían dignidad, que no se vendían. Nació así Conciencia Campesina para defender la región de la minería. Comenzamos a hacer los estatutos, todo lo que necesitaba para ser registrados ante la Cámara de Comercio”.

Cuando la comunidad de Las Hormas se enteró de lo sucedido en la vereda El Águila, también se sintieron indignados y procedieron a bloquear la vía por la que funcionarios de AGA movilizaban maquinaria destinada a realizar exploraciones secretas en el lugar. Las acciones colectivas que realizaban los labriegos las hacían porque sabían que si se aprobaba la explotación minera, “con esos millones de toneladas de montañas que irían a remover y a contaminar, no se podría nunca sembrar arracacha, arveja, papa y frijol” (El Tiempo, abril 22 de 2010).

Días después, las comunidades de ambas veredas realizaron una fiesta comunitaria en la vereda El Ródano-Arenilla-Travesías, a la que asistieron: el líder de Ecotierra, Evelio Campos y algunos profesores de la Universidad del Tolima. Según el empresario tolimense Jairo Arias también asistente al evento, esa tarde “con el auditorio colmado de campesinos libres, emergió la voz delicada de Delfina Fajardo cantando el himno de la vereda El Águila: "Porque te llevo en la sangre y en los sentidos/ aquí me diste la vida terruño mío/ por eso te quiero tanto/ te adoro mucho y por ti yo vivo/"(El Tiempo, abril 22 de 2010).

Al lado de las anteriores expresiones de resistencia colectiva emergen en el territorio de Cajamarca también formas organizativas de resistencia inspiradas en criterios de solidaridad, ayuda mutua, y cooperación. Prototipo de esta premisa es la **Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra)**. Según información suministrada por Yolanda Rojas (Entrevista, diciembre de 2016), este proceso organizativo se constituyó en el año 2002 y se legalizó en el año 2006. El objetivo fundamental era producir bienes agrícolas como frutas y verduras sin utilizar agrotóxicos a fin de conservar agrosistemas sostenibles y ecológicos, mejorando la calidad de vida de los productores como de los consumidores (Sánchez, 2013).

Con el anuncio del advenimiento de la AGA, Apacra incorporó a sus labores agrícolas de carácter orgánico, la lucha por la defensa del agua, el territorio, la biodiversidad y la vida. Para el cumplimiento de este propósito, sus integrantes articularon su accionar con miembros de organizaciones como Conciencia Campesina, Cosajuca, Ecotierra, y demás

lugareños que tenían nociones sobre los efectos que generaban los emprendimientos mineros a gran escala.

Además de cultivar sus propios alimentos sin usar agrotóxicos, los miembros de la organización combinan la realización de estas acciones colectivas contra la minería, con la producción de comestibles como yogurt de ahuyama, de café, de arracacha, galletas de chachafruto, tortas de cidra, entre otros suministros alimenticios originarios de la comarca. Según manifestaba a un periodista otra de sus integrantes, esto les permitió trascender

de la marcha, del gritar, de los medios, del internet de todas estas cosas que generalmente son las que hacemos los “ambientalistas” como nos llaman, a las propuestas del extractivismo. Se trasciende en una alternativa de producción. El verdadero buen vivir está en empoderar a la gente, en decirle a la gente hay cosas que pueden ser muy rentables que pueden no dañar el medio ambiente y por el contrario contribuir a la salud (Entrevista a Cielo Báez, *El Tiempo*, marzo 28 de 2017)²⁷.

La realización de este tipo de trabajos, les permitió a los miembros de las organizaciones, ser conocidos en las poblaciones de Anaime y Cajamarca y recibir invitaciones a dar charlas a la UT. En los conversatorios participaban también expertos en minería de talla internacional como Robert Moran, Alberto Acosta, María Stella Svampa, Horacio Machado, entre otros. Según Jimmy Fernando Torres (Entrevista, diciembre de 2106), integrante de Conciencia Campesina, “Renzo nos invitaba a dar charlas con nuestras palabras y a nuestro estilo. Con palabras sencillas que nos salían del corazón comenzamos a hacer ese enlace tan fuerte como el que tenemos hoy”.

A la par de las acciones emprendidas en el área rural de Cajamarca, en el año 2009 estudiantes, profesores y egresados de la UT comenzaron oponerse a que el centro educativo realizara un convenio con AGA, por la cifra de mil seiscientos veintisiete millones de pesos. El acuerdo contemplaba la realización por parte del centro académico de un estudio de impacto ambiental generado por las actividades mineras de la multinacional en el área del emprendimiento minero. El convenio contemplaba el carácter de confidencialidad, y su contenido podía ser cambiado o modificado de acuerdo a los intereses de la empresa. Las reuniones del Consejo Superior de la Universidad, del que hacía parte como representante de los estudiantes Jaime Tocora, y donde se discutía la aceptación del acuerdo, eran presionadas desde la parte exterior con música, malabares, y consignas que rechazaban su realización. “Esto porque pensábamos que la academia no

²⁷. Mateus T, J. (2017). “Así nació uno de los grupos de resistencia a la minería en Cajamarca”. En: *El Tiempo*, marzo 28.

podía realizar convenios con este tipo de empresas con un prontuario criminal” (Entrevista a Jaime Tocora, octubre de 2016)²⁸.

De la oposición por parte de estudiantes y profesores de la UT a la firma del convenio con la AGA, emergió a finales del año 2009, el grupo **La Reversa**, cuyo nombre aludía a la necesidad de revertir el megaproyecto minero. Denominación que sugería además mirar hacia atrás no como algo negativo, sino a la necesidad de

reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestras raíces, con nuestra identidad, con lo que somos. Cuestión que hemos olvidado por la imposición de modelos que no son nuestros, que atentan contra la vida y que están desconociendo nuestra realidad social, cultural y natural, por ejemplo, la biodiversidad y toda la dinámica intertropical (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

Los integrantes de la agrupación La Reversa en alianza con las organizaciones de Ecotierra, Conciencia Campesina, Cosajuca, Apacra y la Organización No Gubernamental (ONG) Pax Christi, recorrían periódicamente los barrios de la localidad de Cajamarca informándole a la gente en qué consistía el proyecto y el accionar de la AGA. Estas actividades eran acompañadas también con la realización de acciones colectivas como: movilizaciones, talleres, foros, cabildos abiertos, proyección de videos, bloqueo de vías, y acciones jurídicas como derechos de petición o recolección de firmas con el fin de preparar consultas populares. Acciones en las que además se distribuían panfletos que contenían información técnica relacionada con la minería a cielo abierto acopiada por sectores académicos interesados en la problemática y las razones por las cuales debían decirle “No a la mina”.

Nos inventamos un tema que era como una vacuna contra el cianuro. Y como no teníamos plata compramos rollos de cinta azul y pasábamos por las casas y

²⁸. El pasado vergonzoso de la AGA comprende: la adjudicación en el año 2011 del premio Public Eye Award en Davos (Suiza) el cual la distinguía como la “Compañía más irresponsable del mundo” debido al historial de impacto sobre el medio ambiente y violación de derechos humanos en países del continente africano. Los delitos comprenden la financiación del grupo paramilitar Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) en el Congo, con el fin de obtener terrenos para la exploración; ocasionar daños ambientales en Ghana relacionados con afectaciones de aguas para beber, e inundación de cultivos, casas y escuelas con aguas proveniente de piscinas de lixiviación; desplazamientos masivos en Tanzania y responsabilidad en la proliferación de enfermedades pulmonares, abortos y violación de derechos de los trabajadores en Mali y Sudáfrica. Además, se le acusa de haber obtenido beneficios del sistema de Apartheid y la dictadura de los blancos (Sánchez, 2013; Indermühle, 2011).

poníamos eso, comenzamos a comunicarnos con la población y a conocer de primera mano el accionar de la multinacional (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

A la par, los integrantes de dichas organizaciones comenzaron a formar a sus integrantes en la agricultura orgánica, la agroecología y a investigar más sobre la minería a gran escala. Con el fin de nutrir el debate la ONG holandesa **Pax Christi** patrocinó a comienzos del año 2010 el viaje a la población peruana de Cajamarca, de los profesores de la U T: Gonzalo Palomino, Renzo Alexander García, Humberto Pérez. De la comisión hacían parte también Evelio Campos y Luis Carlos Hernández vocero de la ONG Ecotierra y Jairo Arias, líder de opinión y empresario textil de la ciudad de Ibagué. En este lugar operaba la compañía Newmont Mining Corporation, que explotaba desde comienzos de los años 90 la mina Yanacocha, considerada entonces como la más grande del mundo.

El primer hallazgo de la comisión fue que esta multinacional arrancó casi igual a la forma como lo hicieron en Cajamarca Tolima, diciendo en el año 1992, que iba a ser una mina pequeña de 700 hectáreas, que iban a extraer 13 millones de onzas de oro. En el año 2010 según nos dijo la comunidad, ya habían intervenido 26 mil hectáreas y habían sacado casi 30 millones de onzas (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

Los visitantes encontraron que en un cuarto de siglo de operación de la mina Yanacocha, se habían extraído 29 millones de onzas de oro que tenían un valor de 35 millones de dólares, de los cuales la compañía encargada de la explotación había transferido a la población de Cajamarca por “canon minero”²⁹ menos del 2 por ciento. Dinero que se había invertido en obras como: un hospital que contenía equipos costosos que no se utilizaban. Un estadio para una población que no tenía equipo de fútbol, así como un coliseo para la compra y venta de ganado, de lo cual no se beneficiaban los lugareños que seguían viviendo de actividades agropecuarias de carácter minifundista³⁰. Por ende, la participación efectiva que había recibido el gobierno regional y local, donde opera la mina no había contribuido a amainar el índice de pobreza. Desde 1993 cuando se produjo la primera barra de oro, a los habitantes de la región les habían dicho que ese oro era símbolo de progreso. Para entonces, la región de Cajamarca en Perú, entre 25 era la cuarta más pobre del país. Meses antes del

²⁹. “Según el ordenamiento jurídico peruano, el Canon Minero es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos Regionales y Locales (municipalidades provinciales y distritales) del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos)”. Ver: [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A9980AD73BC542D005257C210067C2FF/\\$FILE/pdf_183_que-es-el-canon-minero.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A9980AD73BC542D005257C210067C2FF/$FILE/pdf_183_que-es-el-canon-minero.pdf)

³⁰. “Líderes tolimenses conocieron la mina Yanacocha, en Perú. Aquí no queremos ese absurdo ambiental”. En: *Revista 14.6 la temperatura promedio del planeta*. Febrero-marzo de 2010. No 16.

arribo de la visita de la Comisión tolimense ocupaba el segundo lugar con más del 70 por ciento de la gente viviendo en condiciones de pobreza (Kairuz, 2009).

En efecto, el cura párroco José Carmelo Martínez, le informó a la comisión que un campesino tenía entonces en promedio una producción de 5 litros diarios de leche, los cuales vendía en 5 soles equivalentes a 1,5 dólares con los que tenía que vivir diariamente. Los profesores solo asistían a clase los días miércoles debido a que tenían que recorrer entre 8 y 10 horas para llegar a la escuela. La población, que recibía el servicio de agua dos horas al día, había pasado de 40 mil a 300 mil personas, muchas de las cuales se dedicaban a actividades delincuenciales, prostitución, y drogadicción. A lo anterior se sumaban: los pasivos ambientales como la contaminación de las cuencas hidrográficas con mercurio lo que ocasionaba enfermedades cancerígenas, abortos y malformaciones en la población, producto de derrames del químico o de las tormentas de polvo tóxico³¹. Su condición era inferior a la de antes que empezara la explotación minera.

Debido a esto la comisión en pleno al regresar a Colombia, reveló el temor que a Cajamarca Tolima le pasara lo mismo que a Cajamarca Perú. Uno de los delegados manifestó al respecto:

Lo que concluimos después de ese viaje es que nos toca hacer hasta lo imposible para que ese proyecto no llegue a nuestro territorio. Arrancaron casi igual a la forma como lo hicieron en Cajamarca Tolima, diciendo en el año 1992 que iba a ser una mina pequeña de 700 hectáreas, que iban a extraer 13 millones de onzas de oro y cuando fuimos nosotros en el año 2010 nos dice la comunidad que habían intervenido 26 mil hectáreas, que habían sacado casi 30 millones de onzas de oro. Cajamarca era para ese momento la 4 región más pobre del Perú y casi 16 años después comenzamos a identificar que es la región más pobre de ese país. Uno queda absolutamente convencido que esos proyectos no deberían pasar en esos territorios. De ahí comenzamos a fortalecer nuestro activismo ambiental y a mirar cómo impulsábamos jornadas de capacitación y demás (Entrevista a Renzo Alexander García, diciembre de 2016).

La intensificación del debate generada con la visita a la mina de Yanacocha en Perú, medió para que surgieran en los años siguientes otros procesos organizaciones opuestas a la ejecución del emprendimiento minero de la Colosa.

Justamente, a comienzos de febrero del año 2011 surge en el corregimiento de Anaime la Organización **Socio – Ambiental en Defensa del Cañón de Anaime (OSADA)**, en el

³¹. *Ibíd.*

marco de la exposición que funcionarios de la AGA realizaban a habitantes de la comarca del proyecto denominado como Colosa regional. Intención consistente en expandir las actividades de exploración aurífera hasta departamentos como Quindío, Risaralda, Caldas y el sur de Antioquia (ver capítulo No 2). En la reunión se informó también sobre actividades de prospección minera en la vereda Las Hormas. Los lugareños y labriegos de la comarca fastidiados y molestos por los anuncios, procedieron a expulsar a los expositores y en señal de protesta acordaron la creación de la nueva organización.

Lo que incitó su surgimiento fue la certeza que la explotación minera podía contaminar las aguas del río Anaime; afectar la biodiversidad de la zona y hacer desaparecer la montaña La Guala. Factores que incidirían en la transformación de la vocación agrícola del municipio, el consiguiente desabastecimiento de alimentos a ciudades como Ibagué y Armenia, y el riesgo a la seguridad alimentaria de la región (Sánchez, 2013). Inconformismo que se expresaba en grafitis que aparecían en las paredes de la municipalidad y en los que se leía “Si a la vida, No a la mina”. Esto condujo a la realización de intimidaciones constantes, persecuciones y detenciones masivas e irregulares de integrantes de organizaciones juveniles de Cajamarca, quienes eran capturados por parte de la fuerza pública, no en el acto sino después de la aparición de los escritos (Cosajuca, 2013).

Ante la inexistencia en el movimiento de oposición a la gran minería de organizaciones que trabajaran específicamente la promoción y protección de los derechos humanos de las colectividades, surge a mediados del año 2012 la **Fundación Vida Libre**. Según Julio Roberto Vargas, uno de sus fundadores, el propósito es integrar y “permear a todas las demás organizaciones. Debido a que los derechos humanos son universales y porque a la gente siempre se les llama para marchar, pero no se integran para saber qué pensaban y tomar decisiones de manera conjunta” (Entrevista a Julio Vargas, diciembre de 2016)

Con la intención de unir a la comunidad campesina, independientemente de su color político, en la lucha por la defensa, el respeto del territorio y las amenaza que representa para el mismo la exploración y posible explotación minera, surge en el año 2010 en la vereda Los Alpes la **Organización Unión Campesina por la Defensa del Medio Ambiente y el Territorio (UCAT)**. Según pregona Carlos Gámez, uno de sus fundadores (Entrevista, diciembre de 2016), si no se orienta o educa a los campesinos sobre los efectos que ocasiona la minería a cielo abierto y la importancia que tiene para la región la Despensa Agrícola de Colombia esto se pierde. “El territorio es la tierra, los animales, la gente y eso es lo que hay que tratar de defender. Hay que valorar esto porque si no apreciamos lo que tenemos está perdiendo la economía de uno. La alegría de los animales, la naturaleza y lo que ello representa se pierde”.

Una de las últimas organizaciones que surge en el año 2013 es la denominada **Organización Asocuencia Chorros Blancos** de la vereda Rincón Placer. Sitio del cual se surte de agua la población de Cajamarca. Emerge en esta época como resultado de la realización de actividades de cateo o exploración, efectuadas por la AGA, para lo cual procede a levantar campamentos y transportar al lugar maquinaria y equipos. La resistencia de la comunidad consistió en bloquear durante cuatro días la subida de camiones de la compañía. En la acción participaron 37 campesinos que fueron catalogados como guerrilleros por el alcalde municipal (Entrevista a José Domingo Rodríguez, diciembre de 2016).

3.3 Articulación de las organizaciones sociales antimineras de Cajamarca Tolima

Los procesos organizativos que surgieron en el territorio tolimese de Cajamarca e Ibagué para hacerle oposición al proyecto minero de La Colosa estuvieron influidos también por la experiencia organizativa de resistencia que había emergido en el año 2009 en el departamento de Santander contra la multinacional canadiense Eco Oro Minerals (antes GreyStar). Empresa que pretendía iniciar un proyecto aurífero similar en el páramo de Santurbán. Ecosistema del que pretendían extraer 12,5 millones de onzas de oro, y del que proviene el agua que consumen 5 millones de habitantes del área metropolitana de Cúcuta y Bucaramanga, jurisdicción de la que hacen parte 20 municipios de Norte de Santander y 10 de Santander³².

Efectivamente, la resistencia al emprendimiento minero, llamado por la empresa canadiense como “Proyecto Angostura” se unificó a través de una figura o plataforma social denominada **Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán**, de la cual hacen parte más de 40 organizaciones sociales que no habían estado acopladas, y que se juntaron con el fin común de contener el inicio de la fase extractiva. A la agrupación confluyeron organizaciones ambientales, sindicales, estudiantiles, barriales y académicas como: la sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras Públicas, la Federación Nacional de Comerciantes de Santander (Fenalco), partidos políticos como el Polo Democrático y algunos miembros del llamado Partido Verde. Con el propósito de informar, debatir, coordinar y argumentar sobre la realización de acciones colectivas de hecho y derecho al emprendimiento minero, los integrantes del Comité se reúnen aún cada 8 días, los miércoles, en las instalaciones de la Corporación Compromiso, Sintraemsdes, o Corambiente, de la ciudad de Bucaramanga (Flórez, 2012).

La progresiva articulación de las distintas organizaciones sociales que confluyeron en la conformación en el año 2009 de un Comité policlasista como plataforma de resistencia al

³². “Asamblea del Comité de Santurbán define 100 mil voces por el agua”. En: <http://colombiainforma.info/politica/medio-ambiente/678-asamblea-del-comite-de-santurban-define-100-mil-vozes-por-el-agua>. Fecha de acceso, junio 22 de 2017.

emprendimiento minero del páramo de Santurbán fueron reproducidas por sus similares tolimenses. En efecto, en el 2010, un año después de constituido dicho Comité en el departamento de Santander, los miembros de la agrupación La Reversa de la UT entraron en contacto con sus integrantes.

El hecho sucedió en una reunión programada por Planeta Paz, organización creada en el año 2000, con el fin de promover espacios de comunicación y articulación de procesos sociales y políticos alternativos. Contexto en los que se pusieron al tanto de la conformación de esta plataforma de lucha colectiva contra el proyecto minero Angostura por la defensa del agua, el territorio, la biodiversidad y la vida. Forma de lucha que comenzaron a discutir y a prever la posibilidad de reproducirla conformando un movimiento análogo en el departamento del Tolima. (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

En consecuencia, se disolvió la Agrupación La Reserva y en su reemplazo surgió **El Comité Ambiental en Defensa de la Vida** (CADV) de la ciudad de Ibagué. Organización pluriclasista encargada de coordinar e impulsar acciones de carácter público con colectivos de trabajo de orden ambiental, medios de comunicación y personas independientes, en defensa del agua, la vida y el territorio del Tolima (Revista Impactos, Boletín del Observatorio sobre Nueva geografía económica, geopolíticas y derechos humanos No 13 – 14, 2013). Según refiere Renzo García (Entrevista, diciembre de 2016), una vez constituidos “comenzamos a trabajar fuertemente la movilización social. A entender después de ver las experiencias de Santander contra el proyecto minero del Páramo de Santurbán y de otros lugares de América Latina, que esos proyectos casi que se han parado por la movilización social. No hay otra posibilidad social”.

Tomando como referente la tradición ecologista de la UT y la conformación del Comité ambiental de la ciudad de Ibagué en el año 2010, durante este mismo lapso se constituyó el **Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaimé**. Figura organizativa pluriclasista que surge también como un espacio de encuentro de la diversidad de organizaciones sociales de base campesina, barrial, estudiantil, acción comunal, y de derechos humanos que operaban en el municipio de Cajamarca. El propósito era reflexionar, planear y ejecutar estrategias en defensa de la vocación agrícola, el buen vivir, y articular acciones en contra del proyecto minero de La Colosa (Revista Impactos, Boletín del Observatorio sobre Nueva geografía económica, geopolíticas y derechos humanos No 13 – 14, 2013).

El proceso de expansión de las organizaciones antimineras en el departamento del Tolima continuó en el año 2011, debido a que el 70 por ciento del territorio departamental estaba solicitado o concedido para la realización de emprendimientos mineros, instalación de hidroeléctricas y proyectos conexos a esta actividad (García, 2012). En efecto,

emprendimientos minero operados por AGA, Tiger American S.A.S o Mineros S. A., habían comenzado a operar también en las localidades de Palocabildo, Ataco, Dolores, Santa Isabel y Anzoátegui³³.

Conflictos socioambientales ocasionados por emprendimientos similares se presentaban también en San Jerónimo, Casabianca, Falán, Murillo, Venadillo, Espinal, Rovira, Piedras, Natagaima, Coyaima, Ataco, y Armero Guayabal. Con la intención de evaluar la creación de un mecanismo de participación ciudadana que ejerciera vigilancia y control y que permitiera contrarrestar los efectos que ocasionaban en el medio ambiente, Pax Christi Holanda convocó en el año 2013 un encuentro con delegados de cada uno estos municipios. La determinación de los asistentes fue la de no emplear un instrumento legal debido a que AGA podría interpretarlo como un control ciudadano a sus actividades, “lo que dejaría la posibilidad a la empresa para legitimarse argumentando que entregó información a la comunidad como una forma de mostrar transparencia de su actividad empresarial”. (Quintana, 2016: 78).

De la discusión generada en el encuentro de los representantes de estos municipios, emergió la idea de conformar comités ambientales en cada uno de estos lugares. Procesos organizativos que lucharan contra la problemática ambiental generada en su comarca, y que asumieran la misión de fortalecer y expandir la lucha contra el emprendimiento minero de La Colosa.

Fue así como se originó la **Red de Comités Ambientales del Tolima (RCAT)**, de la cual entraron a hacer parte el Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué y el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaima, del cual entraron a hacer parte a su vez todas las organizaciones sociales que habían surgido en esta población, salvo la

³³. Prueba de ello es que, a lo largo del año 2016, la Agencia Nacional de Minería le envió tres cartas al alcalde de Santa Isabel y cuatro al de Anzoátegui en los que les informaba que a la institución habían llegado dos solicitudes de empresas mineras pidiendo permiso para iniciar procesos de exploración de oro y platino en sus jurisdicciones. Las solicitudes sumaban: 200 hectáreas en la jurisdicción de Santa Isabel y 530 en Anzoátegui. En el primero los territorios otorgados incluían “parte de la cuenca del río Venadillo y hasta Berlín quedando el casco urbano sitiado por la mina y el río Venadillo destrozado en su nacimiento”. Las 530 hectáreas otorgadas en el segundo comprendían áreas en las márgenes del río Tótare. Frente a esto, las comunidades afectadas solicitaban superar las mezquindades, diferencias e intereses personales o de grupos y actuar bajo la consigna de “el derecho al ambiente sano, al agua, nuestra biodiversidad, a la construcción de una nueva cultura de armonía y convivencia donde entre todos podamos decidir lo más conveniente frente al uso de nuestros recursos y territorio, para nuestro bienestar y de las generaciones venideras” (Comunicado: 001 a la opinión pública. Santa Isabel noviembre 15 de 2016, “Amenaza de gran minería – camino a Santa Isabel y Anzoátegui”).

organización Emprendedores por la Ecología y la Tierra (Ecotierra)³⁴. La finalidad de este entramado social era intercambiar procesos, conocimientos, apoyo y formas de abordar los conflictos particulares de cada uno de ellos. Fundamentalmente hacer perceptible a nivel regional y nacional los efectos ocasionados por el emprendimiento minero de La Colosa.

En suma, estos procesos organizativos o plataformas de lucha denominados comités, surgidos en el oriente colombiano, y replicados en Ibagué, Cajamarca y otros municipios tolimenses, han generado alianzas, adhesiones y valores en comunidades rurales y urbanas, debido a la pretensión de empresas multinacionales como la AGA, de ejercer control sobre los territorios. La contaminación de las fuentes de agua por el uso del mercurio y el cianuro en la actividad minera, los peligros para biodiversidad, la vida y la economía agrícola local se han constituido en oportunidad u ocasión para generar procesos organizativos y de interacción social, lo cual puede concebirse como espacios de aprendizaje social en el que se formulan y reformulan identidades colectivas³⁵.

Efectivamente, las personas entrevistadas para la realización de este trabajo explican el rechazo al proyecto de La Colosa por la magnitud del impacto que ocasionará a los ecosistemas, y la economía agrícola local y regional durante la fase de explotación. Asimismo, la experiencia y aprendizajes de emprendimientos similares en otros lugares de América Latina sugieren a estas comunidades que hay que seguir fortaleciendo la capacidad de movilización del movimiento comunitario, e impulsando mecanismos jurídicos de participación política con el fin de detener proyecto.

³⁴. Según refiere Jimy Fernando Torres integrante de la organización Conciencia Campesina (Entrevista, diciembre de 2016), “Ecotierra siempre estuvo invitada a que participara y se uniera a las otras organizaciones sociales para trabajar todo el tema de incidencia sobre consultas populares y oposición al proyecto minero. Pero ellos tomaron la decisión de desvincularse totalmente tanto del Comité ambiental y Campesino del municipio de Cajamarca y Anaimé como del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué. En principio asistían a las reuniones, posteriormente decidieron retirarse definitivamente con un argumento que tenían que era respetable: ellos pensaban que el Comité Ambiental en Defensa de la Vida se había convertido en un movimiento político”.

³⁵. Melucci (2010) y Torres (2009) coinciden en señalar que el sistema de creencias y la identidad colectiva en torno a un problema constituyen categorías analíticas interpretativas claves para leer comprender los diferentes comportamientos colectivos, mediar en la relación entre condiciones estructurantes y acción colectiva, así como un aporte significativo para el análisis de las transformaciones subjetivas. Las creencias, unidas a objetivos, decisiones e intercambios “todos ellos operando en un campo sistémico”, permite definir a los movimientos sociales como “sistemas de acción”, que conectan orientaciones, propósitos y comportamientos plurales. Lo que implica “dejar de tratarlos como un fenómeno empírico y objetivo”, y descubrir en el análisis de las acciones colectivas aspectos de orden subjetivo como: creencias, valores, visiones de futuro, decisiones, negociaciones e intercambios que influyen en el establecimiento de una identidad colectiva; así como la incidencia que tienen las orientaciones de los individuos y grupos para su ocurrencia.

Los beneficios de la economía agrícola ancestral, frente a las supuestas “bondades” que traerá la actividad minera, asunto que llena de preocupación e incertidumbre a los habitantes de la comarca, por los efectos que esta ocasionará se pueden resumir en la matriz siguiente:

3 Cuadro 3.1 Beneficios de la agricultura y la minería

BENEFICIOS DE LA AGRICULTURA ANCESTRAL	SUPUESTOS BENEFICIOS DE LA GRAN MINERIA
17 siglos de ininterrumpida actividad agrícola.	Explotación a 30 años máximo 60.
Economía agrícola en la que se invierte y se reinvierte una y otra vez, para así renovar el ciclo; tierra distribuida equitativamente entre la mayoría de campesinos raizales, que es lo que establece la tradición cuando se cede un terreno para que otro lo trabaje.	Economía de una sola inversión con un pasivo ambiental impagable y monopolizado por la inversión extranjera.
20% de regalías del sector agrícola.	4% de regalías del sector minero.
Cultura campesina y saberes ancestrales capaces de sustentar la vida generación tras generación.	Cultura minera pasajera, conflictiva, rentista, inflacionaria...”fiebre de oro”.
Ahora tenemos el 100% de la riqueza.	La locomotora minera se llevará el oro y demás recursos minerales del subsuelo.
Soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.	Crearé dependencia en el tema alimentario.
Injusto olvido del sector campesino que podría generar empleo que el país necesita, si tuviera los mismos privilegios y aun así, sigue trabajando para llevar el alimento a la mesa de los colombianos.	Inversión social gracias a los descuentos tributarios de lo que es beneficiaria, significa que en la práctica le devuelven exenciones lo que dice que ha invertido socialmente.

Fuente: PDF: Revista Impactos, Boletín del Observatorio sobre Nueva geografía económica, geopolíticas y derechos humanos No 13 – 14, 2013. Página 19.

3.4 Principios de las organizaciones antimineras del Tolima³⁶

³⁶. Esta parte fue elaborada con base en la información suministrada por Renzo Alexander García Parra en entrevista realizada en diciembre del año 2016. Integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué, y docente de la Universidad del Tolima.

Los valores son postulados esenciales que determinan el modo de pensar, actuar, y orientan la conciencia de los sujetos. Las organizaciones sociales que se oponen a las actividades mineras en su territorio, y buscan el influjo en las comunidades, pretenden lo siguiente:

A. Desarrollar una fuerza cognitiva y argumentativa que les permita a los miembros que componen las organizaciones hablar entre iguales. El propósito de este principio es demostrar el por qué el proyecto minero es nefasto para la realidad cajamarcuna. Sus integrantes son conscientes que son los conocimientos y argumentos lo que les ha permitido avanzar y hacer crecer el movimiento, así como propiciar la articulación con otros procesos organizativos y atraer más personas.

B. Funcionar con disciplina y una lógica horizontal y asamblearia. Desde la conformación de la RCAT, sus integrantes se reúnen todos los sábados en la sede de la UT de las 2pm a 5pm. El éxito del proceso organizativo es atribuido por sus integrantes a que no hay un jefe.

C. Entender que no están arrancado de cero. Son conscientes que no son los primeros en hacer un proceso de resistencia contra un proyecto minero. Saben que en otras partes del mundo se están implementado procesos organizativos similares de los cuales tienen mucho que aprender. Por eso sus integrantes dicen. “Aprendamos de ellos, comencemos a recoger las experiencias, aprendamos de lo bueno y lo malo que les ha pasado a esos sectores. Por eso decimos que somos un acumulado histórico social de las diversas luchas que se han dado en América Latina, Colombia y el mundo”.

D. Actuar para transformar los problemas, no sobredimensionarlos. Pretenden que sus integrantes sean conscientes que en Colombia se sobredimensionan los problemas y no se actúa para transformarlos.

E. Cualquier acción es mejor que ninguna. Tiene como propósito romper la lógica de la universidad de sobre diagnosticar los problemas sociales que afectan al país y no hacer nada para transformarlos. Para el cumplimiento de este fin, los integrantes de estas organizaciones comenzaron a generar acciones colectivas como: conversatorios, plantones, movilizaciones, impulsar consultas populares, etc., de las que se desprenden prácticas educativas y transformaciones subjetivos de los procesos organizativos y las colectividades sociales.

F. La pelea es peleando. Son conocedores que están enfrentados a una multinacional, la cual, junto al Gobierno, periódicamente organiza actividades para incidir en las políticas públicas del sector minero, emite comunicados en los incondicionales medios de comunicación, y mediante regalos, obsequios y ofrendas, gana el apoyo de sectores mal informados. Frente a este proceder saben que no se pueden quedar quietos.

Comenzamos a darle, y es ahí donde nos planteamos el elemento principal como es la movilización callejera. Dijimos aquí tenemos unos sectores que tenemos que ganarnos para nosotros. El protagonismo fundamental de esta lucha es el movimiento juvenil. Son los jóvenes y los niños hacia los que va orientado nuestro ejercicio pedagógico y activismo político y social (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

G. Ser en colectivo. La movilización social, principalmente la Marcha Carnaval por el Agua la Vida y el Territorio, es la que se celebra cada año en el mes de junio en la ciudad de Ibagué y pueblos aledaños. Los integrantes de las organizaciones sociales antimineras aprendieron que distintos sectores sociales pueden caminar juntos con el propósito de hacerle frente al proyecto minero.

hemos entendido que juntos podemos construir una gran fuerza social. Esa es la meta; construir un poder alternativo casi que soportado desde el actuar de la gente. Eso solo es posible en la medida que podamos actuar de manera conjunta, ser en colectivo (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2017).

H. Trabajar con todo el mundo. Como consecuencia de la aplicación del principio anterior, estas organizaciones sociales antimineras han logrado ganar el apoyo de múltiples sectores sociales y construir un escenario donde hay muchos amigos de la causa. Fue así como lograron que la gente se unificara con el criterio de ayudar a defender el territorio, el agua y la biodiversidad de la región y buscar alternativas al proyecto minero, sin importar motivos ideológicos o religiosos.

I. Celebrar pactos por la vida. Acordar públicamente mediante la firma de un compromiso con candidatos a puestos de elección popular como alcaldes, gobernador o congresistas: no recibir recursos de AGA, o coadyuvar con el proceso de impulsar recursos jurídicos para detener el proyecto. Esto a cambio del voto de los integrantes de las organizaciones sociales que se oponen al desarrollo del proyecto minero.

J. Improvisación estratégica. La resistencia contra el proyecto minero de la Colosa, ha obligado a los integrantes de las organizaciones a subordinar la lógica de la planeación a la de la improvisación.

Hay momentos en que nos toca subordinar cierto tipo de acciones como la llegada de académicos como Martínez Alier, Svampa, etc., a Colombia y hay la posibilidad que vaya a Cajamarca a hablar con la gente, lo cual no se discute, lo recibimos, juntamos amigos, realizamos un conversatorio, y

cuando hay tiempo lo articulamos a lo que tenemos planeado desde antes (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

K. Apagar egos y apegos. Este principio está enfocado a evitar que haya sectores que pretendan homogenizar, instrumentalizar la lucha, hacer crecer un movimiento político, encumbrar un individuo. Más no el objetivo colectivo por el que resisten las organizaciones antimineras. Hacer conciencia que la lucha que desarrollan no la realizan con la lógica de encumbrar un nombre o un individuo, sino por el crecimiento y la formación en lo ético, moral y espiritual de los integrantes de los procesos organizativos. “Esta no es una lucha ambiental exclusiva de un sector o un individuo, sino de toda la ciudadanía, porque el derecho al ambiente, el agua, es de todos y necesarios para la calidad de vida de la gente. No puede ser problema de una vanguardia” (Entrevista a Renzo García, diciembre del 2016).

L. Enseñar con el ejemplo. Pretende que los integrantes de los procesos organizativos sean coherentes en lo que dicen con lo que hacen. Para el logro de este principio buscan que los integrantes de los procesos organizativos practiquen principios del movimiento zapatista como: mandar obedeciendo; servir y no servirse; representar y no suplantar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir. Formas de trabajo comunitario que destaca el trabajo colectivo y los acuerdos como motores del trabajo colectivo (Zibechi, 2015).

En resumen, la vivencia de estos principios por parte de la RCAT, se relacionan con lo que Svampa & Viale (2014) denomina giro ecoterritorial. Luchas que hacen uso de un lenguaje común o marcos comunitarios de acción relacionados con la defensa de los territorios y los bienes comunes, la justicia ambiental, los derechos de la naturaleza, el buen vivir, la soberanía y los derechos humanos. Choques que reclaman la democratización de las decisiones y el derecho de los pueblos a decir “No” frente a proyectos que afectan fuertemente las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y comprometen el porvenir de las futuras generaciones.

Explicación de ello es que los aprendizajes de sucesos afines acaecidos en la región peruana donde opera la mina aurífera de Yanacocha desde la última década del siglo anterior, actuaron como faro en la comunidad de Cajamarca Tolima. Comarca que desde estos mismos años se sumó a la emergencia de procesos de resistencia originados en la puesta en marcha de este mismo tipo de proyectos de explotación minera a gran escala en su territorio.

En este mismo sentido, los procesos organizativos que surgieron en el territorio tolimese de Cajamarca e Ibagué para hacerle oposición al proyecto minero a gran escala y a cielo abierto de La Colosa, estuvieron influidos a su vez por experiencia organizativa de resistencia surgidas en este mismo lapso en el departamento de Santander contra la

multinacional canadiense Eco Oro Minerals (antes GreyStar). Empresa que pretendía emprender actividades mineras en el páramo de Santurbán, del cual se surte de agua el área metropolitana de Bucaramanga y otros lugares del oriente colombiano.

De estas acciones colectivas se han derivado a su vez procesos de movilización y prácticas educativas que han devenido en enseñanzas y aprendizajes individuales y colectivos que han contribuido a fortalecer y mantener en el tiempo la resistencia de los procesos organizativos. Tema que analizaremos en el próximo capítulo.

CAPÍTULO 4. PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN EN TORNO AL EMPRENDIMIENTO MINERO DE LA COLOSA EN CAJAMARCA TOLIMA

En el capítulo anterior se explicó el contexto en el que surgen y se consolidan algunas organizaciones sociales antimineras de Argentina y Perú; la influencia que estas tuvieron en el origen de procesos organizativos similares en los municipios de Ibagué y Cajamarca, así como la articulación de los mismos y los principios que guían y orientan su lucha y resistencia. En este apartado, el interés se centra en describir y analizar los procesos de sensibilización y movilización que se han dado en torno al emprendimiento minero de La Colosa en la población de Cajamarca Tolima. Territorio al que arribó la multinacional de origen sudafricano Anglo Gold Ashanti (AGA) a finales del siglo anterior, con la pretensión de iniciar un proyecto de exploración y explotación aurífera a gran escala a cielo abierto.

Toda movilización está antecedida de una fase de sensibilización. Parafraseando a Melucci (2010) se puede definir como un accionar colectivo realizado por un conjunto de individuos que se unen para actuar unitariamente persiguiendo un fin. Vale decir que las movilizaciones son producto de un sistema de relaciones que liga e identifica a aquellos que hacen parte de un colectivo para la realización de un levantamiento social en contra de una figura de poder. Manifestación que hace parte a su vez de la categoría acción colectiva definida como una actuación

más o menos permanente orientada a enfrentar opresiones, desigualdades, exclusiones, protagonizadas por sectores amplios de población, quienes a través de la organización y movilización en torno a demandas y sus luchas, van elaborando un sistema de creencias y una identidad colectiva, a la vez que van generando propuestas y proyectos que modifican estructuras del sistema social (Torres, 2007: 68).

Conforme a lo anterior, en este apartado se asume la categoría de acción colectiva como una Construcción Social Organizada (CSO), denominación en la que se incluyen todas aquellas iniciativas asociativas permanentes originadas en el espacio local y regional de este territorio tolimense. En función de esto el objetivo del capítulo es explicar el proceso de sensibilización que ha comprometido a la población en la movilización social en contra del proyecto minero; las alianzas que han emprendido las organizaciones sociales; el emprendimiento de acciones colectiva y las enseñanzas y aprendizajes que han derivado de ellas sus participantes.

4.1 Sensibilización

De las 51.528 hectáreas que componen el área del municipio de Cajamarca, 44,276 de ellas equivalentes al 86 por ciento de su territorio están concesionados a títulos mineros (Pax, 2016). Esto constituye una de las mayores preocupaciones de los habitantes de esta localidad tolimense, debido a los efectos que la explotación aurífera generará a la vocación agraria y turística del municipio y la posibilidad de seguir siendo la despensa agrícola de Colombia. Legado del que se sienten orgullosos los campesinos de la región debido a que de sus veredas salen a lomo de mula para ser distribuidas en las plazas de mercado del Tolima y ciudades vecinas como: Armenia, Cali, Ibagué o Bogotá, toneladas de productos agrícolas como arveja, frijol, variedades de verduras, yuca y arracacha, tubérculo, del que los productores calculan que a diario salen mil bultos con destino a la Central de Abastos (Corabastos) en la capital del país (Villalba, 2017).

El emprendimiento minero también representa un riesgo para las fuentes de agua que surten el acueducto municipal y las zonas agrícolas y ganaderas, las cuales serán contaminadas por el drenaje ácido de mina y los metales pesados; las explosiones masivas de las rocas en la mina a cielo abierto y que impactarán negativamente la salubridad del aire y la destrucción de nichos ecológicos³⁷.

Así lo concibieron los campesinos de la región cuando AGA socializó el proyecto y mostraron las primeras máquinas,

tan enormes como las que se usan para la extracción del carbón en el Cerrejón. Nos dimos cuenta que no era tan bueno el desarrollo que nos iban a traer. Nos contaron que efectivamente debían tumbar las montañas para extraer el oro que estaba diseminado en la roca y que se iban a utilizar químicos como el mercurio y el cianuro (Entrevista a Jimmy Fernando Torres, citada por Corredor, 2014).

Todo esto, sumado a la convicción que a las compañías mineras lo que más les interesa es el dominio del territorio y de la población donde establecen sus proyectos, medió para que el descontento social derivara en la conformación, cohesión y entrelazamiento de organizaciones sociales de carácter policlasista integradas por campesinos, amas de casa, comerciantes, estudiantes, profesores y demás sectores marginados de carácter regional y local, explicados en el capítulo anterior. Agrupaciones que realizan acciones colectivas de hecho y derecho contra el emprendimiento minero con el propósito de defender bienes

³⁷. Comité Ambiental en Defensa de la Vida: Escuchemos la naturaleza. Boletín, Cajamarca Marca No a la minería contaminante.

comunes como el agua, la biodiversidad y demás reservas territoriales de los que depende su subsistencia.

Para Renzo García (Entrevista, diciembre de 2016), integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué, generar unidad en medio de la diferencia y la diversidad es lo que ha permitido que estos procesos organizativos puedan caminar juntos frente a la actividad minera a cielo abierto, acción que se sitúa entre las más contaminantes y destructivas del planeta. Para este líder social, el tema no debe generar enfrentamientos partidistas, electorales ni religiosos

Cuando alguien dice que la minería a cielo abierto pondrá en riesgo la obra de Dios, la creación de Dios, que habitamos el único planeta en el mundo en el que hasta el momento hay vida, nosotros decimos entonces por qué no conversamos y somos coherentes con la educación cristiana. Ese discurso es tan súper poderoso que si se aplicara en la práctica nos permitiría derrotar esa cultura de la muerte, del individualismo, de codicia, de avaricia que es lo que está replicando el modelo de desarrollo que solo piensa en unos pocos (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016)

Con el propósito de fortalecer la capacidad de resistencia e impugnar el proyecto minero, los integrantes de estos procesos organizativos han venido instaurando durante los últimos años, redes de solidaridad y una cercana relación de trabajo con profesores y docentes de la U T. En conjunto han programado marchas, bloqueo de vías, conferencias, impulsado consultas populares y acciones educativas como: charlas en escuelas y colegios, talleres en áreas rurales, diplomados, mingas comunitarias, entre otras.

Repertorios de práctica y accionar colectivo de ámbito social, ideológico y cultural, que tienen el propósito de fortalecer la capacidad de resistencia, a través de las cuales las comunidades de la comarca han producido nuevos conocimientos, vínculos, identidades y transformaciones subjetividades individuales y colectivas. El desarrollo de estas acciones colectivas en el área donde se proyecta realizar el proyecto minero y las zonas de influencia del mismo, les ha permitido entender a los individuos que conforman estas organizaciones que: “La resistencia es fuente de conocimiento y de poder. Es en la resistencia donde se van construyendo alternativas” (Dussán, 2016).

Por su parte los campesinos han comprendido a través de este proceso de sensibilización, la importancia y el valor que tiene la agricultura como fuente de producción de alimentos, y el peligro que representa la minería a gran escala para el sector agropecuario. Para un aldeano, habitante de la vereda La Luisa, lugar donde se ubica el proyecto minero, y cultivador de frijol, arracacha, arveja y zanahoria, actividad con la que sostiene a su familia,

si bien la carga del frijol se vende en \$400 mil, se debe tener en cuenta los costos de producción como el pago de jornales y de fungicidas, este último es indispensable para proteger las plantas de plagas como la chiza o el cogollero. A pesar de ello, el agricultor no duda por un instante en su apuesta por el campo (Villalba, 2017).

La apuesta principal de estas organizaciones es la generación de una conciencia ciudadana sobre los efectos que ocasionará el emprendimiento minero a las fuentes de agua, la biodiversidad, el territorio y la vocación agrícola del ámbito local. Son procesos organizativos que vinculan los problemas sociales con los ambientales; proclaman compromisos con las generaciones presentes y futuras; poseen un gran dinamismo interno y reaccionan con rapidez ante el surgimiento de problemas ambientales y poseen un marcado sentido de pertenencia. Ejecución de principios y valores con los que tratan de reforzar el núcleo opositor a la multinacional a través de procesos de sensibilización y formación para la toma de decisiones por consenso y para la concertación de estrategias de lucha considerando las experiencias de casos exitosos de países como Argentina y Perú (Navarro, 2015).

En este sentido, Jaime Tocora (Entrevista, octubre de 2016), líder del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la capital tolimense, afirma que la sensibilización y formación tienen como propósito hacerle entender a la comunidad que ésta es una pelea por la vida, lo básico y fundamental. Darle elementos a la gente para que comprenda que tiene derecho a decidir qué hacer con su territorio y a vivir en un ambiente sano.

La solidaridad como expresión básica de encontrarnos entre todos para entender que hay un modelo extractivo que hay que derrotar. El problema no es de izquierda ni de derecha, es de la concepción que tenemos del mundo. Que la gente reflexione sobre su quehacer, su entorno y la política que le están aplicando todos los días (Entrevista a Jaime Tocora, octubre de 2016).

Para el logro de esta intención, los integrantes de las organizaciones sociales mencionadas, difunden información en Ibagué y Cajamarca voz a voz o contenida en volantes o folletos, en colegios, universidades, plazas de mercado, asambleas populares, medios masivos de transporte, redes sociales y de comunicación alternativa o recorridos puerta a puerta, relacionada con los efectos que acarreará la ejecución de la fase de explotación a cielo abierto del emprendimiento minero de La Colosa.

La premisa que guía la labor de sensibilización está en suministrar la información precisa que los pobladores no reciben a través de los medios de comunicación masiva. Los participantes en estas actividades de propagación de información tienen la convicción que

una vez se empieza a educar a la gente ésta comienza a entender las secuelas de los emprendimientos mineros. En consecuencia con lo anterior, los temas que se socializan informalmente están relacionados con el uso indiscriminado del agua (mil litros por segundo); la remoción de cuatro toneladas de tierra para obtener 0,86 gramos de oro; el uso de mercurio, cianuro, cromo, plomo y arsénico; el impacto en la calidad del aire; la instalación del dique de colas o presas de relave; el deterioro de la fauna y la flora; la contaminación y alteración del suelo, así como los cambios en aspectos económicos como el cambio en la vocación agrícola del municipio (Colombia Solidarity et. al., 2014; García, 2012).

Al respecto, Renzo García explica (Entrevista, diciembre de 2016) que antes de constituirse en educadores de la comunidad primero tuvieron que aprender acerca del tema minero a cielo abierto de lo cual no tenían ni idea. Formación que le agradecen a Pax Christi, organización que financió la traída varias veces a la ciudad de Ibagué y Cajamarca de expertos en el tema como Robert Moran, un hidrólogo de los más importantes del mundo y quien ha acompañado organizaciones sociales antimineras en Esquel y Tambogrande en Argentina y Perú respectivamente. Asimismo, el haber financiado el viaje de cinco personas interesadas en conocer la experiencia del emprendimiento minero de Yanacocha en este último país.

La labor de sensibilización en el corregimiento de Anaime, la iniciaron los campesinos de la vereda el Águila, Wilson Báez y Jimy Fernando Torres. Según entrevista realizada a este último (diciembre de 2016), en el año 2008 ambos se opusieron al ofrecimiento por parte de AGA de pintar la escuela de la zona, procediendo a devolver el material con el argumento que la labor del mantenimiento de las instituciones escolares, el arreglo de las vías terciarias, centros de salud, reforestación, etc., debían ejecutarse con dineros del presupuesto municipal y no con el de una empresa que suplanta el Estado.

El acontecimiento impulsó el surgimiento de la organización Conciencia Campesina, con el objetivo de mostrar sentido de pertenencia e identidad de los campesinos de la región, el amor por la tierra con el fin de rechazar el proyecto minero.

Comenzamos a investigar en qué consistía el proyecto minero La Colosa, dónde comenzaba, de dónde venían. Nos dimos cuenta que no era tan bueno el desarrollo que nos iban a traer, nos contaron que efectivamente debían tumbar las montañas para extraer el oro que estaba diseminado en la roca y que iban a utilizar químicos como el mercurio y el cianuro. Debido a esto comenzamos la campaña del No a la mina (Entrevista a Jimy Fernando Torres, diciembre de 2016).

Cuando la comunidad de Las Hormas se enteró de lo sucedido en la vereda El Águila, también se sintieron indignados y procedieron a bloquear la vía por la que funcionarios de AGA movilizaban maquinaria destinada a realizar exploraciones secretas en el lugar. Ante la presión de la multinacional, la comunidad de ambas comarcas, con el acompañamiento de estudiantes de la UT, resolvieron conjuntamente reparar la vía de penetración que une el lugar con otro denominado El Plan. Con un buldócer que les facilitó la alcaldía municipal y la colaboración de 80 estudiantes y profesores de la UT., entre los que estaban Sancho Sánchez, Renzo García, Jaime Tocora, terminaron reconstruyendo la vía.

En suma, el arribo de AGA a la municipalidad de Cajamarca con el fin de iniciar el proyecto minero de La Colosa, llevó al surgimiento de procesos organizativos (ver capítulo anterior). Los nuevos sujetos sociales que los integran han implementado estrategias educativas o de información a la ciudadanía para que en ejercicio de pleno conocimiento puedan tomar decisiones sobre la inconveniencia de efectuar actividades mineras a gran escala y a cielo abierto en una zona con vocación agrícola denominada como despensa agrícola de Colombia, debido a los efectos que esta actividad genera en el territorio el agua, la biodiversidad y la vida de la región.

A estas manifestaciones de la comunidad se opone la multinacional con argumentos sobre supuestos beneficios del emprendimiento aurífero asociados a la implementación de una minería responsable, el desarrollo y futuro de los cajamarcunos, la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población tolimense, lo cual le ha dado curso a su vez a la apropiación territorial mencionada antes. A esto se agregan prácticas que impactan la conciencia de la gente como: financiación de campañas publicitarias en medios de comunicación regional donde explican las “bondades” del proyecto minero; ampliación y arreglo de la planta física del hospital local; donación de una ambulancia para el sector rural; compra de juntas de acción comunal y ofrecimiento de contratos a sus miembros; compra de uniformes y camisetas para el equipo Deportes Tolima, financiación del Festival Folklórico Colombiano celebrado en el ciudad de Ibagué, o atemorizando a los opositores al proyecto (Sánchez, 2013; Corredor, 2014).

Sobre la intimidación a los opositores, Padilla (2010) afirma al respecto que “cuando la resistencia es superior a las capacidades de convencimiento de las empresas mineras, otros mecanismos son usados para intimidar a las poblaciones. La tortura y el asesinato han ido intentando matizar la resistencia de las comunidades de manera creciente” (p. 6). Justamente, según seguimiento realizado por el Colectivo Socioambiental Juvenil Cosajuca, organización que se opone al emprendimiento de La Colosa, en sólo el año 2013 se produjeron 36 violaciones de los derechos humanos en contextos reivindicativos de la lucha, siendo el asesinato de Juan Camilo Pinto el hecho más reprochable (Cosajuca, 2013).

4.2 La Marcha Carnaval como movilización emblemática de la lucha antiminera

Una de las formas de hacerle frente al poder económico y político desplegado por AGA en función de evitar que Cajamarca se constituya en un territorio minero es la movilización. Así lo explica Renzo García (Entrevista, diciembre de 2016), “esos proyectos casi que se han parado en muchas partes del mundo por la movilización, no hay otra posibilidad. Es mediante esta vía, sin descuidar otras acciones como el tema formativo, jurídico, simbólico y el trabajo comunicativo”.

Con este propósito, las organizaciones que han surgido en torno al emprendimiento minero de La Colosa han impulsado la cohesión y entrelazamiento de las mismas. Adhesión que a su vez les ha permitido a los nuevos sujetos sociales que las conforman ser conocidos en las poblaciones de Anaime y Cajamarca y recibir invitaciones a dar charlas a la U.T., en la que participaban expertos en minería como Robert Moran, Rodrigo Negret, entre otros. Gracias a estos eventos académicos a los que eran invitados y en los que empleaban palabras sencillas que les salían del corazón comenzaron a establecerse enlaces entre la comunidad académica del claustro universitario y los nuevos sujetos sociales que conformaban organizaciones surgidas en la municipalidad como Conciencia Campesina, Cosajuca o Ecotierra.

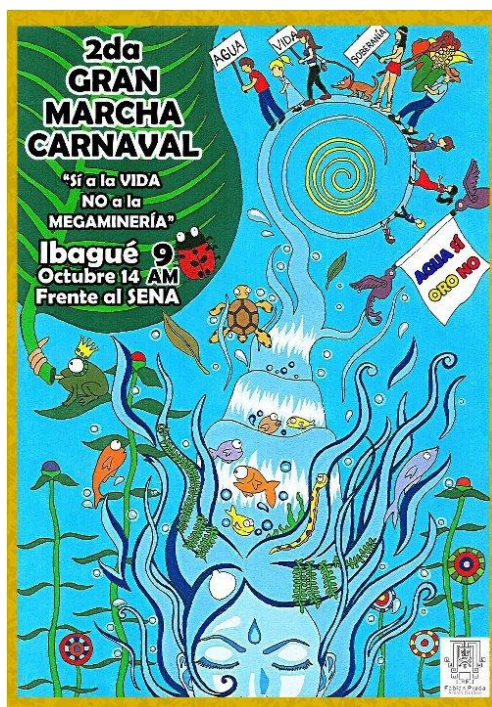
Esto hizo posible a su vez que estudiantes del centro universitario junto a campesinos de Anaime y Cajamarca participaran en la reparación de caminos de penetración. El intercambio de conocimientos con expertos internacionales; la identidad con la defensa del agua y el territorio influyeron también para que la sensibilización, el sentido de pertenencia, la identidad con el campo, y el nivel de conciencia también aumentaran (Entrevista a Jimmy Fernando Torres, diciembre de 2016).

Esas acciones sucedieron durante el año 2008, al año siguiente comenzaron las primeras movilizaciones en contra del proyecto minero La Colosa. A la primera de ellas realizada entre Anaime y Cajamarca acudieron casi 300 personas, a una siguiente fueron 700. Posteriormente se realizó otra movilización en el año 2010 en Cajamarca a la que asistieron cerca de las mil personas.

La determinación de trasladar la movilización a la capital departamental coincidió con la fundación por parte de Renzo García, Evelio Gómez, entre otros, del Comité Ambiental en Defensa de la Vida (ver convocatoria en la fotografía 4.1) Proceso organizativo que articula las múltiples fuerzas sociales, políticas y gremiales que habían comenzado a oponerse al proyecto minero La Colosa. El entrelazamiento y cohesión de estos sectores sociales en un comité se basaba en experiencias de lucha similares ocurridas en el departamento de Santander, en el que la multinacional canadiense Eco Oro Minerals (antes GreyStar), pretendía iniciar un proyecto aurífero similar en el páramo de Santurbán. Igualmente, en

acciones colectivas equivalentes ocurridos desde finales del siglo XX e inicios XXI en lugares de América Latina como: Sipacapa en Guatemala, Tambogrande en Perú, o Esquel en Argentina, territorios donde se celebraron consultas populares con contundentes resultados que prohibieron la minería de gran escala a cielo abierto.

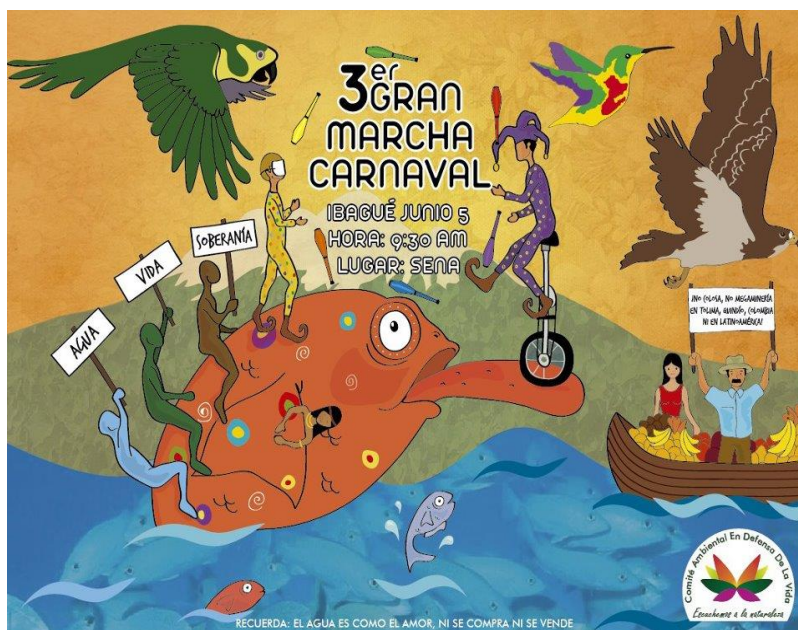
4 Fotografía 4.1. Cartel Segunda Marcha Carnaval



Fuente: CADV, 2011

El propósito que se fijaron las organizaciones sociales que se aglutinan en el Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la capital tolimense fue el de construir un principio de movilización que no se dejara estigmatizar y que fusionara el discurso de la alegría, el arte y la defensa de la vida, en contraposición a la cultura de la muerte, la exclusión y el saqueo de los bienes comunes realizado por compañías multinacionales. Consecuentes con este modo de pensar y actuar, y con el firme propósito de lograr el influjo en la sociedad, bautizaron la acción colectiva con el nombre de Marcha Carnaval por la Vida, el Agua y el Territorio, cuya consigna es “Si paramos la Colosa, Paramos Cualquier Cosa”.

5 Fotografía 4.2. Cartel tercera Marcha Carnaval

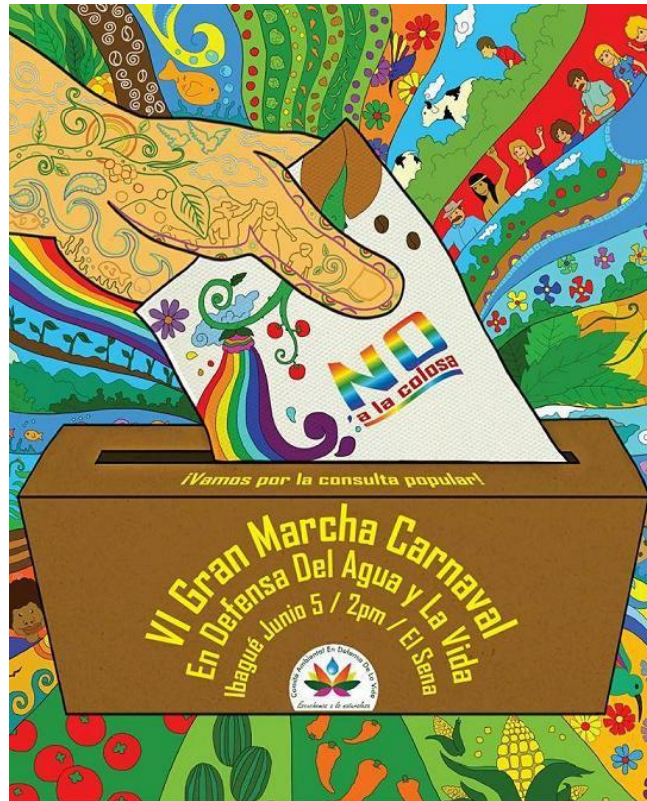


Fuente: CADV, 2012

La convicción de los organizadores de la Marcha, como la acción colectiva más eficaz para frenar los emprendimientos mineros, medió para que durante los dos primeros años se realizaran dos movilizaciones por año. Una cercana al 5 de junio (ver fotografía 4.2) día mundial del medio ambiente y otra el 14 de octubre, fecha del cumpleaños de la fundación de la ciudad de Ibagué, comienzo de la conquista española e inauguración del saqueo del oro y la plata, y exterminio de las comunidades indígenas de la región. Persuadidos de sus propósitos se organizaron las dos primeras movilizaciones en el año 2011 desde la carrera 4a estadio frente a las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena hasta la gobernación departamental, y a la que asistieron casi 6 mil personas en cada una. A la efectuada en junio del año 2012 acudieron cerca a las 12.000 mil personas, y a la de octubre del mismo año el número de movilizandos subió a 20.000. “Siempre con los medios en contra, veíamos que en la medida que el movimiento se iba creciendo los medios minimizaban el movimiento ambiental. Salían 5000 y decían que 1000, salían 12 mil y decían 4000” (Entrevistas a Jimmy Fernando Torres y Renzo García, diciembre de 2016)

La movilización de los asistentes a la Marcha Carnaval en el año 2016 tuvo un valor aproximado a los 70 millones pesos. Dineros que son obtenidos por aportes de empresarios, comerciantes, finqueros de la región, ONG, amas de casa y habitantes de la comarca, opositores al proyecto minero. La autogestión de recursos como modelo de organización fundamentado en la posibilidad de que sean los propios habitantes de la zona de influencia del emprendimiento minero, los que decidan sobre la solución de problemas financieros, destinados a sufragar los costos de las acciones colectivas, se ha constituido en el principal obstáculo para el desarrollo normal de las organizaciones sociales.

6 Fotografía 4.3: Cartel sexta Marcha Carnaval



Fuente: CADV, 2014

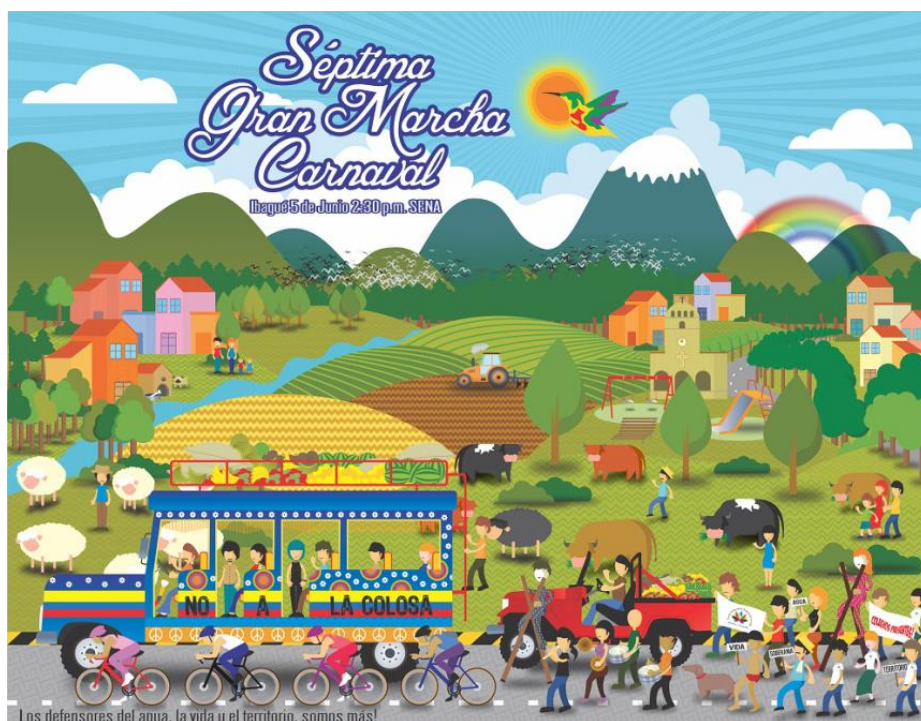
En efecto, según Renzo García (Entrevista, diciembre de 2016), en cada marcha se movilizan desde Cajamarca a Ibagué cerca de las mil personas. Cada pasaje de ida y vuelta tiene un valor de 12 mil pesos, sin contar los gastos de alimentación y trabajo de convocatoria. La dificultad para gestionar estos recursos hizo que tomaran la determinación de realizar únicamente una movilización actual. Problema que se hizo evidente a partir del año 2013.

Eso nos tenía agotados y decidimos hacer solamente una marcha anual, tratando de que sea cada vez más grande. El reto es cómo movemos cada vez más gente, creo que hemos tenido esa capacidad y esa suerte. Las marchas de los últimos años siempre han ido en ascenso y han logrado posicionarse a nivel nacional.

Efectivamente, el propósito de los organizadores de movilizar mayor número de participantes se cumplió a cabalidad. A la efectuada en el año 2013 asistieron más de 30.000 (Molano, 2013), y según cifras suministradas por el Comité Ambiental en Defensa

de la Vida de la ciudad de Ibagué, a la de 2014 asistieron 40.000 personas³⁸. Cantidad de asistentes que se ha incrementado en los años sucesivos. Las razones que tuvo la convocatoria a la realizada el 3 junio del año 2016 y a la que asistieron 120.000 fueron las siguientes: Ibagué posee actualmente el 53 por ciento de su territorio en títulos mineros concedidos y solicitados, equivalentes a 18 veces todo su casco urbano. La amenaza minera se ubica principalmente sobre las cuencas de los ríos Coello, Combeima, Toche, Totare y Cocora. La cuenca del río Combeima que abastece de agua a la ciudad de Ibagué tiene títulos mineros de AGA, igual que gran parte de todas las zonas rurales de la ciudad (<https://justiciaambientalcolombia.org/2016/05/24/octava-marcha-carnaval/>).

7 Fotografía 4.4: Cartel Séptima Marcha Carnaval



Fuente: CADV, 2015

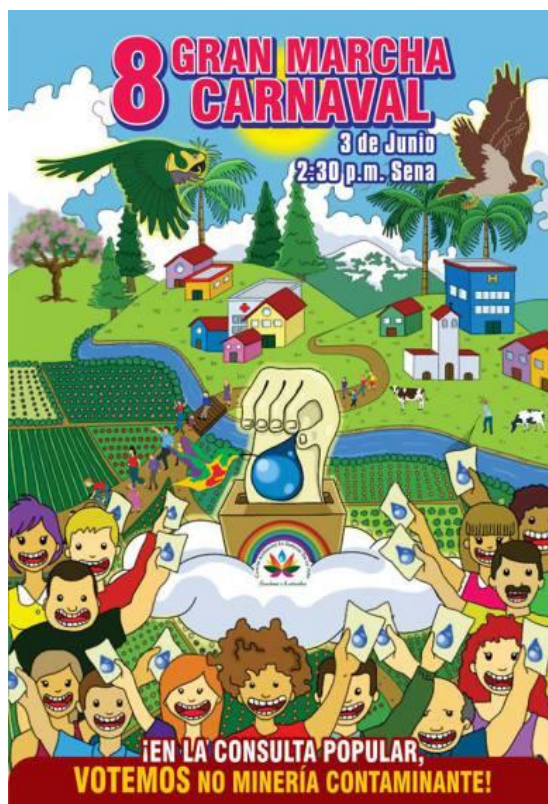
Pese a esta dificultad financiera, la movilización ha logrado articularse con protestas realizadas en otras localidades tolimenses en la perspectiva de juntar problemáticas relacionadas con el extractivismo como: la instalación de hidroeléctricas, explotación petrolífera y gasífera mediante la técnica del fracking, de material de arrastre, instalación de rellenos sanitarios etc. La cohesión y articulación con otras organizaciones que se han movilizadas en defensa de la riqueza hídrica, la biodiversidad, la alimentación agropecuaria y el derecho a un ambiente sano, han logrado posicionar la marcha Carnaval a nivel nacional.

³⁸. “40.000 tolimenses se manifestaron en defensa de la vida”. En: El Salmón. Revista de Expresión Cultural. <http://www.elsalmon.co/2014/06/40000-tolimenses-se-manifestaron-en.html>. Fecha de acceso, julio de 2018.

En efecto, a la movilización efectuada en junio del año 2017 se adhirieron movilizaciones desarrolladas simultáneamente en Ibagué, Espinal, Saldaña, Natagaima, y El Líbano en el Tolima. Armenia y Pijao en el Quindío; Florencia y quince municipios más del departamento del Caquetá; Santa Rosa de Cabal y Quinchía en Risaralda; las capitales departamentales de Bucaramanga y Manizales; San Martín en el Cesar y la ciudad de Bogotá. Asimismo, se efectuaron plantones frente a la embajada colombiana en Londres (Inglaterra) y Roma (Italia). Lo cual demuestra que el movimiento antiextractivista crece día a día en su capacidad de articulación, movilización y de defensa de los bienes comunes naturales (información suministrada por Renzo García, junio de 2017).

La consigna de los concurrentes siempre ha sido: “Si al trabajo, no a la mina”, “Queremos agua, Queremos vivir”, “Anglogold Ashanti fuera del país”, “Cajamarca y Anaime unidos, jamás serán vencidos”, “La sed de oro nos deja sin agua”, “el que no salte es un minero maricón”, “si paramos La Colosa paramos cualquier cosa”.

8 Fotografía 4.5: Cartel Octava Marcha Carnaval



Fuente: CADV, 2016

La decisión que se encuentra en el centro del debate se refiere al uso del territorio y la afectación que este sufre por los emprendimientos mineros. Si bien el departamento del Tolima ha avanzado en la ejecución de iniciativas de relacionamiento, asociación y accionar colectivo, emprendido por diversos sectores sociales en defensa del agua, la

biodiversidad y la vida de los territorios, el saqueo y el despojo de estos bienes comunes ocasionados por el extractivismo no es solamente de Cajamarca sino de todo el país. En efecto, a febrero del año 2012 se habían titulado 5,1 millones de hectáreas para la minería (2,3 hectáreas correspondían a minería aurífera) y 23 millones de hectáreas más estaban en proceso de solicitud (Pulido, 2015). En solo el Tolima, los títulos mineros concedidos y solicitados equivalen al 70 por ciento de su área departamental. Ello significa que el problema generado por los emprendimientos mineros no corresponde sólo a la población de Cajamarca.

En este sentido, se puede decir que la permanencia en el tiempo de la Marcha Carnaval y la proyección de esta a nivel nacional constituye la única manera de derrotar la política minera del Gobierno Central y defender los territorios amenazados por la actividad minera. Esto obliga a las organizaciones sociales del Tolima a seguir promoviendo lazos de solidaridad, integración, articulación comunitaria y empoderamiento de las comunidades con el objeto de “detener ese poder mafioso y corrupto de las empresas multinacionales mineras” (Renzo García, entrevista, mayo de 2017).

9 Fotografía 4.6: Cartel Novena Marcha Carnaval



Fuente: CADV, 2017

La masiva participación en las movilizaciones mencionadas antes, (promocionadas mediante la difusión de volantes y afiches, ver fotografías 4.3; 4.4; 4.5; 4.6.), se puede atribuir al nivel de conciencia que ha adquirido la comunidad sobre los efectos nefastos que ocasiona la minería a cielo abierto. También al trabajo que realizan los miembros del

Comité Ambiental en los colegios y universidades de la ciudad de Ibagué, salón por salón capacitando a la gente sobre los peligros que acarrea para el territorio, la biodiversidad y la vida este tipo de emprendimientos.

Creemos que algo fundamental de la Marcha Carnaval es que la gente aprendió una cosa primordial para el colombiano que es: ser en colectivo. Nos dio la posibilidad de saber que podemos caminar de manera conjunta: el tendero, con el empresario, el abuelo con el niño, el estudiante y eso no es fácil (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

Debido a lo anterior es que uno de los concurrentes a esta acción colectiva, el Concejal de Cajamarca, Camilo Padilla (Entrevista, marzo del 2017) considera que “la Marcha Carnaval, es el baluarte del movimiento ambiental en el Tolima. Si llegamos a fracasar en una consulta popular o en cualquier mecanismo de participación, nunca podemos llegar a desfallecer en la movilización” (Entrevista a Camilo Padilla, marzo 26 de 2017).

Ante la posibilidad del fracaso, las organizaciones sociales matizan la celebración de la Marcha Carnaval con otras acciones colectivas que igualmente inspiran y estimulan la lucha de las comunidades tales como: la realización de ferias periódicas, celebración de cosechas relacionadas con la fertilidad del suelo de toda la región donde se proyecta desarrollar el emprendimiento minero de La Colosa, ritos religiosos, etc. Parafraseando a Scott (2000), se podría decir que estas celebraciones tienen también algo de carnalesco, permitiendo a las comunidades practicar actos sacros y profanos como formas del poder social que ostentan las comunidades (ver fotografía 4.7).

10 Fotografía 4.7. Participantes en la VII Marcha Carnaval



Fuente: <http://pueblosencamino.org/index.php/asi-si/resistencias-y-luchas-sociales02>. 08 Junio 2015.

En efecto, un evento destacado en Cajamarca y el corregimiento de Anaime es la intervención de las organizaciones sociales antimineras en la celebración a mediados del mes de mayo y finales de agosto respectivamente, de la fiesta de San Isidro, patrono de los agricultores. En la festividad, los lugareños participan de una misa campal, efectúan exposiciones en el parque central de platos típicos y toda clase de productos agrícolas procedentes de cada una de las 47 veredas de la municipalidad. Asimismo, colocan billetes en los bolsillos del poncho que cubre el cuerpo del santo, en agradecimiento por la fertilidad agrícola de la región. Por su parte, organizaciones sociales como la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra), participan en el evento religioso, con un carro que circula por las calles de la localidad de Cajamarca, adornado con los principales productos agrícolas e industriales que producen sus integrantes, los cuales son comercializados, producto de la venta que es donado al párroco de la localidad (Entrevista a Yolanda Rojas, diciembre de 2016).

No obstante, la actuación de cada una de las organizaciones en el evento se realiza a nombre del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime. Intervención que se realiza sin desligar los procesos que lleva cada una de ellas.

Verbigracia para hacer un plantón y decirle a los de la AGA que no pasen, entonces nos unimos, porque es algo que nos atañe a todas las organizaciones, y si vamos a parar los carros pues también tenemos que estar todos. Pero lo que puede hacer cada uno desde su organización es perfecto porque cada una avanza como organización y el Comité Ambiental va de la mano de la organización. La idea es que cada organización trabaje por separado pero que le aporte al Comité y que se mencione tanto la organización como el Comité (Entrevista a Jimy Fernando Torres, diciembre de 2016).

En suma, pese a la seguridad que tienen los miembros de las organizaciones acerca de la importancia de la movilización social como labor que influye o tensiona la conciencia de los pobladores frente a la actividad minera, las acciones colectivas que estos realizan no están orientadas exclusivamente a que la gente marche.

Justamente, con el objetivo de proteger el agua, la vida y el territorio, también hay grupos de personas y colectivos que colaboran y aportan al movimiento tales como: abogados ambientalistas como Rodrigo Negret o Diana Rodríguez Franco, dedicados a promover acciones jurídicas y administrativas contra la legislación minera y que investigan las irregularidades de los contratos firmados entre Gobierno y empresas mineras; artistas que componen canciones, poemas y obras de teatro referidos a la Marcha y al tema extractivo;

profesores que trabajan en instituciones educativas de todos los niveles y que promueven la realización de conferencias, investigaciones y demás actividades académicas sobre esta problemática; periodistas independientes y defensores de derechos humanos que denuncian ante instancias nacionales e internacionales violaciones de derechos a las comunidades realizadas por las empresas mineras.

De todo este despliegue de acciones colectivas quedan aprendizajes relacionados con la necesidad de conservar el planeta. Afloran igualmente problemáticas ambientales del ámbito local relacionadas con los riesgos que representa para el agua, la biodiversidad y la vida de los territorios, los emprendimientos mineros. “Expresión simbólica y estética que lleva mensajes profundos frente a la necesidad que tenemos los seres humanos de reconciliarnos con la naturaleza, es decir que entendamos que, así como nosotros tenemos derechos también los tiene la naturaleza” (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

Acontecimientos de los que se generan aprendizajes que podríamos definir como tácticas de resistencia de las comunidades a la usurpación del agua y la vida de los territorios por parte de las empresas mineras. Acciones colectivas a través de las cuales se “activan imaginarios colectivos y se van generando saberes, tácticas y estrategias para resguardarse de la mirada y las acciones de los poderosos” (Torres, 2009: 69).

Sabiduría popular de resistencia que se expresa a través de representaciones culturales de forma oral o escrita como cuentos populares, bailes, canciones, poemas, o ritos de inversión, asociados a un conflicto social generado por la nefasta expectativa que genera la explotación minera del yacimiento aurífero de La Colosa. Carnaval que en palabras de Scott se constituye en un “espacio privilegiado para el lenguaje y la agresión normalmente reprimida... único momento del año en el cual las clases bajas tenían permiso de reunirse en cantidades inusitadas, usando máscaras y amenazando a los que cotidianamente tenían que obedecer” (Scott, 2000: 214).

Marcha Carnaval³⁹

Mil litros de agua por segundo del minuto
Ey y saben se está invitando a la gente del Tolima
Los recursos naturales no se venden
Vente vente vente a marchar
El 5 de junio es carnaval
Pancartas, colores, disfraces y demás
En esta fiesta está invitado a saltar (Bis)

³⁹. Video Clip 5° Marcha Carnaval. Disponible en: <http://www.youtube.com/watch?v=pJZYMNKht98>. Citado por Corredor (2014).

Así que Si a la vida, no a la codicia,
Deje ya la envidia, piense en su familia
La gente ahora camina diciendo no a la mina
Porque nos intoxica, porque nos contamina
Que se estremezcan los megamineros,
Porque llegaron los hijos del pueblo
Con sus danzas prendidas en fuego
Carnavaleando el San Juan y el San Pedro

Y convocando como sabemos hacerlo,
Cantando nuestro odio, mostrando un ejemplo
5 de junio atento todo el mundo
Tu sabes niño, la fiesta primero
Es una sola opción
Escucha mi canción
Este carnaval me huele a revolución!!!

Así que vente, vente, vente a marchar
El 5 de junio es el carnaval
Pancartas, colores, disfraces y demás
En esta fiesta está invitado a Salomón (Bis)

Esta es la cordial invitación
Que en contra de la megaminería conto yo
Esta canción es mi misión, es mi vocación, el 5 yo alzo la voz
Con el pueblo que dice No, no no no a la explotación
De la riqueza natural de mi región,
La energía activa, la esperanza viva
Llena de vida y vibra positiva
En pro del futuro del Tolima y caminando por la calle
Con el puño bien arriba
Abajo Anglogold Ashanti
Abajo la mina

Mucho amor se necesita
Pa carnavaliar con Alegría
Movilización es la salida, te invito de nuevo a la quinta avenida
Con tu camada, con tu familia, con el perro y con tu vecina
Exponencialmente coge pa arriba
Y que el cianuro no se riegue

Por América Latina eeee
Por América Latina eeeooo.

Si a la vida. Canta un Pijao⁴⁰

Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón,
porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando el sol,
hoy por eso un nuevo verso, ha brotado en mi canción
y es un verso que reclama defender lo que soy...

Soy del Tolima de donde brotan aguas sagradas,
vida y belleza que desde siempre nos acompañan,
por qué pretenden minar su entraña,
por qué la vida por muerte cambian,
por qué el cianuro, por qué me atacan,
yo soy el árbol, yo soy montaña...

Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón,
porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando el sol,
hoy por eso un nuevo verso, ha brotado en mí canción
y es un verso que reclama defender lo que soy...

Soy del Tolima, desde en nevado mi voz yo lanzo,
Retumba un coro por sus montañas y por el llano.
Que es esta tierra queremos vida,
que nadie puede vender montañas,
que por la suerte de nuestros hijos,
todo el Tolima... en firma avanza

En suma, según Renzo García (Entrevista, diciembre de 2016) son formas de expresión asociadas a otros discursos, que han articulado a las comunidades con otras prácticas. Alguna vez este líder ambiental tolimense escuchó de su maestro en la UT., Gonzalo Palomino Ortiz la frase siguiente: “*las mismas consignas, los mismos muertos*”, la cual aludía a la forma como se han asumido las luchas sociales y políticas en Colombia. “Dijimos, lo otro no ha funcionado, exploremos algo nuevo... no descalifiquemos, hagamos otra cosa y si le pegamos pues ayudamos a toda la dinámica del movimiento social colombiano. Eso es lo que tratamos de hacer”.

⁴⁰. Composición de Jorge Humberto Jiménez. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=HJFRMfKhC6I>.

Empero los aciertos y el éxito alcanzado en la realización de la Marcha Carnaval por el Agua, la Vida y el Territorio y demás acciones colectivas asociadas a esta, sus organizadores han sido estigmatizados como guerrillero o marihuaneros.

El comité Ambiental y Campesino rechaza las acusaciones del señor alcalde William Hernando Poveda en donde se refiere a los integrantes como “subversivos”, “marihuaneros”, “politiqueros”, entre otros...sabemos que el alcalde está llevando la representación de la multinacional Anglogold Ashanti...el Comité Ambiental y Campesino seguirá LUCHANDO hasta el último suspiro de cada uno de sus integrantes por defender el agua, la agricultura, nuestro territorio, la vida, el futuro de nuestros hijos, oponiéndose a que vuelen nuestras montañas con dinamita y acaben el agua que es el tesoro máspreciado que tenemos, no queremos ser una segunda Guajira donde los padres ven a sus hijos morir de hambre. Finalmente invitamos a todos los cajamarcunos que aman su territorio a que sigamos luchando con DIGNIDAD y FORTALEZA ante las pretensiones de una empresa MENTIROSA que ahora tiene una MARIONETA como alcalde⁴¹.

Estas descalificaciones son proferidas incluso por sectores alternativos que realizan acciones enfocadas a las transformaciones que requiere la nación, y difundidas a su vez por los medios de comunicación. “Damas rosas...ignorantes que no saben cómo asumir las trasformaciones de este país”. Según Renzo García (Entrevista, diciembre de 2017) si bien es cierto que hay asistentes a las movilizaciones que consumen sicoactivos, los integrantes del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, se han encargado de incitar a los que concurren a la movilización a que en el transcurso de la misma no lo hagan, entendiendo que el otro también tiene derecho a transitar sin el humo del cigarrillo y la marihuana. La instigación está enfocada a que los participantes comprendan que “si el carnaval es desorden, es un desorden dentro de las reglas” (Scott, 2000: 210).

No obstante, los medios de comunicación, la AGA y muchos lugareños de la región ven es el tema del consumo, más no a la gente reivindicando las luchas ambientales, la preservación del planeta, el patrimonio ecológico y cultural. Eso para las empresas, los ricos de la región y los medios de comunicación incondicionales a esta no existe. Así lo explica, Julián Viñas (Entrevista, diciembre de 2016), uno de los organizadores de la consulta popular en Piedras, efectuada el 28 de julio del año 2013 en la cual 2971 habitantes del municipio votaron contra la realización de actividades de minería aurífera en la localidad, contra 24 que lo hicieron por el sí” <http://www.registraduria.gov.co/En-consulta-popular-celebrada-hoy,10769.html>.

⁴¹. “El Pinocho de Anglogold”. Boletín distribuido a la población cajamarcuna en el año 2016.

Estoy en una zona arrocera por excelencia, rodeado de los hacendados más grandes de la meseta de Ibagué. Ellos apoyaron económicamente el movimiento que se hizo en Piedras porque sabían que debido a la actividad minera se quedarían sin agua y sufrirían las consecuencias. Por todo ello nos comenzaron a catalogar como izquierdistas, cuando lo que yo he sido es un industrial y agricultor de arroz, con una empresa de ingeniería. Hoy en día mis amigos de toda la vida, mis mismos vecinos me empiezan a catalogar como de izquierda cuando esto no es ni de izquierda ni de derecha, sino de velar por el futuro de sus hijos y las generaciones por venir, porque sin agua no hay vida.

Pese a las descalificaciones, los integrantes de las organizaciones sociales han entendido que es únicamente a través de la cohesión y el entrelazamiento de las mismas, encaminada a la realización de acciones colectivas por la defensa del agua, la vida y el territorio, como se logrará construir un poder alternativo soportado en la comunidad, el actuar y el ser en colectivo. Persuasión que impulsan a través campañas educativas de sensibilización, conocimiento y persuasión a las comunidades relacionadas con los problemas ambientales que desencadenan los emprendimientos mineros a gran escala.

En resumen, el arribo de AGA a la municipalidad de Cajamarca en el año 1999 con el fin de iniciar el proyecto minero de La Colosa, llevó al surgimiento de procesos organizativos. Los nuevos sujetos sociales que los integran han implementado estrategias educativas o de información a la ciudadanía para que en ejercicio de pleno conocimiento puedan tomar decisiones sobre la inconveniencia de efectuar actividades mineras a gran escala y a cielo abierto en una zona con vocación agrícola denominada como despensa agrícola de Colombia, debido a los efectos que esta actividad genera en el territorio el agua, la biodiversidad y la vida de la región.

Con este propósito, estos procesos organizativos han efectuado acciones colectivas de hecho y derecho, principalmente la Marcha Carnaval por el Agua, la Vida y el Territorio. Actividad que se realiza anualmente en rechazo a la política minera del Gobierno Nacional y que se ha constituido en una fuerza social que ha permitido articular y cohesionar a las comunidades afectadas por esta actividad. Momento del año en el cual el colectivo se agrupa alrededor de la alegría, el arte y la defensa de la vida, en contraposición a la cultura de la muerte, la exclusión y el saqueo de los bienes comunes, efectuado por compañías multinacionales.

De las acciones colectivas realizadas por las organizaciones sociales que componen la RCAT, articuladas todas alrededor de propósitos ambientales del ámbito local pero principalmente en rechazo del emprendimiento minero de La Colosa en Cajamarca Tolima, se han derivado a su vez prácticas educativas que han devenido en enseñanzas y

aprendizajes individuales y colectivos que han contribuido a fortalecer y mantener en el tiempo la resistencia de los procesos organizativos. Este es el tema nuestro próximo capítulo.

CAPÍTULO 5. PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LAS ORGANIZACIONES ANTIMINERAS DE CAJAMARCA TOLIMA

El tema central de ésta investigación es analizar las prácticas educativas desarrolladas en torno a las acciones colectivas que se han realizado contra el emprendimiento minero de la Colosa en Cajamarca Tolima. Territorio en el que la compañía multinacional Anglogold Ashanti (AGA) pretende adelantar actividades de explotación minera a cielo abierto. Un rasgo común de los procesos organizativos populares que han surgido en esta localidad es el de promover acciones conscientes de formación⁴² con el propósito que sus integrantes y simpatizantes incorporen saberes y aprendizajes que les permita entender los aspectos centrales de los proyectos extractivos, y contribuyan a la capacitación de sus miembros y de los participantes en las acciones colectivas contra dicho emprendimiento minero. A juicio de Aguilera, González & Torres (2015), las organizaciones son espacios de formación, en los que se

encuentran los diferentes participantes con sus conocimientos y entre todos van formándose. También, existen espacios específicos en las organizaciones que les permiten a las personas interactuar y poner en juego sus conocimientos, sus habilidades, sus reflexiones y van haciendo de su formación un proceso constante, consciente, reflexivo y autónomo (Aguilera, González & Torres, 2015: 133)

El contenido educativo de estas prácticas de resistencia se ha dado de dos formas. De manera informal o no pensadas relacionadas con aprendizajes, saberes y conocimientos adquiridos en charlas con expertos, el desarrollo de movilizaciones o bloqueo de vías. De carácter formal o pensadas que atañen a la realización de campañas de sensibilización en las que se transmite información en charlas puerta a puerta, talleres, diplomados, mingas comunitarias, o la promoción de consultas populares.

A través de estas prácticas los integrantes de las organizaciones sociales y los participantes en las acciones colectivas contra la minería enfatizan a las colectividades sobre los efectos sociales y ambientales que acarreará la explotación minera en el patrimonio ecológico y

⁴². “La formación está referida a la “construcción de un sujeto de la razón y de la estética, un sujeto que durante su vida se dedica a su perfeccionamiento, a adquirir saberes, talentos habilidades...En las organizaciones locales la formación no se limita a una construcción personal, sino y sobre todo, se realiza para el trabajo con los otros. Es decir, los sujetos se forman para sí y para apoyar y potenciar a quienes integran el territorio. Se trata, en la mayoría de los casos, de personas que asumen su formación por el interés e inquietud de entender el contexto sociopolítico en el que se ubican, de aportar al mismo, y también por la responsabilidad y compromiso con el trabajo colectivo del que forman parte” (Aguilera, González & Torres, 2015: 118). Para profundizar en el conocimiento acerca de la valoración que hacen los integrantes de las organizaciones populares de sus experiencias educativas ver: Torres C., A. (2004). “La vida cotidiana de las organizaciones populares como espacio formativo”. En: *Revista Pedagogía y Saberes* No 20. Universidad Pedagógica Nacional.

cultural del territorio, la incompatibilidad de la explotación aurífera con la agricultura, el peligro que ocasiona a las fuentes de agua y la economía local. Conocimientos que configuran un proceso formativo del que hacen parte “un conjunto de saberes (cognitivos, valorativos, actitudinales, prácticos) que los sujetos adquieren en una experiencia educativa y que puede usar autónomamente para asumir nuevas situaciones” (Torres, 2004: 25).

De acuerdo con lo enunciado el objetivo de este capítulo es identificar las prácticas educativas informales y formales que han realizado las organizaciones sociales. Experiencias que hacen parte de un proceso formativo relacionado con la aprehensión por parte de las colectividades de otras formas de comprender, valorar, actuar o relacionarse. Destrezas a través de las cuales los integrantes de los procesos organizativos que operan en el municipio de Cajamarca han interiorizado derechos, desarrollado lazos de solidaridad entre sus integrantes, transformado identidades con el territorio, modificado actitudes y transformado hábitos. A juicio de una integrante del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca):

la educación es lo que ha hecho que Cosajuca haya crecido mucho en la formación y autoformación de sus integrantes. Gracias al apoyo de las organizaciones hemos crecido, nos hemos formado, concientizado, cualificado e incorporado valores. Me siento muy feliz por eso. Hemos pasado de ser unos chinos tirapiedras y groseros a tener un papel protagónico, a aportar cosas que incentivan la participación ciudadana. Los cambios que han tenido las personas son resultado de una educación autónoma y de un proceso formativo. (Entrevista a Érica Alejandra Ospina, diciembre de 2016).

Conforme a lo anterior, se tendrá en cuenta que la educación no es una función exclusiva de la escuela. Los procesos organizativos son también generadores de conocimientos y diálogo de saberes. Competencias que intervienen en la interiorización de valores, formas de obrar, virtudes para actuar, vivir en sociedad, transformar la conciencia, o un saber práctico orientado a reconfigurar una situación controvertida (Bengoa, 1988)⁴³; capacidades que

hacen que el sujeto se vaya interesando con su saber, lo lleve a involucrarse con los proyectos, acciones o líneas de la organización...En las organizaciones las formaciones son colectiva, no se puede entender de forma individualizante, como tampoco solamente para el perfeccionamiento de sí. El hecho de que la formación requiera de la voluntad, capacidad e interés del

⁴³. Para ampliar en este aspecto ver: Molano C., M (2015). “Gramáticas de la práctica pedagógica: claves para una lectura comprensiva”; Barragán G., D. F. (2015). “El profesor y el saber práctico”. Ambos escritos En: *Revista Educación y Cultura* No 112. Diciembre de 2015.

sujeto, no desconoce el papel de las cosas, de las mediaciones, de los otros en la formación” (Aguilera, González & Torres, 2015:120, 134).

En este sentido, los miembros del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué, así como los demás procesos organizativos surgidos en la municipalidad de Cajamarca que se oponen al proyecto minero de La Colosa desde el anuncio del arribo de la AGA en el año 2007, estuvieron convencidos que su formación y la de las comunidades eran la mejor herramienta para afrontar los conflictos ambientales que les acarrearía dicho emprendimiento extractivo. “No teníamos ni idea de minería a cielo abierto, tuvimos que formarnos, aprender y luego constituirnos en educadores de la comunidad”, argumenta el ambientalista Renzo García (Entrevista, diciembre de 2016).

5.1 Prácticas educativas informales

La educación informal es definida en el artículo número 43 de la Ley General de Educación como “todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados”⁴⁴. A juicio de Aguilera, González & Torres (2015), estos aprendizajes no planeados o pensados que se adquieren en “conversaciones cotidianas de los que tienen más experiencia son claves para la reflexión” (p.124), y los usan los sujetos para fortalecer sus discursos, saberes y prácticas, constituyéndose de esta forma en espacios formativos.

En efecto, la idea de capacitarse se originó para muchos de los integrantes del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué, así como los demás procesos organizativos que se oponen a la instalación en el territorio de un proyecto minero abierto a gran escala, de la influencia que ejerció sobre ellos el profesor de la UT Gonzalo Palomino, coordinador junto con Gloria Beltrán, del *Boletín Sos Ecológico*. Publicación, dirigida a la población en general y que se editó mensualmente, desde 1977 hasta 1991. La fase inicial estuvo centrada en denunciar y protestar ante el Estado y las compañías multinacionales por el impacto negativo que ocasionaba a la población y los ecosistemas locales el uso de detergentes, la implementación de la agricultura comercial y la explotación de material de arrastre de fuentes hídricas de la región como la que se efectuaba desde entonces en el río Ataco, ubicado al sur del departamento. Esta publicación ambiental que durante los años ochenta pasaba de mano en mano en las aulas de la UT, creando conciencia y llamando a los jóvenes a asumir la protección del entorno, se constituyó en un referente de

⁴⁴. Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación. Febrero 8 de 1994. Diario Oficial 41214.

movilización política y resistencia social en esta región del país (Pabón, 2009; Sánchez, 2017)⁴⁵.

Mario Vera, miembro del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué y docente de la Catedra Ambiental Gonzalo Palomino de la UT, explica al respecto:

Nuestras experiencias han venido a conocerla varias universidades. Les ha llamado mucho la atención esa experiencia que hemos venido haciendo en la UT. Es un plus importante que se debe a que hemos sido continuadores de un acumulado que dejó el maestro Palomino Ortiz: el trabajo del grupo ecológico que tuvo la Universidad y que fue de renombre nacional e internacional en las décadas de los setenta y ochenta. Renzo García, biólogo de formación y yo tuvimos como maestro a Gonzalo Palomino, un maestro no solo de aula, sino que cuando nos conocimos tuvimos también una identidad política e ideológica (Entrevista a Mario Vera, diciembre de 2016).

De este proceso formativo, líderes del Comité Ambiental y docentes de la misma UT, aprendieron a relacionar el conocimiento teórico y la práctica social. Para el cumplimiento de este propósito, los miembros de los procesos organizativos en conjunto con los surgidos en la población de Cajamarca iniciaron desde finales del año 2007 la ejecución de la fase formativa con el fin de educarse ellos mismos, y contribuir a la formación de las colectividades de la zona en temas relacionados con los efectos ambientales que ocasionan los emprendimientos mineros a gran escala.

Inicialmente visitaron lugares donde se ejecutaban proyectos de explotación minera a cielo abierto en América Latina, similares al proyectado en la mina La Colosa. La financiación del viaje a la mina de oro de Yanacocha, ubicada a 48 km de la ciudad de Cajamarca y a 800 km de Lima (Perú), a una altura que oscila entre los 3500 a 4000 metros sobre el nivel del mar, la realizó la ONG Paz Christi. De la expedición de la que hizo parte el mismo Gonzalo Palomino y su discípulo Renzo García sacaron la conclusión de no querer tal absurdo ambiental para el Tolima⁴⁶ (ver capítulo No 3).

Así lo explica un integrante del Colectivo Socioambiental Cosajuca:

⁴⁵. En homenaje a Palomino, ícono y ejemplo de vida para los ambientalistas de la región se creó mediante el Acuerdo 005 del año 2015 del Consejo Académico de la Universidad del Tolima, la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino. Hasta el día hoy este académico ha seguido acompañando los procesos de resistencia y movilización en contra de la explotación minera a gran escala en la municipalidad de Cajamarca (Reyes, 2015).

⁴⁶. Ver: "Líderes tolimeses conocieron la mina Yanacocha, en Perú. Aquí no queremos ese absurdo ambiental". En: Revista Ambiental Catorce 6 No 16. Febrero-marzo de 2010.

Como cajamarcunos no sabíamos lo que era la minería a cielo abierto, lo cual nos llevó a indagar lo que es ésta clase de minería. Iniciamos un proceso formativo de estudiar y conocer las experiencias de otras partes como el caso de la mina Yanacocha en el Perú. Iniciamos un historial de quién es AGA, la peor multinacional que apoyó grupos paramilitares en Sudáfrica y violadora de derechos humanos. Luego iniciamos un proceso de socialización con las comunidades, mostramos videos, e hicimos información voz a voz a los campesinos. Iniciamos procesos de resistencia con 20 personas y hoy son miles los que le hacemos resistencia a AGA (participación de Jefferson Rojas, miembro de Cosajuca, en la Cumbre minero energética. Ibagué, diciembre del 2016).

Con la intención de generar conciencia e informar a las comunidades sobre la minería a cielo abierto y los posibles impactos que esta actividad generaría a corto y largo plazo en el territorio, los miembros del Comité Ambiental de la ciudad de Ibagué gestionaron recursos con países como Suecia, Noruega y Holanda con el fin financiar la traída de expertos internacionales en minería como Robert Moran, María Stella Svampa, Horacio Machado Araoz, Joan Martínez Alier, entre otros.

La premura de este propósito residía en la convicción que las compañías mineras describen solamente los impactos positivos de la minería. Siendo obligación de los ciudadanos conocer una perspectiva más amplia acerca de los efectos que generan tales emprendimientos auríferos a gran escala y a cielo abierto. También en que “mucha gente habla de estas compañías como generadoras de desarrollo. No lo son; son compañías mineras. Están en el negocio de hacer dinero” (Padilla, 2010^a)

A principios de 2009 se realizaron encuentros y debates con la comunidad de Cajamarca, Ibagué y Espinal con el hidrólogo Robert Moran, experto mundial conocido por sus trabajos relacionados con los impactos ambientales de las instalaciones mineras. En los eventos académicos celebrados con la población de estas municipalidades, el hidrólogo caracterizó el contexto en el que se desarrollaría el emprendimiento minero como de un inminente conflicto potencial: debido a la vocación agrícola del territorio; la utilización de un metro cúbico de agua por segundo para procesar una tonelada de roca (equivalentes a 20 o 30 millones de toneladas de mineral por año); y el uso entre 630 y 950 millones de metros cúbicos de agua durante el mismo lapso.

Moran explicó que los millones de toneladas de roca estéril contaminada con mercurio, plomo y arsénico, las aguas infectadas con estos residuos químicos, la acumulación de los mismos en el dique de colas, sumado al polvo infectado con gérmenes patógenos que afecta los cultivos y las fuentes de agua donde hay peces, y los problemas de salud de las comunidades vecinas a la mina, representan un peligro para la mayoría de organismos vivos como aves, ganado y seres humanos. Según le indicó Moran a los lugareños: “La compañía

podría operar durante un plazo de 25 años, pero los residuos quedan allí para siempre (Moran, 2009: 19).

El impacto negativo de los proyectos mineros a gran escala se debe en parte a la poca atención que presta el público a la fase de exploración y al proceso de licenciamiento. Según Moran, “la compañía produce un estudio de impacto ambiental de 10.000 páginas y el público y el Gobierno solo tienen 30 o 40 días para examinarlo. Entonces la mina llega a ser un hecho consumado”. Exposición que se debía contrarrestar con la formación de asesores independientes que puedan suministrar información, y enseñarles a las comunidades a estructurar una racionalidad social surgida de la experiencia que tienen las poblaciones afectadas por los emprendimientos mineros. Para Moran, “una vez que tú empiezas a educar a la gente, ya es un impacto positivo. La gente empieza a entender cuáles son las consecuencias” (Morán, 2009: 21).

Según un integrante de la organización Conciencia Campesina, asistente a las charlas que efectuó Moran en el municipio de Cajamarca, uno de los expertos que más influyó en concientizar a la población sobre los efectos de la explotación minera a cielo abierto fue este hidrólogo norteamericano.

Una de las personas que más generó ese despertar de lo que podía pasar en Cajamarca fue el hidrólogo Moran. Con sus charlas entendimos que la explotación de la mina La Colosa no es viable por la topografía del terreno y lo que está en peligro como el deshielo del Nevado del Tolima, o la erupción del volcán Machín, etc. Esto constituye una bomba de tiempo que eleva los riesgos. Con personas como estas comenzamos a aprender y a tomar conciencia. Entendimos que sin ser educadores debíamos concientizar y educar a la gente (Entrevista a Jimy Fernando Torres, diciembre de 2016).

Para neutralizar esta estrategia engañosa de las empresas mineras, además de las charlas con expertos sobre el tema, los miembros de organizaciones sociales como el Colectivo Socioambiental de Cajamarca (Cosajuca), Emprendedores por la Ecología y la Tierra (Ecotierra), y Conciencia Campesina, entre otras, comenzaron a informarse también sobre este tipo de minería a través de las redes sociales, la internet y libros sobre el tema. La información obtenida era replicada a su vez en charlas que realizaban con las comunidades.

Cesar Augusto Riaño (Entrevista, octubre de 2016), miembro del Comité Ambiental en Defensa de la Vida dice al respecto:

Fuimos aprendiendo a través de redes sociales, internet, de los libros, y de gente que empezó a llegar al territorio a abrirnos los ojos. La investigación que hice sobre la minería me cambió la vida y la forma de ver el mundo. Abrí una página en Facebook llamada “No a la mina La Colosa, si a la Vida”. En esta página tenemos más de 18 mil seguidores. En ella comenzamos a

publicar las verdades sobre las mentiras que nos están diciendo. La gente empezó a unirse y a conocer la verdad.

Aprendizajes de los que los asistentes dedujeron que para encausar la resistencia debían fortalecer los procesos organizativos y articular a las comunidades a las distintas acciones colectivas. Según explica José Domingo Rodríguez, uno de los fundadores de la organización Asocuencia Chorros Blancos: la política minera del Gobierno Nacional y su incidencia en el territorio, fue lo que más influyó para que la comunidad entendiera que debía unirse y organizarse mucho más. “La fortaleza que veníamos perdiendo era debido a la desunión del pueblo cajamarcuno. Hoy en día hemos tomado conciencia que unidos podemos hacer mucho trabajo” (Entrevista, diciembre de 2016).

Unificación en la lucha que se materializó a principios del año 2013 contra la expansión de la actividad mineras a la vereda Chorros Blancos, en la que la AGA había comenzado a instalar campamentos y plataformas de exploración a una altura cercana a los 3200 m.s.n.m. Lugar en el que nace la quebrada del mismo nombre, del que se surte de agua el acueducto del municipio de Cajamarca y veredas aledañas como Altamira, y en el que la multinacional tenía un título minero de 206 hectáreas.

Para contrarrestar la actividad minera los líderes campesinos José Domingo Rodríguez, Martha Vega, entre otros, convocaron a la comunidad a reflexionar sobre los peligros que el emprendimiento minero representaba para el territorio y el recurso hídrico del lugar. Al llamado contribuyó la invitación a reuniones de socialización con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y voceros de cada vereda. “Con unos amigos de la causa pasamos por cada casa invitando a que nos empapáramos del daño que se nos venía a futuro con la locomotora minera. La gente lo entendió. Hicimos reuniones estratégicas por varios sitios y nos funcionó” (Entrevista a José Domingo Rodríguez, diciembre de 2016).

A la acción colectiva contribuyó hacerle entender a la gente que la exploración y explotación minera en el territorio no era un hecho consumado. Enseñanza que influyó para que los lugareños procedieran a bloquear la vía de acceso al lugar durante cinco días. Taponamiento al que acudieron en auxilio de los campesinos, miembros de la personería municipal, medios periodísticos, organismos de derechos humanos, y colectivos de la UT.

La acción obligó al alcalde municipal Evelio Gómez a firmar un acuerdo con los labriegos consistente en dejar subir 4 carros a retirar la maquinaria, y en el que quedó establecido que estos no estaban obligados a aceptar imposiciones de AGA y las autoridades municipales. Que eran los labriegos los que exigían los derechos sobre el territorio e imponían las condiciones, asimismo que los ejecutores de la protesta no eran guerrilleros como decía el mandatario municipal. Acusación a la que respondieron los campesinos expresándole al burgomaestre: “¿Cuándo usted subió a hacer política dónde nos encontró: en el monte o en nuestras casas?”. Según José Domingo Rodríguez, el hecho sirvió para que gente de otras

veredas tomaran la enseñanza “de defender lo propio, quererlo, y hacerlo sin necesidad de ninguna locomotora minera” (Entrevista, diciembre de 2016).

Situación que a su vez motivó la participación de los habitantes de la vereda Chorros Blancos en la Marcha Carnaval, celebrada en los años siguientes, tal como se observa en fotografía siguiente.

11 Fotografía 5.1 Participantes vereda Chorros Blancos en la Marcha Carnaval



Fuente: <http://pueblosencamino.org/index.php/asi-si/resistencias-y-luchas-sociales02>, Junio 8, 2015

La disposición de defender el territorio del proyecto extractivo, es lo que se comprueba con el proceder de Ever Ariel Olivera (Entrevista, octubre de 2017). Un campesino de la localidad, y quien decidió involucrarse desde ese momento en la lucha antiminera. Disposición que tomó influido por el asesinato el 2 de noviembre del mismo año 2013 del también opositor al megaproyecto minero, Pedro César García habitante de la vereda Cajón La Leona, apodado “*el Loco*”.

Fue cuando decidí tomar el asta de esa bandera y decir que, si mataron *al Loco*, aquí hay otro loco quizás más loco que él. Entonces que me maten a mí también. Decidí unirme a esa lucha desde ahí. Soy un convencido de que si por esta causa tengo que entregar mi vida lo haré. Por una causa justa, muy justa como es la defensa del derecho a la vida de los seres humanos. De todo esto

aprendí que la unión hace la fuerza, que donde hay principios éticos, morales, hay voluntad de hacer algo por los demás, aunque los demás no hagan nada por uno. Las causas justas y esa idea y ese arraigo por defender la vida de los demás es más importante que cualquier otra cosa.

García era miembro de la organización Conciencia Campesina y en las jornadas de protesta visitaba todas las fincas invitando a los vecinos para que salieran a las calles a rechazar la minería a gran escala que se pretendía instalar en el territorio y que pondría en riesgo la seguridad alimentaria de los habitantes del lugar. Igual que muchos otros vecinos de Cajamarca era un convencido que si el campo no produce alimentos, la ciudad se muere de hambre. Persuadido de ello participaba de la decoración de los jeep cargados de plátanos, granadillas, curubas, arracachas, aguacates y otros productos de la región que desfilaban junto a expresiones artísticas en la Marcha Carnaval que se celebra cada año en la ciudad de Ibagué a principios del mes de junio, con el fin de denunciar que el modelo minero que se quiere imponer en la región se va a robar las posibilidades de futuro de los habitantes de la región.

La disposición de defender el territorio, y el asesinato de García, tal como se muestra en el testimonio de Olivera, citado antes, fue el acontecimiento que impulsó a los habitantes de la localidad a involucrarse en experiencias que le dieran otro sentido y significado a su vida. Transformación subjetiva que es explicada por Retamozo (2009), como la posibilidad de dar sentido a situaciones, motivado por formas de actuar en la vida social a partir de otras vivencias significativas.

Sobre estas operaciones puede pensarse la constante reconfiguración de la subjetividad, que en el mismo momento que interpreta y da sentido puede ir modificándose. Esto es así, especialmente cuando se enfrenta a situaciones de ruptura de los patrones de la vida cotidiana proveniente de experiencias sociales o por acontecimientos naturales catastróficos (Pp 108-109).

Este tipo de acontecimientos, aunado a la previsión de estragos ocasionados a las fuentes hídricas, la biodiversidad y las actividades agrícolas que se realizan en la zona, incentivaron también la movilización social. Acción colectiva que según Luis Jorge Garay, académico experto en minería, se ha convertido en referente principal, y de la que se han originado procesos de sensibilización y concienciación de las nuevas generaciones para defender el patrimonio ecológico y cultural del territorio de un emprendimiento aurífero al que los lugareños asocian con la farsa, el crimen y la cultura de muerte (Entrevista a Luís Jorge Garay, marzo de 2017).

En efecto, la Marcha Carnaval, por su proyección local y nacional ha contribuido a incrementar la sensibilización y concientización en los participantes. Jolgorio pacífico de alegría y vida que es impulsado por las organizaciones sociales en contra de la cultura de

muerte que representa la actividad minera y que ha contribuido a que los habitantes del lugar amplíen la comprensión de la realidad a la que se verán abocados si se instala el emprendimiento aurífero en el territorio y a que cuestionen los supuestos beneficios que traerá la explotación minera. Incluso a que en las charlas cotidianas se converse de temas opuestos a los que los afectan corrientemente, como el desempleo, la pobreza, etc. Los testimonios de campesinos pertenecientes a organizaciones antimineras entrevistados para esta investigación son prueba de ello:

Pretender volar toda una montaña con dinamita y mezclarla con toneladas de cianuro y mercurio utilizando cantidades desproporcionadas de agua, la cual quedaría contaminada de por vida, es un crimen, es la muerte. El territorio quedará completamente estéril, eso sin contar con los efectos de la piscina de relaves o el dique de cola (Entrevista a Leonardo Rodríguez, junio de 2017).

En este mismo sentido, otro habitante del lugar afirma lo siguiente:

Algo tan elemental como ver que una persona perfora 800 metros de una montaña virgen donde nunca un ser humano ha sembrado nada de agricultura o soltado un animal. Ir y perforar con un taladro de tres pulgadas para sacar muestras de suelo encontrando aguas subterráneas y toda clase de minerales. Entonces la gente logró identificar que ahí no existe ninguna responsabilidad como dice el Gobierno de la tal minería responsable. Eso no existe en ninguna zona de páramo, en un bosque alto andino donde nace tanta agua dulce, en un mundo donde la gente se está quedando sin agua y sin comida. Eso es un absurdo (Entrevista a Ever Ariel Olivera, octubre de 2017).

Producto de estas acciones educativas informales sobrevino la emergencia de una redefinición del territorio como lugar de pertenencia, así como el afianzamiento de los procesos organizativos como defensores del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

Efectivamente, uno de los cambios y logros de los procesos organizativos a los que más hicieron referencia los entrevistados fue haber podido desarrollar en los integrantes y allegados a los mismos, el respeto y el amor por la tierra. “Cuando a un pueblo le tocan el corazón de su cultura reacciona. Somos un pueblo que amamos nuestra tierra. Defendemos la soberanía del territorio para producir alimentos para mandarle a otros hermanos nuestros en Colombia”, manifestaba un habitante de lugar (Entrevista a Gustavo Pulido, junio de 2017). “Hemos aprendido a defender lo nuestro, la agricultura de la que siempre hemos vivido, porque la producción de alimentos no va a pasar de moda jamás” explicaba otro (Entrevista Yolanda Rojas, junio de 2017). “No importa la religión, ni el estatus social, todos somos sujetos de derecho” esgrimía un tercero (Entrevista a Leonardo Rodríguez, junio de 2017).

Las organizaciones sociales generan también cambios cognitivos derivados de la experiencia cotidiana de sus integrantes. Transformaciones que posibilitan la adquisición de información sobre el campo de acción en que están inmersos, que amplían las nociones políticas y sus derechos, y generan nuevos esquemas valorativos. (Torres, 2004). El testimonio siguiente es prueba de ello:

Hace unos días le preguntaba al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas en un debate donde tuve oportunidad de ir: ¿Doctor a qué se debe la locomotora minera? Él me explicaba que Colombia está en crisis económica y que necesita de esos recursos naturales para el crecimiento económico. Yo le preguntaba entonces: ¿Cuántos años lleva el Cerrejón y dónde está el progreso que nos otorga? ¿Acaso la Guajira, el Chocó o el sur de Bolívar no son los territorios más pobres del país y se explota oro diariamente? ¿A dónde van esos recursos? Le hacía a manera de chiste lo siguiente: Si el pretexto que se tiene para explotar la mina La Colosa es el déficit económico quiere decir que vamos a hacer como la gallinita que tenía dos pollitos. Se le enfermó uno y mató al alentado para darle caldo al enfermo. Es un absurdo que no se entienda desde ningún punto de vista. Vamos a desaparecer un pueblo como Cajamarca en el que Ud. puede ver estas cordilleras 100 por ciento llenas de agricultura. Vida, comida, para dejar un desierto por sacar dinero. Una de las enseñanzas que he adquirido como miembro de la organización Asocuencia Chorros Blancos es el de haber estado en el mismo Congreso de la República y varias universidades exponiendo mi punto de vista, trayendo la vocería de la comunidad campesina que como yo sentíamos miedo de hablar en público, de salir a la calle. He adquirido ese conocimiento, ese crecimiento social de poder entrar a cualquier auditorio, ante cualquier personaje y decir somos campesinos cajamarcunos. Orgullosamente agricultores. Que defendamos nuestra cultura, nuestra identidad hasta el último de nuestros resuellos. Porque no vamos a aceptar mediante ningún método ni estrategia gubernamental que Cajamarca desaparezca del mapa (Entrevista a Ever Ariel Olivera, octubre de 2017)

Se podría afirmar que la defensa del territorio como marco de referencia fue consolidando en los integrantes de las organizaciones antimineras que operan en el lugar: primero, un esquema compartido de entendimiento e interpretación del accionar de las empresas mineras. Segundo, la necesidad de unificar las formas de lucha contra los problemas generados por el emprendimiento aurífero, y tercero, la convicción de la necesidad de profundizar en contenidos formativos que viabilizaran la construcción de puentes cognitivos que resignificaran el sentido de las luchas contra el emprendimiento aurífero.

En conclusión, lo que contribuyó a la interiorización de estos aprendizajes por parte de los integrantes de los Comités Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué, y el

que se conformó en Cajamarca y Anaimé, inicialmente fue la influencia que ejerció sobre ellos el profesor Gonzalo Palomino de la UT. Formación que fue complementada en charlas con expertos como las realizadas por el hidrólogo Moran; la visita al lugar donde operaban proyectos extractivos megamineros como Yanacocha en el Perú; el acceso a información de orden técnico sobre estos mismos emprendimientos extractivos que circula en redes sociales, la internet, libros sobre el tema; así como la sensibilización y concientización derivadas de acciones como marchas o el bloqueo de vías, cuyo fin era obstaculizar el tránsito de camiones que transportaban maquinaria de la compañía a los sitios de exploración. Dichos saberes fueron empleados por los integrantes de los proyectos colectivos para integrar el conocimiento teórico con la práctica social, replicar la información obtenida a toda la comunidad y fortalecer y encausar la resistencia contra el proyecto extractivo. Aspectos que contribuyeron también a que las mismas organizaciones antimineras vieran la necesidad de profundizar en las prácticas educativas formales, tema que abordaremos en el siguiente apartado.

5.2 Prácticas educativas formales

Junto a los espacios formativos informales o no planeados, las organizaciones sociales forjaron otros escenarios de aprendizaje y capacitación con el objetivo de profundizar en los contenidos de formación y que se catalogan en esta investigación como formales. Estas prácticas educativas y de aprendizaje planeadas, están referidos a “escenarios pensados para la formación de las personas que integran la organización”, tales como talleres, escuelas, charlas, encuentros, conferencias, etc. (Aguilera, González & Torres, 2015: 122).

Escenarios como la entrega de boletines escolares a los padres de familia en los colegios de Cajamarca como en las ciclo vías que se efectúan los días festivos en la ciudad de Ibagué, eran aprovechados para repartir a los concurrentes folletos o volantes como el denominado “Sos Ambiental”. Boletín que se imprimía bimestralmente con contenidos sobre el emprendimiento minero como: el impacto en la calidad del aire; el deterioro de la fauna y la flora; la contaminación y alteración en la calidad del suelo y subsuelo; el uso de químicos como el mercurio y el cianuro y los efectos que estos ocasionaban en la salud humana; el uso desmesurado del recurso hídrico y los efectos que todo esto ocasionaría para el consumo y la actividad agrícola y pecuaria de la zona. Uno de estos folletos informaba lo siguiente:

Sabía usted que el oro que proponen explotar en La Colosa es oro invisible o diseminado. Eso significa que para extraer menos de un gramo de oro es necesario reventar una tonelada de roca. En otras palabras, nos proponen destruir una montaña llena de vida y belleza, matando sin piedad su flora, su fauna, su riqueza hídrica y destruyendo sus suelos para siempre. Convertir la riqueza perenne de esa biodiversidad en un cráter de escombros y un

desierto de muerte sería una locura imperdonable (Boletín, Sos Ambiental No 7. enero de 2014 – febrero de 2014. Ibagué Tolima).

En otro número de la misma publicación (Boletín Sos Ambiental No 10. octubre de 2014) en la que se exponían 10 razones elementales para decir No a La Colosa se afirmaba que “la minería a cielo abierto con cianuro, según experiencias mundiales, aumenta la incidencia de cáncer, enfermedades respiratorias, renales, reproductivas, dérmicas, intestinales y visuales”.

Los contextos familiares y comunitarios de los dominios rurales eran también propicios para que propietarios o labriegos advirtieran a sus familiares y trabajadores sobre los peligros a los que se verían abocados los habitantes del territorio durante y después de la fase de explotación aurífera. El poseedor de una parcela rural en el territorio de Cajamarca e integrante de la organización Conciencia Campesina explicaba que el momento en que departía los alimentos, o realizaba actividades domésticas con los miembros de su núcleo familiar y los jornaleros que laboraban en su finca, era aprovechado para difundir información relacionada con el proyecto minero.

Nosotros somos la despensa agrícola y no nos podemos dejar comprar por una multinacional que en la etapa de exploración les va a dar trabajo, pero cuando llegue la explotación no van a tener a nadie. Eso lo debemos tener en claro. Entonces vamos a salir perjudicados porque nos van a cambiar la vocación agrícola por minería. Miremos una cordillera como la que tenemos. Le van a sacar 800 o 1000 metros hacia abajo ¿Cómo nos quedará? ¿Qué pasará con el agua? Era lo que les decía. Uno va explicando eso y muchas cosas más a la gente. Mostrando lo que nos puede pasar y va generando conciencia (Entrevista a Héctor Elías Báez, diciembre de 2016).

Estas campañas informativas realizadas a las comunidades son consideradas por algunos de sus realizadores como la puesta en práctica de una alerta temprana. Cesar Riaño (Entrevista, octubre del 2016), quien realizó campañas educativas en la población de Doima y Piedras en el mismo departamento del Tolima, donde la AGA proyectaba realizar el proceso de lixiviación o de procesamiento del oro extraído la mina de La Colosa en Cajamarca, dice al respecto:

Las charlas eran como una sumatorio para nuestro movimiento. En Doima y Piedras despertamos a las comunidades y hablamos con los campesinos en las jornadas de trabajo de ellos. Nos metíamos a las arroceras y les decíamos: mire AGA está aquí porque van a hacer dos procesos mineros que van a acabar con el territorio, les explicábamos lo de la lixiviación. En 2016 la AGA debía estar en la fase de explotación. Pero como en 2013 les pusimos un palo en la rueda y los sacamos de Doima y Piedras donde

querían hacer el proceso de lixiviación. Ahora el proceso de lixiviación quieren hacerlo en Cajamarca.

El anuncio en el año 2012 del interés de AGA por establecer en el corregimiento de Doima del municipio de Piedras Tolima la planta de procesamiento para el oro que extraería de la mina La Colosa en Cajamarca, influyó para que Renzo García junto a 40 estudiantes de la UT, decidieran trasladarse a este municipio tolimense. Durante la estadía que tuvo una duración de 45 días realizaron un ejercicio de información puerta a puerta con el propósito de explicarles a los habitantes de este municipio tolimense, los efectos que traería a los lugareños la instalación por parte de la AGA de la planta de lixiviación en la zona.

No nos querían recibir. El alcalde dijo: “me los sacan porque llegaron los marihuaneros de la Universidad”. Al final logramos casi una hermandad entre el Comité Ambiental y los habitantes del municipio porque logramos demostrar que la única posibilidad de ganar, está en el ejercicio de actuar conjunta y unificadamente. Necesitamos que haya una lógica académica, pero también que la gente aprenda de las comunidades y que haya un diálogo de saberes escuchando a un líder popular aprendiendo tanto como de un texto científico.

Influidos por la información recibida en las charlas puerta a puerta efectuadas por los estudiantes de la UT, los integrantes del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, y sus simpatizantes optaron por bloquear la única vía de ingreso que conduce al corregimiento. Acción en la que participaron personas de la tercera edad, adultos, jóvenes, niños, amas de casa, finqueros, comerciantes, etc., Proceso organizativo de carácter ambiental caracterizado según Leff (1986) por su “composición pluralista a través de una movilización social que permite una alianza de clases en torno a ciertos objetivos comunes: la sobrevivencia de la raza humana, la seguridad social, la conservación ecológica de los recursos (p.121).

El bloqueo tuvo una duración de 140 días, y tuvo como propósito evitar el tránsito de camionetas de la AGA que transportaban la maquinaria requerida para iniciar el proceso de lixiviación con cianuro y mercurio. Procedimiento para el que se usarían las aguas del río Opía, una de las pocas y quizá la única fuente hídrica productora de ostras de agua dulce del mundo. Con el fin de quebrantar la resistencia ciudadana los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), intentaron despejar la vía. “Les pedimos a ustedes los medios de comunicación que divulguen esta información, pues así evitamos un atropello mayor contra la comunidad que radicalmente le dice No a la construcción de un centro de procesamiento de oro”, fue lo que escribió María Hercilia Velásquez Viña en una red social (<https://es-es.facebook.com/ecosdelcombeima/posts/456047371136714>).

Aludiendo al carácter pluriclasista de los participantes en el bloqueo de la única vía de acceso al corregimiento de Doima, al intento del cuerpo policial del ESMAD, de desalojar a

los manifestantes, y la difusión de la información a través de los medios de información local y regional (acción educativa de carácter formal por organización previa de la información que se difunde), uno los organizadores de la acción colectiva manifiestan al respecto:

Logramos unirnos con los grandes hacendados del país y la comunidad de base durante cuatro meses y veinte días cerrando el puente. No se metieron los del ESMAD de frente porque eran hacendados del arroz del país y ellos estaban financiando todo este movimiento. Si había más de cien personas bloqueando había desayuno, almuerzo y comida para todos. Logramos unirnos, romper esa barrera. Hoy está rota... Todos ellos, los hacendados son uribistas. Eso yo no lo entiendo. Se movieron porque les iban a tocar el agua y su desarrollo económico estaba comprometido. A los hacendados les mueve eso: “me voy a quedar sin agua”. Pese a eso creo que rompimos paradigmas y nos unimos (Entrevista a Julián Viña, diciembre de 2016).

Además de posibilitar la unión de los distintos sectores sociales con el fin de evitar la instalación del procesamiento del oro, los miembros de las organizaciones sociales antimineras eran conscientes también que sin la movilización social lo jurídico no funciona. En consecuencia, el bloqueo obligó al alcalde municipal del municipio de Piedras, Arquímedes Ávila Rondón a convocar al pueblo mediante el Decreto 095 del 9 de julio del año 2013 a una consulta popular, la cual se realizó el 28 de julio del mismo año. Acción política en la que el 98 por ciento de los habitantes votaron por la no realización de ningún tipo de actividad minera en la localidad.

Las charlas puerta a puerta tenían como objetivo advertir a los lugareños sobre los riesgos que ocasionaría para los habitantes de Cajamarca y zonas aledañas, la puesta en marcha del emprendimiento minero, así como los peligros que ocasionaría para el medio ecológico y ambiental y a salud de los habitantes del territorio. Con objetivo semejante los estudiantes de medicina veterinario de la UT, efectuaban campañas de salubridad animal. Actividad para la que los futuros zootecnistas acompañados por miembros de las organizaciones antiextractivas instalaban una carpa en el parque principal del municipio, a la que acudían los lugareños con sus mascotas para ser revisadas por estos. Actividad que era aprovechada para entregar información sobre el emprendimiento minero.

Habitualmente los estudiantes de la UT, realizaban también plantones frente a las oficinas de la AGA en la ciudad de Ibagué. Los organizadores de la acción colectiva exhibían a los transeúntes pancartas alusivas a los efectos que ocasionaría la explotación de la mina La Colosa. Y cuando el semáforo estaba en rojo, previo permiso del conductor procedían a colocar calcomanías, adhesivos o sticker en los vidrios de los carros que cruzaban por el lugar.

Otro escenario educativo fue la realización de obras de teatro o toques de rap. Actividad en la que los mismos estudiantes de la UT, acompañados por los miembros de las organizaciones antiextractivas explicaban a los habitantes de barrios populares de Ibagué y Cajamarca la problemática a que se veía abocado el territorio con el emprendimiento minero. La ejecución de estas formas de expresión cultural en la que los asistentes podían participar improvisadamente, por lo regular terminaban en conversatorios comunitarios relacionados con lo que cada uno había percibido. De esta forma, las colectividades se aglomeraban y escuchaban hablar a ciudadanos comunes, no necesariamente expertos en el tema minero.

Uno los participantes en estos eventos, constituidos en escenarios educativos de carácter formal, dice al respecto:

Para nosotros todos los escenarios se constituyen en pedagógicos. Tenemos que hacerle entender a la comunidad la problemática y que ante eso tenemos que despertar y levantarnos. Hoy desde la juventud intentamos hacer una propuesta desde la educación popular a todas las organizaciones sociales antiextractivas. Entender que la comunicación integral no es solamente la web sino también la voz a voz: tú me cuentas y yo te cuento. Es lo que intentamos plasmar desde estos escenarios artísticos (Entrevista a José Jiménez, diciembre de 2016).

Junto al desarrollo de estas acciones educativas y con el propósito de atraer más personas al proceso organizativo, discípulos del profesor Gonzalo Palomino, decidieron crear en el año 2009, los “Martes de Formación Ambiental”. Nombre derivado de una columna semanal escrita por este en el periódico Regional El Nuevo Día, denominada Martes Ambiental.

Según Renzo García (Entrevista, diciembre de 2016), a las reuniones que se celebraban ese día de 6 a 8 de la noche en la Biblioteca Darío Echandía de la ciudad de Ibagué, empezaron a asistir entre quince o veinte personas. Entre los asistentes a ellas buscaban a alguien para que preparara una conferencia relacionada con temas afines a los efectos ambientales de las explotaciones mineras a cielo abierto como el que se pretendía instalar en el territorio de Cajamarca. Por cerca de dos años la actividad funcionó de esta forma, la que periódicamente se veía entorpecida por problemas de salud, trabajo, y hasta falta dinero para sufragar el costo del transporte de los contertulios.

Aunque los asistentes estaban comprometidos con el proceso formativo, el movimiento no crecía en términos cuantitativos.

Discutimos con los miembros del Comité Ambiental todo el tema de transformar significativamente el espacio, que tuviera mayor intencionalidad.

Yo tenía contactos en la UT, otros en otros centros educativos. Dijimos, pues creemos un diplomado porque a la gente le gusta que esos procesos se formalicen. Hay gente que quiere aprender por aprender, hay otros que también quieren aprender pero que le certifiquen. Vine y hablé con el decano de la Facultad de Ciencias de esa época, hablamos también con unos amigos del Observatorio Ambiental. Ellos fueron los que en realidad arrancaron el proceso, y gracias a ellos nos fuimos con el tema de los diplomados (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

Como resultado de la iniciativa, en el año 2012 el Comité Ambiental en Defensa del Agua y de la Vida, firmó un pacto de voluntades con la UT, Alianza mediante la cual la Institución educativa por intermedio del Observatorio Ambiental se comprometía a promocionar valores y principios ligados a la vida digna y futura de los habitantes del departamento. Respaldar el quehacer del Comité Ambiental como un escenario de articulación del movimiento social, y apoyar el quehacer universitario con proyectos de investigación, acciones de proyección social y programas de formación académica de orden ambiental⁴⁷.

En el año 2014 el acuerdo se materializó en la decisión de realizar en la ciudad de Ibagué un diplomado titulado: “*Gestión Ambiental y Territorial por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio*”. Programa académico con el que se busca formar sectores populares en temas sociales, jurídicos, económicos y políticos con el fin de defender el territorio de la exploración y explotación minera. El curso es orientado por la Facultad de Ciencias de la UT, con el apoyo del Banco de la República, el Grupo Semillas, Sos Ambiental, la Biblioteca Darío Echandía y la Fundación Rosa Luxemburgo.

En suma, a las acciones educativas de carácter informal explicadas en el apartado anterior, y que tenían como propósito brindarle el conocimiento a la comunidad sobre los efectos que ocasionaban los emprendimientos mineros a la biodiversidad, la vida y el territorio, se sumó la realización del diplomado. Programa de carácter formal que comenzó a realizarse los días martes en la Biblioteca Darío Echandía. Instalación tiene un cupo para 200 personas aproximadamente. Debido a que al primero de ellos se matricularon cerca de 400 personas, sus realizadores tomaron la decisión de trasladar su ejecución a la sede Los Ocobos de la UT. La afluencia de un mayor número de inscritos y el interés de la gente por seguirse cualificando, obligó a los organizadores en el año 2015 a iniciar el nivel dos y a abrir dos grupos: de 4 a 6 y de 6 a 8 de la noche. Este mismo año se decidió trasladar la

⁴⁷. Revista *Impactos*, *Boletín del Observatorio sobre Nueva geografía económica, geopolíticas y derechos humanos* No 13 – 14, 2013. A la fecha de publicación de este medio informativo, el cumplimiento del aludido acuerdo se encontraba en discusión por parte del estudiantado de este centro educativo, debido a que a los pocos días de su firma la Universidad acogió el financiamiento de un evento cultural por parte de la AGA.

ejecución del curso a Cajamarca, epicentro de la lucha antiminera. Lugar en el que se realiza los días domingo con una periodicidad anual.

Tanto en Ibagué como en Cajamarca el curso es gratuito y la inscripción, salvo para los que se inscriben en el segundo nivel, no requiere ningún tipo de formación académica previa. Condición por la cual se matriculan desde amas de casa, campesinos, personas de la tercera edad, chicos, profesores de colegio y estudiantes de la UT. Tiene una duración de cuatro meses (120 horas por cada nivel). El requisito principal para la graduación (ver fotografía 5.2 y 5.3), es que los participantes se conviertan en multiplicadores de los aprendizajes obtenidos en el desarrollo del mismo, organizando charlas sobre una problemática de la comunidad de mínimo veinte personas. El total de graduados hasta el año 2016 era de 1500 personas (Quintana, 2016)⁴⁸.

12 Fotografía 5.2. Diplomado en Análisis territorial, conflictos ambientales y movimientos sociales



Fuente: Archivo Personal, 2016

Los contenidos que se imparten en el diplomado están relacionados con las características físicas, económicas y humanas del territorio; la incompatibilidad entre minería y

⁴⁸. Ver también. “Frenar la minería desde la educación. En: *Revista semana*, junio 7 de 2017.

agricultura; el uso indiscriminado del agua para la explotación aurífera; el riesgo de la actividad para la seguridad alimentaria; los recursos jurídicos para oponerse a la ejecución del emprendimiento. Sumado a la importancia de preservar los bosques y las fuentes hídricas; así como la enseñanza de prácticas de reciclaje. Temas todos, significativos para los que lo han realizado el diplomado (Entrevista a Marlene Mojica Lozano, diciembre de 2016). Aspectos formativos que les ha permitido a los mismos controvertir la información que registran medios de comunicación y que califica a los habitantes de Cajamarca como “extremistas que no saben que la minería le conviene al país”. Y que les brinda los argumentos necesarios para decirle No a la mina y defender el territorio mediante acciones colectivas de hecho y de derecho (Entrevista a Jaime Tocora, junio de 2017).

13 Fotografía 5.3. Graduados Diplomado en Análisis territorial, conflictos ambientales y movimientos sociales.



Fuente: Archivo personal, 2016

Opinión que es compartida por Camilo Padilla (Entrevista, marzo 26 de 2017) integrante del Comité Ambiental de Cajamarca y Anaime y concejal del municipio de Cajamarca. Regidor que considera el proceso formativo como “exitoso” porque los que lo realizan salen empoderados a hacer activismo y convencidos de la importancia que tiene la defensa del territorio y el medio ambiente. “Comprenden que el problema no es solo de Cajamarca

y los municipios del departamento del Quindío que son aledaños; a Ibagué y el plan del Tolima, territorios que se abastecen de la cuenca mayor del río Coello”.

De las acciones educativas formales hace parte también la iniciativa de educar a la población en formas de participación política consagradas en la Constitución Política de 1991, como consultas populares, la interposición de tutelas, derechos de petición y demás acciones jurídicas, ante organismos oficiales encargados de tomar decisiones trascendentales relacionadas con la política minera que afecta el ámbito regional y local. Según explicaba Jimy Fernando Torres (Entrevista, diciembre de 2016) líder campesino local, “lo jurídico tiene como propósito ponerle palos a la rueda al proyecto minero de la AGA”.

Con respecto a esto último, Moran rememoraba en las intervenciones realizadas en el año 2009 en los municipios de Cajamarca, Ibagué y Espinal, que en Tambogrande (Perú), se había realizado un referendo informal en el año 2001 en el que más del 90 por ciento de la población había votado en contra del emprendimiento minero, y “la compañía canadiense que tenía el control del lugar tuvo que dar por perdidos cientos de millones de dólares de inversiones” (Moran, 2009: 21).

Para Moran, el éxito de la acción jurídica estriba en hacerle entender a la gente cuáles son las dos racionalidades que disputan y debaten en torno a los alcances y riesgos para el territorio, el agua, la biodiversidad y la vida. Una, la de las empresas, fundamentada en una producción de riqueza que se organiza despolitizando y naturalizando la acumulación económica mientras amenaza, destruye las bases de la vida, y niega y minimiza esta catástrofe. Otra, la social, surgida de las experiencias que de ella tienen las poblaciones afectadas (Ciuffolini, 2012).

Lógicas que en el contexto de la globalización permite a las empresas trasladarse al lugar del mundo donde descubren la posibilidad de mejorar los dividendos, mientras que a las localidades les corresponde la labor de “de lamer las heridas, reparar los daños y ocuparse de los desechos. La empresa tiene libertad para trasladarse, las consecuencias no pueden sino permanecer en el lugar. Quien tenga la libertad para escapar a la localidad, la tiene para huir de las consecuencias” (Bauman, 2015: 16).

Con el propósito de prevenir el evidente impacto negativo que el proyecto La Colosa puede generar en las fuentes hídricas, la biodiversidad, los suelos, el paisaje, el aire y el territorio en general, las comunidades organizadas en torno al Comité Ambiental del municipio de Cajamarca, basados en el artículo No 33 de la Ley 136 de 1994⁴⁹, desde finales del año

⁴⁹. ARTICULO 33. Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio. PARAGRAFO: En todo caso, las decisiones sobre el uso del suelo deben ser aprobadas por el Concejo Municipal.

2014 comenzaron a exigirle al alcalde municipal Evelio Gómez, la realización de una consulta popular. A mediados de febrero del año 2015, la exigencia fue negada por el Concejo municipal 10 votos contra 1. Gerardo Arciniegas, el único que votó afirmativamente, dijo haberlo hecho “para defender el agua y nuestros recursos naturales, pues Cajamarca es una población agrícola y no minera como quieren hacerla ver” (Periódico El Tiempo, febrero 14 del año 2015).

La exigencia de la comunidad al mandatario local de Cajamarca estaba inspirada en el ejemplo de la consulta popular celebrada el 28 de julio del año 2013, en el municipio de Piedras en el mismo departamento. A la pregunta sobre si apoyaban las actividades mineras auríferas en su jurisdicción municipal, 2971 lo hicieron por el “No” y 24 por el “Si”. El total de inscritos para sufragar era de 2995 personas (Consulta popular en Piedras, Tolima en: (<http://www.registraduria.gov.co/En-consulta-popular-celebrada>)).

Conscientes de la falta de garantías para que los cabildantes aprobaran la consulta, debido al “poderío económico y político de la empresa AngloGold Ashanti y la corrupción del Consejo Municipal” (Fundación para la Defensa de la Madre Tierra y Cosajuca, 2016: 5), las organizaciones sociales del municipio de Cajamarca tomaron la decisión de tramitar la consulta popular por iniciativa ciudadana mediante recolección de firmas. La iniciativa estaba respaldada en la Ley 1757 del año 2015⁵⁰. Según Jefferson Rojas, (Entrevista, diciembre de 2016), miembro de Cosajuca, “en 15 días se recogieron en el área rural y urbano del municipio “casi 5000 firmas de las cuales avalaron 3800 y exigían 1608”. Con respecto a la Consulta popular, Robinson Mejía también integrante de la organización Cosajuca precisa que,

primero le solicitamos a la Registraría inscribir el equipo promotor para recolectar las firmas. En febrero radicamos la solicitud y en marzo nos entregaron el formato, donde nos indicaban que debíamos recolectar 1608 firmas en un plazo de seis meses. En 15 días recolectamos 4814. De ese número el Consejo Electoral validó 3364 firmas el 23 de mayo. Ese mismo día llegó al Concejo de manera formal la propuesta que finalmente fue votada en agosto (Silva, 2016a).

⁵⁰. Según el artículo 3 de esta ley, “Los mecanismos de participación ciudadana son de origen popular o de autoridad pública, según sean promovidos o presentados directamente mediante solicitud avalada por firmas ciudadanas o por autoridad pública en los términos de la presente ley... Son de origen popular la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato; es de origen en autoridad pública el plebiscito; y pueden tener origen en autoridad pública o popular el referendo y la consulta popular... Artículo 9, numeral d). Para solicitar una consulta popular de origen ciudadano en las entidades territoriales se requiere del apoyo de un número no menor del diez por ciento (10%) de ciudadanos que hagan parte del respectivo censo electoral”.

La estrategia educativa para implementar este mecanismo de participación política entendida “como herramienta y no como los fines de nuestras luchas para cambiar esta realidad frenética” (Fundación para la Defensa de la Madre Tierra y Cosajuca, 2016: 5), el mismo Colectivo Socio ambiental Juvenil Cosajuca con la Colaboración de la Fundación para la Defensa de la Madre Tierra (FUNMITI), diseñaron la cartilla titulada: *La Despensa: Guía Metodológica para Realizar Consultas Populares en Colombia*, la cual fue distribuida a todos los miembros de la comunidad(Ver fotografías 5.4.)

14 Fotografía 5.4. Portadas Revistas locales



Fuente: Archivo personal. 2018

A la campaña de difusión sobre su contenido relacionado con lo que es una consulta popular y el proceso para su realización, contribuyeron de manera decisiva miembros del Comité Ambiental municipal y la UT, quienes hicieron permanentemente charlas en veredas, barrios de la localidad, y a los estudiantes del diplomado explicado antes.

A lo anterior se sumó la realización durante más de un año de acciones colectivas como: marchas de protesta; festivales campesinos en defensa del agua, el territorio y la agricultura; participación en foros departamentales; asambleas ciudadanas; talleres veredales de capacitación y demás campañas educativas de sensibilización en colegios y en

toda el área rural y urbano del municipio. Actividades en la que los miembros de las organizaciones sociales les informaban a los asistentes sobre los efectos que el emprendimiento minero ocasionaría en el patrimonio ecológico y cultural; las características del territorio de Cajamarca. Estrella hídrica, ecosistémica, biodiversa, y reserva alimentaria, denominada despensa agrícola de Colombia, del que salen diariamente hasta 15 camiones cargados de arracacha, frijol, café y demás verduras y hortalizas a las plazas mayoritarias de Bogotá, Cali, Medellín.

La información proporcionada a los lugareños mediante volantes, periódicos o videos, incluía explicaciones sobre la inviabilidad social, económica y ambiental del proyecto minero La Colosa y los factores que determinaban la vocación agrícola del territorio. Riqueza que se podría defender con la consulta popular. Mecanismo de participación política que se constituía en el espacio y la herramienta para demostrarle al Gobierno y al mundo, que los lugareños eran responsables de salvaguardar la vida, el agua y la cultura agropecuaria. También que en las manos de cada uno de ellos estaba la posibilidad para que sus hijos y nietos siguieran viviendo en el territorio.

Tal ejercicio de persuasión tenía el propósito de brindarle los conocimientos necesarios a los pobladores para que comprendieran que la consulta popular no era una acción instrumental de la política electoral representativa, o el otorgamiento del poder a un individuo. Su importancia radicaba en la oportunidad para el empoderamiento de las comunidades. Así como la posibilidad de defender un modelo de desarrollo basado en la agricultura que siempre se ha dado en el territorio, y no implantar uno minero nocivo para el municipio.

Después de superar múltiples obstáculos legales relacionados con la formulación de la pregunta, aplazamientos e incluso amenazas de muerte a los miembros del Comité Ambiental⁵¹, la consulta popular se efectuó el 26 de marzo del año 2017. ¿La pregunta que se hizo “Está usted de acuerdo Si o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras? De un total de 6296 votantes, 6165 sufragantes equivalentes al 97,92 por ciento lo hicieron por el “No”; 76 correspondientes al 1,21 por ciento votaron por el “Si”, 14 votos fueron nulos y 41 no fueron marcados.

⁵¹. Según información recogida en el trabajo de campo, días antes de la celebración de la consulta popular, se difundió información en la que se decía que la consulta se había aplazado, que votar por la consulta era votar por las Farc, y que en si ganaba el “No”, en el municipio de Cajamarca esta organización guerrillera iba a constituir una zona de concentración. Igualmente, al teléfono personal de Renzo García, líder del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, de la ciudad de Ibagué, llegó un mensaje de texto desde el celular No 3132295506 en el que se le amenazaba de muerte y en el que se leía lo siguiente: “Hpts guerrilleros, comunistas de comités ambientales, ut, marcha patriotk, congres pueblos demás farianos de supuestos activistas d derechos umanos y ambientalistas, no los keremos ver en Cajamarca ni en ningún lado jodiendo oponiéndose al desarrollo d nuestras regiones, los vamos es a quebrar. Atte águilas negrs AUC”.

15 Fotografía 5.5. Resultados consulta popular



Fuente: Archivo personal, 2018.

Una semana después el Comité Ambiental le agradeció a la comunidad de Cajamarca por medio de volantes y redes sociales (ver fotografías 5.5). Le notificó además el proceso a seguir por parte del Ejecutivo y Legislativo municipal. La información suministrada indicaba que el resultado de la consulta popular era de carácter obligatorio de acuerdo a lo dispuesto en los artículo 8 de la Ley 134 de 1994 y 41 de la Ley 1757 del año 2015⁵². La advertencia explicaba además que el Concejo debía expedir un Acuerdo acogiendo los resultados de la consulta popular en el periodo de sesiones siguiente a la toma de la

⁵². El artículo 8° de la Ley 134 de 1994 “*Consulta popular*. La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto”. Por su parte, el artículo 41 de la Ley 1757 del año 2015 explica que: “La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando se cumpla con los siguientes requisitos: a). En el plebiscito que haya participado más del cincuenta por ciento (50%) del censo electoral vigente; b). En el Referendo que el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral; c). En la Consulta popular que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral...”

decisión, el cual se iniciaría en el mes de mayo. Vencido el plazo, si el Concejo no expedía el acuerdo, el Alcalde municipal debía adoptar la decisión mediante un Decreto en los 15 días siguientes.

Los miembros de los Comités ambientales de Cajamarca e Ibagué y la misma comunidad, eran conscientes que el triunfo del “No” demostraba por la vía institucional y democrática, que la explotación minera en el municipio, no tendría licencia social, lo cual le daría inicio a un litigio jurídico con el Gobierno y la misma AGA. Esta nueva etapa comenzaría por tener que defender un resultado que representaba un insumo sumamente importante a favor de la defensa del territorio, el agua, la biodiversidad y la vida, que podría ser replicado en otras regiones, como efectivamente sucedió. En efecto, al municipio de Cajamarca concurren días antes del 26 de marzo, promotores de consultas populares de municipios como el Paujil, Pijao, Quinchía y otros lugares de exploración minera, para aprender de la estrategia de campaña utilizada en el municipio tolimense durante la etapa previa a la consulta popular, y replicarla posteriormente en sus territorios.

Como parte del mismo proceso de formación jurídica, la UT, el Observatorio Ambiental, adscrito a la Facultad de Ciencias de la misma institución educativa y la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, realizaron el convenio O775 de junio de 2015, mediante el cual organizaron Veedurías Ambientales en doce municipios del departamento, con el fin que las comunidades pudieran acceder a toda la información necesaria para dinamizar el debate del uso de los recursos y el impacto que esto produce. Para ello diseñaron la cartilla titulada *Veedurías Ambientales*. Ambos materiales de consulta han sido distribuidos a los habitantes del departamento.

Según la Organización Conciencia Campesina, estas acciones jurídicas, pretenden también fortalecer los procesos participativos de las comunidades y la promoción de la ciudadanía activa para la gestión y protección medioambiental del territorio. La formación jurídica, constituye un punto en común que une las organizaciones a fin “de continuar el propósito de instauración de acciones populares para incidir ante el Gobierno Nacional y reclamar los derechos de los ciudadanos de Cajamarca y Anaimé” (Conciencia Campesina, 2014).

Estas actividades se complementan con el desarrollo de talleres orientados por miembros de organizaciones sociales como Conciencia Campesina y Cosajuca. Dirigidos a los habitantes de las distintas veredas del municipio de Cajamarca en los que participan niños y adultos. Los talleres están relacionados con la búsqueda de estrategias de apoyo a la economía campesina local, el conocimiento de los rasgos del territorio, la enseñanza a los asistentes de los alimentos que produce su propia tierra, sus bondades y usos, y la realización de dibujos de los paisajes del ámbito local (Conciencia Campesina, 2014).

Dichas acciones educativas involucran, además, la realización de asambleas comunitarias para la autogestión del agua, comúnmente denominados acueductos comunitarios, los

cuales operan sin ánimo de lucro y no dependen de las empresas de servicios públicos del municipio. En estas congregaciones, las colectividades se organizan a fin de crear juntas de agua, para autogestionar solidariamente el acueducto para sus viviendas. “Los acueductos comunitarios también son una propuesta de conservación de las cuencas y los territorios donde se encuentran, pues las comunidades realizan trabajos colectivos para conservar las cuencas y microcuencas que abastecen a estos acueductos” (Rojas, 2014), generando con ello una apropiación e identidad con los territorios.

Según Jonathan Ospina, (Entrevista, diciembre de 2016), miembro de la Organización Juvenil Cosajuca, la defensa de los acueductos comunitarios sirve para encaminar la resistencia contra la megaminería que se pretende instalar en la región. Acción que se explica por la existencia de 161 cuencas hidrográficas de las que estos se surten. Siendo deber del Estado garantizar que el uso del líquido permanezca en manos de la comunidad si la minera llega a realizar actividades de exploración y explotación. Debido a que el recurso hídrico es fundamental para las comunidades, AGA ya no va a poder entrar al territorio. “El trabajo que se hace con las comunidades es una estrategia educativa para defender el territorio y para garantizar el derecho al agua. Que mejore su calidad y la forma como este se administra y se adquiere”.

Estas acciones formativas se complementan con la realización cada 15 o 20 días de labores comunitarias, denominados mingas. Ejercicio copiado de la tradición de los pueblos indígenas en la cual se crean espacios de encuentro con las comunidades con el fin de adelantar acciones asociativas, gestionadas por miembros de la organización juvenil Cosajuca. Convencidos de poder colaborar con las labores del campo, sus miembros realizan acercamientos con miembros de las Juntas de Acción Comunal de las distintas veredas con el fin de realizar talleres en el área rural y efectuar junto a los campesinos, limpieza de vías de penetración, lavado de tanques de acueductos comunitarios, reparación de tuberías dañadas, deshierbe de las parcelas o cocinar. Labores en las que los participantes conversan informalmente de todos los temas, no necesariamente de los efectos del proyecto minero o el uso del mercurio. Platican sobre temas como el uso de químicos en la agricultura, los problemas que afectan al municipio, la política, la música, o la necesidad de defender el territorio del emprendimiento minero. También se desarrollan lazos de solidaridad, intercambio de experiencias y saberes.

Los aprendizajes que quedan de la minga es que no hay edad ni límite para aprender. Ellos nos transmiten esos saberes que tienen del campo y el territorio. Nosotros aprendemos de un trabajo mancomunado. Como jóvenes que vivimos en el casco urbano, echando azadón con ellos, se conoce qué es lo que piensan, qué percepciones tienen del territorio, de la tierra, que no es solamente para cultivar sino también sobre la relación armónica que debemos tener con ella (Entrevista a Érica Alejandra Ospina, diciembre del 2016).

La convocatoria a los talleres es efectuada finca a finca, voz a voz o usando la telefonía celular. Los temas tratados en ellos están relacionados con las características de las cuencas hidrográficas, estudios técnicos sobre el agua, las formas de participación política o el conocimiento sobre el territorio y la defensa del mismo, para lo cual es indispensable el uso de cartografías regionales que permitan abordar adecuadamente aspectos como la biodiversidad, el relieve, la cultura y la producción económica.

A estas acciones educativas acuden mínimo 20 personas, principalmente hombres, acompañados de sus hijos y esposas las cuales lo hacen principalmente como acompañantes de sus esposos. Muchos de los asistentes deben sortear dificultades como no poder acudir constantemente por tener que trabajar, recorrer largas distancias, desconocer los temas tratados en ellos, o no saber leer o escribir. Por este motivo, los que los orientan deben usar un lenguaje claro y concreto, realizar dinámicas que incentiven la participación y metodologías flexibles adecuadas a tiempos cortos, “debido a que los participantes son gente campesina que trabaja y tiene obligaciones y que no está acostumbrada a eso” (Entrevista a Érica Alejandra Ospina, diciembre del 2016).

Debido a la desaparición y posterior asesinato de Juan Camilo Pinto (el 2 de noviembre del año 2013) y Daniel Humberto Sánchez, (el 2 de octubre del 2014), integrantes ambos de la organización juvenil Cosajuca⁵³, el colectivo decidió convertirse en defensor de derechos humanos. Para ello iniciaron un proceso de autoformación y formación con el apoyo del Colectivo de Presos Políticos del Tolima y Ansur Colombia. Convencidos que para el cumplimiento de tal objetivo tenían que formarse si querían seguir incidiendo en la formación de una opinión opuesta a la actividad minera en la comunidad cajamarcuna. Una de sus miembros (Entrevista a Érica Alejandra Ospina, diciembre del 2016), comentaba así lo sucedido al interior de la Organización como resultado de esta causa:

El tema educativo desde mi perspectiva, es el que ha hecho que Cosajuca haya crecido mucho en la autoformación y educación. Educación gracias al apoyo no solo de las organizaciones, sino como crecimiento y formación de cada uno de sus miembros. Como dice el cuento del viejo Antonio del movimiento zapatista: uno es tan grande como el enemigo que elige. Porque si yo conozco y reconozco a mi enemigo y sé que es grande, pues yo también tengo que crecer. Me obliga a crecer para poder confrontarlo.

Paralelo a las acciones mencionadas, los miembros de los procesos organizativos realizan actividades como recoger basuras en los caminos, gestionar con las comunidades proyectos de Acuerdo de interés comunitario para presentar al Concejo Municipal, realización de jornadas en defensa de la madre tierra, consistente en efectuar durante una semana

⁵³. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (octubre de 2014). Asesinado líder ambientalista en Cajamarca. En: <https://www.colectivodeabogados.org/?Asesinado-lider-ambientalista-en-Cajamarca>. Fecha de acceso, abril 12 del 2017.

actividades ecológicas y eventos culturales para la juventud, o elaboración de talleres con las comunidades campesinas relacionados con el conocimiento del territorio. Actividad última para la cual se usan cartografías con el fin de ubicar en mapas locales las cuencas hidrográficas, que instruyen y educan a las comunidades y los mismos miembros de las organizaciones.

La misma Érica Alejandra Ospina explica que muchos de los campesinos que participaban de los talleres sobre el territorio no sabían lo que era una cuenca hidrográfica teniéndola ahí, y tomando agua de ella. “Yo tampoco sabía acerca de la importancia de esa cuenca de Chorros Blancos para el municipio de Ibagué y la gente del Tolima. Es ahí donde va la educación. Nosotros podemos aportar a algo y ellos nos aportan a nosotros”.

Las prácticas educativas incluyen también recorridos por los colegios del municipio. Visitas en las que se incita a los estudiantes a consultar en la internet y redes sociales temas relacionados con los efectos que ocasionan los emprendimientos mineros a gran escala. Ejercicio que ha permitido a los habitantes de la jurisdicción saber lo que es una mina, la importancia de las fuentes hídricas y lo que es una consulta popular. “Lo que se ha transmitido ha quedado. Ha habido un proceso de formación educativa. Por ejemplo, la gente aprendió que una consulta es para votar y decidir si se quiere minería o no. A la gente se le ha quedado eso” (Entrevista a Érica Alejandra Ospina, diciembre del 2016).

En este mismo sentido, Camilo Padilla (Entrevista, marzo de 2017), concejal y miembro del Comité Ambiental de Cajamarca y Anaime, manifiesta que en el contexto de las acciones educativas que han implementado las organizaciones sociales durante diez años, se le ha explicado a la comunidad de manera escrita o verbal y sin mentiras, el proceso mediante el cual el oro diseminado en las rocas necesita un proceso industrial altamente perjudicial para el territorio.

Afortunadamente hoy con el internet y los medios audiovisuales es muy fácil que la gente comprenda sin necesidad de leer libros técnicos difíciles de entender. La gente puede ver qué es la minería a cielo abierto en otras partes del mundo, cómo funciona y cuáles son los riesgos. Por esa razón hoy día toda la gente sabe cómo funciona el tema minero y cómo funcionan otras discusiones, por ejemplo: el tema regalías, una cosa pírrica que es lo que recibe un municipio. Los municipios que producen metales preciosos como oro, plata, petróleo, no son pueblos prósperos, que disfruten de esa riqueza, porque la riqueza, como está organizada la legislación colombiana para ese tipo de situaciones se la llevan toda y casi que nosotros resultamos pagándole a ellos para que se la lleven.

En conclusión, a las acciones educativas planeadas (Condición por las que han sido catalogadas en este trabajo como de carácter formal), se suma la información relacionada

con el proyecto minero que difunden las organizaciones sociales a las comunidades a través de periódicos como La Incontestable, Sos Ambiental, o El Salmón; así como videos que explican las experiencias y vivencias personales y colectivas de los habitantes de otros territorios de América Latina donde se han instalado emprendimientos mineros. Ejemplo de esto es el diseño de páginas web como: www.comiteambiental.com, www.casajuca.org, e informativos noticiosos de carácter humorístico como el denominado “Arrechaene”. Acciones estas que han sido organizadas por el Colectivo Juvenil Cosajuca y en el que improvisados periodistas informan sobre problemáticas de orden local como: la corrupción, la tala de árboles, la incompatibilidad entre minería y agricultura, o los efectos ambientales que genera el extractivismo en el territorio⁵⁴.

Concientización a la contribuyen también actividades programadas por otras organizaciones como: la organización de charlas en ámbitos familiares, información que se difunde puerta a puerta, programación de campañas de salubridad animal, plantones frente a las instalaciones de AGA en la ciudad de Ibagué, realización de obras de teatro y toques de rad en plazas públicas. Acciones a las que se le agrega además, realización de diplomados, festivales campesinos, asambleas sobre acueductos comunitarios, talleres campesinos denominados mingas, recolección de basuras en caminos rurales, recorridos por colegios del municipio, o el impulso de iniciativas jurídicas como consultas populares, acciones de tutela, derechos de petición y acuerdos con entidades oficiales, tales como la conformación de veedurías ambientales de carácter ciudadano.

5.3 Aprendizajes que han interiorizado las comunidades

A través de estas prácticas educativas los integrantes de los procesos organizativos han motivado a la población a realizar acciones colectivas como: marchas, mítines, plantones, así como incentivado la interiorización de aprendizajes, enfocados a la defensa del agua, la biodiversidad y la vida en el territorio, aspectos que se explicarán enseguida.

Los contenidos formativos de las prácticas educativas impulsadas por las organizaciones sociales tienen como propósito revelar a la comunidad los efectos ocasionados por el emprendimiento minero de AGA e incitar a los habitantes a que se organicen y movilicen para defender el agua, la biodiversidad, la vida y el territorio. Más que simples espacios donde la gente aprende y acumula conocimientos, las acciones educativas que realizan las organizaciones sociales están referidas “tanto a formas de comprender (se) y valorar (se), como a los modos de actuar y relacionarse... a que la gente redefina sus referentes identitarios y resignifique su vida cotidiana” (Torres, 2004: 26).

5.3.1 Aprendizajes en el plano cognitivo

⁵⁴. “Noticiero Arrechaene”. En: <https://www.youtube.com/watch?v=h8DQvjQiQjM>. Fecha de acceso, noviembre de 2017.

En el plano cognitivo, las prácticas educativas informales y formales, impulsadas por las organizaciones sociales en simbiosis con los saberes cotidianos de las comunidades campesinas contribuyen a generar una variedad de conocimientos en sus integrantes. Tal como se ha evidenciado en capítulos anteriores, a partir del conocimiento de las experiencias de otras organizaciones antiextractivas, los integrantes de los procesos organizativos han aprendido a escuchar, opinar y debatir para mejorar la comprensión acerca de los efectos en los territorios donde se adelantan proyectos auríferos a cielo abierto, reconocer sus propias capacidades y saberes y a la vez avanzar en su desarrollo. “Se trata de experiencias, en las que se funden prácticas y discursos en las que “aprende”, pero además se refuerza el “animo” (Michi, 2010: 268).

A juicio de Jimy Fernando Torres (Entrevista, diciembre de 2016) líder de la organización Conciencia Campesina. “Intercambiar saberes entre un campesino de 60 años y un muchacho de 20, o un profesor de la UT, o conocer las experiencias de las comunidades en otros territorios mineros suministra energía. Eso ha generado una dinámica entre los dos grupos muy bonita. Así fue que arrancó todo este proceso de solidaridad y fraternidad tan importante”.

De estos procesos formativos fue emergiendo la necesidad de defender el patrimonio ecológico y cultural del territorio. Así lo explica otro habitante de la zona:

Los de la multinacional cuando llegaron aquí, nos dijeron que tenían concesionado el 86 por ciento del territorio para explotar durante 60 u 80 años. Inmediatamente cuando dijeron eso yo me paré de la silla...y grité como un loco: me opongo rotundamente a eso que Uds. quieren hacer aquí. No acepto que esta tierra bendita que produce comida para mandarles a los hermanos de Bogotá, Cali, Armenia o Ibagué vaya a ser destruida y que no vuelva a producir nada. Lo que van a formar es un desierto, van a extraer los minerales y la tierra va a quedar muerta. Cuando dije eso todo el mundo se levantó a gritar: fuera de aquí. Inmediatamente hicieron salir esa gente. Yo soy un campesino y no tengo plata, finca, ni carro. Pero si un amor muy grande por este territorio. Nuestra tierra produce frijol, alverja, maíz, granadilla, arracacha. Solo van a saber de qué tamaño es ese valor cuando de aquí no se pueda mandar comida porque no habrá agua, la tierra será estéril, solo ruinas quedarán. ¿Quién nos enseña esto? En la escuela nos enseñan la a, e, i, o, u, pero no lo principal... la vida, la vida misma, un ser que necesita agua, alimento, cuidado. La tierra nos sostiene, nos da la comida, permite que el sol nos inyecte vida. Cuidemos la tierra. Ella es la que nos da la vida. Mi invitación es a que aprendamos a cuidar esta tierra, porque ella es la que nos da la vida (palabras de Gustavo Pulido en la

Exposición “Oro, Espíritu y Naturaleza de un Territorio” del artista Pedro Ruíz)⁵⁵

Gracias a la existencia en el lugar de toda la variedad de pisos térmicos, estas tierras producen toda clase de productos agrícolas. Esto ha servido para incentivar el arraigo al territorio, defender el agua, la biodiversidad e impulsar la solidaridad y fraternidad entre los habitantes. “Un valor que no tenía porque estaba era mirando mi futuro personal, no las necesidades de mi vecino o mi amigo.” (Entrevista a Jimmy Fernando Torres, diciembre de 2016).

Relacionado con las formas de actuar y relacionarse, Zibechi (2007) plantea que del ambiente de fraternidad comunitaria que despliegan las organizaciones sociales devienen procesos simultáneos de autoeducación y formación de sujetos creativos. Actividades que en el territorio de Cajamarca están relacionados con la realización de nuevas prácticas domésticas como reforestar o reciclar objetos que antes eran considerados basura. Así lo explica Marlene Mojica Lozano (Entrevista, diciembre de 2016), integrante de la organización Unión Campesina, quien antes del arribo de AGA, al final de cada año realizaba grandes arrumes de objetos y ropa que los miembros de su familia ya no utilizaban o consideraba inservibles y les prendía fuego. Ahora aprendió a evitar el consumismo, no comprar cosas que no satisfagan necesidades vitales, y darle utilidad a lo sobrante.

Quisiera tener capacidad de aprender muchas cosas, reforestar, saber cómo se siembra un árbol... Procuro no quemar basura como hacía antes. Este año hice un tapete chiquito que nos sirve para limpiarnos los pies al entrar a la pieza. Antes tenía que comprar muchas blusas y zapatos. Inclusive tenía hasta 4 lociones. Ahora no tengo sino una. Mi mamá me dice que yo quiero vivir anticuadamente. Me pregunta ¿Qué me pasa? Yo le digo que eso es mejorar la calidad de vida. Esto ayuda a cuidar el medio ambiente. Ojalá pudiéramos no contaminar el agua con jabón, límpido y demás cosas que usamos a diario.

En conclusión, de las prácticas educativas informales y formales impulsadas por los procesos organizativos que se oponen a la instalación del emprendimiento minero, los habitantes de la localidad de Cajamarca, han adquirido conocimientos relacionados con los efectos que estos producen los territorios donde se instalan. Proceso educativo significativo

⁵⁵. Desde el 28 de octubre del año 2017 hasta el 7 de enero del año 2018 el artista Pedro Ruiz expuso su obra denominada “Oro Espíritu y Naturaleza de un Territorio”, de la cual hacía parte el cuadro “Arracacha de Cajamarca”. “En el marco su interés por respaldar el “Si a la vida” de los cajamarquinos, el artista adelantó talleres creativos donde los niños del municipio plasmaron los tesoros naturales y culturales de su tierra”. En. <https://www.revistapym.com.co/mercadeo/crepes-waffles-inspirado-por-arracacha>. Fecha de acceso, diciembre 10 de 2017.

que incentiva la movilización de la población en defensa del agua, la biodiversidad y el territorio, del que se han derivado cualidades como aprender a escuchar, debatir, reciclar, o evitar el consumismo. Aprendizajes que han contribuido a su vez al impulso de valores como: la solidaridad y la fraternidad comunitaria y la redefinición de referentes identitarios y visiones de futuro, temas que entraremos a analizar enseguida.

5.3.2 Aprendizajes en el plano de los valores

Según Torres (2009), en el plano de los valores, las prácticas educativas de las organizaciones sociales contribuyen a la modificación de actitudes, representaciones y hábitos en el conjunto social. Prototipo de lo explicado por este autor, es lo que manifiestan los siguientes entrevistados:

Sobre el medio ambiente puedo decir que lo he aprendido todo. En este esquema de trabajo mi vida cambió. Aprendí a socializarme con las demás personas. Eso es un valor que uno discrimina mucho. Que si Ud. me está hablando no le pongo cuidado. Hoy en día se para una persona a hablar de medio ambiente, de las amenazas que tenemos por la locomotora minera y me interesa. La gente le enseña a uno a ser persona. El ciento por ciento de la gente. Es muy verraco trabajar la puerta a puerta, saber los ataques y las pedradas que le dan a uno y tener que aguantarse sin dejarse provocar. Yo primero me dejaba provocar. Hoy en día no. Lo tomo muy tranquilamente (Entrevista a José Domingo Rodríguez, diciembre de 2016).

Yo fumaba una cajetilla y media de cigarrillos. Diría que es un vicio. Alguien me dijo hace como seis años: ¿Es que hay un ambientalista que fuma? Pues dejemos de fumar, dije. Yo soy de los que creo que hay que ser coherente con lo que se dice y lo que se hace. Si hay elementos que pueden usarse de manera intencionada para descalificar un actuar pues tratemos de no dar papaya. Hay que enseñar obedeciendo como dicen los zapatistas. Todo esto ha servido para ayudar a crecer el movimiento (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

Estas transformaciones axiológicas en el campo personal asociados a la modificación de los modos de actuar y relacionarse con el conjunto social contribuyen a que la gente redefina sus referentes identitarios y resignifique su vida cotidiana. Para Torres (2004: 26) “en los espacios cotidianos de la vida de las organizaciones populares, se afirman o cuestionan, se reproducen o transforman, los conocimientos y valores que los sujetos han construido para interpretar sus prácticas”. El siguiente testimonio así lo confirma:

De todo el trabajo que he hecho con las comunidades he aprendido varias cosas. Yo mismo me pregunto cómo cambié. En 2010 era otra persona que

tomaba trago, derrochaba, para mi esa vida era normal. No veía las frases, la forma en que la gente hablaba. Le agradezco mucho a Julio Roberto Vargas. A ese muchacho lo conocí hace como 9 años cuando llegó a socializar a las personas del corregimiento El Toche, presentando talleres, DVD, etc., que eran importantes para que la gente aprendiera a cuidar y decirle no a la minería y lo que pasaba a nivel nacional con la locomotora minera. Todo eso me comenzó a impactar. En una oportunidad hizo un evento en la vereda Rincón Placer de capacitación a las comunidades. Ese sentido de pertenencia, ese conocimiento me impactó, por eso se merece todo mi respeto. Dije, bueno si éste muchacho trabaja tan bien en las comunidades ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo? Me impactó tanto que cogió mis datos, me llamó y empecé a trabajar con él (Entrevista a José Domingo Rodríguez, diciembre de 2016).

5.3.3 Aprendizajes relacionados con la redefinición de los referentes identitarios y las visiones de futuro

Este sentido de pertenencia e incentivo en los miembros de los procesos organizativos influye a su vez en la adquisición de una nueva conciencia y una voluntad de reapropiación del espacio (Rigal, 2008). Ejemplo de esto es lo que explica Érica Alejandra Ospina, miembro de la organización juvenil Cosajuca. Para esta líder juvenil gracias a la realización de charlas puerta a puerta en el área urbana y rural del municipio, “se ha logrado incentivar a campesinos que dicen: si tengo que dar mi vida por el territorio la doy porque esta es mi tierra. Escuchar eso impacta porque fuimos nosotros los que le llevamos la voz a esas personas” (Entrevista, diciembre de 2016).

Estos nuevos aprendizajes y costumbres constituyen una especie de capital militante que habilita a los miembros de los procesos organizativos para hablar en público, diseñar panfletos, recurrir a la legislación, e incentivar la participación de las comunidades en acciones colectivas (Poupeau, 2007). Efectivamente, el análisis de las entrevistas realizadas para efectuar este trabajo, permite comprobar que, gracias a las acciones educativas efectuadas por las organizaciones sociales con el acompañamiento de estudiantes y docentes de la UT, la comunidad afectada por el emprendimiento minero de La Colosa ha aprendido a expresarse y defenderse. El campesino más humilde sin temor, y a su estilo le cuenta al entrevistador lo que piensa sobre ello. Ejemplo de esto es lo que explica Jimmy Fernando Torres, quien dice que con las acciones colectivas que han realizado las organizaciones sociales que se oponen al emprendimiento minero, la comunidad ha adquirido aprendizajes que les ha permitido aprender a defenderse con argumentos técnicos.

Cuando decimos que van a hacer un hueco así y que van a durar 40 años sacando material, la gente entiende y reacciona. No es por protagonismo, mis

conocimientos, hablar frente a una cámara o cualquier medio de comunicación, en un auditorio, eso lo he aprendido a través de todo este proceso. Que uno hable y que le pongan atención a lo que uno dice no es fácil. En eso todos los miembros de las organizaciones antimineras tenemos que ser maestros (Entrevista, diciembre de 2016),

Julio Roberto me ha dado mucha confianza para hacer cosas que creía que no podía hacer. Coger un micrófono, pararme frente a la gente. Él siempre me decía, José, siéntase seguro de lo que está haciendo. Piense que soy yo el que está hablando. Me dije entonces que quería ser como Julio. Pararme en una tarima, echar un discurso que a la gente le atraiga, que uno convenza. Una Cosa es hablar con poder de convencimiento. Cada que me paro ante un auditorio agradezco las cosas que me ha enseñado Julio (Entrevista a José Domingo Rodríguez, diciembre de 2016).

Por último, para Barragán, Mendoza & Torres (2006), lo educativo de las organizaciones se asocia a las intencionalidades políticas, valores y visiones de futuro, factores que les permite a éstas, formar sujetos que contribuyan a movilizar apuestas políticas para transformar la sociedad.

Antes que llegara la minera no sabía del mal tan grande que esta actividad genera. La conciencia que tengo hoy en día la adquirí apropiándome de lo que vivo, soy y quiero para mi familia. Si yo me apropio de ello seguramente el respaldo a futuro no va a ser solo para mí sino a bienestar de muchas comunidades que ni siquiera yo vaya a conocer (Entrevista a Osman Hernández, diciembre de 2016).

Tal postulado está relacionado igualmente con el proceder de muchas mujeres del lugar que antes no se veían como líderes y, en la actualidad, son las que encabezan las acciones colectivas por la defensa del agua y del territorio. Al preguntarles por qué lo hacen dicen tener hijos y nietos por los que hay que luchar. Así lo manifestaba una líder local.

La gente que apoya la minería dice que nosotros estamos locos, que somos revolucionarios. No entienden que yo estoy es pensando en mis hijos y nietos. Eso me ha cambiado el mundo. La expectativa de ver cómo soy ahora, me ha permitido entender que la naturaleza es todo un cien por ciento para nosotros, y que si no hubiera naturaleza no viviríamos (Entrevista a Marlene Mojica, diciembre de 2016).

Estos procesos educativos han contribuido a resignificar las formas de pensar y a generar cambios en la racionalidad con la que los campesinos de la región han concebido el mundo. Cognición que ha servido para replantear prácticas agrícolas, establecer nuevas relaciones entre las personas inmersas en las experiencias organizativas y de estos con la misma

naturaleza. Ejercicio del que ha devenido una nueva manera de habitar el territorio, estableciendo nuevas sinergias o acciones conscientes del que se han derivado renovadas dimensiones políticas que se enunciarán y evidenciarán en seguida.

5.4 Dimensiones pedagógicas y políticas de las prácticas educativas

Los efectos causados al patrimonio ecológico y cultural por el emprendimiento extractivo de la mina de oro la Colosa en Cajamarca Tolima, evidenció la emergencia de procesos organizativos de orden regional y local que buscaban el fortalecimiento comunitario a partir del desarrollo de prácticas educativas. Acción considerada por los sujetos sociales, contrarios a la introducción de la minería a cielo abierto, como la única forma de hacer frente al poder político y económico desplegado por la AGA en función de la transformación del territorio en un distrito minero (Sánchez, 2013). Así lo explican algunos integrantes de las organizaciones sociales:

Elementos como el agua, el territorio, y la tierra se constituyen en factores de unión no importa quién lo haga. Lo importante es formar a la comunidad aprendiendo a construir en colectivo (Entrevista a Robinson Mejía, octubre de 2016).

Lo que se ha venido haciendo hace nueve años ha sido un proceso educativo de las organizaciones. La educación va en todo. Con lo que aprendo puedo tener una mirada más crítica de lo que pasa. Lo interiorizamos y lo ponemos en práctica (Entrevista a Érica Alejandra Rodríguez, diciembre de 2016).

Para organizaciones sociales como Conciencia Campesina, Cosajuca, o Ecotierra era prioritario construir un escenario distinto al ambiente de muerte que vislumbraban iba a venir con el inicio de la fase de explotación aurífera. Imbuidos de este indicio tomaron la decisión de impulsar iniciativas educativas que permitiera a los habitantes identificarse con la necesidad de parar el proyecto minero, y tomar conciencia acerca de la importancia del territorio, el agua, y la biodiversidad. Lo más importante era “que los campesinos no perdieran su esencia, y no olvidaran que la comida y el agua son fundamentales para preservar la vida” (Entrevista a María Ascensión Rodríguez, octubre de 2016).

5.4.1 La dimensión popular de la educación.

Para los integrantes de los procesos organizativos y sus simpatizantes, lo primordial para detener el proyecto aurífero era que los habitantes tuvieran conciencia acerca de los riesgos que este representaba para las fuentes hídricas, y las actividades agrícolas que se desarrollan en el lugar. Con la intención de contribuir a que los diversos segmentos de la población se constituyeran en sujetos protagonistas de esta transformación, comenzaron a promover el conjunto de prácticas educativas informales y formales que han sido

explicadas antes, y que a juicio nuestro, están relacionadas con los propósitos de la Educación Popular (EP).

Hacer educación popular es reconocer el carácter político de la educación, optar por la transformación de la realidad en búsqueda de una nueva sociedad desde el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos gestados por los sectores populares; es trabajar en la creación o desarrollo de las condiciones subjetivas que posibiliten las acciones emancipadoras y de transformación social por parte de estos sujetos populares; es generar alternativas pedagógicas, metodológicas y didácticas coherentes con los postulados anteriores” (Torres, 2010: 9).

Inspirados de estos principios, los integrantes de los colectivos sociales comenzaron a dar a conocer a la comunidad lo que era el proyecto extractivo que se pretendía implementar en el territorio; buscaron apoyo en sectores que podían ser aliados; divulgar conocimientos mediante el diálogo e intercambio de saberes que permitieran el desarrollo de habilidades que pudieran incidir en la defensa de los bienes colectivos y los derechos ciudadanos. Así lo reconoce un integrante del Colectivo Socioambiental Juvenil Cosajuca, organización que se conformó siete meses antes del arribo de la AGA y que se rige por principios como la no violencia, la justicia ambiental, la complementariedad y la horizontalidad de los saberes.

En las reuniones y talleres que comenzamos a realizar con los campesinos que habitan el territorio analizamos problemáticas como el desvío de los ríos para facilitar la explotación minera y generar energía a las empresas. Los saberes se comparten horizontalmente. No pretendemos ser más que los campesinos. Se respetan los conocimientos de ellos (Entrevista a Robinson Mejía, diciembre de 2016).

Este sentido fue el que le proporcionó papel relevante a la promoción de las prácticas educativas alternativas informales y formales. Proceso formativo con el que se busca estructurar un discurso coherente y lógico que le permita a los integrantes de los procesos organizativos y sus simpatizantes desvirtuar las promesas de la AGA, y el Gobierno departamental y local. Ofrecimientos concomitantes con supuestos beneficios económicos forjados por la explotación minera como la generación de proyectos deportivos, educativos y sanitarios para el municipio, instalación de herramientas tecnológicas en las instituciones escolares, generación de aproximadamente mil empleos, y el impulso de proyectos de fortalecimiento agrícola, ganadero y comercial, etc.

En respuesta, las prácticas educativas de las organizaciones que se distanciaban de los objetivos, ideología, valores y pretensiones de la AGA., buscaban la sensibilización y pedagogía ciudadana sobre la relevancia del entorno y de la cultura, superando la lógica de la multinacional de ver los territorios desde una perspectiva mercantil. En concordancia con

esto, las prácticas educativas en el territorio de Cajamarca son entendidas por los integrantes de las organizaciones antiextractivas como un proceso político y pedagógico que contribuye a configurar nuevas lógicas y formas de pensar y concebir el mundo. Coadyuvar a modificar las relaciones entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016). Aspectos en los que coincide Roa (2015), quien considera que en los territorios donde se adelantan emprendimientos mineros, “los procesos educativos deben contribuir a la construcción de poder desde abajo, desde grupos organizados. Los procesos pedagógicos deben contribuir a la construcción de nuevos liderazgos sociales” (Roa, 2015)

Reivindicación que solo es posible si las prácticas educativas son orientadas mediante procesos dialógicos de experiencias comunes que contribuyan a resignificar el saber, construir en colectivo y formar nuevos dirigentes. Conforme a esto, para los integrantes de las organizaciones es tan importante el conocimiento de los académicos o de los técnicos como el de los saberes populares y campesinos. Confluencia de horizontes comunes en el que los académicos encuentran elementos para el inicio de prácticas educativas populares “basada en la confianza en las capacidades de los campesinos y en la conformación de colectivos (grupos, organización) para el desarrollo de sus potencialidades” (Michi, 2010: 273).

En efecto, con el fin de elevar el nivel de incidencia en la comunidad, los integrantes de los procesos organizativos han programado encuentros con otras organizaciones antimineras del país, realizado foros regionales, etc., con el fin de seguir formándose en el ámbito académico. Con la misma intención han buscado replicar escenarios educativos como el diplomado en otros territorios afectados por los proyectos extractivos. Esto les permitiría establecer nuevos canales de comunicación y dinamizar las actividades de información.

Estos propósitos que se ven obstaculizados debido a que muchos de los que se forman en las distintas prácticas educativas no se ven comprometidos con la réplica de lo aprendido en nuevos espacios formativos.

Con las prácticas educativas pretendemos que quienes participan de ellas sean como el relevo porque estamos reventados. Son muchas cosas las que hacemos actualmente en el Comité Ambiental. Es un ejercicio formativo de masas que no ha logrado jalar cuadros e integrantes para el proceso. La gente está conociendo mucho sobre los problemas ambientales, pero no se está comprometiendo (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

5.4.2 Perspectivas epistemológicas para la comprensión del problema minero

Estas dimensiones políticas y pedagógicas asociadas a propósitos de futuro como la importancia del territorio, el agua y la biodiversidad para la preservación de la vida, pueden

ser analizadas desde distintas perspectivas epistemológicas adecuadas a la singularidad del territorio cajamarcano.

Por ejemplo, la confluencia en el territorio de Cajamarca de conferencistas internacionales como: Svampa, Moran Martínez Alier, Alberto Acosta; de representantes de organizaciones sociales como Semillas de Agua, Red Tejiendo Páramos, La UT, así como la realización de intercambios y socialización de experiencias similares ocurridas en el territorio nacional y el ámbito internacional, ha configurado una especie de **Comunidad Conocible**. Concepto creado por Williams (2001) para explicar como un escenario de aprendizaje lo constituye el conocimiento del contexto económico y político en el que ocurren los fenómenos sociales y culturales, así como la ocurrencia de situaciones similares en otros países.

Se puede decir que esta congregación de saberes ha permitido la identificación de problemas comunes, y la aprehensión de ideas para actuar sobre la misma problemática. Aprendizajes que han facilitado el establecimiento de métodos prácticos de capacitación, con el fin de hacer frente a un modelo minero que se ha expandido por América latina desde los años noventa de siglo anterior. “Como la explotación es deliberada y sus técnicas son muy poderosas, la capacitación educativa tiene que ser igualmente poderosa. Y la magnífica vitalidad contrastante de la literatura es un control y un corolario esenciales” (Williams, 2001:215).

El enfoque investigativo sugerido por Williams se puede relacionar con la categoría epistemológica introducido por Svampa & Viale (2014), denominado **giro ecoterritorial de las luchas**. Explicado como un lenguaje común o marcos comunitarios de acción relacionados con la defensa de los territorios y los bienes comunes, la justicia ambiental, los derechos de la naturaleza, el buen vivir, la soberanía, los derechos humanos, la democratización de las decisiones, y el “derecho de los pueblos a decir “No” frente a proyectos que afectan fuertemente las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y comprometen el porvenir de las futuras generaciones” (p. 35). Estos elementos de articulación de las luchas, que involucra principalmente a comunidades indígenas, campesinas y sectores urbanos son denominados por Leff (1996) “**ambientalización de las luchas**” lo que ha dado lugar al surgimiento de un pensamiento ambiental en América Latina.

Otro enfoque es el de **Comunidad imaginada** creado por Anderson (1993), entendido como un grupo de personas integrantes de organizaciones sociales que, aunque no se conocen, su existencia simultánea puede concebirse como una identidad. En el territorio de Cajamarca se trata de una comunidad dispersa de origen campesino y popular que se identifica por oponerse a los proyectos extractivos, y que se organizan para encontrarse en las distintas acciones colectivas que planean y programan las organizaciones sociales contra el proyecto extractivo.

Comunidad porque independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto pueden prevalecer en cada caso, se concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal. En última instancia, es esta fraternidad la que ha permitido durante los dos últimos siglos, que tantos millones de personas maten, y sobre todo estén dispuestas a morir por imaginaciones... limitadas (Anderson: 1993:25).

Complementario de los anterior es la perspectiva analítica denominada *Círculo Hermenéutico*, introducida por Gadamer (1960) y referida a un proceso de discernimiento comprensivo que indica que el conocimiento social parte de una pre-concepción que se tiene de un fenómeno y que, al entrar en contacto con él para estudiarlo, dicho prejuicio es modificado, volviéndose punto de partida para nuevas comprensiones (Torres & Barragán, 2017). Ejemplo de esto es el siguiente testimonio.

En el campo vive uno como aislado de la sabiduría, sometido por la ignorancia. Sin saber cómo van a quedar estas montañas. Y las consecuencias que ello va a traer. En este diplomado aprendimos y nos enseñaron muchas cosas: que tenemos una gran riqueza, y que lo que tenemos que hacer es luchar para que esto siga existiendo, y no nos lo quiten unos cuantos por unos gramos de oro que quieren sacar. Aprendí que todos unidos luchando podemos derrotar a los que dicen ser más fuertes. Todos unidos podemos lograr lo que muchos creen que es imposible... defender lo que nos pertenece y que nos está dando vida. Si no tenemos montañas, agua tampoco tendremos vida. Así tengamos todo el oro, la vida de nosotros ya es muy incierta (Entrevista a Neila Herlinda Muñoz Álvarez, diciembre de 2016).

Del mismo Gadamer (1960) es el enfoque analítico llamado *Fusión de Horizontes*, que alude a la negociación o al acuerdo que se da entre el investigador y los distintos actores sociales, sobre lo que se quiere investigar y que “comprende la comprensión mediante el dialogo entre un horizonte de entendimiento y el mundo vital” (Torres & Barragán, 2017:56). Consecuencia de esta iniciativa fue la investigación realizada desde una perspectiva popular, denominada “*La Colosa: una muerte anunciada: Informe alternativo acerca del proyecto de minería de oro de AngloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima, Colombia*”. Publicada en el año 2014 y realizada por Colombian Solidarity Campaign. Organización que surge de un interés solidario ante la necesidad de hacer una mirada planetaria de los problemas ambientales y sociales generados por la explotación minera.

En suma, los enfoques interpretativos de las acciones colectivas que se realizan contra los proyectos extractivos útiles como perspectivas de análisis son los siguientes. De acuerdo al orden expositivo, la *Comunidad Conocible* acude a la socialización del contexto económico y político en que ocurren las prácticas extractivas. El *Giro Ecoterritorial* privilegia el análisis de los marcos comunes de acción en defensa de los territorios afectados por el

extractivismo. La *Ambientación de las luchas* explica cómo los movimientos opositores a esta práctica se hacen ambientalistas. La *Comunidad Imaginada* se usa para examinar los factores de identidad de los sectores sociales que participan en los conflictos mineros. El *Círculo Hermenéutico* se inclina por entender cómo es que los sectores sociales afectados procesan la comprensión y el conocimiento de esta práctica económica. Por último, la *Fusión de Horizontes* se enfoca a explicar el acuerdo entre el investigador y los sectores sociales con el fin comprender un horizonte de entendimiento y el mundo vital.

5.4.3 Los Repertorios de Acción y Prácticas Educativas (RAPE) y los Horizontes Territoriales de Vida (HTV)

Pese a que estos enfoques están asociados a la promoción de grandes propósitos y horizontes de futuro de los movimientos sociales (Torres, 2017), se considera que ninguno está relacionado directamente con el análisis de la perdurabilidad de las prácticas educativas. Acciones que diseñan las organizaciones sociales de manera informal o formal con la pretensión de capacitar a sus integrantes y simpatizantes a fin de cualificar las formas de lucha y posibilitar el logro de sus objetivos.

Estas cualidades de los sujetos que componen los colectivos sociales son concebidas por Tarrow (1994), como un conjunto o repertorio de habilidades, destrezas, conocimientos, medios culturales y formas de lucha, heredadas o inventadas, utilizadas por una variedad de actores sociales en diferentes lugares para plantear exigencias de distinto tipo a diferentes individuos o grupos (Tarrow, 1994).

Acorde con esto, los aprendizajes derivados de este ejercicio se denominan en esta investigación como *Repertorios de Acción y Prácticas Educativas (RAPE)* de orden popular. Enfoque teórico que alude a un conjunto de conocimientos, destrezas, medios culturales y formas de lucha que heredan, aprenden, aprehenden o inventan organizaciones indígenas, afros, ecologistas, defensores de derechos humanos, etc., que han emergido en el escenario colombiano y latinoamericano, que no se someten a formas de subordinación económica, política, social y cultural. Razones de lucha que se fortalecen con la implementación de prácticas educativas.

La denominación de estas acciones como RAPE que derivan en aprendizaje para las comunidades, se explican por lo siguiente:

1. Gracias al desarrollo que han alcanzado los medios de comunicación, se han creado fuertes vínculos entre comunidades cercanas y lejanas. Situación que ha incidido en la imitación de acciones de hecho y de derecho, o en la construcción de agendas conjuntas para definir rutas de trabajo. Igualmente ha provisto de identidad social a los integrantes de estos procesos organizativos, lo que a su vez se ha traducido en la conformación de sujetos políticos colectivos.

2. Las prácticas educativas que realizan estos procesos organizativos (como las que hemos explicado en este trabajo) permiten consolidar entre las organizaciones enfoques de trabajo y avanzar en la construcción de conceptos y temáticas relacionadas con el origen del conflicto que afecta a las comunidades.
3. Consecuencia de lo anterior se fortalece el compromiso y la acción conjunta de las comunidades y poblaciones locales para enfrentar las causas de los conflictos.
4. Las prácticas educativas permiten, diseñar estrategias de incidencia política con enfoque comunitario (como movilizaciones, bloqueos, formas de difusión de información, etc.) e inspirar procesos de resistencia.
5. Los repertorios educativos destacan los procesos organizativos como condición principal para enfrentar con buenas perspectivas las razones del conflicto.
6. Las prácticas educativas que impulsan organizaciones sociales emergentes durante las últimas décadas crean transformaciones cognitivas, prácticas e identidades (subjetividades) y generar nuevas alternativas pedagógicas y metodológicas.

En este mismo sentido, los conflictos generados por los proyectos extractivos pueden analizarse desde la perspectiva teórica, acuñada para esta investigación y denominada *Horizontes Territoriales de Vida (HTV)* Enfoque que alude a la variedad de acciones colectivas y prácticas educativas que realizan las organizaciones sociales con la intención de defender los territorios donde se instalan los proyectos extractivos y formar sujetos que se conviertan en promotores de cambio. Propósitos para los que se impulsan procesos formativos de los integrantes de las organizaciones y las comunidades a fin de fortalecer la realización de operaciones de resistencia que eviten: la contaminación de las fuentes de agua, la seguridad alimentaria, los afectos a la biodiversidad, factores de los que depende la vida y la existencia de generaciones futuras. Se coincide con Fierro (2013) en que desde el saber y el sentir de las organizaciones y sus integrantes, las acciones se convierten por lo tanto en un imperativo ético.

5.4.4 Aspectos metodológicos y contenidos de las prácticas educativas

Desde el punto de vista metodológico⁵⁶, estos RAPE que realizan los procesos organizativos, orientan sus prácticas a través de la promoción de estrategias pedagógicas basadas en la construcción colectiva del conocimiento, el diálogo y la horizontalidad de saberes. Conocimientos que siempre articulan alternativas económicas, sociales, culturales y ambientales a las generadas por los emprendimientos mineros. Según, una Organización No Gubernamental que orienta prácticas educativas en el territorio de Cajamarca, “cada

⁵⁶. La metodología alude a un “conjunto de orientaciones y criterios pedagógicos desde los cuales se desarrollan las prácticas educativas” y tienen como referencia las distintas modalidades formativas que usan los procesos organizativos (Torres, 2017).

acción debe ser pensada en conjunto, con objetivos claros, fuertes, realizables, con la debida planificación de recursos y con planes de trabajo contruidos de manera participativa y horizontal” (Pax Christi, 2015:19).

Por su parte, un miembro del Colectivo Socio-ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), explica que debido a que muchos de los que asisten a las actividades educativas no saben leer y escribir, los que las orientan deben usar un lenguaje claro y concreto. Realizar dinámicas que incentiven la participación y metodologías flexibles adecuadas a tiempos cortos, “debido a que los participantes son gente campesina que trabaja y tiene obligaciones y que no está acostumbrada a eso” (Entrevista a Érica Alejandra Ospina, diciembre del 2016).

En igual sentido se pronuncia un integrante de Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué, quien explica que la presencia imprevista en el territorio de expertos internacionales en temas mineros, las prácticas educativas no siempre pueden ser sometidas a la lógica de la planeación. Situación que ha facilitado la presencia en el desarrollo de las mismas de investigadores como María Stella Svampa, Martínez Alier, Horacio Machado, Alberto Acosta, etc. “Aprovechamos siempre las oportunidades que nos dan y no nos quedamos dormidos. Por ejemplo, Svampa cerró el diplomado en Cajamarca recientemente. Alier también estuvo con nosotros”. (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

Los contenidos que impulsan este proceso educativo son impartidos desde una perspectiva crítica. Verbigracia, en el primer nivel del diplomado se abordan temas como: Ambiente y educación ambiental, consultas populares en temas mineros, cambio climático, crisis climáticas, gestión del riesgo, construcciones colectivas del territorio, ambiente y desarrollo, biodiversidad, servicios eco sistémicos conflictos ambientales, el extractivismo una amenaza para los territorios, la minería a cielo abierto, el eco socialismo, la minería en Colombia. En el segundo nivel se abordan temas como: ambiente y desarrollo, gestión integral del recurso hídrico, la perspectiva de género, territorio y ambiente, economía verde, biodiversidad, servicios eco sistémicos y conflictos ambientales, mercantilización de la naturaleza, alternativas al desarrollo, retos de los movimientos sociales, consultas populares en temas mineros, tipos de contaminación y protección del ambiente, cambio climático, la ecología política, la comercialización del agua, importancia de los acueductos comunitarios, la economía solidaria, medios de comunicación alternativo, La democracia vale más que el oro(Quintana, 2016; Entrevista a Neila Herlinda Muñoz Álvarez, diciembre de 2016).

Organizaciones como Pax Christi también han realizado talleres en el territorio donde se han analizado temas como: la expansión del modelo extractivo en la región, los desafíos de la minería como causa del conflicto, la agudización del despojo de tierras y territorios, la convivencia social enajenada por la respuesta violenta de las empresas y el Estado, los

conflictos para las comunidades afectadas por proyectos extractivos y la importancia de las resistencias que han logrado detener varios proyectos de extracción minera, concepto de paz y conflicto, los conflictos como oportunidades para fortalecer la capacidad de acción desde la organización, la resistencia no violenta, metodologías para hacer análisis de poder y mapas comunitarios de conflicto, la incidencia política como herramienta cambio y organización y acción comunitaria(Pax, 2015).

Por su parte, la organización Conciencia Campesina, ha realizado talleres en el territorio denominados “Cajamarca un territorio para el buen vivir. Fortalecimiento de procesos participativos de comunidades étnicas campesinas y promoción de la ciudadanía activa, para la gestión y protección medio ambiental del territorio”. Evento en el que se preguntó a cada uno de los 40 participantes ¿Qué podría hacer yo desde mi entorno para apoyar a nuestros campesinos? Y en el que respondieron: comprar productos campesinos y renunciar a comprar en grandes superficies o almacenes gigantes, incentivar el consumo de productos nacionales, enseñar los niños de la región cuáles son los alimentos de sus propia tierra, las bondades y usos de los mismos, y sembrar en casa⁵⁷. A lo anterior se suman los talleres desarrollados por el Colectivo Socioambiental Juvenil Cosajuca en los que se explica a las comunidades temas relacionados con las características y el cuidado de las cuencas hidrográficas locales, y temas relacionados con el extractivismo y la amenaza para los territorios, especialmente el de La Colosa (Presentación en Power Point, elaborada por Robinson Mejía).

En conclusión, las prácticas educativas informales y formales impulsadas por las organizaciones populares que han surgido en el territorio tolimense de Cajamarca, han sido promovidas con la intención de realizar acciones de formación y capacitación de sus miembros y de los participantes en las acciones colectivas de hecho y de derecho contra el proyecto extractivo de La Colosa, adelantado por la AGA.

Las prácticas educativas informales (o no planeadas), están relacionadas con la influencia ejercida sobre los integrantes de los procesos organizativos, algunos profesores de la UT, y expertos en proyectos extractivos de minería a cielo abierto de orden internacional. De ellos aprendieron acerca de los estragos que causan los emprendimientos megamineros en los territorios y las comunidades. Estos aprendizajes fueron corroborados por parte de los mismos, con observaciones directas realizadas en la mina Yanacocha en el Perú, e información obtenida en redes sociales, internet y libros sobre el tema minero. Proceso formativo que estuvo apoyado además, por el surgimiento de valores como la solidaridad, la unión y el sentido de pertenencia de los lugareños con el territorio.

⁵⁷. Datos tomados del documento “Cajamarca Tolima Tierra Firme”, elaborado por Conciencia Campesina Forumsyd, y facilitado por Leonardo Rodríguez, Secretario general de esta organización.

A esta configuración cognitiva contribuyó decisivamente implementación de prácticas educativas formales (Planeadas) como: charlas familiares, difusión de información puerta a puerta, realización de obras de teatro, diplomados, asambleas sobre acueductos comunitarios, talleres campesinos denominados mingas, recolección de basuras en caminos rurales, recorridos por colegios del municipio, o el impulso de iniciativas jurídicas como consultas populares, acciones de tutela, derechos de petición y acuerdos con entidades oficiales, tales como la conformación de veedurías ambientales de carácter ciudadano, etc.

Pese a estas distinciones, es evidente que ambas son complementarias. Una y otra tienen el propósito de explicar a los habitantes los efectos sociales y ambientales que acarreará la explotación minera en el patrimonio ecológico y cultural del territorio, la incompatibilidad de la explotación aurífera con la agricultura, y el peligro que ocasionará a las fuentes de agua y la economía local.

De igual forma se puede afirmar que estas experiencias formativas, ha sido implementadas con orientaciones y criterios metodológicos participativos, la horizontalidad del conocimiento, y el diálogo experiencial y de saberes. Gracias a lo cual se ha generado en los habitantes del territorio un conjunto de transformaciones cognitivas, valorativas, actitudinales y prácticas. Condiciones subjetivas que entraremos a analizar en el próximo capítulo.

CAPÍTULO 6. TRANSFORMACIONES SUBJETIVAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES ANTIMINERAS DE CAJAMARCA TOLIMA

En el capítulo anterior se explicaron las prácticas educativas informales y formales que han efectuado las organizaciones sociales que se oponen al emprendimiento minero de La Colosa en Cajamarca Tolima. Dichas acciones son desarrolladas con el fin de informar a los habitantes acerca de los impactos sociales y ambientales que este ocasionaría en los bosques, las fuentes de agua y la biodiversidad; recursos fundamentales para la preservación de la vida en el territorio. Concepto que se define como un espacio concreto, en el que se integran dimensiones de orden político, económico y cultural, el cual ha sido apropiado, dominado y valorizado instrumental, simbólica y culturalmente. De este modo el territorio comprende tres ingredientes primordiales: apropiación de un espacio, relaciones de poder y delimitación de fronteras, cambiantes y no determinadas de una vez y para siempre (Giménez, 2005).

De estas experiencias formativas implementadas con orientaciones y criterios metodológicos participativos, fundamentados en la horizontalidad del conocimiento y un diálogo experiencial y de saberes, han sobrevenido un conjunto de transformaciones cognitivas, valorativas, actitudinales y prácticas. Disposición que le ha permitido a los integrantes y simpatizantes de los procesos organizativos realizar acciones colectivas de carácter pacífico y flexible (no rígidas basadas en operaciones violentas) con el fin de orientar el debate público en torno a la gran minería, reactivar el pensamiento y crear vínculos de cooperación con la comunidad, así como proyectar en los habitantes un Horizonte Territorial de Vida (HTV), articulado a la defensa y fortalecimiento de las labores agrícolas, el uso adecuado de la tierra, la soberanía alimentaria y el consumo de alimentos orgánicos.

Acorde con lo anterior, el objetivo de este capítulo es describir cómo las acciones educativas explicadas en el capítulo anterior han contribuido a forjar transformaciones cognitivas, prácticas e identitarias. Conjunto de instancias que hacen parte de dinámicas de conformación de subjetividades políticas surgidas en torno a los procesos de resistencia contra el proyecto megaminero que se piensa instalar en el territorio. En correspondencia con esto, se tendrá en cuenta que la subjetividad como categoría de análisis alude

a un conjunto de instancias y procesos de producción de sentido, por medio de las cuales los individuos y colectivos sociales construyen realidad y actúan sobre ella, a la vez que son constituidos como tales. Involucra un conjunto de imaginarios, representaciones, valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo, conscientes e inconscientes, cognitivas, emocionales, volitivas y eróticas, desde los cuales los sujetos elaboran su experiencia existencial y sus sentidos de vida. De este modo, la subjetividad, cumple

simultáneamente varias funciones: 1. Cognoscitiva, pues, como esquema interpretativo y valorativo, posibilita la construcción de realidades, como lecturas del mundo y como horizonte de posibilidad de lo real; 2. Práctica, pues desde ella los individuos y los colectivos orientan sus acciones y elaboran su experiencia; 3. Vincular, dado que se constituye, a la vez que orienta y sostiene los lazos sociales; y 4. Identitaria, pues aporta los materiales desde los cuales individuos y colectivos definen su identidad personal y sus sentidos de pertenencias sociales (Torres, 2009: 63-64).

En este mismo sentido, Zemelman (1997) clasifica las funciones: cognitivas (que posibilitan la reconstrucción de realidades posibles), prácticas (que usan los sujetos para orientar, elaborar y dar sentido a sus experiencias y acciones) e identitarias (que aporta materiales a través de los cuales, los individuos y las colectividades definen sus identidad personal y sus sentidos de pertenencia social) como integrantes de una subjetividad instituyente. Esta es definida como un proceso de resistencia que se expresa en la construcción de alternativas al orden impuesto, en la creación de otras relaciones sociales y de nuevos modos de realidad, tanto personal, social y cultural. En el lado contrario se halla la subjetividad instituida, y que alude a las maneras como se legitima y mantiene el poder hegemónico.

Por lo anterior, se ha estructurado el capítulo de la siguiente manera: primeramente se abordará la configuración de subjetividades políticas que han surgido como resultado de las acciones colectivas que se han organizado contra la instalación del emprendimiento aurífero y la movilización de consensos, usados por los actores colectivos para congregarse a la población; proceso del cual han emergido nuevos saberes relacionados con el proceder de esta actividad económica, tema del que se ocupará la segunda parte del escrito. La disposición de estos aprendizajes ha dado lugar a su vez a renovadas prácticas agrícolas, y nuevas formas de relacionamiento colectivo y una resignificación del territorio. Aspectos que serán abordados en la tercer y cuarto apartado del capítulo.

6.1 La formación de subjetividades políticas y la defensa del territorio

Los Repertorios de Acción y Prácticas Educativas (RAPE) (como marchas, bloque de vías, campañas de información puerta a puerta, movilizaciones, mingas campesinas, limpieza de vías, talleres, diplomados, impulso de consultas populares, veedurías ciudadanas, etc.), impulsados por las distintas organizaciones sociales, ambientales, y ONG, surgen por la necesidad de dar a conocer a nivel local y regional, los alcances del proyecto extractivo. El objetivo es crear espacios relacionales y diálogos horizontales y asertivos entre la comunidad académica y los distintos sectores sociales que permitan explicar a la población el carácter depredador de esta actividad económica.

Acciones que tenían la pretensión de contribuir a que los integrantes de los procesos organizativos, sus simpatizantes y los habitantes comprendieran la necesidad de defender el

territorio y los problemas que la minería a cielo abierto ocasionaría en el lugar. Condición que ayudaría a desarrollar la capacidad para argumentar con lenguaje apropiado la inconveniencia de efectuar un proyecto de esta naturaleza, desarrollar lazos de unión, camaradería y solidaridad entre sus miembros, y que permitieran recuperar y resignificar políticamente sus territorios, y la identidad de los campesinos con el lugar que habitaban, y puestos en peligro por los avances del capital transnacional. Como explica Wahren (2012), “Aquellos movimientos que se plantean algún tipo de construcción política, social, económica y/o cultural en el territorio en el que interactúan, necesariamente entran en conflictividad con un “otro” que también disputa el territorio, lo modela y lo controla” (p.4).

En este sentido se puede decir que la interiorización de estos valores hizo posible articular la actuación individual a un accionar en colectivo contra la empresa minera. Marco en el cual era viable realizar acciones de conjunto que tuvieran como fin el reconocimiento de los derechos de las comunidades afectadas (como la seguridad y soberanía alimentaria, el acceso al agua potable y un medio ambiente sano); impulsar a la gente a participar en consultas populares y otras formas de participación política. Así como incitar al Gobierno y a la misma AGA a tomar decisiones mediadas por el desarrollo de posiciones éticas de reconocimiento y defensa del patrimonio ecológico y cultural y los derechos humanos de los lugareños. El testimonio siguiente así lo confirma:

Las prácticas educativas han servido para que las comunidades tengan más cohesión y pertenencia. Pedagogía que nos ha permitido conocer la riqueza del territorio y la responsabilidad que tenemos de defenderla. A partir de esa dinámica se empezó a desarrollar un sentido de pertenencia y sobre todo a unir a la comunidad. Todos los que hemos estado en reuniones, marchas, cine foros y demás prácticas educativas ya nos miramos con otro cariño, con más hermandad, que nos conozcamos como somos. Más solidarios, más paisanos y más compañeros. Aspectos que han marcado un arraigo impresionante (Entrevista a Olga Cecilia Castro, enero de 2018).

Se podría decir que la territorialización de la lucha, les permitió a los habitantes de Cajamarca, implementar proyectos autogestivos (como los cultivos agroecológicos); desarrollar un trabajo comunitario para la localidad (como acueductos comunitarios, mingas, limpieza y arreglo de caminos); proyectos educativos y culturales (como la Marcha Carnaval, el diplomado, cineclubes, la consulta popular, etc.) (Explicados en los capítulos 3, 4 y 5). En términos de Tarrow (1997), estas colectividades “no eran agrupaciones fortuitas de revoltosos rurales; procedían de redes sociales y familiares estables” (p. 239). Los lazos de confianza interpersonal y de vinculación familiar surgidos en el ámbito local donde se reúnen a beber, mercadear sus productos, o a participar de las acciones que realizan, les ha proporcionado la solidaridad necesaria para apoyar las distintas acciones colectivas contra el emprendimiento minero. Como señala Wahren

(2012) “esta impronta de trabajo comunitario y productivo, expandido en el territorio, en disputa permanente con los actores más poderosos y relevantes” (p.5) de una zona, es lo que permite la reconfiguración permanente de una organización social.

El desarrollo de estas potencialidades comunicativas, éticas, morales y políticas, proyectadas con la intención de orientar el debate en torno a los efectos que ocasionaría la explotación minera a gran escala, y el impulso de vínculos de cooperación y accionar conjunto, ha dado como resultado la configuración de subjetividades políticas. Concepción que alude a procesos instituyentes mediante los que sujetos y colectividades sociales “crean y dan significaciones nuevas capaces de subvertir las formas históricas existentes y crear otras relaciones sociales y nuevos modos de realidad, tanto a nivel personal, social y cultura” (Aguilera, González & Torres, 2015: 159), relacionadas con el desarrollo de una capacidad para trascender las fronteras del individualismo y “anclar sus historias en redes complejas de intersubjetividad que les pongan en procesos de interdependencia con los otros” (Alvarado, 2014: 20). En este sentido, Aguilera, González & Torres (2015), definen la subjetividad política como:

Proceso en *constitución, dándose*, inacabado e incluso, en contradicción, que por tanto no puede asumirse como dado o terminado. La subjetividad política se expresa en las diferencias individuales, pero también en los vínculos colectivos, en aquello que puede permitir volvernos a pensar juntos...la subjetividad como proceso instituyente se expresa en la construcción de alternativas al orden impuesto, en el desplazamiento del lugar asignado históricamente a los sujetos, en la creación de otras relaciones sociales y nuevos modos de ver la realidad, concepción muy cercana al imaginario instituyente castoridiano (p. 157).

En otros términos, la subjetividad política alude a un proceso formativo mediante el cual se han conformado movimientos sociopolíticos de resistencia integrados por sujetos con capacidad para trascender las fronteras del individualismo, de des-identificarse consigo mismo y con disposición de aprender a decidir con otros. Condición para la que se requiere. A. Establecer otra relación con el tiempo presente y el estímulo a la imaginación y la reinvención, B. Desarrollar la capacidad de conversión, desidentificación y que refleje diferencias fortalecedoras, C. Dinamizar experiencias creadoras en relación con los hechos que desvanezcan identidades consolidadas, D. Revalorización de la diferencia en consonancia con perspectivas epistemológicas críticas (Alvarado, 2014; Piedrahita, 2015).

Esta dinámica formativa referida a la constitución de sujetos políticos es considerada por los integrantes de los procesos organizativos, como una de las condiciones fundamentales para realizar los cambios micro políticos necesarios a fin de emprender acciones de resistencia activa como movilizaciones y agenciamientos colectivos, y que perfile en los

habitantes del territorio nuevas formas de pensar y de existir. El testimonio siguiente es prueba de ello:

Nosotros vamos a hablar directamente con las personas casa a casa. A explicarles las problemáticas que hay a nivel regional, nacional y mundial. Esto porque no creemos que el problema generado por la gran minería sea solo de acá. Por eso tratamos de llevarlo a un contexto mucho más grande y seguimos trabajando fuertemente. Si logramos que La Colosa llegue a parar, hay que ir a otros lados, llegar a otras comunidades y decirles lo que está pasando o pasó aquí. Que aprendan lo que nosotros hicimos por defender el agua, el medio ambiente, la vida y el territorio y por tener unas prácticas diferentes a las que arruinan nuestro entorno. Este es un trabajo netamente político. Muchos dicen que no lo es, y que nosotros somos ambientalistas. Por eso creo que debemos estar en contexto con todo. Este trabajo me ha cambiado, lo llena a uno más cada día. Va uno aprendiendo a ser más humano. Cuando empecé en esto era por cuidar el medio ambiente. Luego comienza uno a ver que por lo que hay que trabajar en realidad es por las otras personas y por un entorno diferente. No pensar en uno a toda hora, porque eso no lleva a nada. Pensar en el otro, el amigo, el compañero, en el que está al lado (Entrevista a Albeiro Cruz, diciembre de 2016)

En suma, la subjetivación política como proceso formativo de los sujetos y los agenciamientos colectivos, ha contribuido a desvirtuar el extractivismo como actividad económica que promueve el bienestar y desarrollo en el territorio. A cambio se propone impulsar actividades económicas como la agricultura y el ecoturismo como posibilidades reales para generar riqueza y buen vivir en el territorio. Razón por la que se considera necesario potencializar los procesos de organización campesina, promover un uso adecuado de la tierra, abogar por el consumo de alimentos sanos y generar empleo para toda la población. Aspectos en los que coinciden líderes ambientales como Renzo García, Jimmy Fernando Torres, Robinson Mejía, entre otros, y gran parte de la comunidad, quienes “conducen en que “la bonanza, la estabilidad o la crisis económica en Cajamarca dependían del precio de la carga de arracacha y del bulto de frijol no de la extracción de oro” (Hernández, 2017).

Beneficios factibles de obtener únicamente si se proyecta el territorio como un Horizonte Territorial de Vida (HTV). Propósito al que ha contribuido la realización de acciones como la consulta popular (celebrada el 26 de marzo del año 2017), o la Marcha Carnaval por el Agua, la Vida y el Territorio. Accionar de conjunto que a juicio de uno de los participantes ha dado sus frutos.

Yo diría que la principal enseñanza que hay que tomar de esta movilización es que la lucha produce frutos. Todo lo bueno que hay en la historia de la

humanidad es producto de la lucha... Lo que pasó en Cajamarca es un triunfo histórico. El Tolima se puso en la historia con letras de oro. Todo lo cual tiene que ver con esta movilización. Es realmente ejemplar lo que ha sucedido. Cambió un poco la historia de las relaciones de las regiones, los municipios y los departamentos con el Gobierno Central. Ya el cuento que el Gobierno podía hacer lo que se le diera la gana en las regiones cambió. (Entrevista a Jorge Enrique Robledo, junio 3 de 2017).

Conquistas como estas no son atribuidas a un movimiento político en particular, sino a la convicción, vibración, intensidad y potencia con que el conjunto de los integrantes de los procesos organizativos y sus simpatizantes han afrontado los procesos de organización comunitaria, la formación de nuevos sujetos políticos y la ruptura con personalismos que resultan dañinos a los procesos de resistencia.

Yo he venido dando charlas en los barrios. Y si hay otra persona que lo pueda hacer yo le ayudo para que también lo haga. Esto para que la gente no diga que fulano es nuestro líder. O zutano es el único que nos ha reunido acá a darnos charlas. Creemos que todos tienen capacidad de hacerlo, de dinamizar, proponer e intervenir. Cada uno debe tener la capacidad de darle debate a la AGA como tiene que hacerlo. Entender que todos podemos construir y ser en colectivo porque definitivamente esta pelea es de todos. Porque la lógica extractiva es la que ha venido destruyendo territorios, cuestión que no perjudica a un solo sector (Entrevista a José Jiménez, diciembre de 2016).

En resumen, la emergencia de la subjetividad política en Cajamarca Tolima obedece a la toma de conciencia acerca de los efectos de corto y largo alcance que las prácticas extractivas depredadoras acarrearán en el territorio. Proceso que ha conducido a la conformación de movimientos sociopolíticos y sujetos políticos con capacidad para trascender las fronteras del individualismo, de desidentificarse consigo mismo y con disposición de aprender a decidir con otros. Discernimiento que busca trascender del rechazo aislado o fragmentado a la organización política a través de proyectos colectivos que impulsen acciones de conjunto, resistencia, rechazo y oposición a esta actividad económica. Disposición que pone en tela de juicio este patrón de acumulación de capital basado en la explotación exagerada de los bienes que provee la naturaleza y que se sustenta en prácticas que resultan en despojo y depredación del medio ambiente. Procedimiento que pone de manifiesto el carácter insostenible de este tipo de proyectos extractivos (Bucio, 2014).

6.2 La movilización del consenso en torno al proyecto extractivo

El concepto de movilización del consenso (Klandermans 1988) se refiere a un intento premeditado de los procesos organizativos por crear consenso, destacando la convergencia

imprevista de significados en los sectores sociales afectados por un problema en particular. Dicha concepción analítica, describe tres niveles de construcción de significados para potenciar la resonancia del discurso y la movilización. El primero se refiere a la visibilidad que logran las reivindicaciones sociales, cuando adquieren una dimensión pública mediática. Evidencia que opera como un incentivo para promover la acción colectiva y la participación ciudadana. El segundo nivel está relacionado con la información persuasiva que despliegan los procesos organizativos y sus oponentes con el fin de movilizar el consenso, y ganar el apoyo de los grupos sociales y hacer que estos tomen partido. El tercer nivel describe los episodios de acción colectiva, y el impacto que éstas tienen en la afirmación o cambio de creencias de quienes participan en ellas⁵⁸.

En síntesis, las dimensiones de consenso aluden a los “intentos deliberados de difundir los puntos de vista de un determinado actor social entre los estratos de una población”, proceso en el cual compiten con organizaciones como la iglesia, gobiernos y medios de comunicación que difunden En informaciones contrarias a sus objetivos (Tarrow, 1997:218).

Esta dimensión de la movilización de consenso basada en la defensa del territorio es la principal reivindicación social de los habitantes de Cajamarca. Escenario que se ha convertido en el incentivo principal para la resistencia ciudadana, debido a que en el lugar que habitan han desarrollado una vida social y cultural basada en las prácticas agrícolas y pecuarias. Labor que se ve amenazada con el proyecto extractivo a cielo abierto. El que consideran imposible de realizar por la acentuación de las prácticas depredatorias y destructivas de las formas de producción, sociabilidad y trabajo que históricamente se han constituido en lugar. Así lo expresa un campesino del lugar: “La multinacional es un depredador, pero no nos van a absorber como quieren; el territorio es nuestro y vamos a defenderlo hasta con nuestra vida” (Entrevista a José Domingo Rodríguez, diciembre de 2016).

Esta asimilación de las prácticas mineras con una cultura del saqueo, el despojo y la muerte, ha mediado en la determinación de los procesos organizativos de impulsar acciones colectivas que defiendan el valor de la vida y que reconcilien a las comunidades con la defensa agua, la biodiversidad y el medio ambiente. Accionar que se constituye en una instancia de confrontación de fuerzas basada en la ocupación pacífica de espacios públicos que refuerza los lazos de solidaridad, amplía el círculo del conflicto a diferentes escalas geográficas y obstruye las actividades rutinarias de los oponentes, los observadores y las autoridades oficiales. Un participante en la 9 Marcha Carnaval por el Agua, la Vida y el Territorio se refería al valor de estas acciones colectivas en los siguientes términos:

⁵⁸. Ver también: Candón M, J. (2011). *Internet en movimiento: Nuevos movimientos sociales y nuevos métodos en la sociedad de la información*. Memoria para optar el título de doctor. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.

Desde la minería nos están imponiendo una cultura de muerte. Nosotros como proceso social estamos impulsando algo que se llama la cultura de la vida. Que más cultura de la vida que un carnaval por la vida. Estamos reivindicando todas las formas alegres y pacíficas para garantizar desde la movilización que se dé a conocer al pueblo colombiano, cajamarcuno y tolimense que ésta lucha es por la defensa del agua. Por eso el carnaval se convierte en una cuestión emblemática para decirle a ese proyecto de muerte de las multinacionales que la vida se defiende sonriéndole y amándola (Entrevista a Robinson Mejía, junio de 2017).

Esta dimensión pacífica de las acciones colectivas por la defensa del agua y que advierte en la expulsión de la multinacional del territorio las posibilidades de triunfo, constituye otro factor que moviliza el consenso. A través de ellas se pretende identificar a un público más amplio con la defensa de derechos que buscan proteger el medio ambiente de usos y actividades inadecuadas e injustas como la actividad minera. Se podría decir que su accionar se sustenta en el planteamiento de Tarrow (1997), según el cual hay que “convencer a los timoratos de que las indignidades de la vida cotidiana no están escritas en las estrellas, sino que pueden ser atribuidas a algún agente, y de que pueden cambiar su situación por medio de la acción colectiva” (p. 215)

En este sentido, haciendo referencia a la cantidad de jóvenes que asisten a la Marcha Carnaval por el Agua, la Vida y el Territorio en la ciudad de Ibagué, y analizando el compromiso de los mismos con el impulso de acciones colectivas contra la actividad minera, un participante de la consulta popular celebrada el 26 de marzo del 2017 en Cajamarca, decía lo siguiente:

La lucha ambiental se ha vuelto una de las principales luchas en Colombia. Es una concienciación de nuestra población principalmente de las nuevas generaciones para defender ambientes ecológicos y la biodiversidad. Esta lucha social va a ser uno de los movimientos más promisorios para la organización de nuestra sociedad, en defensa de derechos colectivos y sobre todo de las nuevas generaciones (Entrevista a Luis Jorge Garay, marzo de 2017).

Este proceso de politización o de despertar de la conciencia de los sujetos a nivel colectivo, ha activado la memoria como dispositivo de resistencia. A juicio de Aguilera, González & Torres, (2015) siguiendo a Semelman (1997), ésta permite desaprender, reconstruir el pasado, y la apropiación del futuro. “La memoria funge como proceso de recuperación selectiva del pasado, pero también de desaprendizaje” (p. 162). Esta facultad del intelecto les ha permitido a los integrantes de los procesos colectivos equiparar la resistencia a la

colonización española ejercida por los indígenas Pijaos⁵⁹ y las luchas agrarias de indígenas y campesinos durante las primeras décadas del siglo XX en el departamento del Tolima, con la disputa que hoy se adelanta contra la AGA por la autonomía, la soberanía y el derecho a decidir por sí mismos qué hacer con el territorios. Los testimonios siguientes así lo corroboran.

Con la colonización española empezó también una colonización del saber en el territorio. Hoy eso se ha venido modificando. Nos hablan de desarrollo, el progreso y demás, sustentado en una lógica extractivista. Otra lógica es que el territorio es un espacio de vida al igual que lo consideraban comunidades indígenas como los Pijaos que habitaban el territorio tolimense (Entrevista a José Jiménez, diciembre de 2016).

Siempre he sabido que el Tolima desde la época colonial ha sido una tierra muy aguerida. Epicentro de la revolución y organización de muchas luchas en Colombia. Este legado de resistencia nos indica que no debemos quedarnos quietos. Queremos seguir siendo la despensa agrícola de Colombia. Productores de arracacha. Todas las acciones de resistencia que hacemos son manifestaciones de eso. Somos Arracacheros, agrodescendientes, agricultores y agricultoras. Queremos seguir produciendo una arracacha libre de cianuro, orgánica y cultivada en familia. El oro vital no es el mineral, sino la agricultura, el agua, el alimento, el territorio y la gente que allí habita (Entrevista a Camila Méndez, octubre de 2017).

Con el mismo propósito de activar la memoria como estrategia para la apropiación del pasado y desnaturalizar la apropiación del territorio para la actividad minera, el Colectivo Socioambiental Juvenil Cosajuca designa el órgano informativo en el que se difunden sus reflexiones relacionadas con las distintas acciones colectivas que realizan contra el proyecto extractivo como “La Inconquistable”. Nombre que alude a investigaciones históricas que califican a la comunidad tribal de los Pijaos que habitaban en este parte de Colombia como guerreros e inconquistables⁶⁰ por parte de los españoles. Para los integrantes de esta organización, hoy deben ser inconquistables por la multinacional minera, lugres considerados sagrados como: el Volcán Machín, el páramo Barragán Chili, la cuenca Chorros Blancos, los ríos Anaime y Bermellón, y la misma madre tierra. Atención que extienden también a la consulta popular, la Marcha Carnaval por el Agua, la

⁵⁹. En tiempos precolombinos los Pijaos poblaron la Cordillera Central de los Andes entre los nevados del Huila, del Quindío y del Tolima; el valle alto del río Magdalena y el alto Valle del Cauca. Sobre el impacto de la conquista española en el departamento del Tolima y el exterminio a la comunidad Pijao ver: (Bernal, 2007) y Triana (1992).

⁶⁰. Ortega R. E. (1949). *Los inconquistables. La guerra de los Pijaos 1602-1603*. Volumen 20. Archivo Nacional de Colombia.

Vida y el Territorio, y demás acciones de resistencia contra el proyecto extractivo (Entrevista a Camila Méndez, enero de 2018).

A las empresas extranjeras que se lucran con los negocios del extractivismo, queremos decirles que reprobamos sus métodos corruptos para comprar simpatías y ganar influencias; que sus dádivas interesadas e hipócritas ofenden la honestidad y dignidad del pueblo colombiano; que su negocio es perverso porque se aprovecha de las necesidades de comunidades pobres y vulnerables; que su codicia -siempre impuesta a la fuerza- deja una estela de muerte, atropellos, conflictos y descomposición social, que ya vemos con dolor en nuestro territorio; que su actividad destructora va en contra de bienes irrecuperables para la humanidad y la vida planetaria⁶¹.

Convicciones como estas, han sido usadas por los procesos organizativos para que los lugareños se convenzan de la necesidad de participar en acciones colectivas que congreguen y movilicen el consenso de la comunidad contra el proyecto extractivo. En otras palabras, se podría afirmar que la defensa del territorio como dimensión que estimula la realización de movilizaciones y demás acciones colectivas pacíficas y flexibles, han derivado en la elevación del nivel de conciencia y en afirmaciones de cambio de quienes han participado en ellas. Aspectos que han incidido a su vez en la elevación del orgullo y afecto que sienten los habitantes del lugar por una cultura basada en las labores agrícolas, “a ser humano y sentir humanidad por la gente, la tierra, y un compromiso planetario” (Entrevista a Camila Méndez, octubre de 2017).

A la Marcha Carnaval vamos a hacer masa. A mostrarle a la gente que somos más los que estamos en contra de la minería. Voy con rabia y nostalgia de ver que hay personas que estudiaron y que defienden la minería y que son como tan cerrados. Lo hacen únicamente por la plata y no les importa el futuro de los hijos de ellos ni los de los demás...No entiendo qué sentido tienen los que defienden la minería, teniendo hijos. Sabiendo que con la plata no se tapa todo. A la marcha voy también con amor y pasión por el territorio. Hay que mirar el futuro de los hijos y lo que produce la región. Las mineras vienen por determinado tiempo y acaban con todo. En cambio, nosotros llevamos más de 150 años produciendo en esta tierra que nunca se cansa del cultivo (Entrevista a Gustavo Fandiño, enero de 2018).

Asimismo, se refería otro asistente a la Marcha Carnaval por el Agua, la vida y el territorio celebrada en la ciudad de Ibagué el tres de junio del 2017. “Lo que nos motiva a participar en marchas como esta es defender lo que es nuestro, la producción de nuestros productos, la

⁶¹. “Declaración política VII Marcha Carnaval en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio celebrada el 5 de junio de 2015 en la ciudad de Ibagué.

comida, el orgullo de ser campesinos y el amor por el territorio” (Entrevista a Yolanda Rojas, junio de 2107).

A propósito de esto mismo, es necesario decir que movilizaciones como estas, se enmarcan “en torno a símbolos culturales escogidos selectivamente en un baúl de herramientas que los promotores políticos convierten en marcos para la acción colectiva” (Tarrow, 1997: 209). Representaciones que están asociadas a atuendos que identifica a los asistentes a acciones colectivas de rechazo a la minería que se realizan en el territorio o en la ciudad de Ibagué, como: el sombrero, las alpargatas, el pocho y camisetas en las que se escriben frases como: “Yo amo a Cajamarca” y “No a la mina”. Engalanado e indumentaria que se complementa con el desfile de carros decorados con toda clase de productos agrícolas que se cultivan en los distintos pisos térmicos que configuran el territorio. Dimensión simbólica en la que también se exteriorizan sentimientos de apego, pertenencia y agradecimiento por la fertilidad del suelo que habitan, y que provee la gran riqueza agrícola que sirve de sustento económico a todos los habitantes del lugar.

Cuando voy a la Marcha Carnaval, lo hago con un sentimiento de arraigo y amor. Siento un profundo amor por el territorio. Empieza uno a mirar con emoción al ver que hay tanta gente que se moviliza...toda una integración social que grita: fuera, fuera, fuera con todo el sentimiento (Entrevista a Olga Cecilia Castro, enero de 2018).

En suma, la movilización de consenso en torno al peligro que representa el proyecto minero para la economía local, ha mediado en la emergencia de “prácticas educativas y formativas, constituidas en “medios o formas para hablar con la gente que van desde lo académico, lo cultural, lo gastronómico, o lo audiovisual” (Entrevista a Camila Méndez, octubre de 2017). Acciones que han incidido a su vez en la aparición de subjetividades políticas, en torno a las cuales los integrantes de los procesos organizativos han hecho posible la apropiación del pasado, resignificar el territorio y visualizar en la agricultura la única posibilidad de futuro.

Estas prácticas han tenido a su vez incidencia en transformaciones subjetivas relacionadas con innovaciones que se sustentan en el desarrollo de la capacidad de sentir con otros, implicarse, reconocer la deferencia y la pluralidad, es decir la alteridad, entendida como la capacidad de apertura al otro, a la comprensión de sus sentidos. Conversiones para las que se requiere la formación de la otredad, lo que involucra a su vez la capacidad para asimilar conocimientos, prácticas e identidades nuevas (Fernández, 2011). Aspectos estos que, se emparentan también con procesos de aprendizaje y que se abordarán en las partes siguientes del escrito.

6.3 Transformaciones subjetivas cognitivas

Los integrantes de los procesos organizativos, sus simpatizantes y habitantes en general del municipio de Cajamarca Tolima, gracias a la movilización de consenso contra el proyecto extractivo, se han hecho conscientes de los peligros que ocasionaría el emprendimiento minero a cielo abierto de la mina La Colosa, en las fuentes hídricas, acuíferos⁶², biodiversidad, los suelos y paisaje territorial. Riesgo debido a que en el lugar se originan 161 nacimientos de agua que surten del líquido al 60 por ciento de habitantes del departamento. Así lo explicaba Jorge Enrique Cardoso, Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) en el año 2014:

El proceso de exploración y eventual explotación es abiertamente inconveniente desde el punto de vista económico, social y especialmente ambiental; primero porque el proyecto se ubica en la zona de la Reserva Forestal Central, segundo porque el proyecto se ubica en la cabecera de la cuenca alta del río Coello, que es la que le entrega oferta hídrica al 60 por ciento de la población de los tolimeses⁶³.

De esto se hicieron conscientes los lugareños de Cajamarca. Entendieron a partir de las prácticas educativas que los ecosistemas en los que se ubica el territorio que habitan son como un organismo vivo en el que todo está relacionado. En otras palabras, que la jurisdicción que ocupan hace parte de un medio natural del que hacen parte: el Parque Nacional Natural de los Nevados en el norte, y el páramo Chili Barragán en el sur sobre la cordillera Central. Territorio en el que también se sitúa la Reserva Forestal Central creada mediante la ley 2 del año 1959. Sitio del que hace parte el 86 por ciento del total del área municipal y en el que se originan quebradas, ríos y demás cuerpos superficiales de agua que irrigan el Distrito de riego Usocoello localizado en la zona central del departamento del Tolima. Fuentes hídricas que nutren acueductos de localidades como Espinal, Guamo, Coello, Ibagué, entre otros. “Hacer un proyecto en una zona con esta biodiversidad y riqueza ambiental es ir en contravía de lo que la gente ha hecho para conservarla o convertir el territorio en una zona productora de comida” (Entrevista a Robinson Mejía, diciembre de 2016).

Muchas personas como yo a los 50 años de edad vinimos a conocer el páramo Barragán Chili. Con las prácticas educativas vine a entender que estábamos ubicados en un punto neurálgico del departamento y que aquí en Anaime

⁶². “Acuífero es un término empleado en geología para definir a las estructuras geológicas subterráneas que, al estar totalmente saturadas, son aptas para el almacenaje y transmisión de agua en abundancia. Se caracteriza por presentar una importante permeabilidad, extensión y espesor. Estas formaciones geológicas, al permitir el desplazamiento de agua por sus grietas, el permiten al ser humano aprovecharlas para la satisfacción de sus necesidades” <http://conceptodefinicion.de/acuifero/>. Fecha de acceso, septiembre 24 de 2017.

⁶³. “Cajamarca y La Colosa en la agenda nacional”. En: <http://www.asocars.org.co/index.php/informacionbasica/sala-de-prensa/804-cajamarca-y-qla-colosaq-en-la-agenda-nacional.html>. Fecha de acceso, septiembre 24 de 2017.

tenemos una responsabilidad enorme con toda esa zona del Tolima que comprende Ibagué, Coello y el centro del departamento porque el agua que consumen se produce en el páramo que está en nuestro territorio. Por eso entendimos que es un privilegio y una responsabilidad tener un páramo (Entrevista a Olga Cecilia Castro, enero de 2018).

Respecto al efecto que ocasiona la explotación minera en los territorios, los integrantes de los procesos organizativos manifiestan conocer modelos de desarrollo agroindustriales equitativos, respetuosos de la naturaleza, de la gente, y generadores de un mayor valor agregado. Motivo por el que se tornan contrarios a la tesis de la industria extractiva como camino obligado al desarrollo. Razón por la que exacerban la voluntad de resistencia y oposición a la política minera del Gobierno Nacional que agrede su hábitat natural. Posición que consideran como un mandato ético, espiritual e indeclinable que ayuda a potenciar la movilización social contra la locomotora minera. “Seremos incansables en los procesos de formación, en las convocatorias y movilizaciones para denunciar, consultar y generar mayores niveles de conciencia, conocimiento, participación ciudadana y defensa territorial” (Declaración política de la VII Marcha Carnaval en Defensa del Agua, La vida y el Territorio).

Del mismo modo y aludiendo a las acciones educativas como los diplomados sobre gestión ambiental que organizan los mismos integrantes de Comité Ambiental en la ciudad de Ibagué y la población de Cajamarca, un líder local manifestaba lo siguiente:

Tratamos de generar conciencia ambiental en la gente. Es la única forma cómo podemos enfrentarnos a un poder como el de Anglo Gold Ashanti. No queremos que nos pase lo que vemos en la Guajira, donde los niños mueren de sed mientras que la mega mina de carbón El Cerrejón gasta 17 millones de litros de agua al día (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

En la generación de esta conciencia ambiental intervienen prácticas educativas enfocadas desde el contexto local y nacional, mediante las que los lugareños han entendido que el territorio es el espacio de disputa por el control de los bienes comunes entre las comunidades y las compañías multinacionales. Conflicto del que hace parte, el agua y sus ciclos, la biodiversidad, los sueños y saberes de los lugareños y la misma institucionalidad. Así les explicaba Robinson Mejía Integrante del Colectivo Juvenil Cosajuca a los asistentes del diplomado sobre gestión ambiental en la localidad de Cajamarca. “Para mí el territorio es la tierra, los animales, la gente. Y eso es lo que hay que tratar de defender”. “En el diplomado he aprendido a compartir con las personas. A relacionarme con los demás. Prepararse uno más. Buscar amistades. No enemigos”. Manifestaba un campesino fundador de la organización Unión Campesina (Entrevista a Carlos Gámez, diciembre de 2016).

De este campo de saberes que han asimilado los habitantes de este territorio también hacen parte conocimientos relacionados de los mecanismos de participación popular y las leyes que las regulan (Ley 134 de 1994 y 1757 de 2015). Información que fue difundida a los lugareños en el año 2016 a través de la revista diseñada por el Colectivo Socioambiental Juvenil Cosajuca titulada: *La Despensa: Guía Metodológica para Realizar Consultas Populares en Colombia*.

Otros saberes están relacionados con el dominio por parte de los integrantes de los procesos organizativos de las especificidades técnicas sobre la minería a gran escala y a cielo abierto que se emprenderá en el lugar como: la remoción de 4 toneladas de roca para extraer 0,86 gramos de oro. Obtención para la que se procede a fracturar y pulverizar la roca y apilarla luego en forma escalonada en montañas artificiales con el fin de regarla con grandes cantidades de agua (mil litros por segundo) con cianuro. Solución que es colectada en piscinas y finalmente llevada a su última etapa, donde se separa el oro de la solución canutada a través del uso de talco de zinc, o carbón activado, con el objeto de fundir el material y obtener las barras de oro (García, 2012).

Nosotros empezamos a documentarnos acerca de la minería a cielo abierto con biólogos de la UT, luego empezamos a realizar cineclubes en el parque de Anaima a los que asistía el pueblo entero porque era con entrada abierta. Cuando la gente veía la explotación tan impresionante y esas cavernas de 800 metros de profundidad por 1000 metros diámetro y cómo se iba rompiendo la montaña, nos imaginábamos estas montañas de acá rompiéndose y volviéndose nada. Con los niños se hacía un trabajo especial. Decíamos: nosotros somos ya mayores y el peligro es para los niños. Por tanto, tenemos que trabajar con ellos lo que es una minería a cielo abierto. Esto nos permitió llegar a la conclusión que toda minería es mala. Eso para nosotros fue fundamental porque empezamos a hablar términos técnicos como por ejemplo que acá el oro está diseminado... y comenzamos a darle importancia a lo nuestro, al volcán Machín y a enamorarnos de él. (Entrevista a Olga Cecilia Castro, enero de 2018).

Esta información también ha llegado a los habitantes a través de cursos de formación, pancartas, afiche, diplomados, etc., difundidos o realizados en la capital departamental y la localidad de Cajamarca. Contenidos en los que se explica cómo la minería quebrantaría la agricultura y amenazaría el sistema local de producción de alimentos. Por ejemplo, en el documento titulado: *Minando la Agricultura: la manera en que las industrias extractivas amenazan nuestro sistema de producción de alimentos* (ver fotografía 6.1) se difunde la información a la población local y regional, que durante la fase de explotación minera entre muchos otros efectos: se deforestará el territorio, se liberarán emisiones de CO₂ a causa de la excavación de tierras y ecosistemas enteros, se desviarán quebradas y ríos y se

contaminará el aire. Proceso que incluye la apropiación de las tierras de las comunidades para construir carreteras e instalar líneas eléctricas.

16 Fotografía 6.1. Afiche fases explotación minera



Fuente: Archivo personal. 2018

De igual manera se explica a la población que durante la fase de operación, la cual tendrá un tiempo aproximado de duración de 5 a 25 años, a las emisiones de CO2 se le agregarán las fugas masivas de metano resultado de operación de maquinaria altamente contaminante, se reducirá masivamente el agua disponible para la agricultura, y el territorio se llenará de cráteres gigantes y montículos de residuos tóxicos. También que una vez concluida la operación extractiva los efectos durarán hasta 1000 años. Tiempo en el cual habrá menos tierra y agua disponible para las comunidades; los polvos de los vertederos de la mina continuarán activos por décadas; los drenajes ácidos de la mina continuarán por cientos de años acidificando el agua y el suelo. En consecuencia, los ocupantes del territorio se verán en un paisaje cicatrizado e intoxicado por tajos, diques de colas y grandes cantidades de roca acida residual amontonada sobre la que no crecerá planta alguna.

En suma, el RAPE como las que se han explicado en el capítulo anterior les ha proporcionado a los habitantes del territorio tener los conocimientos teóricos y prácticos

que les permita contrarrestar el discurso de la AGA relacionado con promesas de empleo, desarrollo económico, progreso, bienestar y otros supuestos beneficios que traerá la explotación minera. Ofrecimientos que facultan al Estado y la empresa multinacional a justificar una actividad que transforma las formas de vida, las prácticas, racionalidades culturales y económicas que ocasionará a las comunidades afectadas (Alonso & Job, 2012).

Esta tensión ha provocado la rebeldía y la insubordinación de los lugareños quienes han efectuado acciones colectivas de protesta en las que se “articulan un conjunto de saberes y realizaciones que orientan la construcción comunitaria de la resistencia”; condiciones ineludibles y perentorias en la transformación e imagen del mundo que tenían antes del arribo de AGA. Se podría decir que el legado hacia el futuro de estas luchas “construidas en el presente, es que, desde abajo, con pequeñas victorias y derrotas, se puede enfrentar a poderes que parecen invencibles y también se puede decidir el modo en que se quiere vivir” (Ciuffolini, 2012: 36).

Quando se pensaba que una entidad tan grande y fuerte como la AGA, siempre se decía que era una pelea de tigre con burro amarrado. Algunas personas se la creían y decían: ¿Cómo vamos a tomar una decisión contra una empresa que tiene todo, no solo el poder económico sino también la influencia de los políticos? Fue entonces cuando comenzamos a pensar que las prácticas educativas debían de servir para que las comunidades tuvieran más cohesión, pertenencia y fortaleza para decidir qué hacer con el territorio (Entrevista a Olga Cecilia Castro, enero de 2018)

Los RAPE también tienen como propósito impedir el reforzamiento y la dinámica de empobrecimiento en el territorio, debido al impacto negativo que ocasionará el proyecto minero en la actividad agrícola que se desarrolla en la zona. “Hemos aprendido que si dejamos a esta multinacional en Cajamarca, mañana no vamos a poder sacar frijol, arracacha, hortalizas, duraznos, tantas cosas que se dan acá en Cajamarca, porque la tierra se va a volver estéril”, manifestaba una joven campesina, habitante de la vereda La Esperanza, y quien ha realizado los diplomados sobre gestión ambiental que ha orientado la UT en el municipio (Entrevista a Marlene Mojica Lozano, diciembre de 2016).

Con el fin de evitar las calamidades que generará el emprendimiento minero, los lugareños han propuesto el empoderamiento y la unión de la comunidad campesina con el fin de trabajar en la gestión de proyectos colectivos. Innovación de las luchas de resistencia que también contribuye a generar transformaciones subjetividad relacionadas con la adquisición de nuevos conocimientos, innovar las prácticas agrícolas y renovar las formas de sensibilidad y de sociabilidad. Invenciones que dependen del agenciamiento e incorporación de nuevos valores. Un líder campesino local dice al respecto:

Una comunidad unida saca proyectos, hace gestiones, va para adelante. Si algo he aprendido es el que el que está a mi lado es mi hermano. Creo que la comunidad de Cajamarca ha desarrollado valores y principios como estos. La gente tiene la claridad que no es ineficiente, que no está vulnerada. Hoy la comunidad creció y tiene conocimiento de unos derechos, llámese políticos o de trabajo. Son valores que hemos ganado. Nuestros campesinos por eso se sienten más tranquilos. Son valores que le hemos ganado al Estado y que nos protegen de la vulneración. Tenemos que tener respeto y sentido de pertenencia para que la gente crea en uno (Entrevista José Domingo Rodríguez, diciembre de 2016).

Esta incorporación de valores que refuerzan el proceso de resistencia se expresa también en la construcción de alternativas al orden impuesto, en la creación de otras relaciones sociales y de nuevos modos de realidad, tanto personal, social y cultural. Aspectos que se relacionan en este trabajo con una subjetividad instituyente. Transformación mediante la que los sujetos orientan, elaboran y dan sentido a nueva experiencias y acciones. Dicho de otra forma, debido a la amenaza del despojo de bienes comunes como el agua, los bosques, la flora o la fauna, las comunidades introducen nuevos conocimientos ajenos a su mundo cotidiano. Saberes que emergen del espacio de enunciabilidad de sus luchas mediante los que se “activa una especie de sensibilidad respecto de los bienes comunes y que remite a la degradación ambiental. Fenómeno ante el que las comunidades comienzan a valorar aquello que hasta entonces parecía relativamente inapreciado” (Ciuffolini, 2012:36)

Estos conocimientos de los integrantes de las organizaciones y que se ponen de manifiesto en las acciones colectivas de resistencia contra el emprendimiento minero, son descalificados o interpelados con categorías de ignorancia por parte de los funcionarios del Gobierno y de las multinacionales. Dicho de otra forma, el saber cómo ámbito de disputa y enfrentamiento hace que surjan “subjetividades inherentemente jerárquicas: la superioridad de lo científico y la inferioridad de quienes no lo son” (Avalle, Gallo & Graglia, 2012: 81). Ejemplo de ello es la querrela surgida en el país sobre los alcances de las acciones de resistencia que se han realizado en los territorios mineros:

Mientras indígenas y comunidades afro dicen que las consultas han logrado prevenir que proyectos de grandes empresas mineras que operan en el país no conviertan sus regiones en miseria, descomposición y deterioro irreversible de sus tierras y su cultura, el vicepresidente German Vargas Lleras señaló que la herramienta se ha convertido en una modalidad extorsiva. El señalamiento del vicepresidente Lleras apunta a que las comunidades usan la consulta previa para “**extorsionar**” a los empresarios, imponerles cargas económicas por los costos de las consultas, y para generar grave afectación al desarrollo de

proyectos debido a que dilatan la toma de decisiones, afectando a la industria y las regiones⁶⁴

Como se advierte en esta cita, el territorio es a la vez un campo de intervención material por parte del Estado y las empresas (con la premisa que la actividad minera genera progreso y desarrollo) y ámbito de resistencia por parte de las organizaciones sociales debido al impacto que esta actividad económica ocasiona en las fuentes hídricas, la biodiversidad y la vida de los lugares donde se instala.

Así, la concepción de lo que es el territorio para ambos sectores, se convierte en el elemento central del conflicto. Mientras que para el Estado y la multinacional el proyecto extractivo de La Colosa traerá prosperidad y bienestar para la población, las organizaciones de resistencia pretenden llenar esa categoría a partir de concepciones que se sintetizan en nociones que indican que “el agua vale más que el oro”.

Gracias a esta convicción, aprendida de los RAPE, los campesinos de Cajamarca, ahora cuidan más el recurso hídrico y los bosques. Tratan de usar menos agroquímicos, efectúan agriculturas alternativas basadas en métodos agroecológicos en pequeñas parcelas y huertas caceras. Practican el lombricultivo, y buscan alternativas de comercialización de productos como la arracacha con Crepes and Waffles en las principales capitales del país. “Eso es algo muy bonito que quedó de ese caminar por las veredas, de ese puerta a puerta llevando el mensaje que había que defender bienes como el agua y los bosques” (Entrevista a Jimy Fernando Torres, enero de 2018).

En este sentido, se considera que el proceso de transformación subjetiva en esta población tolimense, está inextricablemente ligado a la construcción de una idea alternativa de territorialidad. Emergencia que obedece a la toma de conciencia acerca de los efectos de corto y largo alcance que las prácticas extractivas depredadoras acarrearán en el territorio. Dicho de otra forma, el nivel cognitivo de la subjetividad tendiente a impedir el desenvolvimiento del proyecto extractivo ha servido para reorientar acciones y elaborar nuevas experiencias en relación con el territorio, transformaciones subjetivas de nivel práctico que se explicarán enseguida.

6.4 Transformaciones prácticas

Como se describía antes, desde que se confirmó el arribo de la AGA en el año 2007 las personas pensaban que era casi imposible frenar el emprendimiento minero. Después de la consulta popular efectuada el 26 de marzo del año 2017, los procesos organizativos y sus integrantes, convertidos en nuevos sujetos políticos, están convencidos que eso es posible. Los saberes logrados en las acciones colectivas que han emprendido ha fomentado la confianza en este propósito. Conocimientos que a su vez han configurado en los lugareños, una nueva relación con el territorio, el agua, la biodiversidad y la vida, y que se han

⁶⁴. “Comunidades le ganan otro “round” a la minería”. En: Revista Dinero, mayo 25 del 2015.

constituido en símbolos de unión de las distintas organizaciones que operan en el ámbito local.

Esos miserables de la multinacional creen que van a venir a comprar un pueblo con miserias. Ellos creen que lo que dan es mucho, y la gente es tan ilusa que piensa que lo que ellos dan es mucha regalía. Pero a mí no me compra ningún pedazo de oro, porque de aquí a mañana yo no voy a comer un pedazo de pared, ni un pedazo de la moto, ni del carro, nada de eso, ni un pedazo de piedra. Porque yo vivo es por el agua, y el agua es nuestra vida, para nuestros hijos, nuestras generaciones. Yo amo a mi pueblo Cajamarca Tolima (Entrevista a Marlene Mojica, diciembre de 2016).

La vinculación de mujeres a la resistencia contra la lógica extractiva, destructora de la vida y la naturaleza, ha propiciado en primer lugar transformaciones en los roles tradicionales de género. De las entrevistas realizadas emergen reparos a lógicas que consideran a la mujer capacitada únicamente para entregarse a las labores domésticas y reproductivas. Esta subjetividad reducida y aprisionada dentro de estas funciones específicas ha originado transformaciones derivadas de sus experiencias, y participación en acciones colectivas como: la Marcha Carnaval por el Agua, la Vida y el Territorio, los diplomados en formación ambiental, seminarios de mujeres que se oponen a la minería, las veedurías minero ambientales, y la realización de campañas a favor de la consulta popular y demás RAPE como los que se han explicado antes.

Como explicaba un miembro de Conciencia Campesina, el involucramiento de las mujeres en el movimiento social permitió que muchas de ellas, dedicadas únicamente a las funciones del hogar, conocieran los problemas del país, que se integraran con personas del mismo sexo en proyectos como: Mujer y minería en Colombia, Censa Agua Viva y otras organizaciones de carácter ambiental. “Muchas de ellas comenzaron a despertar y saber que había otras cosas fuera de las labores del hogar” (Entrevista a Jimmy Fernando Torres, diciembre de 2016).

Yo he transformado la visión del mundo, los valores y la idea que por ser mujer las señoras no pueden salir adelante, no pueden estudiar. Yo reaccioné y me di cuenta que no siempre las mujeres podemos están detrás de un hombre, que nos podemos involucrar en otros campos como escuchar, aprender y ayudar a la gente (Entrevista a María Ascensión Rodríguez, octubre de 2016).

Muchas de estas mujeres no terminaron primarias o bachillerato. Los procesos organizativos se han constituido en “formas de praxis cognitivas” (Ayerman & Camisón, 1991, citado por Tarrow, 1997: 209). Así lo reconoce una integrante de un nucleamiento colectivo local, que ha visto las transformaciones experimentadas por su madre, gracias a las vivencias que ha tenido como integrante de la organización Conciencia Campesina.

El participar de mi mamá con esas señoras hizo que cambiara su perspectiva de vida y sus pensamientos. Hasta su manera de expresarse ha cambiado. Mi mamá ha sido muy tímida. Ese proceso de formación que tuvo con Cesat Agua Viva la enriqueció mucho y la puso más fuerte. Hasta la manera de relacionarse con nosotros, o la manera como maneja el discurso da cuenta de sus transformaciones. Ahora hace un abordaje de los temas sociales de una manera más profunda. Yo trato de contribuirle, le hablo, le llevo cosas, le doy los artículos que salen para que lea. Ha cambiado porque siempre ha estado peleando por el territorio. No ha tenido una formación de bachillerato o de universidad, pero sí un proceso educativo de conocimiento y defensa del territorio. Esto le ha permitido saber por qué éste está en peligro. Por qué la minería contamina, daña, mata y cambia nuestra vocación agrícola. Todo esto ya lo tiene claro. Es una formación que se hace día a día, así no se tenga un profesor. Porque cada día está viendo cosas, experimentado o ejerciendo un pensamiento crítico frente a eso (Entrevista a Érica Alejandra Ospina, diciembre de 2016).

En segundo término, los miembros de la comunidad involucrados en las organizaciones sociales que se oponen al emprendimiento minero también han transformado la dimensión temporal enfocando aspectos cotidianos de su vida a proyectos venideros. Las proyecciones están relacionadas con el aciago destino que les espera a sus hijos, las generaciones venideras, las aguas y la riqueza natural de fauna y flora del territorio. Esto si es derrotada la resistencia al emprendimiento aurífero y se pasa a la fase de explotación. “Yo temo por mis hijos, mis nietos. Qué sería de estas montañas, toda esa riqueza natural, llegarán las desapariciones forzadas, las muertes. A mí se me contagia el corazón y me dan como deseos de llorar, si eso llegara a pasar en Cajamarca” (Entrevista a José Domingo Rodríguez, diciembre de 2016).

Como se explicaba antes, el peligro del avance del proyecto minero en el territorio se cierne sobre las cuencas de los ríos Anaime o Bermellón, o Coello, y la misma vocación agrícola del lugar. Riesgo que los miembros de las organizaciones sociales vislumbran contrarrestar formando a los campesinos para que aprendan a tomar periódicamente muestras y mediciones para monitorear niveles de contaminación de las fuentes hídricas que surten los acueductos municipales de Cajamarca, Ibagué, Espinal, y Flandes. Aguas con las que también se riegan cultivos agroindustriales del centro del departamento del Tolima. Asimismo, se adelantan proyectos de reforestación con plantas que siembran y reparten entre los mismos campesinos de las organizaciones sociales antimineras.

Igualmente se están llevando a cabo proyectos agroecológicos con el objeto de empoderar a los campesinos, mujeres, niños y jóvenes en la producción de ahuyama, café, arracacha, galletas y derivados lácteos sin procesos químicos. Según Cielo Báez, presidenta de la

Organización de Productores Agroecológicos del Río Anaime (Apacra), esto les ha permitido transcender

De las marchas, del gritar, de los medios, del internet, de todas estas cosas que generalmente son las que hacemos los “ambientalistas”, como nos llaman a las propuestas alternativas al extractivismo. Se trasciende en una alternativa de producción. El verdadero buen vivir está en empoderar a la gente, en decirle a la gente que hay cosas que pueden ser muy rentables, que pueden no dañar el ambiente y por el contrario contribuir a la salud (Mateus, 2017).

Como parte de este proyecto de agricultura orgánica, muchos de los campesinos de la zona están impulsado el uso del producto agroecológico natural denominado Vidala Terra, fabricado con extracto de uva, el cual descompone y deshidrata la maleza (Arvenses) y no ocasiona efectos nocivos a la vida del suelo como si lo hace el glifosato (Entrevista a Jimy Fernando Torres, diciembre de 2016).

Prototipo de estas transformaciones subjetivas prácticas, es lo que realiza el campesino Diego Espitia en su parcela de hectárea y media, ubicada en jurisdicción del corregimiento de Anaime. Antes del arribo de la AGA, Espitia era cazador y realizaba prácticas convencionales de agroquímicos. Ahora es defensor del territorio, conoce los nombres científicos de las especies de aves de la región y es promotor de una agricultura libre de agroquímicos. Transformación que realizó como integrante de la Organización de Productores Agroecológicos del Río Anaime (Apacra).

La agroecología es la posibilidad de decir que todos podemos convivir. No tenemos necesidad de dañar la tierra. Ahí es cuando decimos que tenemos necesidad de cuidar y entender que la minería nos hace mucho daño. Si no somos capaces de voltear el suelo es porque sabemos que los bichos que están abajo los exponemos a la luz y se mueren arriba. O que los que están arriba se mueren abajo. Como agroecólogos sabemos que eso hace daño y necesitamos que la minería no se dé. Todo está integrado y nosotros no somos más que nadie... A veces nos creemos más que el gusanito y lo que el hombre destruye dizque para el supuesto desarrollo... Para nosotros desarrollo y buen vivir es esto. Estamos demostrando que la agroecología es una práctica que no hace daño y se permite vivir bien. Cuestión que no pueden hacer muchas personas que viven en la ciudad o tienen mucha plata (Entrevista a Diego Espitia, noviembre de 2016).

Un biólogo profesional de la región se refiere a las prácticas de Espitia en los siguientes términos: “Parece una esponja absorbiendo todo. Se nota cuando habla con la demás gente. Nos sobrepasa, hace preguntas de microbiología que se nos salen de las manos, que le da a

uno para leer. Esto lo llena a uno de esperanza al ver que esos cambios contribuyen a que contagie a otros” (Entrevista a Nadie Vivas Zamora, enero de 2018).

Estas transformaciones subjetivas de orden práctico articuladas a los RAPE, les ha permitido a los integrantes de los procesos organizativos y sus simpatizantes, enfrentar con argumentos la información desplegada por funcionarios del Estado y AGA, que a toda costa quiere implementar un proyecto “dizque para el desarrollo del país y de las comunidades, que protestan porque no son consultadas, no las tienen en cuenta y pagarán las consecuencias que éste genera para las futuras generaciones. Es una pelea del dinero contra la conciencia” (Entrevistas a José Domingo Rodríguez y Jimy Fernando Torres, diciembre de 2016). El resultado de la labor desplegada por las organizaciones sociales ha sido la elección de tres concejales y la realización de la consulta popular del 26 de marzo del 2017 contra el proyecto extractivo donde ganó el No con 97,92 por ciento, mientras que el Si enfrentó una contundente derrota con 1,21 por ciento de los votos, aspectos descritos en el capítulo anterior)

Por último, estas transformaciones subjetivas de carácter práctico han afectado a los habitantes, principalmente a los campesinos que habitan el territorio. Ahora los labriegos buscan corregir prácticas agrícolas que han contaminado las aguas, talado los bosques y deteriorado el medio ambiente de la región en general. Faltas que atribuyen muchos de los labriegos al hecho de ver la naturaleza únicamente como fuente de riqueza e interés mercantil, a la ignorancia, arrogancia o carencia de alguien que los haya concientizado sobre la importancia del medio geográfico como el valor fundamental que sostiene la vida.

Actualmente los lugareños miran las cosas de otra manera, debido a la amenaza y el temor de la contaminación de las fuentes hídricas con cianuro y mercurio y demás productos químicos usados para efectuar el proceso de lixiviación (extracción del oro mediante la acción del agua como disolvente líquido). Y para derribar un árbol, acabar un bosque se piensa más de una vez. Se buscan otros métodos y estrategias para evitar los daños. “Tuvo que llegar la minera para que nos diéramos cuenta de eso. A lo que le podemos aplicar el dicho brusco por cierto pero muy real: sólo aprenderás a levantar las patas cuando te arranques los dedos a tropezones” (Entrevista a Gustavo Patiño, diciembre de 2016).

Todas estas transformaciones subjetivas han estado inspiradas en la defensa de la vida, el agua, los páramos, la biodiversidad y el territorio del emprendimiento minero. Su ejecución permitirá a los lugareños seguir siendo en el presente y el futuro productores de alimentos agrícolas como la arracacha. Tubérculo considerado como su oro vital, del que remiten 50 toneladas diarias a la central de Abastos de Bogotá. Su cultivo inspiró el siguiente poema a una campesina de la zona.

Poema a la arracacha⁶⁵

Mi nombre es arracacha y mi apellido Anaime.
Mi cabello es verde
Y mi piel es color de oro

Este es mi pueblo y se llama Anaime,
La capital nacional de la arracacha.
Allí nací y de allí soy yo,
Todos me quieren y nadie me tacha

Cuando me siembran soy pequeña
Y entre la tierra formo mi nido,
Y voy creciendo poco a poquito
Y nabo a nabo hecho mi nido

A los seis meses me ven radiante,
Verde imponente es mi forraje.
Paca de tacos color café,
Todos mis hijos los doy de baja

En sopas dicen que soy muy buena.
En chicha fuerte que soy verraca.
En tortas suave como un aroma,
Y en arequipe yo soy la macha.

Soy la fortuna de mucha gente.
Soy la esperanza del campesino.
Soy del arriero sustento diario,
Y de la anemia el peor enemigo

Soy muy humilde de noble cuna,
Mi piel es suave como una uchuva,
Voy empacada en un costal
Y del campesino soy la fortuna.

Mi nombre es arracacha y mi apellido Anaime

En suma, se podría decir que estas transformaciones subjetivas prácticas, resultado de los RAPE, están mediadas por la “paciencia en esta loca idea de querer inventar, al borde del abismo, una apuesta colectiva” (Fernández, 2011: 54). Modificaciones que tienen que ver con la forma como los opositores al proyecto minero afrontan las labores agrícolas que realizan cotidianamente, el posicionamiento subjetivo respecto hacia sí mismos, sus pares, las funciones y sentido de pertenencia a las organizaciones y al territorio en el que operan.

⁶⁵. Poema escrito por Delfina Fajardo, campesina de la vereda El Águila en Cajamarca Tolima.

Antes del arribo de la AGA estos procesos organizativos eran extraños en Cajamarca. Su aparición ha contribuido a forjar transformaciones que han aportado los referentes desde los cuales sus integrantes y simpatizantes han reconfigurado su identidad personal y colectiva con el territorio, aspectos que se explicarán en el siguiente apartado.

6.5 Transformaciones identitarias

Los procesos identitarios asociados a procesos organizativos según Retamozo (2009), buscan reconstruir la pertenencia colectiva de un grupo movilizado a través de dinámicas asociadas a “sentidos presentes en la cultura”, la historia y dimensiones voluntarias de futuro. Para este autor, “la conformación del sujeto social es indisoluble de un proceso identitario” (p. 110). En efecto, esta dimensión de la subjetividad en Cajamarca Tolima está relacionada en primer lugar con el desarrollo de vínculos que han fortaleciendo el reconocimiento, la pertinencia y la apropiación activa del territorio como espacio vital. Esto dado a que el lugar que habitan representa el terruño o la campiña donde ha trascendido su vida y en el que el pasado se enlaza con el futuro. Sostén a su vez de materialidad y vida social, donde se distribuyen los marcos que orientan sus prácticas culturales, económicas y sociales y con el que los grupos tejen lazos de identidad. Un lugareño dice al respecto:

Me decidí a trabajar en contra de la minería porque nunca estuve de acuerdo con que una multinacional viniera a meterse al municipio, a quitarnos nuestra tierra, destruir nuestra agua, el aire. Municipio hermoso donde se cultiva arracacha, alverja, frijol..., en el que ha transcendido nuestra vida ya que mis padres y abuelos son de acá. En el futuro: ¿Qué le vamos a contar a nuestros hijos y nietos? ¿Qué le vamos a dejar? ¿En dónde van a quedar nuestras riquezas que dejaron nuestros ancestros? (Entrevista a Marlene Mojica, diciembre de 2016).

Esta perspectiva de la comunidad local para la que el territorio en que viven adquiere una connotación vital e integral, es opuesta a la visión mercantil, explotable y comercializable del mismo por parte de la multinacional y la institucionalidad. Configuración que ha dado lugar a la emergencia de aprendizajes que han ocasionado rupturas, transiciones y transformaciones cognitivas y prácticas que han intervenido a su vez en la reafirmación de la identidad con el territorio de los actores sociales que se oponen a la explotación de la mina La Colosa. A juicio de un habitante local, “la gente históricamente se ha identificado como cajamarcuna de la despensa agrícola de Colombia. Ahora lo que hay es un deseo de mostrarlo, de evidenciarlo a nivel regional y nacional. La lucha que hemos emprendido ha servido para potenciar lo que la gente siempre ha sido” (Entrevista a Robinson Mejía, enero de 2018). En este mismo sentido se pronuncia otro líder local:

La amenaza de la multinacional a la despensa agrícola de Colombia hizo que la comunidad sintiera mucho más apego, sentido de pertenencia y aprecio por lo que tenemos. Se fortaleció la cultura campesina y los lazos comunitarios. Esto fue lo que contribuyó al triunfo de la consulta popular del 26 de marzo

donde se dijo No a la minería. Lo que más contribuyó a ello fueron las prácticas educativas, obligó a la gente a organizarse. La lucha lo que hizo fue que se fortaleciera la identidad y crecieran el movimiento. Hizo también que el municipio explorara otras alternativas económicas. Años atrás solo se hablaba de agricultura. Hoy seguimos hablando de agricultura, pero también de ecoturismo, agricultura orgánica y nuevas alternativas de desarrollo (Entrevista a Julio Roberto Vargas, enero de 2018).

Desde la óptica de los opositores a los proyectos mineros a cielo abierto y a gran escala, esta actividad media en la transformación de formas culturales y políticas de reproducción social, directamente ancladas al territorio y que abarcan desde la destrucción de los hábitats, la biodiversidad y el impacto desmedido sobre las condiciones socioprodutivas tradicionales y el despojo de sus espacios vitales (Svampa & Viale, 2014; Machado, 2015). Tal percepción fue la que indujo a la comunidad cajamarcuna a entender que el emprendimiento minero configuraría una tragedia ambiental que afectaría la tradición productiva del suelo y el abastecimiento hídrico y agrícola de zonas de importancia económica y social del país, ubicadas en centro del departamento del Tolima. A juicio de un habitante del lugar:

Una tragedia ambiental se genera cuando la cultura adaptativa no se corresponde con las condiciones del medio. Cuando yo hago minería a gran escala en una zona que es fuente de alimentos, que es una estrella hídrica, que se caracteriza por paisajes muy hermosos, yo lo que termino es destruyendo la posibilidad que las futuras generaciones disfruten de lo mismo (Entrevista a Mario Vera, diciembre de 2016).

En segundo término, las convicciones sobre la reconfiguración territorial derivada de la actividad minera, y aprendidas de las prácticas educativas, incidió en la producción de territorialidades alternativas. Realización que se evidencia no sólo en la disputa que los actores locales agrupados en los procesos organizativos han entablado con la multinacional y el Estado por la defensa del territorio, sino en la construcción de formas alternativas de gestión y control del mismo. Labor que está relacionada con el impulso en la zona de actividades económicas innovadoras como la agricultura orgánica y el ecoturismo. Quehaceres considerados por múltiples actores sociales como generadores de un verdadero buen vivir. Pues a juicio de un integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué, “la verdadera riqueza de Cajamarca no está en el subsuelo sino en el suelo, su riqueza paisajística, la biodiversidad como la existencia de más de 300 especies de aves” (Entrevista a Renzo García, marzo de 2017).

Esta opción se complementa con el impulso de acciones que buscan enseñarles a los habitantes de las zonas rurales del municipio maneras distintas de conocer su territorio. Muestra de esto es el ejercicio liderado en la zona por la Fundación Muisca Somos Tierra,

integrada por profesionales del lugar y quienes consideran que “la mejor manera de conocer su territorio es meterse y untarse de él”.

Fundamentados en esta premisa, les han entregado a varios dueños o administradores de fincas una cámara con el fin de que ellos mismos realicen un trabajo de foto rastreo de los paisajes y especies de fauna y flora que se encuentra en ellas, así como a expresar de forma escrita la convivencia que llevan con ésta. Tarea para la que reciben la colaboración de los integrantes de la Fundación, debido a que muchos de los inscritos en el programa de formación no saben leer o escribir.

El objetivo de estas acciones es que el mismo campesino muestre las potencialidades de su territorio y aprendan a visualizarse ellos mismos. Materialización que se logra, cuando son proyectadas en video beam las imágenes escogidas por los mismos lugareños, ante lo cual manifiestan su asombro. A juicio de uno de los promotores del proyecto, “estamos acostumbrados a ver un Giro de Italia o un Tour de Francia en el que se muestran todos los paisajes de allá. Cuando ven la imagen de acá se dan cuenta que es tanto o más bonito que la de allá” (Entrevista a Nodier Vivas Zamora, enero de 2018).

La investigación es participativa y dialógica. Yo aprendo de ellos y en la experiencia que he adquirido enseño cosas como el nombre local de bichito. Ellos a partir de un libro de aves, identifican las que hay en su territorio. Me dicen el nombre científico y cosas que no les hemos enseñado. Esto porque ellos han investigado. Buscan y dicen: mire encontré esta nueva especie. Y como si fueran coleccionistas empiezan a buscar y se emocionan de ver lo que tienen allí, a pesar de que lo han tenido ahí toda la vida” (Entrevista a Nodier Vivas Zamora, enero de 2018).

Este proceso formativo en el que se revelan transformaciones en la noción que tienen los habitantes sobre la biodiversidad local, contribuye también a percibir el territorio de otra manera. Verbigracia, ya no ve el espacio como un todo uniforme sino como un hábitat compuesto por secciones de bosque, arroyos, potreros, zonas de cultivo, etc. Diferencias que permiten apreciar su estructura y función, los cambios en la abundancia de las especies y su relación con el medio, así como la función y los beneficios que éstas le proporcionan a las labores agrícolas. Esto les ha permitido a finqueros como Diego Espitia, Yolanda Rojas, Cielo Báez, entre otros, implementar agrosistemas agrícolas sin el uso de agroquímicos. A otros, entender que plagas como la chisa o mojoyoy, (responsable de la pérdida de 15 mil toneladas anuales de arracacha en el municipio de Cajamarca) se incrementa debido al uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes, o la mala rotación de cultivos. Igualmente, que el murciélago se puede emplear para hacer control biológico del mismo evitando así el uso de venenos (Departamento Nacional de Estadística. DANE, 2015; Entrevista a Nodier Vivas Zamora, enero de 2018).

En consonancia con esto mismo, los campesinos han generado estrategias para establecer una relación más armónica con el medio. Por ejemplo, han dejado de cazar y muchos separan espacios de las fincas para las especies de animales que se encuentran en sus predios, no cultivan hasta la orilla de las quebradas, reservan zonas de protección para las cuencas hidrográficas o generar barreras para evitar la erosión del suelo. A juicio de un integrante de la organización Conciencia Campesina “la mayoría de los dueños de fincas, hoy son más conscientes del cuidado y la importancia del agua y el bosque. Hay más sentido de pertenencia al territorio” (Entrevista a Jimmy Fernando Torres, enero de 2018). Muestra de esta reconfiguración en el sentido de apropiación del territorio se refleja en el testimonio siguiente: “un señor que tenía cinco hectáreas y dejó una de conservación porque allí fue donde encontró el armadillo, el borugo o el tigrillo y entonces se emociona y dice: yo tengo un tigrillo allí, y empieza a cuidarlo y a cuidar ese pedazo de terreno porque allí fue donde lo encontró” (Entrevista a Nodier Vivas Zamora, enero de 2018).

Al fortaleciendo del reconocimiento, la pertinencia y la apropiación activa del territorio como espacio vital, transformación de la que sobrevino la convicción que la actividad minera ocasionaría una reconfiguración territorial que afectaría la biodiversidad y las fuentes hídricas de la zona, aspecto del que se derivaría la producción de territorialidades alternativas, se suma la reconstrucción de la memoria del territorio. Es decir, la construcción de una historia común de arraigo a un espacio en el que los habitantes han vivido y con el que han establecido una relación mediante la producción de productos agrícolas.

Ejemplo de lo anterior es la recuperación y aprendizaje de una memoria biocultural relacionada con la elaboración de alimentos tradicionales como el natilla o los buñuelos fabricados con maíz cocinado con ceniza en ámbitos familiares locales. Costumbre que se ha perdido debido a que ambos productos son fabricados con mezclas listas elaboradas con maíz transgénico por parte de industrias alimenticias nacionales e internacionales. Entender los efectos que tiene la ingesta de estos productos para la nutrición y la salud humana. A juicio de una habitante del lugar, “recuperar esas costumbres ancestrales tiene mucha importancia a nivel de la biodiversidad cultural. Sentarse alrededor de una hornilla de leña a echar historias cuando se asan las arepas todo eso lo hacemos acá” (Entrevista a Nodier vivas Zamora, enero de 2018).

Como parte de esta misma iniciativa, los integrantes de la Fundación Muisca Somos Tierra están reconstruyendo la historia de la región desde antes que fuera colonizada por los españoles. Investigación que comprende la reconstrucción del proceso de poblamiento por parte de antioqueños y boyacenses desde las décadas finales del siglo XIX. Saber si los cronistas que transitaron por el lugar desde la época colonial, encontraron metales preciosos y cómo visualizaban el cañón de Anaime y demás lugares que hacen parte de la geografía local. Recuperación de la memoria que, a juicio de uno de los integrantes de la fundación

mencionada, requiere del testimonio de los ancianos

Porque son que los que tienen la historia de muy atrás y con ellos se está yendo mucha información. Antes de que se mueran es importante saber cómo ellos con sus ensayos y errores llegaron a este lugar. Extraer toda esa información ambiental es importante para saber cómo era y mirar como describían ellos el territorio. En las fotografías antiguas que tienen los viejos se observa que hace 50 o más años, no había ni un árbol. Mi papá decía que cuando tenía 10 años lo mandaban a traer leña y tenía que caminar tres horas a caballo para conseguirla para el fogón (Entrevista a Nodier Vivas Zamora).

Esta reconstrucción de la memoria territorial tiene como propósito hacer que las personas que residen en el lugar, comprendan que la configuración del sistema de policultivos y la biodiversidad que prevalecen en él, es resultado de un proceso estructural que ha evolucionado lentamente durante varias generaciones, resultado del que han recibido un influjo cultural. Contexto en el cual es necesario recuperar la memoria biocultural, y enseñarles a las nuevas generaciones y los que hoy lo habitan lo que se requiere hacia el futuro. De ahí que se entienda que lo que va a generar una empresa como AGA es una ruptura de algo que ya estaba tomado forma. “Siente unos pasos de animal grande y se pregunta ¿cómo vamos a evitar esta tragedia a nivel social y cultural que nos está transformando?” Es lo que se interrogan muchas de las personas oriundas del lugar (Entrevista Nodier Vivas Zamora, enero de 2018).

En suma, las transformaciones que han aportado los referentes desde los cuales sus integrantes y simpatizantes han reconfigurado su identidad personal y colectiva con el territorio, están relacionados con el desarrollo en la comunidad local de vínculos que han fortaleciendo el reconocimiento, la pertinencia y apropiación activa del territorio como un espacio vital. Dinámica que se ha derivado de la comprensión que la actividad minera ocasionaría un impacto desmedido sobre las condiciones socioproductivas tradicionales relacionadas con la actividad agrícola. Saberes y prácticas que han intervenido en emergencias territoriales alternativas enfocadas a la reconstrucción de la memoria del territorio, resignificación del presente y proyección de futuro. Transformaciones subjetivas que han contribuido a garantizar la cohesión y sentido de las acciones colectivas, tema que se abordará en capítulo siguiente.

CAPÍTULO 7. COHESION Y SENTIDO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS

El anuncio al país en diciembre del año 2007 de la existencia de la mina de oro La Colosa en Cajamarca Tolima, desató en el ámbito local la emergencia de una singularidad de nucleamientos colectivos de resistencia, que se oponen a su explotación por los efectos que acarrearía a la biodiversidad, las fuentes hídricas y la actividad agrícola que se desarrolla en el territorio.

Esta articulación de voluntades e intereses entre grupos y organizaciones ha permitido a los sujetos colectivos impulsar estrategias comunitarias con el fin promover acciones políticas, culturales y educativas que fortalezcan el tejido social y potencien el agenciamiento de acciones colectivas contra la actividad minera. A juicio de Torres (2007:93) “Las organizaciones son espacios de cristalización e institucionalización de formas de solidaridad social presentes en la cotidianidad popular, son nudos del tejido social popular, desde los cuales los pobladores alcanzan un nivel de actores colectivos y capacidad de ser reconocidos y de negociar con otros actores urbanos”.

Además del fortalecimiento del Tejido social, El Repertorio de Acciones y Prácticas Educativas (RAPE), realizadas por los nucleamientos colectivos (ver capítulo 5), las acciones educativas que implementan las organizaciones sociales, han fortalecido la identidad de los lugareños con el territorio, facilitado la movilización social, y ayudado a ampliar la lectura que hacen los habitantes del lugar acerca de los impactos ambientales y sociales catastróficos que ocasionará la explotación de la mina La Colosa, y por tanto de sus posibles soluciones.

En efecto, en contraposición al discurso oficial, para el que las riquezas se hallan en el subsuelo, para los integrantes de los procesos colectivos, las alternativas se encuentran en las fuentes hídricas, la biodiversidad, el paisaje, la agroalimentación y la cultura del territorio. “Defender esta posición implica aprender a pensar por cuenta propia, construir con los demás, actuar de manera colectiva y conjunta. Es el reto para que nuestros hijos y nietos tengan derecho a un ambiente sano y un mundo con dignidad” (Entrevista a Renzo García, mayo del 2017).

Desde esta perspectiva, se podría afirmar que en esta campaña, conocida popularmente como despensa agrícola de Colombia, a raíz de la lucha contra el extractivismo aurífero se han venido tejiendo entre los habitantes lazos de solidaridad, sentido de pertenencia y proyectos de futuro articulados a la defensa del territorio. Cambios que podrían catalogarse como propios de una “comunidad de lugar” (Tonnie, 1979: 39) asimilables a una “comunidad de vida”, en la que las personas que hacen parte de los procesos organizativos se auto educan con el fin de “formar los sujetos colectivos de los cambios” (Zibechi, 2017:

53) requeridos para la defensa permanente del lugar que habitan. Transformaciones que atañen también a una “comunidad de vecindad”, debido a que las vivencias que comparten los habitantes dentro de ámbito local, “favorece la mayor densidad subjetiva de las relaciones, propiciando actitudes y acciones de cooperación, ayuda y solidaridad. Lo cual no significa que en todo espacio local surjan automáticamente comunidades o se les pueda equiparar como tales” (Torres, 2103: 205-206). Acorde con esto, se asume lo comunitario como una

estrategia o acción política, social, cultural y educativa que promueve vínculos, subjetividades y valores comunitarios; proceso de creación y fortalecimiento permanente del tejido social y potenciación de la capacidad de agencia de sujetos personales y colectivos sociales unidos entre sí en torno a diferentes factores y circunstancias (territoriales, culturales, generacionales, emocionales, creencias y visiones de futuro compartidas), en permanente nacimiento y formación (Torres, 2013: 220).

Lo comunitario como clave analítica implica incorporar al análisis de proyectos de esta naturaleza: la producción de narrativas y símbolos identitarios, encuentros conmemorativos y celebrativos, el fomento de redes y prácticas vinculantes, la reflexión conjunta sobre lo que significa ser y estar en común y sobre los actores que atentan contra los vínculos y valores colectivos, así como la formación en torno a las tradiciones, valores e ideales comunitarios (Torres, 2013: 220).

En función de lo anterior, y teniendo en cuenta que uno de los objetivos de esta investigación es explicar cómo las transformaciones subjetivas han contribuido a afianzar la cohesión y sentido de las acciones colectivas contra el emprendimiento minero, se ha estructurado el capítulo de la siguiente manera. En primer lugar, se analizarán los vínculos comunitarios de las organizaciones sociales antimineras con la población donde interactúan. En segundo lugar, se abordará la capacidad que estas tienen para establecer articulaciones con otras organizaciones o movimientos. Finalmente se explica la capacidad que tienen los sujetos colectivos para generar u obtener recursos para sostener la lucha contra el proyecto extractivo.

7.1 Las organizaciones sociales antimineras y los vínculos con la población de Cajamarca

Generalmente la comunidad hace referencia a un grupo social de carácter plural, asentado en un territorio urbano o rural en el que se establecen relaciones interpersonales estables y significativas entre las gentes que lo habitan. Vida en común en el que coexisten también intereses diferentes y contrapuestos, y que se ve alterada por problemas coyunturales y condiciones adversas y cuya solución “activa valores solidarios, procesos de ayuda mutua”, ideales, “visiones compartidas de futuro” y la emergencia de organizaciones sociales

(Torres, 2013: 165) que se auto educan o educan a sus integrantes con el objetivo que se constituyan en sujetos de cambio o resistencia.

De acuerdo a esto, se puede afirmar que lo que más influyó en la generación de vínculos entre los nucleamientos colectivos y los pobladores de Cajamarca fueron las prácticas educativas formales e informales enfocadas a que sus integrantes y simpatizantes comprendieran los riesgos que ocasionaría la actividad minera en el recurso hídrico, base fundamental de las labores agrícolas que se desarrollan en el territorio.

Esto permitió la cualificación del movimiento ambiental y campesino en el municipio. “Cada organización iba formando a sus líderes, a sus personas y esto precisamente iba generando un fortalecimiento de la comunidad” (Entrevista a Julio Roberto Vargas, enero de 2018).

Empezamos a documentarnos con biólogos de la Universidad del Tolima como Renzo García. Él fue el que más influyó en la generación de conciencia. Empezamos a mostrar lo que es una minería a cielo abierto a través de videos que proyectábamos en el parque de Anaimé. Cuando la gente veía la explotación tan impresionante. Y esas cavernas de 800 metros y cómo se iba rompiendo la montaña, decíamos entonces: esto es, pero imaginémonos estas montañas rompiéndose y volviéndose nada. Esa dinámica empezó a desarrollar la pertenencia, unir a la comunidad y empezar a mirar con cariño a todos aquellos que participaban en las reuniones y las luchas (Entrevista a Olga Cecilia Castro, enero de 2018).

Las narrativas relacionadas con los peligros al que se vería sometido el territorio por la actividad minera, medió para que las bases sociales se vincularan a los nucleamientos colectivos: primero, reafirmó el sentido de pertenencia a un lugar que abastece de agua y productos agrícolas a gran parte del centro del departamento del Tolima. Segundo, avivó la idea que todos tenían que defenderlo por medio de la lucha. En otras palabras, la constitución de vínculos, valores y visiones comunes de futuro medió en la afirmación de una identidad con el territorio y el compromiso para defenderlo. Ámbito o lugar que simboliza para los que lo habitan el sostén de materialidad y vida social. Así lo explica un integrante de la organización Unión Campesina.

desde el año 2007 empezaron a surgir una serie de organizaciones sociales de base con ciertas identidades dependiendo del sector en el que fueran surgiendo. Aparecieron organizaciones como: Eco tierra, Conciencia Campesina, o Cosajuca que tenían una relación estrecha con cada sector en el que fueran a aparecer. Había organizaciones con un fuerte componente de identidad campesina, juveniles, de mujeres, etc. Cada una con una identidad y una base en la comunidad, con un acompañamiento de diferentes sectores o veredas, o en el casco urbano. Todas tenían en común luchar por la defensa

del agua, la vida y el territorio. Eso no se ha acabado y hay que seguirlo fortaleciendo para que la comunidad se siga apropiando de un territorio en el que ha trascendido nuestra vida y con el que hemos tejido lazos de identidad (Entrevista a Julio Roberto Vargas, enero de 2018).

“La organización comunitaria es con los que quieren y sientan esa necesidad y tengan sentido de pertenencia, algo en común y una capacidad de interlocutar con la comunidad. La comunidad son las personas que forman parte del territorio” (Aguilera, González & Torres, 2015: 104). En otros términos, una organización comunitaria es una asociación heterogénea de individuos que se unen para hallar puntos de encuentro que les permita luchar por un objetivo común.

Estamos en una región muy privilegiada en riquezas naturales y es una obligación nuestra defenderla de la minería y conservarla para nosotros y las futuras generaciones. El agua que nace de Cajamarca, y la agricultura que aquí se produce le permite a gran parte de los colombianos asegurar la seguridad alimentaria. Miremos que la cuenca mayor del río Cuello que nace en Cajamarca baña gran parte del Tolima y surte de agua a los mayores arroceros del país. Es decir que si nosotros no cuidamos lo que tenemos, estamos afectando a buena parte de la sociedad colombiana. Creo que los cajamarcunos empezamos a darnos cuenta que pese a las diferencias e intereses contrapuestos que afloran entre los partidarios y opositores a la minería, todos tenemos una responsabilidad colectiva (Entrevista a Julio Roberto Vargas, enero de 2018).

En este sentido, se puede afirmar que lo comunitario en el territorio cajamarcuno está asociado a la conformación de colectivos sociales que trascienden los objetivos y las estrategias de luchas interpartidistas tradicionales, que enfocan su accionar desde una perspectiva ambiental. Lucha que se constituye en una forma emergente de organización popular y ciudadana para que la exigencia de sus derechos encuentre cauces más adecuados, o que la expresión de sus demandas se constituya en una nueva estrategia de cambio social (Leff, 1986). Los testimonios siguientes confirman este argumento:

Yo creo que este movimiento socio ambiental que surgió en Cajamarca ha roto los paradigmas de la política tradicional: que los de derecha, que los de izquierda, los blancos, los negros. Ha logrado que la gente se junte independientemente de sus visiones políticas. Este movimiento por la defensa del territorio ha logrado que la gente se una, lo cual ha sido un ejemplo para el resto del país. Al Comité Ambiental llega todo el mundo, no importan las diferencias, todos somos campesinos, trabajadores, honestos. La gente ahora está pensando en cómo cultivamos el territorio, cómo lo fortalecemos,

indistintamente de su militancia política, cómo defendemos el medio ambiente. Hemos entendido que la pelea no es contra una empresa sino contra un modelo extractivo que nos quieren imponer aquí en el país. Entonces es necesario juntarnos con otras organizaciones y otros movimientos para que entre todos podamos hacer frente a ese modelo. Estamos convencidos de que el territorio es para la agricultura y la conservación (Entrevista a Jefferson Rojas, enero de 2108).

La gente ya se empieza a preocupar -no como quisiéramos- porque su lucha ambiental contra una minería a gran escala sea coherente con la práctica de su cotidianidad, porque su ejercicio o su labor de agricultura sean amigables con el medio ambiente. Que los desechos que se producen en una unidad de vivienda sean manejados de manera adecuada. Esa lucha permitió construir o descubrir nuestra identidad, yo creo que le ha aportado unos elementos identitarios a la comunidad cajamarquina. Hoy Cajamarca se puede decir que es el eje de la lucha ambiental del Tolima y Colombia. Es un orgullo de lo que significa ser campesinos agricultores. Elementos como la producción agrícola, la defensa del territorio y el agua nos han acercado como comunidad (Entrevista a Camilo Padilla, enero de 2018).

Con respecto a lo comunitario es necesario destacar los fuertes nexos que establecen los nucleamientos colectivos con los habitantes del lugar, comprometidos con las acciones colectivas que se programan. Lo que contribuye al reconocimiento del trabajo asociativo, y a que los lugareños participen en las actividades proyectadas, es el mantenimiento de lazos de confianza y relaciones horizontales en la toma de decisiones. Dos integrantes del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), manifiestan lo siguiente al respecto:

Más que cohesionar, lo que hemos hecho con la comunidad es crear la posibilidad de encontrarnos, o de tener una posición diferente a lo que se pueda plantear, o lo que se pueda hacer. Ese encuentro con la gente ha permitido que exista un acercamiento para compartir experiencias. El resto, lo que salga de ahí es ganancia (Entrevista a Robinson Mejía, enero de 2018).

Lo que hemos hecho con la gente es algo recíproco. Poder llegar a reflexiones colectivas, no sólo de las prácticas de los campesinos sino de los que no vivimos en el campo. Es un trabajo horizontal.. Todo eso lo que ha permitido es hacer acercamientos y lazos de confianza para que en un futuro las acciones que nosotros realicemos incentiven la participación. Escuchar propuestas que tienen que salir de la gente. Más allá de solucionar es mirar cómo lo hacemos entre todos. Nosotros somos una organización y no

tenemos la capacidad o la función de solucionarle la vida a la gente, como decirle “hagamos esto para dejar de contaminar”. Son propuestas que hemos conocido, pero hacerlas reales es posible sólo si nosotros somos el Estado o el Gobierno, porque aparte de tiempos y recursos humanos, también se necesita recursos económicos para lograrlos. El acercamiento que hemos tenido como jóvenes con la comunidad, ha facilitado que la gente pueda entender la importancia de participar en muchos escenarios... Decirles, mire lo que está pasando y cómo afecta o repercute en la vida de nosotros. Es compartir e invitar a la gente a participar en los espacios que promovemos o que promueven otras organizaciones, otros movimientos, para que puedan aprender otras cosas. Lo que nosotros les recalcamos siempre es: “no nos crean cuando les decimos algo, son ustedes quienes deben decir si es cierto, y desvirtuar o fortalecer lo que estamos diciendo”. Nosotros no compartimos cosas para que la gente crea, sino para que entren en discusión y podamos construir. Eso es lo que tratamos de promover cuando compartimos un tipo de conocimiento con la gente (Entrevista a Camila Méndez, enero de 2018).

Estas acciones proyectadas en perspectiva comunitaria además de influir en el proceso formativo, han permitido articular esfuerzos y vínculos interpersonales y sociales enfocados a defender el agua, la vida y el territorio. A criterio de Torres (2013: 221) “sin movilización, actividades conjuntas permanentes y procesos organizativos es muy difícil que el sentido de comunidad... pueda mantenerse”. En coherencia con esto, un integrante de la organización Unión Campesina dice lo siguiente:

Cuando realizamos la primera Marcha Carnaval hace como seis años, salimos de Anaime por ahí 20 personas. La gente se fue uniendo y a Cajamarca llegamos como 200. Últimamente nos hemos reunido hasta 1500 o más. Ayer, (diciembre 10 día del lanzamiento de la campaña por la consulta popular por el No a la minería en el territorio) participamos como 2000. A la Marcha Carnaval que se realizó en Ibagué en junio del año 2016 asistieron cerca a las 120 mil personas” (Entrevista a Carlos Gámez, diciembre de 2016).

Otro habitante del lugar e integrante de la organización Conciencia Campesina, le atribuye el crecimiento del movimiento social a las charlas puerta a puerta, las mingas, conferencias y diplomados que han programado las organizaciones sociales (Entrevista a Jimy Fernando Torres, diciembre de 2017). En este mismo sentido se pronuncia Héctor Elías Báez, integrante de la misma organización. “Creo que casi el 99 por ciento de la población cajamarcuna está en contra de la minería gracias a la labor educativa y formativa que hacen las organizaciones sociales. Son los años haciendo eso. No solo el trabajo puerta a puerta

sino también lo que se hace con los niños” (Entrevista a Héctor Elías Báez, diciembre de 2017).

En términos similares se pronuncia Érica Alejandra Ospina integrante del colectivo socioambiental Cosajuca. Para ella, el trabajo comunitario y las prácticas educativas (mediante las que les informaron a los campesinos lo que es una cuenca hidrográfica, y lo implica la minería a cielo abierto para las labores agrícolas que se desarrollan en el territorio), además de mediar en la cohesión de la población y el fortalecimiento de las acciones colectivas, le ha permitido a las colectividades rurales y urbanas organizarse para luchar. “Han servido para generar un proceso educativo y formativo debido a que siguen formándose porque ellos mismos han seguido el proceso” (Entrevista a Érica Alejandra Ospina, diciembre de 2016).

Sobre el papel de la educación en perspectiva comunitaria, Torres (2013) indica que en casi todos los procesos de intervención social que se realizan en comunidades tradicionales, siempre surge la necesidad de generar componentes formativos, orientados a “fortalecer el sentido de pertenencia como comunidad, al fortalecimiento de las relaciones, las subjetividades y valores comunitarios y a la reflexión crítica sobre su relevancia y pertinencia como ideal de vida colectiva, así como frente a sus contradicciones prácticas y teóricas”(p. 222).

En relación con el trabajo comunitario, se puede afirmar también que este no se puede desarrollar a durante largo tiempo, si los integrantes no le dedican energía y recursos a la gestión de proyectos compartidos. Articulación de voluntades que a juicio de Torres (2013), permiten cuestionar intereses particulares que “atentan contra la formación de lazos y actitudes de solidaridad, fraternidad y ayuda mutua” a la par que se impulsa y valora “lo comunitario como ideal de vida social deseable y viable” (p. 221). Con respecto a esto, una integrante de la organización Unión Campesina dice lo siguiente:

El municipio se durmió mucho para sacar a esa gente de la AGA de aquí. Pero esa fue una tarea muy buena porque en la medida que uno iba trabajando con las personas, ellos iban entendiendo que la razón la teníamos nosotros. Podemos ver que la quebrada Chorros Blancos, 15 años atrás cargaba muchísima agua. Hoy en día uno mira esa quebrada y ya no lleva ni la mitad que tenía, pero la gente a partir del trabajo comunitario aprendió a cuidarla. Sobre la quebrada San Antonio, que se secó totalmente la gente se pregunta: ¿Cómo, si era una cañada que a cada rato tumbaba la vía de Toche? Eso hace que las personas recapaciten. La idea no es que tengamos el agua al cuello para decir ¡ayúdenme! No, la idea es ver el problema antes de que sea más grande, tomar soluciones antes de decir qué pasó acá. Es como saber que hicimos la casa en un voladero, en un barranco y eso se va a derrumbar en

cualquier momento. Tomemos soluciones. Hagámosle un muro de contención bien bueno para que no se me vaya. Es la misma cuestión: debemos mantener nuestro territorio unido, la gente unida, no solo en política, sino también en cómo hacer un proyecto, cómo trabajar en conjunto, cómo trabajar en comunidad. Pero a veces uno le habla a las personas y dicen ¡pero mire que eso no se puede! (Entrevista a Marlene Mojica, enero de 2018).

En resumen, este sentido territorial de lo comunitario impulsado por las acciones de liderazgo de los procesos organizativos locales, y reforzado con las prácticas educativas y las transformaciones subjetivas (explicadas en el capítulo anterior), ha contribuido a afianzar la cohesión de las acciones colectivas contra el emprendimiento minero que adelanta la AGA en el territorio. Gracias a las experiencias aprendidas, los integrantes de la comunidad, vinculados a organizaciones sociales han establecido vínculos con otros nucleamientos colectivos del país que adelantan acciones de resistencia similares contra otros proyectos extractivos de oro, carbón o petróleo, con el propósito de ofrecer los conocimientos que han adquirido. Aspectos que analizaremos enseguida.

7.2 Articulación con otras organizaciones y movimientos

El sentido territorial de esta lucha del pueblo cajamarcuno ha sido fuente de inspiración y aprendizaje para colectivos sociales que han surgido en lugares como: Calarcá, Salento, Buenavista, Córdoba, Pijao y Génova en el departamento del Quindío; y Gramalote, Támesis y Urrao en Antioquia. Municipalidades donde la AGA realiza actividades de exploración o explotación mineras de manera directa. O Dosquebradas y Quinchía en el departamento de Risaralda, donde lo hace indirectamente a través de la empresa Miraflores Compañía Minera SAS, y a la que se le responsabiliza del desplazamiento de más de 500 familias indígenas pertenecientes a 22 comunidades como la Embera - Chami y Embera-Carambá debido a la explotación del oro en el mismo lugar donde viven las personas⁶⁶.

En esta franja de terreno de aproximadamente 300 kms, en el que hacen presencia grupos guerrilleros y paramilitares y que se extiende desde la misma jurisdicción de Cajamarca en el departamento del Tolima hasta el sur de Antioquia (entre las cordilleras central y occidental en su flanco oriental, y que hacen parte de una zona geológica de orden aurífera denominada “Cinturón de Oro Colombiano”), las empresas mineras han realizado estrategias comunes de adecuación territorial como dividir a las comunidades, sacar a la fuerza a las población de los territorios, cooptar líderes sociales, financiar actividades culturales y deportivas, hacer charlas en las escuelas, aliarse con las autoridades municipales, etc. A estas maniobras han respondido las comunidades conformando procesos organizativos populares que se han articulado entre sí y establecido alianzas con

⁶⁶. <http://www.contagioradio.com/500-familias-serian-desplazadas-por-filial-de-la-anglogold-ashanti-en-miraflores-risaralda-articulo-46034/>. Fecha de acceso, febrero 22 del 2018.

otras organizaciones y movimientos. Nucleamientos colectivos que están convencidos que la explotación aurífera producirá el agotamiento de las fuentes hídricas, sin lo cual no habrá más vida para las personas y la naturaleza, y que reivindican lo comunitario como un modo de vida, un valor a defender y una política a impulsar.

A este proceso de reordenación territorial por parte de las empresas mineras, fundamentado en una lógica mercantilista de los recursos del subsuelo, y que excluye de los beneficios a la mayoría de la población, las comunidades, han respondido con formas de acción colectiva que “religan a diferentes actores sociales excluidos, que con sus propias prácticas ensayan la constitución de nuevos modos de vivir en sociedad, por fuera de los límites tradicionales fijados por la institucionalidad del Estado Nación” (Wahren, 2102: 11)

En efecto, con el objetivo de contextualizar la realidad de cada uno de estos territorios, definir acciones de resistencia de hecho y de derecho para la defensa de los mismos, y demostrar al Estado que las organizaciones sociales hacen presencia en ellos, se reunieron en Ibagué, delegados de la Red de Comités Ambientales del Tolima (RCAT), el Grupo Semillas, Planeta Paz, Mesa Ciudadana del Quindío, Fundación Bahareque, entre otras. De la congregación celebrada el 12 de octubre del año 2016, surgió la organización multisectorial denominada *Tejido Territorial por la Defensa de la Vida* con los siguientes objetivos: fortalecer las articulaciones en defensa del agua, la vida y el territorio; descarrilar la locomotora minero energética⁶⁷ y construir propuestas para la transición energética; participar, promover y exigir en todos los ámbitos sociales y políticos, espacios legítimos de construcción de proyectos de vida que afiancen los derechos de la gente y la naturaleza, y recuperen la confianza, y la memoria ambiental de los territorios; fortalecer estrategias de protección, cuidado y seguridad de los ambientalistas y defensores del territorio y el agua; participar de manera activa, solidaria y alegre en las iniciativas de defensa territorial que promuevan los diferentes organizaciones sociales ambientales de defensa territorial⁶⁸.

Los integrantes de esta red de alianzas de organizaciones y movimientos sociales participaron posteriormente en campañas puerta a puerta en los barrios de la localidad de Cajamarca, informando a los pobladores sobre los efectos que produce la minería en las fuentes hídricas, la biodiversidad y las actividades agrícolas que se realizan en el territorio. Campaña informativa que tenía como propósito, estimular a los lugareños a participar de la

⁶⁷. La Locomotora minero energética, según el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), se refiere a promover y facilitar la actividad minera y sostenible de recursos naturales como carbón, petróleo, oro, etc., con el fin de impulsar el crecimiento económico del país. Actividad para la cual se busca garantizar la cobertura en servicios eléctricos y de gas natural en las poblaciones donde esta se realiza. Garantizando la atracción de la inversión privada en el sector, sin afectar las comunidades que se asientan en los territorios (Ministerio de Minas y Energía – UPME, Colombia País Minero. Plan Nacional para el desarrollo minero visión al año 2019. Bogotá, diciembre de 2006).

⁶⁸. Ver: <https://pt-br.facebook.com/KAKATAIMA.0/>.

consulta popular en la que se les preguntaría si estaban o no de acuerdo con que en el municipio se ejecutaran proyectos y actividades mineras.

Posterior a la realización de la consulta (celebrada el 26 de marzo del año 2017, y en la que 6241 personas, equivalentes al 97,9 ciento de los votantes, dijeron No a la actividad minera en este territorio tolimense), sus organizadores fueron invitados a realizar ejercicios informativos en municipios donde se realizarían iniciativas similares como: Pijao, Córdoba y Salento en el Quindío; Cumaral en el Meta; San Martín en el sur del César; y el Paujil en Caquetá. Un integrante de la organización Conciencia Campesina, y un concejal del municipio de Cajamarca dicen lo siguiente:

La consulta popular de Cajamarca tuvo una resonancia mundial. Los miembros de las organizaciones de acá fueron invitados a todos los pueblos donde se han adelantado consultas populares. Yo estuve en el proceso de consulta en Pijao Quindío. Allá nos recibieron como unos héroes. Somos un referente nacional. Y dándole honor a ese nombre, es que hemos venido trabajando y lo seguiremos haciendo... Como Conciencia Campesina tenemos relaciones con otros movimientos del país. Hemos estado articulando, tejiendo lazos de amistad y de confianza por la defensa del territorio. El año pasado tuve la oportunidad de asistir a varios resguardos indígenas del Cauca, Caldas, Antioquia, Risaralda. Y aunque la normatividad para ellos es muy diferente, ellos también tienen la misma amenaza del extractivismo. Llegar allá a esos lugares recónditos, a aprender de la cultura de ellos, y a que ellos aprendan de la nuestra es algo que no tiene precio (Entrevista a Leonardo Rodríguez, enero de 2018).

El primer municipio que logró hacer una consulta popular fue Piedras en el año 2013. Pero realmente el que desencadenó un efecto domino fue Cajamarca. Fue el más representativo porque la pelea era directamente contra la presencia de la AGA en el territorio. Lograr desafiar ese monstruo fue mucho más representativo. Generó un impacto en todos los municipios. Muchos compañeros de acá han ido a apoyar otros municipios donde también han hecho consultas populares. Días previos a la consulta, acá vino gente de todo lado. La solidaridad fue importantísima. Vino gente de los Llanos, de todo el Tolima, del Quindío, Caquetá, de muchas partes. Los académicos y científicos más representativos en la parte ambiental estuvieron ese día. A raíz de la solidaridad que se presentó ese día, la gente siente el deber moral y político de retribuir en eso y decirle a la gente que, si nosotros fuimos capaces, cualquier otro municipio puede hacer lo mismo en ese tema (Entrevista a Camilo Padilla, enero de 2018).

Vínculos, alianzas y articulaciones se han establecido también entre los Comités Ambientales (CA) que componen la RCAT⁶⁹, los cuales coordinan acciones colectivas contra el extractivismo así como campañas de formación por la defensa del agua y la vida en sus territorios. Resistencia contra la minería que se manifiesta en plantones, taponamientos y boicots a eventos programados por la AGA. Con la formación se pretende, “aumentar la capacidad de incidencia con argumentos de peso científico, técnico, económico, social, cultural y espiritual”, que permitan generar alternativas a la misma como: el cambio de hábitos alimenticios con productos tóxicos por orgánicos, o la defensa de la soberanía alimentaria (Quintana, 2016).

A la materialización y promoción de estas estrategias de acción política contra la minería a gran escala, y la influencia de las mismas para que se configure en el territorio una red comunitaria, han aportado Organizaciones No Gubernamentales como: De Justicia, Semillas de Agua, Pax Christi Internacional, La Red Tejiendo Paramos, ProAves, la iglesia católica y entidades oficiales como la Corporación Autónoma Regional del Tolima y la UT, entre otras. Entidades todas preocupadas por los conflictos socioambientales que amenazan la vida y la biodiversidad, y que buscan en los lugares donde se ejecutan actividades relacionadas con el extractivismo, espacios de articulación que potencien y unifiquen la lucha. Sobre la participación de la UT, en estos procesos formativos, un docente de este centro educativo dice al respecto:

Los procesos educativos que se han hecho en Cajamarca con la ayuda de la UT han contribuido a fortalecer la resistencia. La UT se ha convertido en la retaguardia de la resistencia en este municipio. Muchos de los líderes a nivel juvenil campesino y urbano, son egresados de la UT, o han hecho parte de los procesos de cualificación que se han orientado desde aquí. La Universidad ha jugado un papel importantísimo en la cualificación de los líderes naturales de Cajamarca que le han hecho frente a la implantación del proyecto minero. El diplomado es el que más ha contribuido a generar conciencia y procesos multiplicadores (Entrevista a Mario Vera, diciembre de 2016).

Todas estas entidades se han constituido en aliados indispensables. Su trabajo ha contribuido a que las comunidades conozcan mecanismos legales que les permita decidir soberanamente temas trascendentales para los territorios; encontrar apoyo en sectores sociales del ámbito nacional e internacional, así como el fortalecimiento de prácticas

⁶⁹. La distribución de estos CA es la siguiente: Zona Norte (6): CA del Líbano; CA de Santa Isabel; CA de Armero Guayabal; CA de Palocabildo; San Jerónimo, Casabianca y Falán; CA de Murillo; y CA de Venadillo. Zona Centro (5): CA de Ibagué; CA de Espinal; CA de Rovira; CA de Doima, Piedras y CA de Cajamarca. Zona Sur (2): CA Pro Defensa de Río Saldaña (Municipios de Saldaña y Purificación) y CA del Sur (Municipios de Natagaima, Coyaima y Ataco) (Pax; 2015: 18)

educativas que potencien el esfuerzo y el compromiso para defender los territorios. Ejercicio relacionado con la *organización* o búsqueda de aliados estratégicos; la *formación* o la divulgación de conocimientos mediante el diálogo horizontal de saberes; la *movilización* o visibilización de las problemáticas y demandas sociales; y la *comunicación* o circulación y transmisión de la información para provocar el interés sobre la problemática social (Pax, 2015). Los testimonios siguientes así lo confirman:

A las charlas del diplomado vienen geólogos, biólogos, abogados e ingenieros de minas que han hecho estudios ambientales para estas compañías como El doctor Rodrigo Negrete, Julio Fierro y otros personajes que han estado en el sector minero y petrolero. Gracias a ellos he podido saber cuáles son los problemas que ocasiona el sector minero y petrolero en el país (Entrevista a Juan Carlos Parra, octubre de 2016).

Acá en Cajamarca, nosotros tuvimos un acompañamiento muy importante de Pax Christi. Se ha trabajado también con organizaciones como Greenpeace; De Justicia como de justicia y Semillas de agua. Existe una relación muy estrecha entre el movimiento ambiental y campesino del municipio de Cajamarca con otras organizaciones o movimientos a nivel nacional e internacional. Todas son un apoyo cualitativo para unir esfuerzos con el fin de fortalecer la lucha buscar contactos, realizar cursos, y diseñar estrategias de resistencia. Por ejemplo, el movimiento ambiental de Cajamarca se valió mucho de la estrategia jurídica de De Justicia para la realización de la consulta popular. Esa fue una estrategia jurídica de sus abogados (Entrevista a Julio Roberto Vargas, enero de 2018).

Cada una de las organizaciones tiene relación con diferentes organizaciones, que se preocupan también por el tema del medio ambiente y la lucha contra la gran minería...Hay una posibilidad de encontrarse con otros sectores. Las iglesias cristianas también han sido muy importantes. Le han dado mucha legitimidad a la lucha. Cajamarca es un pueblo muy conservador, y la palabra de los líderes religiosos tiene mucha importancia. Más legitimidad que las de los políticos de izquierda como somos nosotros. El cura de Anaime y las hermanas dominicas de Santa Catalina se aprovecharon de la encíclica papal “Laudato si mi Signore” (Alabado sea mi Señor) para darle un peso importante a la pelea. La defensa del medio ambiente desde un punto de vista religioso, de la defensa de la creación tiene mucha importancia en este tema (Entrevista a Camilo Padilla, enero de 2018).

En suma, la capacidad de las organizaciones sociales para establecer articulaciones con entidades públicas o privadas, que medien en el desarrollo de prácticas educativas, y a su

vez aporten a la reivindicación de vínculos, transformaciones subjetivas e ideales comunitarios, han sido de gran importancia para la supervivencia de este proyecto de resistencia autogestivo. A partir de los contactos con otras organizaciones del país defensoras de sus territorios, ONGs, instituciones universitarias, intelectuales y otros sectores sociales que han sumado experiencias, conocimientos y saberes, es que se ha podido mantener la resistencia contra el proyecto extractivo.

La habilidad o el alcance de las organizaciones antimineras de Cajamarca para generar recursos económicos que permitan sostener la resistencia a explotación minera, por los estragos que esta actividad ocasionará a las fuentes hídricas, la biodiversidad y la vida en el territorio, será el tema que se explicará le próximo apartado.

7.3 La obtención de recursos para el sostenimiento de la lucha

El autofinanciamiento a través de actividades y aportes de los integrantes y simpatizantes de los procesos colectivos ha sido la fuente principal para subvencionar y costear los gastos del Repertorio de Acciones y Prácticas Educativas (RAPE) que estas programan para hacerle frente al proyecto aurífero.

Circunstancia que se constituye en un ejercicio de voluntariado permanente, debido a que ninguna de las personas que conforman el movimiento social recibe estipendios por la labor que hacen. Pero que estimula a las los habitantes del lugar a que se organicen y desarrollen vínculos y lazos comunitarios, a fin de que las realizaciones de acciones colectivas contra la explotación minera, no aparezcan (a los ojos de la empresa minera y el Gobierno) como focos aislados de resistencia. A juicio de uno de los integrantes del Comité Ambiental, “con eso hemos logrado que la gente se comprometa día a día y que entienda que el poco tiempo que le dedica al proyecto debe hacerlo con la mayor convicción, cariño y preparación” (Entrevista a Julián Viñas, octubre de 2016).

Los movimientos sociales se sostienen dentro de la economía solidaria. Conseguir recursos no es nada fácil, es bastante complejo; sin embargo, digamos que, la alianza entre grupos, ha fortalecido al movimiento ambiental en Cajamarca; los recursos siempre han sido mínimos. El movimiento ambiental se sostiene con recursos de las mismas personas y de algún otro movimiento. Los movimientos sociales no son movimiento económico, por lo tanto, no tienen una solvencia que digan que con eso se hizo todo (Entrevista a Julio Roberto Vargas, enero de 2018).

La habilidad o estrategia para la obtención de recursos que hagan viable la realización de una acción colectiva se evidenció el 10 de diciembre del año 2016. Día en el que se realizó

en la localidad de Cajamarca el “Festival Campesino por la Consulta Popular”, y con la que se iniciaba la campaña por el voto del No a la minería en el territorio, y que culminaría el 26 de marzo del año siguiente. Para la financiación de la festividad, campesinos y habitantes del casco urbano que integran el Comité Ambiental de Cajamarca y Anaime, colaboraron con el préstamo de automotores para transportar de las zonas rurales a los asistentes al evento; aportaron tarimas para amenizar el mismo; y donaron bultos de arracacha, panela, canela, ollas, vasos y demás implementos para la fabricación de la chicha que sería vendida a los asistentes.

Colaboración similar ocurrió el día 26 de noviembre del año 2017. Fecha en el que se cumplían ocho meses del triunfo del No a la actividad minera en el territorio. Conmemoración que se celebró con la realización de un “Sancocho Comunitario”. Para la realización del evento, los campesinos pertenecientes a los procesos organizativos aportaron todos los ingredientes. Participaron cerca a las 2500 personas. Uno de los propósitos de la actividad era demostrarle al Gobierno Nacional que los ocupantes del territorio querían seguir siendo proveedores de alimentos agrícolas para todo el Tolima, y que la conciencia del buen vivir puede derrotar el afán de enriquecimiento de unos pocos.

Los destrozos a los que se verían sometida la biodiversidad y las fuentes hídricas, base fundamental de las actividades agrícolas que se realizan en el territorio, impulsó a los integrantes de los mismos nucleamientos colectivos a tramitar aportes de ONGs para sufragar gastos de viaje a territorios donde se adelantan actividades mineras a cielo abierto. En efecto, el viaje que efectuaron cinco líderes tolimeses a Yanacocha (Perú) en el año 2010 con el fin de observar directamente los destrozos que ocasiona en el territorio la explotación minera a tajo abierto fue financiado por la organización Pax Christi⁷⁰. Situación similar ocurrió con la organización Rosa Luxemburgo, quien patrocinó la tráida al departamento del Tolima de expertos internacionales en el mismo tema como: Alberto Acosta, María Stella Svampa, Joan Martínez Alier, Robert Moran, entre otros. “Esos gastos son como aportes que nos hacen estas organizaciones, cuestión que es muy positiva” (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

Estos procesos autogestivos, permitieron desplegar transformaciones en los modos de pensar de los integrantes y simpatizantes de los nucleamientos colectivos. “Creo que hemos logrado construir un escenario donde hay muchos amigos de la causa...Acá trabajamos con todo el mundo. Que la gente se unifique con el criterio de ayudar a defender el territorio, este planeta, y buscar alternativas a la explotación minera, no importa de donde venga.” (Entrevista a Renzo García, diciembre de 2016).

⁷⁰. Revista Ambiental 14 - 6. °C No 16 (2010). “Lideres Tolimeses conocieron la mina Yanacocha, en Perú. Aquí no queremos ese absurdo ambiental”. Febrero – Marzo.

Ya tengo planeado irme para Córdoba (Quindío) a hacer lo que hice en Pijao en el mismo departamento: trabajo pedagógico de apoyo a la consulta popular antiminera. Lo financiamos con nuestros propios recursos, o ayuda de organizaciones que nos colaboran. Esto lo hacemos por amor propio. Sacamos tiempo y plata de donde no hay. Es algo que nos motiva y nos mueve. Recorremos todas las fincas de las veredas. Alrededor de una fogata se tejen lazos e historias, se enseña el amor por el territorio y el agua. Algo que no tiene precio. Termina uno agotado pero satisfecho por haber hecho algo en pro de una vida digna (Entrevista a Leonardo Rodríguez, enero de 2018).

En suma, la autogestión ha permitido a los procesos organizativos de Cajamarca Tolima, financiar las actividades que realizan contra el extractivismo minero en su territorio, sin la aceptación de aportes de entidades oficiales. Si se toma como referencia el concepto de autonomía social, la que según Castoriadis, “no puede concebirse plenamente más que como una empresa colectiva” producto de la “tensión de la sociedad instituyente y de la sociedad instituida, de la historia hecha y de la historia que se hace” (2013: 170 y ss.), se puede decir que los Repertorios de Acción Colectivas y Prácticas Educativas (RAPE) y las posibilidades de autogestión para la financiación de las mismas han configurado en Cajamarca procesos de empoderamiento político subjetivo.

En otras palabras, la lucha por seguir siendo proveedores de alimentos agrícolas para todo el Tolima y la financiación por autogestión de las acciones de resistencia, ha permitido a los nucleamientos colectivos que se han conformado en este territorio contra la minería a gran escala, dinamizar procesos de empoderamiento político y subjetivo que han configurado profundos cambios en la vida de los habitantes. Estas transformaciones han estado impulsadas por prácticas educativas formales e informales, en las cuales se realizan reflexiones permanentes, y se despliegan acciones colectivas de hecho y derecho que impidan reinstalar la multinacional en un territorio del que ha sido desalojada por voluntad popular.

Un logro que en palabras de Tarrow (1997: 113) se puede explicar por “la formación de redes de vínculos entre grupos sociales y localidades diferentes e interdependientes”, creados a partir de documentos que circulan de manera impresa, así como por redes que se formaron con el propósito de informar sobre los efectos de la actividad minera en los territorios. Información que se complementa con la implementación coordinada de acciones colectivas y de prácticas educativas de orden informal y formal que median en la configuración de subjetividades políticas y transformaciones cognitivas, prácticas e identitarias, tal como se ha explicado a lo largo de esta investigación.

CONCLUSIONES

La exploración y explotación de bienes naturales con destino al mercado internacional, impulsado por los países latinoamericanos durante las últimas décadas, ha ocasionado destrozos a las fuentes hídricas, la biodiversidad, y el medio ambiente de los territorios en los que se han instalado. Estas consecuencias han posicionado el tema del extractivismo entre los más destacados de los estudios latinoamericanos.

En la medida en que fueron aumentando las tensiones sociales entre compañías mineras y el Estado, por un lado, y las comunidades por el otro, los episodios generados por el conflicto comenzaron a ser analizados desde perspectivas como: crisis civilizatoria, acumulación por desposesión, el ecologismo o ambientalismo popular, conflictos socioambientales, movimientos de reapropiación o resistencia y luchas por lo común, giro ecoterritorial, y posturas institucionalistas. Descritas todas en el primer capítulo del trabajo e identificadas en el proceso de investigación

Desde la perspectiva de las prácticas educativas que se realizan en torno a las acciones colectivas, mediante el ejercicio investigativo se identificaron enfoques analíticos que califican los aspectos educativos de los movimientos sociales como: Ambientes de fraternidad comunitario; dominios desde los que se vivencian principios de democracia fundamental no eurocéntrica; espacios en los que se incentivan procesos de igualdad; acciones sociopolíticas construidas por los actores sociales que participan en ellos; ámbitos que incentivan la conciencia, las intencionalidades políticas, los valores y las visiones de futuro; o realizaciones a través de las cuales se incentiva la comprensión de procesos identitarios y culturales.

La revisión bibliográfica permitió identificar únicamente cuatro estudios que identificaban vínculos entre: la acción colectiva, procesos educativos relacionados con el surgimiento de cualidades subjetivas, como la configuración de conocimientos alternativos que trascienden el ámbito individual, y que permiten establecer vínculos de identidad, pertenencia, así como el desarrollo de una capacidad movilizadora (Torres, 2009; Svampa, 2012; Gluz, 2013; Navarro, 2015).

Torres (2009) define lo educativo de los procesos organizativos a partir de la configuración de creencias, decisiones, construcción de identidades, solidaridades y sentidos de pertenencia comunes. Valores que tienen incidencia cultural y política, en el conjunto social, y contribuyen a modificar actitudes, representaciones y hábitos sociales. Svampa (2012), enmarca los movimientos sociales que luchan contra proyectos extractivos, en lo que denomina “giro ecoterritorial”, caracterizados por definir lenguajes comunes, marcos comunitarios de acción, justicia ambiental, defensa de la naturaleza, el buen vivir, la soberanía, los derechos humanos, y la democratización de decisiones. En sentido similar se

refiere Navarro (2015), quien alude a la estructuración de lazos comunitarios, mecanismos democráticos como asambleas, consultas populares, recursos de amparo, peticiones legislativas y acciones directas con el fin de defender los territorios de los efectos de los emprendimientos mineros. Por su parte Gluz (2013) hace referencia a que las acciones colectivas que programan los colectivos sociales se constituyen en una nueva forma de hacer política lo cual genera recursos cognitivos, relacionales e identidades en las comunidades.

A partir de la sistematización de las experiencias educativas de las organizaciones sociales que se oponen a la instalación del proyecto extractivo de la mina La Colosa en Cajamarca Tolima, y teniendo en cuenta las preguntas que orientaron la investigación, podemos plantear las siguientes conclusiones.

Con la llegada del proyecto minero liderado por la AGA, los habitantes de Cajamarca Tolima, comenzaron a constituir nucleamientos colectivos con el fin de defender el territorio y el futuro de las próximas generaciones. La iniciativa organizativa estaba impulsada en el conocimiento por parte de sus integrantes, del impacto que la actividad extractiva generaría en las cuencas hidrográficas, las condiciones de salubridad de las poblaciones afectadas, y el impacto negativo en las labores agrícolas, que allí se desarrollan.

Acorde con esto, la investigación se propuso reconstruir el proceso histórico de las organizaciones sociales y las acciones colectivas que éstas programaban con el objeto de defender el territorio, el agua, la biodiversidad y la vida del lugar. Identificar las prácticas educativas informales (no planeadas) y formales (planeadas) que han sido formativas para los habitantes del lugar; las transformaciones subjetivas de los que han participado en las acciones colectivas; y cómo estas han influido en el grado de cohesión comunitario. Categorías estas que hacen parte del modelo analítico que se propuso para adelantar la indagación.

La investigación pudo evidenciar que los enfoques interpretativos de las acciones colectivas que se realizan contra los proyectos extractivos son las siguientes: De acuerdo al orden expositivo, la *Comunidad Conocible* acude a la socialización del contexto económico y político en que ocurren las prácticas extractivas. El *Giro Ecoterritorial* privilegia el análisis de los marcos comunes de acción en defensa de los territorios afectados por el extractivismo. La *Ambientación de las luchas* explica cómo los movimientos opositores a esta práctica se hacen ambientalistas. La *Comunidad Imaginada* se usa para examinar los factores de identidad de los sectores sociales que participan en los conflictos mineros. El *Círculo Hermenéutico* se inclina por entender cómo es que los sectores sociales afectados procesan la comprensión y el conocimiento de esta práctica económica. Por último, la *Fusión de Horizontes* se enfoca a explicar el acuerdo entre el investigador y los sectores sociales con el fin comprender un horizonte de entendimiento y el mundo vital.

Todos estos enfoques están asociados a la promoción de grandes propósitos y horizontes de futuro de los movimientos sociales (Torres, 2017). En este trabajo se consideró que ninguno de los que se han explicado tiene en cuenta en el análisis la perdurabilidad de las prácticas educativa. Los aprendizajes derivados de este ejercicio se denominan en esta investigación como *Repertorios de Acción y Prácticas Educativas* (RAPE) de orden popular. Enfoque teórico que alude a un conjunto de conocimientos, destrezas, medios culturales y formas de lucha que heredan, aprenden, aprehenden o inventan organizaciones indígenas, afros, ecologistas, defensores de derechos humanos, etc., que han emergido en el escenario colombiano y latinoamericano, que no se someten a formas de subordinación económica, política, social y cultural. Razones de lucha que se fortalecen con la implementación de prácticas educativas.

En este mismo sentido se tuvo en cuenta también que los conflictos generados por los proyectos extractivos pueden analizarse desde la perspectiva teórica que en esta investigación se denomina *Horizontes Territoriales de Vida* (HTV) Enfoque que alude a la variedad de acciones colectivas y prácticas educativas que realizan las organizaciones sociales con la intención de defender los territorios donde se instalan los proyectos extractivos y formar sujetos que se conviertan en promotores de cambio. Propósitos para los que se impulsan procesos formativos de los integrantes de las organizaciones y las comunidades a fin de fortalecer la realización de operaciones de resistencia que eviten: la contaminación de las fuentes de agua, la seguridad alimentaria, los afectos a la biodiversidad, factores de los que depende la vida y la existencia de generaciones futuras.

Desde esta misma perspectiva, en esta investigación se evidenció que los procesos organizativos que surgieron en el territorio tolimense de Cajamarca e Ibagué para hacerle oposición al proyecto minero a gran escala de La Colosa, estuvieron inspirados en métodos de resistencia similares surgidos en el año 2001 y 2002 en Tambogrande (Perú) y Esquel (Argentina), así como en el departamento colombiano de Santander. Territorio en el que la multinacional canadiense Eco Oro Minerals (antes GreyStar) pretendía iniciar actividades mineras en el páramo de Santurbán, del que se surte de agua el área metropolitana de Bucaramanga y otros lugares del oriente colombiano.

Se encontró también que los sujetos que integran estos procesos organizativos, se inclinan por la educación de la comunidad como la mejor estrategia para fortalecer la resistencia contra la minería. Con este objetivo, han realizado campañas en: parques, ciclovías, plazas de mercado, barrios populares, colegios, universidades, etc., a fin de explicar por qué es inconveniente efectuar actividades mineras a gran escala y a cielo abierto en un territorio con vocación agrícola como Cajamarca, denominado como Despensa Agrícola de Colombia.

Con este mismo propósito, estos procesos organizativos han efectuado acciones colectivas de hecho y derecho, principalmente la Marcha Carnaval por el Agua, la Vida y el Territorio. La actividad, en la confluyen la alegría, el arte y la defensa de la vida, en contraposición a la cultura de la muerte, la exclusión y el saqueo de los bienes comunes, efectuado por compañías multinacionales, se realiza cada año a principios del mes de junio en la ciudad de Ibagué. Esto ha permitido articular y cohesionar a las comunidades afectadas por la exploración y explotación aurífera.

De las acciones colectivas realizadas por las organizaciones sociales que integran la Red de Comités Ambientales del Tolima (RCAT), articuladas todas alrededor de propósitos ambientales del ámbito local pero principalmente en rechazo del emprendimiento minero de La Colosa en Cajamarca Tolima, se han derivado a su vez prácticas educativas que han devenido en enseñanzas y aprendizajes individuales y colectivos que han contribuido a fortalecer y mantener en el tiempo la resistencia de los procesos organizativos.

En este sentido, la investigación permitió reconocer las prácticas educativas informales (o no planeadas), y formales (o planeadas) de las organizaciones populares que han surgido en el territorio tolimense de Cajamarca. Ejercicio que ha sido promovido igualmente con el propósito de explicar a los habitantes los efectos sociales y ambientales que acarreará la explotación minera en el patrimonio ecológico y cultural del territorio, la incompatibilidad de la explotación aurífera con la agricultura, y el peligro que ocasionará a las fuentes de agua y la economía local.

La investigación también evidenció que las prácticas educativas y formativas, han incidido a su vez en la aparición de subjetividades políticas, en torno a las cuales los integrantes de los procesos organizativos han hecho posible la apropiación del pasado, resignificar el territorio y visualizar en la agricultura la única posibilidad de futuro.

Esta experiencia formativa, ha sido implementada con orientaciones y criterios metodológicos participativos como: la horizontalidad del conocimiento, el diálogo experiencial y de saberes. Gracias a esta estrategia se ha generado en los habitantes del territorio, un conjunto de transformaciones cognitivas, valorativas, actitudinales y prácticas, que han aportado los referentes desde los cuales sus integrantes y simpatizantes han reconfigurado Saberes, prácticas e identidades.

Estas prácticas han tenido a su vez incidencia en transformaciones subjetivas relacionadas con innovaciones que se sustentan en el desarrollo de la capacidad de sentir con otros, implicarse, reconocer la deferencia y la pluralidad, es decir la alteridad, entendida como la capacidad de apertura al otro, a la comprensión de sus sentidos. Conversiones para las que se requiere la formación de la otredad, lo que involucra a su vez capacidad para asimilar

conocimientos, prácticas e identidades nuevas (Fernández, 2011), y que ha intervenido a su vez en la cohesión y sentido de las acciones colectivas.

Acciones colectivas que han contribuido a la creación de vínculos entre grupos sociales y localidades diferentes, en los que también proyecta la realización de consultas populares contra emprendimientos mineros que se pretenden instalar en sus territorios (Valencia & Riaño, 2017). El factor que ha contribuido a la creación de estos nexos ha sido la circulación de documentos impresos, audiovisuales, charlas, conferencias etc., y que tienen como propósito informar sobre los efectos de la actividad minera en las fuentes hídricas, la biodiversidad y la vida de las regiones. Información que se complementa con la implementación coordinada de acciones colectivas y de prácticas educativas de orden informal y formal que median en la configuración a su vez de subjetividades políticas y transformaciones cognitivas, prácticas e identitarias, tal como lo hemos evidenciado a lo largo de esta investigación.

Las evidencias de la investigación no han estado exentas de las dificultades que intervienen en la creación de conocimiento, la mediación que establecen el sujeto y el objeto, o la zona de la realidad social que se explora. Desde el punto de vista personal, y pese a las orientaciones del tutor, los apuros han sido múltiples: poder ensamblar un proyecto con objetivos claros y precisos, que orienten la indagación; hallar los elementos teóricos adecuados para hacer el análisis de los datos; aunado a la falta de tiempo para emprender la compilación de la información e iniciar la escritura del informe final, se constituyeron en los principales dificultades. Desde la perspectiva del objeto de estudio, los aprietos estuvieron en la búsqueda de contactos adecuados para obtener la información; ganarse la confianza de la comunidad, y hacer que los campesinos, simpatizantes, y los mismos integrantes de los procesos organizativos, escribieran las respuestas a las preguntas formuladas en las encuestas estructuradas. Excusa que se superó acudiendo a entrevistas o charlas informales, orientadas siempre por las preguntas de investigación, y realizadas en plazas de mercado, cafeterías, casas de familia, y las mismas movilizaciones que realizan los nucleamientos colectivos.

Con el fin de seguir investigando en el tema del extractivismo, y a fin de realizar análisis comparativos, prospectivamente podrían sugerirse búsquedas relacionadas con acciones colectivas, prácticas educativas, o transformaciones subjetivas derivadas de impactos ambientales ocasionados por esta misma actividad en territorios como: Santander (donde se proyecta expandir la actividad extractiva de oro en el páramo de Santurban); Marmato (Caldas), Pijao y Salento (Quindío), Cumaral (Meta), Sanmartín (Cesar), y cuarenta municipios más, donde se han expandido e instalado proyectos megamineros. Sitios donde al igual que en Cajamarca o Ibagué en el Tolima, han surgido procesos organizativos, del que se han generado a su vez, instituciones comunitarias con capacidad para configurar procedimientos, normas sociales, criterios de reconocimiento, afiliación, y prácticas de democracia local, emanadas del conflicto.

Discordias entre comunidades locales y grandes empresas del que indudablemente han surgido intencionalidades políticas emancipadoras, frente al modelo económico y el orden social vigente; y que ha proyectado a las comunidades como sujetos históricos, convirtiéndolos en protagonistas anónimos de transformaciones sociales; convencidos de la idea en que sólo mediante la educación, mediada por metodologías dialógicas y participativas pueden materializarse mejores horizontes de vida para las colectividades.

Investigaciones que requieren por parte del investigador: realizar lecturas de contexto, conocer las demandas de las comunidades, sus horizontes de vida, los anclajes territoriales de lucha, la participación de las mujeres en los movimientos sociales antiextractivos, el impacto de la Responsabilidad Social Empresarial en las comunidades, etc. Aspectos primordiales para explicar los logros, aprendizajes y alcances actuales de la educación popular, a fin de corregir, complementar, aclarar o confrontar relatos académicos, concebidos con intereses ajenos a las comunidades, que defienden y proyectan la actividad megaminera como símbolo de bienestar, progreso y desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Testimonios orales

Báez, Héctor Elías. (2016, diciembre). Integrante de la Organización Conciencia Campesina. Cajamarca.

Castro, Olga Cecilia. (2018, enero). Representante legal de la Organización Social Cooperativa del Cañón de Anaime. Anaime.

Cruz, Albeiro. (2106, diciembre). Integrante de Unión Campesina. Cajamarca.

Espitia, Diego. (2016, diciembre). Integrante de la Cooperativa de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime. Cajamarca.

Fandiño, Gustavo. (2018, enero). Integrante de Asprosan Semillas Andinas de Colombia. Anaime. Anaime.

Gámez, Carlos. (2016, diciembre). Integrante de Unión Campesina. Cajamarca.

Garay, Luis Jorge. (2017, marzo). Académico e investigador colombiano. Cajamarca.

García, Renzo. (2016, diciembre). Integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué. Ibagué.

Hernández, Osman. (2016, diciembre). Integrante de Conciencia Campesina. Cajamarca.

Jiménez, José. (2016, diciembre). Estudiante de ciencia política de la U.T. miembro de Red Nacional de Jóvenes en Defensa del Agua, el Territorio y la Vida y del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué.

Mejía, Robinson. (2016, octubre). Integrante del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca). Cajamarca.

Méndez, Camila. (2017, octubre). Integrante del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca). Bogotá.

Mojica, Marlene. (2016, diciembre). Integrante de la Organización Unión Campesina. Cajamarca.

Muñoz Álvarez, Neyla Herlinda. (2016, diciembre). Campesina independiente. Cajamarca.

- Olivera, Élver Ariel. (2017, octubre). Integrante de Asocuencia Chorros Blancos. Bogotá.
- Ospina, Érica Alejandra. (2016, diciembre). Integrante del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca). Ibagué.
- Ospina, Jonathan. (2016, diciembre). Integrante del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca). Cajamarca.
- Padilla, Camilo. (2017, marzo). Concejal del Municipio de Cajamarca y miembro del Comité Ambiental de Cajamarca y Anaime. Cajamarca.
- Parra, Juan Carlos (2016). Integrante de la fundación Amaca.
- Patiño, Gustavo. (2016, diciembre). Integrante del Comité Ambiental de Cajamarca y Anaime. Cajamarca.
- Perdomo, Olga Lucía. (2016, octubre). Integrante de la Organización Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra). Cajamarca.
- Pulido, Alejo. (2016, diciembre). Investigador Independiente. Ibagué.
- Riaño, Cesar Augusto. (2016, octubre). Integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué.
- Robledo, Jorge Enrique. (2017, junio). Senador del República por el Polo Democrático Alternativo. Ibagué.
- Rodríguez, José Domingo. (2016, diciembre). Integrante de la Organización Asocuencia Chorros Blancos. Cajamarca.
- Rodríguez, Leonardo. (2017, diciembre). Integrante de la Organización Conciencia Campesina. Cajamarca.
- Rodríguez, María Ascensión. (2016, diciembre). Integrante de la Organización Unión Campesina.
- Rojas, Ángela. (2016, diciembre). Integrante de la Red Tejiendo Páramos. Cajamarca.
- Rojas, Jefferson. (2016, diciembre). Integrante del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca). Cajamarca.

- Rojas, Yolanda. (2016, diciembre). Integrante de Integrante de la Organización Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime (Apacra). Cajamarca.
- Tocora, Jaime. (2016, octubre). Integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué. Ibagué.
- Torres, Jimmy Fernando. (2016, diciembre). Integrante de la Organización Conciencia Campesina. Cajamarca.
- Vargas, Julio Roberto. (2016, diciembre). Integrante de la Organización Unión Campesina.
- Vera, Mario. (2016, diciembre). Profesor de la Universidad del Tolima y miembro del Comité Ambiental en Defensa de la Vida de la ciudad de Ibagué. Ibagué.
- Viñas, Julián. (2016, diciembre). Integrante del Comité Ambiental de Piedras Tolima. Ibagué.
- Vivas Zamora, Nodier. (2018, enero). Biólogo profesional y habitante del municipio de Anaime. Cajamarca.

2. Libros, tesis de grado, revistas especializadas y artículos de prensa

- Acosta, A.; García, A., M., & otros (2014). *Territorios en disputa*. Bajo tierra ediciones y JRA. México.
- Adel M., C. (2003). *Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias*. Convocatoria a Becas. Clacso.
- Aguilera M. A.; González T. M. I. & Torres C. A. (2015). *Reinventando la comunidad política: formación de subjetividades, sentidos de comunidad y alternativas políticas en procesos organizativos locales*. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- Algranati, C. (2012). “La ofensiva extractivista en América Latina. Crisis global y alternativas”. En: *Revista Herramienta* No 50.
- Alimonda, H. (2008). “Introducción”: *Gestión ambiental y conflicto social en América Latina*. Clacso. Primera edición. Buenos Aires.
- Alimonda, H. (Compilador). (2002). *Ecología política. Naturaleza, sociedad y utopía*. Clacso, Asdi. Buenos Aires.

- Alimonda, H. (Coordinador) (2011). *La naturaleza colonizada. Ecología Política y minería en América Latina*. Ediciones Ciccus, Clacso. Buenos Aires.
- Almendras, A & Anaya A., J. S. (2012). “Otra roca sobre los rieles: indígenas caminando la resistencia”. En: Toro P., C; Fierro M., J.; Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Alonso, M. C. & Job, S. F. (2012). “Derecho a la expoliación: reconfiguración y adaptación del derecho a favor de la minería transnacional”. En: *Explotación minera y resistencia en Catamarca, Córdoba y La Rioja*. Editorial El Colectivo. Buenos Aires.
- Alvarado M., G. (2008). “Políticas neoliberales en el manejo de los recursos naturales en Perú: el caso del conflicto agrominero de Tambogrande”. En: *Gestión ambiental y conflicto social en América Latina*. Clacso. Primera edición. Buenos Aires.
- Alvarado, S. V. (2014). “Ampliación de los procesos de comprensión de subjetividades políticas de niños, niñas y jóvenes en Colombia desde una perspectiva alternativa del desarrollo humano: tránsitos y aprendizajes”. En: Alvarado, S. V. & Ospina, H. F. (2014). *Socialización política y configuración de subjetividades. Construcción de social de niños, niñas y jóvenes como sujetos políticos*. Siglo del Hombre Editores y Universidad de Manizales.
- Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica. México.
- Antonelli, M. A. (2009) “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura. La gestión del paradigma hegemónico de la minería responsable y desarrollo sustentable”. En: Svampa, Maristella, y Mirta A. Antonelli (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos. Buenos Aires.
- Arana, M. (2011). “Minería y territorio en el Perú: conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización”. En: Alimonda, H (Coordinador) (2011). *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*. Ediciones Ciccus, Clacso. Buenos Aires.
- Archila N., M. (2003). *Idas y venidas vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia (1958-1990)*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

- Arellano, J. (2012). "Perú: el conflicto entre la comunidad de Espinar y la minera Xstrata Tintaya". En: <http://es.globalvoicesonline.org/2012/05/29/peru-el-conflicto-entre-la-comunidad-de-espinar-y-la-minera-xstrata-tintaya>).
- Arendt, H. (2005). *Comprensión política: El pensar y las reflexiones morales*. Universidad Nacional de Colombia. Serie: Señal que cabalgamos No 52 Año 4.
- Arnal, J.; Del Rincón, D.; Latorre, A. (1994). *Investigación educativa, fundamentos y metodología*. Editorial Labor S. A. Barcelona.
- Avalle, G; Gallo, E & Graglia (2012). "Tensión y tentación. Progreso y desarrollo de las luchas contra la minería en Córdoba, La Rioja y Catamarca". En: Ciuffolini, M. A. (Compiladora) (2012). *Explotación minera y resistencia en Catamarca, Córdoba y La Rioja*. Editorial El Colectivo. Buenos Aires
- Banco Mundial (1997). *Estrategia Minera para América Latina y El Caribe*. División de Industria y Minería Departamento de Industria y Energía. Washington, D. C.
- Barragán G., D. F. (2015). "El profesor y el saber práctico". En: *Revista Educación y Cultura* No 112.
- Barragán, C., D. & Torres C., A. (2017). *La sistematización como investigación interpretativa crítica*. Editorial El Búho. Bogotá.
- Barragán, D.; Mendoza, N. & Torres, A. (2006). "Aquí todo es educativo. Saberes Pedagógicos y prácticas formativas en organizaciones populares". En: *Folios* No 23. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- Bauman, Z., (2016). *La Globalización. Consecuencias humanas*. Fondo de Cultura Económica. México.
- Bebbington, A. (2007). (Editor). *Minería. Movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales*. Instituto de Estudios Peruanos. Lima.
- Bebbington, Anthony & Bebbington Denise Humphreys (2009). Actores y ambientalistas: conflictos socio-ambientales en Perú. *Revista de ciencias sociales* No 35. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Quito.
- Bengoa, J. (1988). "La educación para los movimientos sociales". En: *Proposiciones*. Vol. 15. Ediciones Sur. Santiago. En: <http://www.sitiosur.cl/publicacionescatalogodetalle.php?PID=2981>.

- Bengoa, J. (2006). "Movimientos sociales, identidades y acumulación de capital simbólico en América Latina". Ponencia al Seminario Territorios Rurales en Movimiento a realizarse el 24, 25 y 26 de abril de 2006 en la ciudad de Santiago de Chile. En: www.fidamerica.org/admin/docdescargas/centrodoc/centrodoc_335.pdf.
- Bernal A. L. (2007) "La conquista española en el Tolima" e "Historia verdadera de los Pijaos". En: *Manual de historia del Tolima*. Tomo I. Pijao Editores. Ibagué.
- Borón, A. (2005). "Imperialismo, movimiento social y ciencia crítica latinoamericana". En: *Revista Herramienta* No 27.
- Bottaro, L. & Sola A. M. (2012). "Conflictividad socioambiental en América Latina. El escenario postcrisis de 2001 en Argentina". En: *Política y Cultura, primavera* 2012. No 37.
- Braudel, F. (1997). *La dinámica del capitalismo*. Fondo de Cultura Económica. Primera edición. Bogotá.
- Bucio F., C. (2015). "Territorialidad y subjetivación política: herramientas para el análisis de los conflictos socioambientales por el extractivismo". En: *Espacialidades: Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura*. Vol. 4 No 1.
- Buitrago, E. A. (2014) "Una historia y una vida alrededor del oro: territorialidad y minería en el municipio de Vetas, Santander, Colombia". En: Ulloa Astrid; Góbel, Bárbara (2014) (Editoras) *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Caldart, R. S. (2000) *Pedagogia do Movimento Sem Terra*, Vozes, Petrópolis.
- Caldart, R. S. (2000a). "MST 16 años. Lecciones de pedagogía". En: <http://filo.uba.ar/contenidos/carreras/educa/catedras/educacion1/sitio/sitio/mst1.htm>.
- Calderón, J. & López C., D. (S/f). "Orlando Fals Borda y la Investigación Acción Participativa: Aportes en el proceso de formación para la transformación". En: *Primer encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América*. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Buenos Aires.
- Candón M, J. (2011). *Internet en movimiento: Nuevos movimientos sociales y nuevos métodos en la sociedad de la información*. Memoria para optar el grado de doctor. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid.

- Castoriadis, C (2013). *La institución imaginaria de la sociedad*. Fabula TusQuets Editores. Buenos Aires.
- Ciuffolini, M. A. (Compiladora) (2012). “Contra la dominación colonial: resistencia e imaginación social versus depredación y despojo”. En: *Explotación minera y resistencia en Catamarca, Córdoba y La Rioja*. Editorial El Colectivo. Buenos Aires.
- Cohen A., D. (2015). *Jóvenes a cielo abierto: Construcción de identidades juveniles a diez años del proceso No a la mina en la ciudad de Esquel*. Malisia Editorial. La Plata Argentina.
- Colombia Solidarity, London Mining Network, Redher, The green centre. (2013). *La Colosa Una muerte anunciada informe alternativo acerca del proyecto de Minería de Oro de anglo Gold Ashanti en Cajamarca, Tolima, Colombia*. Sello Editorial Universidad del Tolima. Ibagué.
- Conciencia Campesina (2014). *Cajamarca un territorio para el buen vivir*. Inédito.
- Corredor G. D. C. (2014). *Estrategias de control ciudadano: una aproximación a la intervención megaminera en Cajamarca Tolima (2007-2103)*. Tesis de grado para obtener el título de politóloga. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá.
- Cosajuca (2013). *Violaciones de derechos humanos. Caso colectivo socio - Ambiental COSAJUCA*. En: https://issuu.com/lainconquistable/docs/informe_cosajuca_ddhh. Fecha de acceso, junio 17 de 2017.
- Cuervo S., Y. (2012). “Una aproximación a la megaminería en Colombia” *Revista Theomai* Número 25.
- De Sousa S., B. (2012). *De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad*. Segunda edición. Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes. Bogotá.
- De Sousa S., B. (2014). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Ediciones Trilce. Santiago de Chile.
- Delgado R., G. C. (2008). “El carácter geoeconómico y geopolítico de la biodiversidad. El caso de América Latina”. En: *Gestión ambiental y conflicto social en América Latina*. Clacso. Primera edición. Buenos Aires.

- Delgado R., G. C. (2010). (Coordinador). *Ecología política de la minería en América Latina: aspectos socioeconómicos legales y ambientales de la megaminería*. Universidad Autónoma de México. México.
- Departamento Nacional de Estadística (DANE) (2015). “El cultivo de la arracacha (*Arracacia xanthorrhiza* Bancroft), hortaliza de grandes bondades nutricionales y de alta potencialidad agroindustrial”. En: *Boletín mensual. Insumos y factores asociados a la producción agropecuaria* No 39.
- Dimitriu, A. & Galafassi, G. (2004). “Capitalismo neoliberal y naturaleza: movilización social contra la devastación minera en la Patagonia andina”. *Revista Herramienta* No 26.
- Dimitriu, A., & Galafassi, G. (2009). “El plan “B” de los capitales mineros”. En: *Revista Herramienta* No 36.
- Domínguez, D. (2008). “La trashumancia de los campesinos Kollas: ¿Hacia un modelo de desarrollo sustentable?”. En: *Gestión ambiental y conflicto social en América Latina*. Primera edición. Clacso. Buenos Aires.
- Dussán C, M. A. (2016). “Ponencia: Capitalismo Verde, Modelo Extractivista Minero Energético y nuevo modelo soberano autónomo”. Inédito.
- Echeverría, B. (2010). “Crisis civilizatoria”. En: *Crisis financiera o crisis civilizatoria*. Broedirljik Denle, Entre pueblos, Agencia catalana de Cooperación al desenvolupament. Quito.
- Escobar, A.; Álvarez, S., E & Dagnino E. (Ed.) (2001). *Política cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Taurus Icanh. Bogotá.
- Espacio, C. M. (2012b). “Megaminería a cielo abierto y resistencias: racionalidad económica y racionalidad ambiental”. En: *Revista Ecuador Debate* No 79.
- Espacio, C., M. (2012a). “Reflexiones en torno a la lucha socioambiental en Argentina”. En: *Revista herramienta* No 50.
- Eyerman, R. & Jamison, A. (1991). Personal Politics. *The Roots of Women’s Liberation in the Civil Rights Movement and the New Left* New York. Vintage.
- Falero, A. (2011). “Pensando América Latina desde sus luchas recientes. Aperturas, frenos e interrogantes”. En: Acosta, Y.; Falero, A.; Rodríguez, A.; Sans, I., & Sarachu, G. (Coordinadores). *Pensamiento crítico y sujetos colectivos en América*

- Latina: perspectivas interdisciplinarias*. Editorial Trilce, Núcleo “Pensamiento crítico en América Latina y sujetos colectivos”, Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la Republica. Montevideo.
- Fals B., O. (1985). *Conocimiento y poder popular*. Siglo XXI. Bogotá.
- Fernández, A. M. & Colaboradores (2011) *Política y subjetividad. Asambleas Barriales y fábricas recuperadas*. Editorial Biblos. Buenos Aires.
- Fierro M., J. (2013). “Los cuestionamientos a la apuesta minera en Colombia: entre la preocupación y la acción ética”. En: *Aquelarre. Revista del Centro Cultural Universitario*. Universidad del Tolima. Volumen 12 No 24.
- Flórez F., M. (2012). “En defensa del páramo de Santurbán. Cronología de una lucha que apenas comienza”. En: Toro P., C; Fierro M., J.; Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Flórez, R. C. (2010). “Educación popular ambiental”. En: *Trayectorias* Vol.12, Núm. 30.
- Fundación para la Defensa de la Madre Tierra (Funmati & Cosajuca (2016). *La despensa. Guía Metodológica para realizar Consultas Populares en Colombia*. Colors Editores S.A.S.
- Funtowicz, S. O. & Ravetz, J. R. (2000). *La ciencia posnormal. Ciencia con la gente*. Icaria Antrazyt. Barcelona.
- Gadamer, H. G. (1960). *Wharheit und methoe*, Tübingen, Mohr.
- Gadotti, M. (2002). *Pedagogía de la tierra*. Siglo veintiuno editores. México.
- Galafassi, G. (2009). “La predación de la naturaleza y el territorio como acumulación”. En: *Revista Herramienta* NO 42.
- Galafassi, G. (2014). (Compilador). *Apuntes de acumulación. Estado, procesos socio-históricos de (re)producción y conflictividad social*. Thoami Libros y extramuros ediciones. Buenos Aires.
- Garay, L. G. (2013) (Director). *Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista* (Tomo 1). Contraloría General de la República. Bogotá.
- Garay, L. G. (2014). (Director). *Minería en Colombia: Control público, minería y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y postconflicto* (Tomo 4). Contraloría General de la República. Bogotá.

- Garay, L. J. (2013) (Director). *Minería en Colombia: Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos* (Tomo 2). Contraloría General de la República. Bogotá.
- Garay, L. J. (2014) (Director) *Minería en Colombia: Daños ecológicos y socioeconómicos y consideraciones sobre el modelo minero alternativo* (Tomo 3). Contraloría General del República. Bogotá.
- García P, R. A. (2012). “La Colosa, proyecto de minería a cielo abierto de lixiviación con cianuro en el centro de Colombia. Una lectura alternativa desde el movimiento social y ambiental”. En: Toro Pérez, Catalina; Fierro Morales, Julio; Coronado Delgado, Sergio; Roa Avendaño, Tatiana (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Garzón, T. (2008). *Pórfido aurífero Colosa*. In: XIII Congreso Latinoamericano de Geología, 29 septiembre - 3 octubre. Lima.
- Giarracca, N & Hadad, G. (2009). “Disputas manifiestas y latentes en La Rioja minera. Política de vida y agua en el centro de la escena”. En: Svampa, M. & Antonelli, M. (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos Sociedad. Buenos Aires.
- Giarracca, N., & Teubal, M. (Coordinadores) (2013). *Actividades extractivas en expansión ¿Reprimarización de la economía argentina?* Editorial Antropofagia. Buenos Aires.
- Gilly, A., & Roux, R. “Capitales, Tecnologías y mundos de la vida. El despojo de los cuatro elementos”. En: *Revista Herramienta* No 40.
- Giménez, G. (2005). “Territorio e identidad. Breve introducción a la geografía cultural”. En: *Trayectorias*. Vol. VII. No 17.
- Gluz, N. B. (2013). *Las luchas populares por el derecho a la educación: experiencias educativas de movimientos sociales*. Clacso. Buenos Aires.
- Gluz, N. B. (2013a). *Educación y emancipación: alternativas escolares en movimientos sociales (2006-2010)*. Tesis para el grado de doctora. Inédito.
- Göbel, B. & Ulloa, A. (editoras) (2014). *El extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Ibero-Amerikanisches Institut y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Göbel, B., & Ulloa A. (Editoras). (2014). *Extractivismo minero en América Latina*. Universidad Nacional de Colombia, Ibero-Amerikanisches Institut. Bogotá.

- Gohm, M. da G. (2008). “Abordagens teóricas no estudo dos movimentos sociais na América Latina”. En: *Caderno CRH* v. 21 No 54. Septiembre – Diciembre. Salvador.
- Gomes da C, N., & Pinassi, M. O (2012). “La minería y la lógica de producción destructiva en la Amazonía brasileña”. En: *Revista Herramienta No 51*
- González J., J. M. (2007). “Poblamiento minero y técnicas en el cañón del río Cauca: 1538-1627”. En: *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, No 34. Bogotá.
- González P., C. Orsini Y., Indermühle, S. (2011). *Megaminería y reasentamientos forzados*. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz. Bogotá.
- González P., L., Duarte C., N., González P., C., Orsini, Y., & Indermuhle, S. (2011). *Megaminería y reasentamientos forzados*. Indepaz, Colección Punto Encuentro. Bogotá.
- González P., L.; Duarte C. N.; González P., C.; Orsini, Y.; Indermühle, S. (2010). *Megaminería y reasentamientos forzados*. Indepaz. Bogotá.
- González T., M. I.; Aguilera M., A. & Torres C., A. (2014) “Investigar subjetividades y formación de sujetos en con organizaciones y movimientos sociales”. En: Piedrahita E., C.; Díaz G., Á. & Vommaro, P. (2014). *Acercamientos metodológicos a la subjetividad política: debates latinoamericanos*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Clacso. Bogotá.
- Grundy, S. (1994). *Teoría y praxis del currículo*. Editorial Morata. Madrid.
- Grupo de Investigación Geoambiental Terrae (2016). Análisis desde la perspectiva de amenazas socioambientales de una mina de oro a cielo abierto: caso de estudio La Colosa, Cajamarca (Tolima). En: <http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/Archivos2016/AportesAcademicos2016/Informe%20Amenazas%20Colosa%20final.pdf>.
- Gudynas, E. (2009). “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo suramericano actual”. En: Schuldt, Jürgen, et. al. *Extractivismo, política y sociedad*. Centro Andino de Acción Popular y Centro Latinoamericano de Ecología Social. Quito Ecuador.

- Gutiérrez D., J. A. (2013). “La sombra de La Colosa sobre Cajamarca, Tolima: Megaminería, el nuevo delirio del Dorado”. En: <https://anarkismo.net/article/25101>. Fecha de acceso, junio 19 de 2017.
- Harvey, D. (2003). *El nuevo imperialismo*. Ediciones Akal. Madrid.
- Hernández B., J. M. (2017). “Yo estuve en la consulta popular contra la minería”. En: *El Espectador*, diciembre 30.
- Hernández, J.; Job, S. F. & Pares F. (2012) “La insurrección de los saberes. Conocimiento científico y saberes populares en la disputa por la vida”. En: Ciuffolini M. A. (Compiladora) (2012). *Por el oro y el moro. Explotación minera y resistencias en Catamarca, Córdoba y La Rioja*. Editorial El Colectivo. Buenos Aires.
- Hidalgo, F. F. (2004). Los movimientos indígenas y la lucha por la hegemonía”. En: *Revista Herramienta* No 25.
- Ibáñez, J. (1997). *El regreso del sujeto*. Madrid. Siglo XXI.
- Indermüchel, S. (2011). “Transnacionales mineras en Colombia”. En: González P., L.; Duarte C., N.; Jiménez, C. & Novoa, E. (2014). *Producción social del espacio. El capital y las luchas sociales en la disputa territorial*. Ediciones desde abajo. Bogotá.
- Kairuz H, F. (2009). “Audiencia pública en Cajamarca. ¿Para qué?”. En: <http://co2ecofisiologia.blogspot.com.co/2009/02/audiencia-publica-en-cajamarca-para-que.html>.
- Klandermans, B. (1988). “The Formation and Mobilization of Consensus”. En: Klandermans B., Kriesi H. y Tarrow S. *International Social Movements Research. Supplement to Research in Social Movements, Conflicts and Change. Vol. 1*. Greenwich.
- Leff, E. (1986). “Notas para un análisis sociológico de los movimientos ambientalista”. En: *Política ambiental y desarrollo. Un debate para América Latina*. Fescol, Instituto Nacional de Recursos naturales Renovables y del Ambiente. Bogotá.
- Leff, E. (1986). *Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable*. Siglo XXI editores. México.
- Leff, E. (2004). *Racionalidad ambiental: La reapropiación social de la naturaleza*. Siglo XX editores. México.

- Linsalata, L. & Navarro, M. L. (2014). “Crisis y reproducción social. Claves para entender lo común. Entrevista a Silvia Federici”. *Observatorio Social de América Latina* No 35. Clacso.
- López, E. & Vértiz, F. (2012). “Capital transnacional y proyectos nacionales de desarrollo en América Latina. Las nuevas lógicas del extractivismo desarrollista”. En: *Revista Herramienta* No 50.
- Lora C, J. (2006). “Estrategias de poder en una trama colonial”. En: *Revista Herramienta* No 32.
- MacAdam, D.; McCarthy J.; & Mayer Z. (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Editorial Istmo S. A. Madrid.
- Machado A, H. (2009). “Minería transnacional, conflicto socioterritorial y nuevas dinámicas expropiatorias. El caso de minera Alumbreira”. En: Svampa M. & Antonelli M. (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos Sociedad. Buenos Aires.
- Machado A. H. (2015). “Territorios y cuerpos en disputa: extractivismo y ecología de las emociones”. En: *Biodiversidad, Sustento y Culturas* No 86.
- Machado A., H. (2012) “Los dolores de nuestra América la condición neocolonial. Extractivismo y biopolítica de la expropiación”. En: *Nostramo Revista Crítica Latinoamericana* No 5.
- Machado, H.; Svampa, M.; Viale, E; Giraud, M.; Wagner L.; Antonelli M.; Giarracca N.; Teubal M., Rodríguez P., J., Y Aranda D. (2012). *15 mitos y realidades de la minería transnacional: guía para desmontar el imaginario prominero*. Primera edición. Abya Yala y Universidad Politécnica Salesiana. Quito.
- Malerba, J. (2014). *Diferentes formas de dizer Nao. Experiencias internacionais de resistencia, restricao e prohibicao ao extrativismo mineral*. Fase Rio de Janeiro.
- Marín, M. C. (2009). “El “no a la mina” como acontecimiento: otro mundo posible”. En: Svampa, M. & Antonelli M. (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos Sociedad. Buenos Aires.
- Márquez, F. & Salcedo, C. (2012). “Defensa del territorio y resistencia afrocolombiana en norte del Cauca”. En: Toro P., C; Fierro M., J.; Coronado D., S. & Roa A., T.

- (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Martínez A., J. (2009). *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valores*. Tercera edición. Icaria Editorial S.A. Bays, Barcelona.
- Martínez A., J. (2012). “El ecologismo popular de los pobres, veinte años después: India, México y Perú”. En: *Nostramo: Revista Crítica Latinoamericana* No 5.
- Mateus T. J. (2017). “Así nació uno de los grupos de resistencia a la minería en Cajamarca”. En: *El Tiempo*. Marzo 28.
- Mayntz, R. (1967). *Sociología de la organización*. Madrid: Alianza Editorial.
- Mejía, M. R (1996). *Educación popular y movimientos sociales*. Bogotá. CINEP.
- Mejía, M. R. (2013). “La educación popular: una construcción colectiva desde el sur y desde abajo”. En: <http://rednelhuila.files.wordpress.com/2013/12/educacion-popular-ponencia-marco-rac3bal-mejc3ada.pdf>.
- Melucci, A. (2010). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. El Colegio de México. México.
- Méndez P., O. L. (2013). “La Colosa: entre los flujos del gran capital y la tradición del suelo fértil”. En: Delgado R., G. C. (2013) *Ecología Política del extractivismo en América Latina: casos de resistencia y Justicia socioambiental*. Clacso, Buenos Aires.
- Merlinsky, G. (2013). *Política, derechos y justicia ambiental: el conflicto del río Riachuelo*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.
- Michi, N. (2010). *Movimientos campesinos y educación. Estudio sobre el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero MOCASE-EV*. Editorial El Colectivo. Buenos Aires.
- Ministerio del Medio Ambiente & Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (2002). Reportaje al Sistema Nacional Ambiental –SINA- Las voces del SINA. Bogotá.
- Molano B. A. (2013). “Por la vida”. En: *El Espectador*, junio 15. Bogotá.
- Molano C., M. (2015). “Gramáticas de la práctica pedagógica”. En: *Revista Educación y cultura* No 112.

- Morán, R. “En la Colosa hay un conflicto potencial”. En: *Revista Catorce* 6. Abril-mayo.
- Movimiento Ciudadano por la Democracia (MCD) (S/f). *Resistencia Civil Pacífica: el poder de los ciudadanos* 10. En: <http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/psicologia-y-tecnicas-de-control-social/activismo-social/200-resistencia-civil-pacifica-el-poder-activo-de-los-ciudadanos/file>.
- Navarro, M. L. & Pineda, C. E. (2011) “Luchas socioambientales en México. Luchas anticapitalistas en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales”. En: www.espora.org. Fecha de acceso, diciembre 29 de 2015.
- Navarro, M. L. & Pineda, C. A. (2000). “Luchas socioambientales en México: Construcción de subjetividades y lenguajes de valoración anticapitalista”. En: *Revista Herramienta* No 12.
- Navarro, M. L. (2012) “La memoria como impulso a la resistencia y prefiguración en las luchas socioambientales”. En: *Tramas* No 38, Universidad Autónoma de México. México.
- Navarro, M. L. (2012). “Las luchas indígenas y campesinas contra el despojo capitalista en México: subjetividades políticas en la defensa y gestión de los bienes comunes naturales”. En: *Boletín Onteaiken* No 15.
- Navarro, M. L. (2013). “Subjetividades políticas contra el despojo capitalista de bienes naturales en México”. *Acta Sociológica* No 62.
- Navarro, M. L. (2015). “Luchas socioambientales y neoextractivismo”. En: https://www.youtube.com/results?search_query=luchas+socioambientales. Fecha de acceso, diciembre 30 de 2015.
- Navarro, M. L. (2015). *Luchas por lo común. Antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes naturales en México*. BUAP, Instituto de Ciencias Humanas Alfonso Vález Pliego, Ediciones Bajo Tierra, Jóvenes en Resistencia Alternativa. México.
- Navarro, M. L. y Hernández L, O., J. (2010). “Antagonismo social de las luchas de las luchas socioambientales en México: cuerpo, emociones y subjetividades como terreno de lucha contra la afectación”. En: *Revista Latinoamericana de Estudios Sobre el Cuerpo, Emociones y Sociedad* No 4.
- Negri, A. (2003). *Job: la fuerza del esclavo*. Paidós. Buenos Aires.

- Negro, M. (2002). “Mineros de Río Turbio. Una experiencia de lucha y control obrero”. En: *Revista Herramienta* no 21.
- Nieto L., J. R. (2008). *Resistencia. Capturas y fugas del poder*. Ediciones desde abajo. Bogotá.
- Onofrio, S. & Zangaro, M. B. (2012). “Movimientos asamblearios y empresas mineras: La lucha entorno a la megaminería. Entrevista a Sergio Onofrio”. En: *Revista Herramienta* No 50.
- Ortega R. E. (1949). *Los inconquistables. La guerra de los Pijaos 1602-1603*. Volumen 20. Archivo Nacional de Colombia.
- Pabón G. G. (2015). “Aproximación al concepto territorios ancestrales”. En: <https://www.proclamadelcauca.com/2015/03/aproximacion-al-concepto-territorios-ancestrales.html>. Fecha de acceso, mayo 8 del 2017.
- Pabón, P. M. (2009). “Acción educativa del movimiento ambiental en la Universidad Pública del centro - accidente colombiano”. En: *Rhec. Vol. 12. No 12*, pp. 175-203. http://editorial.udenar.edu.co/revistas/rudecolombia/files/r12_175.pdf
http://editorial.udenar.edu.co/revistas/rudecolombia/files/r12_175.pdf.
- Padilla O, C. (2012). “Minería conflictos sociales en América Latina”. En: Toro P., C., Fierro M., J., Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, territorio y conflicto en Colombia*. Censat Agua Viva, Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá.
- Padilla O, C. (2010). “Expansión minera, políticas de Estado y respuestas comunitarias en América Latina”. En: *Revista Semillas* No 42-43. <http://semillas.org.co/es/revista/expansi>. Fecha de acceso, julio 9 del 2017.
- Padilla, C. (2010^a). Minería: ¿Desarrollo o amenaza para las comunidades en América Latina? En: *Deslinde, mayo-junio*.
- Patiño, A. (1991). *Ecología y compromiso social. Itinerario de una lucha*. Fondo Editorial Cerec. Bogotá.
- Pax, C. (2015). “Comunidades en resistencia no violenta”. En: *Comunidades en Resistencia no Violenta. Ante conflictos generados por proyectos extractivos: sistematización de experiencias en Colombia, Guatemala y Perú*. Pax Christi Internacional. Bruselas. Bélgica.
- Pax, C. (2016). *Democracia vale más que el oro. El proyecto minero La Colosa y el derecho ciudadano a la participación*. Países bajos.

- Pérez H., O. I. (2017). “El sector extractivo en Colombia: Importancia macroeconómica y transformaciones recientes”. En: Valencia, L. & Riaño, A. *La minería en el postconflicto: Un asunto de quilates*. Ediciones B. Bogotá.
- Periódico El Tiempo, diciembre 21 de 2007. “Hallan en Cajamarca (Tolima) reserva de oro que estaría entre las más grande mundo”. <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3871744>.
- Periódico El Nuevo Día, mayo 8 de 2017. “Agro en Cajamarca puede generar hasta 10 mil empleos: ambientalistas”. <http://m.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/316914-agro-en-cajamarca-puede-generar-hasta-10-mil-empleos-ambientalistas>.
- Periódico El Tiempo, abril 22 de 2010. “Nació la Conciencia Campesina/opinión”. En: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7648510>. Fecha de acceso, junio 11 de 2017.
- Piedrahita E, C. L. (2015). Subjetividades políticas y pensamiento de la diferencia. Doctorado en Estudios Sociales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Clacso. Bogotá.
- Pineda R., C. E. (2010). “Pensar la emancipación: democracia directa, economías locales, autorregulación social y gestión colectiva de los bienes comunes”. En: www.espora.org. Fecha de acceso, diciembre 29 de 2015.
- Pineda R., C. E. (2012). “indios y campesinos: alternativas anticapitalistas en la defensa de la madre tierra”. En: *Nostromo Revista Crítica Latinoamericana* No 5.
- Pinilla, A. (2013). *Memorias de la acción colectiva del magisterio en Colombia*. Tesis de grado Doctorado Interinstitucional de Educación. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- Ponce, A. (2013). *¿Cuál locomotora? El desalentador panorama de la minería en Colombia*. Ediciones Penguin Rondón, Debate. Bogotá.
- Popueau, F. (2007). *Dominación y movilizaciones. Estudios sociológicos sobre el capital militante y el capital escolar*. Ferreira Editor. Córdoba.
- Porto G., C. W. (2009). *Territorialidades y lucha por el territorio en América Latina. Geografías de los movimientos sociales en América Latina*. Ediciones Instituto Venezolano de Ciencia y Tecnología. Venezuela.

- Prada A. R. (2005). "Bolivia. Los movimientos moleculares de la multitud". En: *Revista Herramienta* No 30
- Prada A., R. A. (2012). "La lucha por la defensa del páramo de Santurbán". En: Toro P., C; Fierro M., J.; Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Pulido, A. (2015). *Los territorios frente a la minería: debates y alternativas alrededor de la problemática minera en Colombia*. Corporación para la Educación y la Investigación Popular Instituto Nacional Sindical CINDINS. Bogotá.
- Quintana C, M. N. (2016) *Organización de los movimientos sociales frente a la minería a gran escala en Colombia. El caso de la Red de Comités Ambientales del Tolima*. Tesis de grado para obtener el título de Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social. Colegio de la frontera Norte. Ciudad Juárez. Chihuahua. México.
- Quiroga, C. (2014) "Hacia un territorio minero campesino: propuestas territoriales desde el movimiento socioterritorial en el nordeste de Antioquia, Colombia". En: Ulloa A.; Góbel, B. (Editoras) (2014) *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Ramírez G., M. (2012). "Territorialidad y conflicto en un contexto minero: el caso del municipio de Marmato, Caldas". En: *Ánfora* 19 (33) 89. Universidad Autónoma de Manizales.
- Ramírez, P. (2013). *Acción colectiva estudiantil y construcción de subjetividad en el contexto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Tesis doctoral)*. DIE, Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá
- Retamozo, M. (2009). "Orden social, subjetividad y acción colectiva. Notas para el estudio de los movimientos sociales". En: *Athenea Digital*, No 16, 2009. Universidad Autónoma de Barcelona. España.
- Reyes, J. E. (2015). "Cátedra ambiental Gonzalo Palomino". En: *El Nuevo Día*, abril 20.
- Riaño, A. (2017). "Institucionalidad, política y normatividad del sector: los detonantes del conflicto". En: Valencia, L & Riaño, A. (2017). *La minería en el postconflicto. Un asunto de quilates*. Grupo Zeta. Bogotá.

- Rigal, L. (2008). “Educación, democracia y ciudadanía en la postmodernidad latinoamericana: a propósito del surgimiento de nuevos actores sociales”. En: *Revista de la Asociación de Sociología de la Educación*, vol. 1. No 3.
- Roa A., T. (2012). “Palabras para narrar la resistencia. Las luchas por el agua y el territorio”. En: Toro P., C; Fierro M., J.; Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Roa A., T. (2014). “Época de resistencia al extractivismo”. En: Roa A., T. & Vargas N., L., M. (2014). *Extractivismo, conflictos resistencias*. Censat Agua viva, Escuela de la sustentabilidad y Broederlijk Denle.
- Roa A., T. (2015) “Reflexiones sobre el proceso de fortalecimiento de capacidades para la transformación de conflictos mineros, desde la perspectiva de la no violencia”. En: *Comunidades en resistencia no violenta. Ante conflictos generados por proyectos extractivos. Sistematización de experiencias en Colombia, Guatemala y Perú*. Pax Chisti Internacional. Bruselas Bélgica.
- Rodríguez G., G.; Gil F., J.; García J., E. (1996). *Metodología de la investigación científica*. Ediciones Aljibe. Granada España
- Rodríguez, C.; Tunorosa, M. del P.; Ramírez, L. M.; Rojas L. M.; Quiñonez, A., Vecino, J. M. (2010). “Conflicto Minero: La Colosa – Cajamarca”. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Maestría en Estudios Ambiental.
- Rodríguez, M; Arensberg, W; R. & Roig, J. (2005). Informe de la mesa de evaluación independiente de la mesa de diálogo y consenso Cao Cajamarca. En: <http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/cajamarca.pdf>. Fecha de acceso, mayo 16 de 2017.
- Rojas, Y. (2014). “Construyendo autonomía con los acueductos comunitarios”. En: *La Incontestable*. Nos 12. Cajamarca.
- Sánchez G., D. P. (2014). “El conflicto por la producción del territorio en el caso del proyecto minero La Colosa, Tolima, Colombia”. En: Ulloa, A. & Göbel B. (Editoras) (2014) *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Sánchez G., D. P. (2013). *Minería, territorio y territorialidad. El caso del hallazgo aurífero La Colosa en el municipio de Cajamarca (Tolima-Colombia) 2000-2013*. Tesis de grado de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al

título de Magister en Geografía. Departamento de Geografía Universidad Nacional de Colombia.

Sánchez J., F. (2017). “Narrativas de resistencia contra la minería a gran escala”. En: <http://censat.org/es/noticias/narrativas-de-resistencia-contra-la-mineria-a-gran-escala>. Fecha de acceso, junio 28 de 2017.

Sánchez, V. (2017). “Consulta popular: nueva arma de lucha”. En: <https://elcronista.co/opinion/consulta-popular-nueva-arma-de-lucha>. Fecha de acceso, agosto 13 de 2017.

Sandoval, M. S. (2012). “La resistencia minera en el Páramo El Almorzadero”. En: Toro P., C; Fierro M., J.; Coronado D., S. & Roa A., T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.

Sassen, S. (2007). *Una sociología de la globalización*: Katz. Buenos Aires.

Sauvé, L. (2003) “Perspectivas curriculares para la formación de formadores en educación ambiental”. En: *Memoria Primer Foro sobre la Incorporación de la Perspectiva Ambiental en la formación Técnica Empresarial*. Universidad Autónoma de San Luís Potosí. México.

Sauvé, L. (2006). “La educación ambiental y la globalización: desafíos curriculares y pedagógicos”. En: *Revista Iberoamericana de Educación* No 41. Organización de Estados Iberoamericanos

Scott, J. (2000). *Los dominados y el arte de la resistencia*. Discursos ocultos. Ediciones Era. México.

Semper, F (2006). “Los derechos indígenas de Colombia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. En: *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*. <http://www.corteidh.or.cr/tablas/R21731.pdf>.

Seoane, J.; Emilio T. & Algranati, C. (2013). *Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos de los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de nuestra América*. Ediciones Herramienta, Editorial El Colectivo, GEAL. Buenos Aires.

Silva N., S. (2016). “El oro, la nueva amenaza de la palma de cera”. En: *El Espectador*, mayo 8. Bogotá.

Silva N., S. (2016a). “La consulta popular que podría frenar el proyecto minero La Colosa”. En: *El Espectador*, agosto 30. Bogotá.

- Smelser, N. (1989). *Teoría del comportamiento colectivo*. Fondo de Cultura Económico. México.
- Stein, J. S., & Stein H., B. (1997). *La herencia colonial de América Latina*. Siglo veintiuno. México.
- Suárez M., A. (2013). *La minería colonial del siglo XXI*. No todo lo que brilla es oro. Ediciones Aurora. Bogotá.
- Svampa, M. & Antonelli, M. A. (2009). “Hacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto”. En: Svampa, M. & Antonelli, M. A. (editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos. Buenos Aires.
- Svampa, M. & Sola A., M. (2010). “Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: los marcos de discusión en la Argentina”. En: *La Hora Nacional*. Junio 1.
- Svampa, M. (2012). “Hacia una gramática de las luchas en América Latina: dimensiones de la acción y giro eco- territorial”. En: *Nostramo Revista Crítica Latinoamericana* No 5.
- Svampa, M. y Viale, E. (2014). *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Primera edición. Katz, Fundación Rosa Luxemburgo. Buenos Aires.
- Svampa, M.; Bottaro, L. & Sola A., M. (2009). “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto, modelo de desarrollo, territorio y discurso dominante”. En: Svampa, M. & Antonelli, M. (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos Sociedad. Buenos Aires.
- Svampa, M; Bottaro, L. y Sola A, M. (2009). “La problemática de la minería metalífera a cielo abierto, modelo de desarrollo, territorio y discurso dominante”. En: Svampa, M. & Antonelli, M. (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos Sociedad. Buenos Aires.
- Svampa, M; Sola A., M.; Bottaro, L. (2009). “Los movimientos contra la minería metalífera a cielo abierto: escenarios y conflictos. Entre el “efecto Esquel” y el “efecto La Alumbrera”. En: Svampa, M. & Antonelli, M. (Editoras) (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Editorial Biblos Sociedad. Buenos Aires.

- Tabra, M. (2011). "Minería y territorio en el Perú: casos, temas y propuestas". En: Alimonda, H. (Coordinador) (2011) *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*. Ediciones Ciccus, Clacso. Buenos Aires.
- Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza Editorial. Madrid.
- Thompson, E. P. (1979). *Tradicición, revuelta y consciencia de clase: Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*. Editorial Crítica. Barcelona.
- Thompson, E. P. (1981). *Miseria de la teoría*. Editorial Crítica. Barcelona.
- Tischler, S. & Navarro, M. L. (2012). "Memoria y antagonismo en las luchas socioambientales en México". En: *Nostramo Revista Crítica Latinoamericana No 5*.
- Tobasura A., I. (2006). *Ambientalismos y ambientalistas. El ambientalismo criollo a finales del siglo XX*. Universidad de Caldas.
- Toledo, V. M. (1996) "Latinoamérica: crisis de civilización y ecología política". En: <http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/ToledoCrisisEcologiaPolitica.htm>. Fecha de acceso, diciembre 29 de 2015.
- Toledo, V. M. "Latinoamérica: crisis de civilización y ecología política". En: <http://www.ecologiasocial.com/biblioteca/ToledoCrisisEcologiaPolitica.htm>. Fecha de acceso, diciembre 29 de 2015.
- Tonnies, F. (1979). *Comunidad y asociación*. Madrid. Editorial Península.
- Toro P, C; Fierro M, J; Coronado D, S; Roa A, T. (2012). *Minería, Territorio y Conflicto en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia, Cesat Agua Vida, Plataforma Colombiana. Bogotá.
- Torres C., A. (2004). "La vida cotidiana de las organizaciones populares como espacio de formativo". En: *Revista Pedagogía y Saberes No 20*. Universidad Pedagógica Nacional.
- Torres C., A. (2004). "Por una investigación desde el margen". En: *La práctica investigativa en ciencias sociales*. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá.
- Torres C., A. (2006). "Subjetividad y sujeto: perspectivas para abordar lo social y lo educativo", en *Revista Colombiana de Educación, N° 50*, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional.

- Torres C., A. (2007). *Identidad y política de la acción colectiva. Organizaciones populares y luchas urbanas en Bogotá 1980-2000*, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional.
- Torres C., A. (2009). “Acción colectiva y subjetividad. Un balance desde los estudios sociales”. En: *Folios* Segunda época No 30.
- Torres C., A. (2013). *La educación popular: Trayectoria y actualidad*. Editorial el Búho. Bogotá.
- Torres C., A. (2014). “Transformaciones históricas de la educación popular”. En: *América Latina en movimiento* No 499. *Educación popular, vigencia y desafíos*. Octubre de 2014. Quito Ecuador. <http://alainet.org/publica/499.phtml>.
- Torres C., A. (2014b). *Hacer historia desde abajo y desde el sur*. Ediciones desde abajo y Planeta Paz. Bogotá. Bogotá.
- Torres C., A. (Inédito). “Formación de subjetividades, sentidos de comunidad y alternativas políticas en procesos organizativos locales”
- Torres C., A. (Inédito). “Lo pedagógico en experiencias educativas de movimientos sociales latinoamericanos”
- Torres C., A. (S/f). “Las lógicas de la acción colectiva. Aportes para ampliar la comprensión de los movimientos sociales”. En: http://aprendeonline.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/180/Seminario_Investigacion_y_Movimientos_Sociales/Ponencias_centrales/Ponencia_Alfonso_Torres.pdf.
- Torres C., A. (2014^a). “Producción de conocimiento desde la investigación crítica”. En: *Revista Nómadas*. No 40, abril del 2014. Universidad Central. Bogotá.
- Torres, C. A. (2010). “Educación popular y producción de conocimiento”. En: *La Piragua: Revista Latinoamericana de educación y política*. No 32. Panamá.
- Torres, C. A. (2011). *La educación popular: trayectoria y actualidad*. Editorial el Búho. Bogotá.
- Torres, C. A. (2017). “Prácticas educativas en movimientos sociales de América Latina”. *Revista Folios*. Universidad Pedagógica Nacional Bogotá.
- Torres C., A. (2013). *El retorno a la comunidad. Problemas, debates y desafíos de vivir juntos*. Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE) Editorial El Búho LTDA. Bogotá.

- Touraine, A. (1987). *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*. Prealca, Santiago de Chile.
- Touraine, A. (1992). *Beyond social movements? Theory, Culture and Society*. Vol. 9, núm. 1. pág. 125-145.
- Touraine, A. (1999). *¿Cómo salir del liberalismo?* Editorial Paidós. México
- Touraine, A. (2005). *Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy*. Editorial Paidós. España.
- Touraine, A. (2006). “Los movimientos sociales”. En: *Revista Colombiana de Sociología*, No 27.
- Triana A., A. (1992). *La Colonización Española en el Tolima. Siglo XVI y XVIII*. Funcol Cuadernos del Jaguar. Bogotá.
- Ulloa, A. (2004). *La construcción del nativo ecológico. Complejidades, paradojas y dilemas de la relación entre los movimientos indígenas y el ambientalismo en Colombia*. Instituto Colombiano de Antropología (ICANH), Colciencias. Bogotá.
- Ulloa, A. (2014). “Geopolíticas del desarrollo y la confrontación extractivista minera: elementos para el análisis en territorios indígenas en América Latina”. En: Ulloa, Astrid y Göbel, Bárbara (Editoras). *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Universidad Nacional de Colombia.
- Ulloa, A., & Coronado, S. (editores) (2016). *Extractivismos y conflicto en Colombia: retos para la paz territorial*. Cordaid, Cinep, Programa por la paz y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Urrea, D. & Rodríguez M. (2014).” Gran minería y conflicto. Una perspectiva socioambiental del modelo de desarrollo en Colombia”. En: Roa A., T & Vargas N. L., M. (2014). *Extractivismo, conflictos resistencias*. Censat Agua viva, Escuela de la sustentabilidad y Broederlijk Denle. Bogotá.
- Valencia, L. & Riaño, A. (Compiladores) (2017). *La minería en el postconflicto. Un asunto de quilates* (2017). Ediciones B Colombia S. A. Bogotá.
- Vega C., R. (2009). “Crisis civilizatoria”. En: *Revista Herramienta* No 42.
- Vega, C., R. (2006). “El imperialismo ecológico. El interminable saqueo de la naturaleza y de los parias del mundo”. En: *Revista Herramienta* No 31.

- Villalba C., X. (2017). “Cajamarca en medio de la ‘burbuja’ de los megaproyectos”. En: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/348180-cajamarca-en-medio-de-la-burbuja-de-los-megaproyectos?quicktabs_3=1. Fecha de acceso, julio 2 de 2017.
- Walsh, E. J. (1982) “Resource Mobilization and Citizen Protest in Communities Around Three Mile Island”. En: *Social Problems*, 26.
- Walter, M. (2008). “Nuevos conflictos ambientales en Argentina. El caso Esquel (2002-2003)”. En: *Revista Iberoamericana de Economía Ecológica*. Vol. 8. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/engov/20130828052512/rev8_02.pdf.
- Wahren, J. (2012). “Movimientos sociales, y territorios en disputa. Experiencias de trabajo y autonomía de la Unión de trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, Salta”. En: *Trabajo y sociedad: indagaciones sobre el empleo, la cultura y las prácticas políticas en sociedades fragmentadas*. No 19. Santiago del Estero. Argentina.
- Williams, R. (2001). *Cultura y sociedad 1750 – 1950*. De Coleridge a Orwel. Ediciones Nueva visión. Buenos Aires.
- Zapata, G. (2007). “La subjetividad hermenéutica”. En: *Revista de Ciencias humanas*. UPT No 37.
- Zemelman, H. (1997). (Coordinador). Sujeto y subjetividad en la construcción metodológica”. En: *Subjetividad: Umbrales del pensamiento social*. Anthropos. Barcelona.
- Zibechi, R. (2007). *Autonomía y emancipaciones. América Latina en movimiento*. Universidad Mayor de San Marcos Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Programa Democracia y Transformación Global. Lima Perú.
- Zibechi, R. (2015). *Descolonizar: el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias*. Ediciones desde abajo. Bogotá.
- Zibechi, R. (2017). *Movimientos sociales en América Latina. El “mundo otro” en movimiento*. Planeta Paz y Ediciones desde abajo. Bogotá.